

	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	Código: FGN-MP02-F-03
	FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN	Versión: 02 Página: 70 de 87


			TOTAL, FOLIOS EN INFORME QUE SE ENCUENTRA EN CARPETA: 11 FOLIOS. - OFICIO 068804DEL 11 DE MAYO DE 2021 REMITE ANALISIS EXISTENCIA DE PANDILLA EN EL SECTOR DEL DIAMANTE-COPIA RESOLUCIÓN 03002 DEL 29/06/2017, ORDEN DE SERVICIO 054 EN DIGITAL, FOTOCOPIA DEL LIBRO DE POBLACIÓN ESTACIÓN DEL DIAMANTE.
114	ZEUDY PATRICIA AGREZOTT PEROZO, CC 1144139648,	COMPAÑERA SENTIMENTAL EDWIN VILLA, CEL: 3177437033-CRA 29 NO. 44-48, POBLADO I, CALI.	114.1 ENTREVISTA DEL 06/05/2021 EN DOS FOLIOS (IMPRESOS POR AMBOS LADOS) HENRY BORRERO SÁNCHEZ, TÉCNICO INVESTIGADOR II, CC 16747375, CEL: 3155583607- EMAIL: HENRY.BORRERO@FISCALIA.GOV.CO
115	LINDOMAR RAMIREZ SANCHEZ. CC7699202.	VECINA DE EDWIN VILLA. CEL: 3195908671, DIRECCIO: CRA 29 NO. 72 O-33 POBLADO I	115.1 ENTREVISTA EN TRES FOLIOS, DE FECHA 06 MAYO 2022, TOMADA POR HENRY BORRERO SÁNCHEZ, TÉCNICO INVESTIGADOR II, CC 16747375, CEL: 3155583607- EMAIL: HENRY.BORRERO@FISCALIA.GOV.CO 115.2
116	MICHAEL RAMIREZ SURIEL, CC 1221719099.	VECINO EDWIN VILLA ESCOBAR, CEL: 3123412716, DIRECCIO: CRA 29 NO. 72 O-33, BARRIO POBLADO I.	116.1 ENTREVISTA EN TRES FOLIO, REALIZADA EL 26 DE JULIO DE 2021, TOMADA POR ALBERTO YESID TSUCHIYA CAMARGO, CC 13501721, TÉCNICO INVESTIGADOR IV, EMAIL: ALBERTO.YESID@FISCALIA.GOV.CO -CELULAR 3506011675.
117	JAVIER OCHOA MOSTACILLA-CC 1151944299	COMPAÑERO DE TRABAJO DE EDWIN VILLA, CEL: 3168010590, DIRECCIÓN: CLL 72 M, NO. 28 A- 74, BARRIO COMUNEROS.	117.1 ENTREVISTA EN TRES FOLIO, REALIZADA EL 26 DE JULIO DE 2021, TOMADA POR ALBERTO YESID TSUCHIYA CAMARGO, CC 13501721, TÉCNICO INVESTIGADOR IV, EMAIL: ALBERTO.YESID@FISCALIA.GOV.CO - CELULAR 3506011675.
118	SUBINTENDENTE NESTOR FABIO MANCILLA GONZALIAZ, COMANDANTE GRUPO OPERACIONES ESPECIALES.	INDICIADO, CELULAR: 3113739585, DIRECCIÓN DIAGONAL 51 OESTE, NO. 14-242 BARRIO CAÑAVERALEJO.	118.1 INTERROGATORIO DE INDICIADO DE FECHA 23 DE JULIO DE 2021, CONTENIDO EN 11 FOLIOS 118.2 OFICIO NO. GS-2021 FUCOT-GOES 29.25 , DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2021. (03 FOLIOS) 118.3 OFICIO NO. GS-2021 FUCOT-GOES 29.25 , DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EMITIDO POR SUBINTENDENTE NÉSTOR FABIO MANCILLA GONZALIAZ, COMANDANTE GRUPO OPERACIONES ESPECIALES. (02 FOLIOS). 118.4 ENTREVISTA DE FECHA 01 DE MAYO DE 2021 , TOMADA POR INVESTIGADOR LUIS GABRIEL LOAIZA MOLINA, CONTENIDA EN 14 FOLIOS. INDICA QUE ANEXA UN CD CON IMÁGENES QUE EVIDENCIAN LA POSICION DE LA POLICAI EL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, AUDIOS Y FORMATOS.TAMBIEN ENTREGA COPIA DE INFORME DE NOVEDAD A SUPERIORES. OFICIO NO. GS-2021 FUCOT- GOES 20.25 DE FECHA 26-05-2021, NOMBRES COMPLETOS, ARMA ASIGNADA, SERIAL Y CANTIDAD DE MUNICIÓN. SE DEJA CONSTANCIA QUE LA FECHA DE LA DILIGENCIA ES 10-05-21 Y CORRESPONDE A 4 FOLIOS.
119	ANDRÉS FELIPE MORA PEÑA, CC 1143975403.	VICTIMA, DIRECCIÓN: CRA 30 NO. 39-18, CELULAR: 3114405952.	119.1 DECLARACIÓN JURADA EN NUEVE FOLIOS , DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2021 Y TOMADA POR VERÓNICA HURTADO PALMA-ASISTENTE DE FISCAL II VERONICA.HURTADO@FISCALIA.GOV.CO), JUAN CARLOS OLIVEROS CORRALES, FISCAL 94 ESPECIALIZADO DECVDH CALI (JUAN.OLIVEROS@FISCALIA.GOV.CO). ADJUNTA: - PODER CONFERIDO AL DR. DAVID MELLIZO DIAZ, DOS FOLIOS. - EPICRISIS DEL 30 DE ABRIL DE 2021, FIRMADA POR EL DR. JUAN FELIPE ACOSTA LÓPEZ, CC 4617101- TP. 193834, CLINICA COLOMBIA DE LA CIUDAD DE CALI. (1 FOLIO IMPRESO EN AMBAS CARAS).

	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	Código: FGN-MP02-F-03
	FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN	Versión: 02 Página: 71 de 87

			- HISTORIA CLÍNICA CONTENIDA EN TRES FOLIOS, FIRMADA POR EL DR. JOSE FERNANDO GUITARRERO PINZON, - CC 7727722- TP. 520606, CLÍNICA COLOMBIA DE LA CIUDAD DE CALI. TOTAL 09 FOLIOS
120	DR. JUAN FELIPE ACOSTA LÓPEZ, CC 4617101- TP. 193834	CLÍNICA COLOMBIA DE LA CIUDAD DE CALI	120.1 EPICRISIS DEL 30 DE ABRIL DE 2021, (03 FOLIOS IMPRESO EN AMBAS CARAS). REVISAR LOSDOCUMENTOS- Y LA CARPETA DIGITAL.
121	DR. JOSE FERNANDO GUITARRERO PINZON, - CC 7727722- TP. 520606	CLÍNICA COLOMBIA DE LA CIUDAD DE CALI	121.1. HISTORIA CLÍNICA CONTENIDA EN TRES FOLIOS (03 FOLIOS, EL PRIMERO ESTA IMPRESO EN AMBAS CARAS). 121.2. HISTORIA CLÍNICA DE ANDRÉS FELIPE MORA PEÑA, DEL 21-06-2021, (02 FOLIOS) SUSCRITO POR EL DR. JOSE FERNANDO GUITARRERO PINZÓN, IDENTIFICADA CON CC 7727722, QUIENES SE PUEDE UBICAR POR MEDIO DE LA CLINICA COLOMBIA.
122	JENIFER LIRANA GARZON TREJOS, CC 1144142071.	DIRECCIÓN: CRA 29 D # 44-62, POBLADO I- CEL: 3216676126	122. ENTREVISTA DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, EN TRES FOLIOS, RENDIA ANTE CARLOS ANDRES SALGADO BORREO. TECNICO INVESTIGADOR I, EMAIL: CARLOS.SALGADO@FISCALIA.GOV.CO - CEL: 3502738902.
123	MARIA MIREYA NARVÁEZ GORDILLO- CC 31946428.	TÉCNICO INVESTIGADOR III, ADSCRITA L GRUPO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO SE LA SECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL CTI CALI, QUIEN SE PUEDE UBICAR EN EL CELULAR: 3185328911- EMAIL: MNARVAEZ@FISCALIA.GOV.CO	123.1-INFORME POLICÍA JUDICIAL NO. 76-404283, DE FECHA 12 -08-2021, APOYO DILIGENCIA DE RECONSTRUCCIÓN BARRIO EL DIAMANTE. (01 FOLIO). 123.2ACTA INSPECCIÓN A LUGARES FECHA 11 DE AGOSTO DE 2021, SANTIAGO DE CALI, SECTOR PUERTO MADERA, BARRIO DIAMANTE, UBICADO ENTRE LA CARRERA 29, CALLES 38 A LA 41. 123.3ACTA DE INSPECCIÓN A LUGARES, FPJ-9, FECHADA 02 DE JULIO DE 2021. (04 FOLIOS) 123.4INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DEL 06-07-2021, CON OT NO. 20226-202, ASIGNADA 02-07-2021, FIJACIÓN FOTOGRÁFICA Y VIDEO PARA RECONSTRUCCIÓN, EN 01 FOLIO.
124	BRIGADIER GENERAL JUAN CARLOS LEÓN MONTES, COMANDANTE POLICÍA METROPOLITANA DE CALI	QUIEN SE PUEDE UBICAR EN EL EMAIL: MECAL.COMAN@POLICI A.GOV.CO	124.1CORREO 2596, COMANDO PONAL DEL 20 -08-2021, EN 1 FOLIO. EN EL CORREO INFORMA QUE ADJUNTA: - ORDEN DE SERVICIO NO. 056 MECAL – PLANE 38.9 DE FECHA 20-04-2021, ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA MANIFESTACIÓN PÚBLICA POR EL PARO NACIONAL A REALZIARSE EL 28 DE ABRIL DE 2021. - 03 MODIFICACIONES A LA ORDEN DE SERVICIO NO. 056 -45 ANEXOS DE LA ORDEN DE SERVICIO NO. 056. INFORMACIÓN ENVIADA POR LINK DE ONEDRIVE.
125	CAPITÁN JULIÁN VANEGAS FERNÁNDEZ, JEFE PLANEACIÓN POLICÍA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI.	QUIEN SE PUEDE UBICAR EN EL EMAIL: MECAL.PLANE-JEFAT@POLICIA.GOV.CO , MECAL.PLANE@POLICIA.GOV.CO	125.1 CORREO 438 PLANEACIÓN PONAL DEL 24 -04-2021. EN EL CORREO INDICA QUE: “DE. MANERA ATENTA Y RESPETUOSA ME PERMITO RESPONDER EL PUNTO TERCERO INFORMAR HASTA QUE FECHA ESTUVO VIGENTE LA ORDEN DE SERVICIOS 056 ANTES MENCIONADA O SI CONTINUA VIGENTE. LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO NO.056 ESTUVO VIGENTE HASTA EL 10/06/2021” 01 FOLIO.
126	MAYOR OMAR LEONARDO DURAN GIL,	JEFE DE PLANEACIÓN POLICÍA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI, CLL 21 NO. 1N-65 BARRIO PILOTO!	126.1 LA ORDEN DE SERVICIO 056 MECAL -PLANE 38.9 DE FECHA 20-04-2021, ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA MANIFESTACIÓN PÚBLICA POR EL PARO NACIONAL A REALIZARSE EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y ANEXOS NO. 001,002, 003, 004 Y 005 (ARCHIVO CONFORMADO POR 72 FOLIOS, ESTÁN IMPRESOS Y SE ANEXAN AL INFORME, DE IGUAL


	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	Código: FGN-MP02-F-03
	FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN	Versión: 02 Página: 72 de 87

			<p>FORMA SE ADJUNTARON DE MANERA DIGITAL EN DVD).</p> <p>126.2 LA ORDEN DE SERVICIO NO. 059 COMAN-SIJIN 38.9 DE FECHA 28-04-2021 MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA ORDEN DE SERVICIOS 056 DE FECHA 20-04-2021, CAMBIO DEL JEFE DEL DISPOSITIVO, Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO PREVISTO PARA LA MANIFESTACIÓN PUBLICA POR EL PARO NACIONAL DEL 28 DE ABRIL 2021 Y ANEXO 006 (ARCHIVO CONFORMADO POR 2 FOLIOS ESTÁN IMPRESOS Y SE ANEXAN AL INFORME, DE IGUAL FORMA SE ADJUNTARON DE MANERA DIGITAL EN DVD).</p> <p>126.3 LA ORDEN DE SERVICIO NO. 060 COMAN-PLANE 38.9 DE FECHA 08-05 2021 MODIFICACION PARCIAL DE LA ORDEN DE SERVICIOS 056 DE FECHA 20-04-2021, CON EL FIN DE DAR INSTRUCCIONES ADICIONALES Y FORTALECER EL PUESTO DE MANDO. CAMBIO DEL JEFE DEL DISPOSITIVO, Y (ARCHIVO CONFORMADO POR 2 FOLIOS ESTÁN IMPRESOS Y SE ANEXAN AL INFORME, DE IGUAL FORMA SE ADJUNTARON DE MANERA DIGITAL EN DVD).</p> <p>126.4 LA ORDEN DE SERVICIO NO. 061 COMAN-PLANE 38.9 DE FECHA 18-05 2021 MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA ORDEN DE SERVICIOS 056 DE FECHA 20-04-2021, CON EL FIN DE DAR INSTRUCCIONES ADICIONALES Y FORTALECER EL PUESTO DE MANDO. (ARCHIVO CONFORMADO POR 4 FOLIOS ESTÁN IMPRESOS Y SE ANEXAN AL INFORME, DE IGUAL FORMA SE ADJUNTARON DE MANERA DIGITAL EN DVD). LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CALI, SE ALLEGAN AL INFORME GRABADOS EN DVD MARCADO "760016000193202103511 ORDEN DE SERVICIOS 056 DE 2021, MODIFICACIONES Y ANEXOS, INFORMADA POR 3634 FOLIOS.</p> <p>126.5 ENTREVISTA MAYOR OMAR LEONARDO DURAN GIL, IDENTIFICADO CON CC 13718557 Y QUIEN SE UBICA EN EL NUMERO CELULAR 3134218370 Y EN LA CLL 58 NORTE NO. 2G-98, CASA 72 BARRIO ÁLAMOS. (07 FOLIOS).</p>
127	JUAN CARLOS OLAYA OLAYA CUERVO, TE. CORONEL, IDENTIFICADO CON CC 79530023,	CELULAR 3108816595 Y EN LA CLL 9 NO. 42-13 Y QUIEN OSTENTA EL CARGO DE JEFE ADMINISTRATIVO DE LA POLICÍA EL DIAMANTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CALI.	127.1 INTERROGATORIO DE INDICIADO DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2021. SE LE INDAGA SOBRE EL CONOCIMIENTO QUE TENGA SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EN SU JURISDICCIÓN. (10 FOLIOS)
128	JHON SEBASTIAN VALLEJO RIOS, MAYOR DE LA POLICÍA NACIONAL, IDENTIFICADO CON CC 16075256,	COMANDANTE DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EL DIAMANTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CALI Y SE UBICA EN EL NÚMERO CELULAR 3185296089 Y EN LA AVENIDA 6 NORTE NO. 6-42.	128.1 INTERROGATORIO DE INDICIADO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021. SE LE INDAGA SOBRE EL CONOCIMIENTO QUE TENGA SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EN SU JURISDICCIÓN. (07 FOLIOS)
129	RODRIGO MANRIQUE GOMEZ, IDENTIFICADO CON CC 80171993, TE. CORONEL	COMANDANTE DEL DISTRITO II DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CALI. SE UBICA EN EL NÚMERO CELULAR 3203055551 Y EN LA ESTACIÓN DE POLICIA DE LA RIVERA.	129.1 INTERROGATORIO DE INDICIADO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021. SE LE INDAGA SOBRE EL CONOCIMIENTO QUE TENGA SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EN SU JURISDICCIÓN. (08 FOLIOS)
130	JUAN CARLOS SEPÚLVEDA, CC 12980197, TÉCNICO INVESTIGADO R IV.	TÉCNICO INVESTIGADOR III, SCRITO AL GRUPO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO DE LA SECCIONAL CALI, QUIEN SE UBICA EN EL	130.1 INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO NO. 404661 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021. CONTIENE INFORME DE INSPECCIÓN CON FINES DE RECONSTRUCCIÓN, EN LA CRA 29 CON CLL 41 BARRIO EL DIAMANTE, DONDE RESULTARON MUERTOS LOS SEÑORES EDWIN VILLA ESCOBAR Y HEINER ALEXANDER LASSO. (34 FOLIOS.)

	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	Código: FGN-MP02-F-03
	FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN	Versión: 02 Página: 73 de 87


		<p>NÚMERO DE CELULAR 3185328924 Y EN EL EMAIL JUAN.SEPULVEDA@FISCALIA.GOV.CO.</p>	<p>130.2 ACTA INSPECCIÓN A LUGARES FECHA 11 DE AGOSTO DE 2021, SANTIAGO DE CALI, SECTOR PUERTO MADERA, BARRIO DIAMANTE, UBICADO ENTRE LA CARRERA 29, CALLES 38 A LA 41.</p> <p>130.3 ACTA DE INSPECCIÓN A LUGARES, FPJ-9, FECHADA 02 DE JULIO DE 2021. (04 FOLIOS)</p> <p>130.4 INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO N. 76- 403817., DE FECHA 28 DE JULIO DE 2021, FIJACIÓN FOTOGRÁFICA INSPECCIÓN LUGAR DE LOS HECHOS, CLL 36, CRA 46, SECTOR PUERTO RELLENA, DISTRITO CALI.</p> <p>TOTAL 16 FOLIOS SIN ANEXOS.</p>
131	ARALI PINEDA, CC 55152347.	<p>TÉCNICO INVESTIGADOR II, PERITO PERTENECIENTE AL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN CTI SECCIONAL CALI, , QUIEN SE PUEDE UBICAR EN EL NUMERO CELULAR 3183610415 Y EN EL EMAIL ARAI.PINEDA@FISCALI A.GOV.CO.</p>	<p>131.1 ACTA INSPECCIÓN A LUGARES FECHA 11 DE AGOSTO DE 2021, SANTIAGO DE CALI, SECTOR PUERTO MADERA, BARRIO DIAMANTE, UBICADO ENTRE LA CARRERA 29, CALLES 38 A LA 41.</p> <p>131.2 INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE FECHA 05-10-2021, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA APOYO DE UNIDADES DESTACADAS EN TOPOGRAFÍA, BALÍSTICA Y OPERADOR DE DRON PARA REALIZAR DILIGENCIA DE FIJACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN LA CARRERA 83 B CON 4 NORTE(VICTIMA YIMSON ANDRES ANGULO RODRÍGUEZ), CRA 29 CON CLL 41 BARRIO EL DIAMANTE (HEINER ALEXANDER LASSO - EDWIN VILLA ESCOBAR) Y CARRERA 28 P, CALLE 70 B BARRIO 12 DE OCTUBRE (ANGIE YOHANA VALENCIA),FIJACION REALIZADA BARRIO PASO DELCOMERCIO, COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE CALI.</p> <p>ANEXOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DOS PLANOS NO. 49 (2 DE 2). SEIS IMÁGENES SATELITALES DEL LUGAR. TOTAL 10 FOLIOS. <p>131.3. INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE FECHA 10-12-2021., MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA APOYO DE UNIDADES DESTACADAS EN TOPOGRAFÍA, BALÍSTICA Y OPERADOR DE DRON PARA REALIZAR DILIGENCIA DE FIJACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN LA CARRERA 83 B CON 4 NORTE(VICTIMA YIMSON ANDRES ANGULO RODRÍGUEZ), CRA 29 CON CLL 41 BARRIO EL DIAMANTE (HEINER ALEXANDER LASSO - EDWIN VILLA ESCOBAR) Y CARRERA 28 P, CALLE 70 B BARRIO 12 DE OCTUBRE (ANGIE YOHANA VALENCIA), FIJACION REALIZADA BARRIO 12 DE OCTUBRE, COMUNCA 12, DE LA CIUDAD DE CALI.</p> <p>ANEXOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TRES PLANOS NO. 75 (3 DE 3). - SEIS IMÁGENES SATELITALES DEL LUGAR.
132	JACQUELIN PEDRAZA CADENA, CC 1112470724	<p>TÉCNICO INVESTIGADOR I, GRUPO DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL Y TOPOGRAFÍA, ÁREA DE CRIMINALÍSTICA, SECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL CTI, CLL 25 NORTE NO. 6 A-11, PISO 7 Y 8 OFICINAS 707Y 803, CELULAR: 3183610424</p>	<p>132.1 ACTA INSPECCIÓN A LUGARES FECHA 11 DE AGOSTO DE 2021, SANTIAGO DE CALI, SECTOR PUERTO MADERA, BARRIO DIAMANTE, UBICADO ENTRE LA CARRERA 29, CALLES 38 A LA 41.</p> <p>132.2 INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE FECHA 09-11-2021., MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA APOYO DE UNIDADES DESTACADAS EN TOPOGRAFÍA, BALÍSTICA Y OPERADOR DE DRON PARA REALIZAR DILIGENCIA DE FIJACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN LA CARRERA 83 B CON 4 NORTE</p>

		EMAIL: JACQUELINE.PEDROZA @FISCALIA.GOV.CO	VICTIMA YIMSON ANDRES ANGULO RODRÍGUEZ), CRA 29 CON CLL 41 BARRIO EL DIAMANTE (HEINER ALEXANDER LASSO - EDWIN VILLA ESCOBAR) Y CARRERA 28 P, CALLE 70 B BARRIO 12 DE OCTUBRE (ANGIE YOHANA VALENCIA), FIJACION REALIZADA BARRIO EL DIAMANTE, COMUNA 22 DE LA CIUDAD DE CALI. ANEXOS: OCHO PLANOS NO. 72 (8 DE 8). NUEVE IMÁGENES SATELITALES DEL LUGAR. INFORME DE PROCESAMIENTO Y ANIMACIÓN DE VERSIÓN REALIZADO POR EL PERITO FRANKLIN RODRÍGUEZ. TOTAL 20 FOLIOS. 132.3 INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE FECHA 10-12-2021 -MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA APOYO DE UNIDADES DESTACADAS EN TOPOGRAFÍA, BALÍSTICA Y OPERADOR DE DRON PARA REALIZAR DILIGENCIA DE FIJACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN LA CARRERA 83 B CON 4 NORTE (VICTIMA YIMSON ANDRES ANGULO RODRÍGUEZ), CRA 29 CON CLL 41 BARRIO EL DIAMANTE (HEINER ALEXANDER LASSO -EDWIN VILLA ESCOBAR) Y CARRERA 28 P, CALLE 70 B BARRIO 12 DE OCTUBRE (ANGIE YOHANA VALENCIA). FIJACION REALIZADA BARRIO 12 DE OCTUBRE, COMUNCA 12, DE LA CIUDAD DE CALI. ANEXOS: <ul style="list-style-type: none">- TRES PLANOS NO. 72 (3 DE 3)- SEIS IMÁGENES SATELITALES DEL LUGAR.
133	SEÑOR RICARDO SÁNCHEZ SOLANO, IDENTIFICADO CON CC 11790101.	TÉCNICO INVESTIGADOR IV, DEL GRUPO BALÍSTICA DE LA SECCIONAL ATLÁNTICO, QUIEN SE PUEDE UBICAR EN EL NUMERO CELULAR 3008004072 Y EN EL EMAIL RICSANCH@FISCALIA.GOV.CO.	133.1 ACTA INSPECCIÓN A LUGARES FECHA 11 DE AGOSTO DE 2021, SANTIAGO DE CALI, SECTOR PUERTO MADERA, BARRIO DIAMANTE, UBICADO ENTRE LA CARRERA 29, CALLES 38 A LA 41. 133.2 INFORME DE INVESTIGADOR DE LABORATORIO NO. 218167, DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021. CONTIENE DILIGENCIA DE INSPECCIÓN CON FINES DE RECONSTRUCCIÓN. DILIGENCIA REALIZADA EN LA CARRERA 29 CON CALLE 40, BARRIO EL DIAMANTE DE LA CIUDAD DE CALI DONDE PERDIERA LA VIDA EL SEÑOR HEINER ALEXANDER LASSO CHARA; POSTERIORMENTE SE REALIZÓ DILIGENCIA EN LA CRA 29 CON CLL 38 DIAGONAL AL MEGAFRIVER EL CAMPESINO, DONDE PERDIERA LA VIDA EL SEÑOR EDWIN VILLA ESCOBAR. NO TIENE ANEXOS. TOTAL 27 FOLIOS.
134	SEÑOR JOSÉ NELSON PÉREZ	TÉCNICO INVESTIGADOR IV DEL GRUPO DE BALÍSTICA DE LA SECCIONAL CALI; QUIEN SE PUEDE UBICAR EN EL NUMERO DE CELULAR 3185202379 Y EN EL EMAIL JOSE.PEREZ@FISCALIA.GOV.CO.	134.1 ACTA INSPECCIÓN A LUGARES FECHA 11 DE AGOSTO DE 2021, SANTIAGO DE CALI, SECTOR PUERTO MADERA, BARRIO DIAMANTE, UBICADO ENTRE LA CARRERA 29, CALLES 38 A LA 41.
135	LUIS CARLOS SERRA VARGAS; IDENTIFICADO CON CC 79428904.	TÉCNICO INVESTIGADOR II, ADSCRITO SECCIONAL CTI ARMENIA; QUIEN SE PUEDE UBICAR EN EL NUMERO DE CELULAR 3185170212 Y EN EL EMAIL LUIS.CERRA@FISCALIA.GOV.CO	135.1 ACTA INSPECCIÓN A LUGARES FECHA 11 DE AGOSTO DE 2021, SANTIAGO DE CALI, SECTOR PUERTO MADERA, BARRIO DIAMANTE, UBICADO ENTRE LA CARRERA 29, CALLES 38 A LA 41. 135.2 INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO NO. IC0006650712 , DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2021, CONTIENE ACTIVIDAD 3D VIDEO EQUIPO DRONE, CON EL FIN DE APOYAR DILIGENCIA DE FIJACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS. (03 FOLIOS). SE ANEXA DISCO COMPACTO BLUE
136	DIEGO CEBALLOS ORTIZ; IDENTIFICADO CON CC 89002229.	PROFESIONAL DE GESTIÓN I, OPERADOR DRONE, ADSCRITO SECCIONAL CTI ARMENIA; QUIEN SE PUEDE UBICAR EN EL NUMERO CELULAR 3188450540 Y EN EL	136.1 ACTA INSPECCIÓN A LUGARES FECHA 11 DE AGOSTO DE 2021, SANTIAGO DE CALI, SECTOR PUERTO MADERA, BARRIO DIAMANTE, UBICADO ENTRE LA CARRERA 29, CALLES 38 A LA 41.

	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	Código: FGN-MP02-F-03
	FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN	Versión: 02 Página: 75 de 87

		EMAIL DIEGO.CEBALLOS@FISCALIA.GOV.CO.	
137	GUILLERMO ANDRES HERNANDEZ TRUJILLO-IDENTIFICADO CON CC 79955622.	TECNICO INVESTIGADOR I, QUIEN SE PUEDE UBICAR EN EL NUMERO CELULAR 30223724344 Y EN EL EMAIL GUIHERNA@FISCALIA.GOV.CO .	137.1 ACTA INSPECCIÓN A LUGARES FECHA 11 DE AGOSTO DE 2021, SANTIAGO DE CALI, SECTOR PUERTO MADERA, BARRIO DIAMANTE, UBICADO ENTRE LA CARRERA 29, CALLES 38 A LA 41. 137.2 INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO (SIN NÚMERO) DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2021, SUSCRITO POR ANDRÉS HERNÁNDEZ TRUJILLO. CONTIENE UN DVD CON 11 VIDEOS APORTADOS POR RESIDENTES DEL BARRIO EL DIAMANTE DE LA CIUDAD DE CALI DONDE FALLECEN LOS SEÑORES EDWIN VILLA ESCOBAR Y HEYNER LASSO CHARA.
138	MAYOR JHON JORGE LASSO LARA	GRUPO TALENTO HUMANO MECAL, QUIEN SE UBICA EN LA CLL 21 # 1 N-65 BARRIO PILOTO-EMAIL: MECAL.GUTAH-SST@POLICIA.GOV.CO .	138.1. OFICIO NO. GS2021 -129224/SUBCO GUTAH 1.10, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021. (01 FOLIO)
139	JAIRO ANTONIO SILVA CADENA, DIRECTOR REGIONAL SUROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.	QUIEN SE UBICA EN LA CLL 4 B # 36-01, BARRIO SAN FERNANDO- CALI, EMAIL: DRSUROCCIDENTE@MEDICINALEGAL.GOV.CO .	139.1 OFICIO NO. 0460-DRSO -2021 , DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2021.(01 FOLIO)
140	JULIAN EDUARDO CASTILLO BUITRAGO, IDENTIFICADO CON CC 1112629248, PATRULLERO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI	QUIEN SE UBICA EN LA CLLE 15 NO. 12 A-28	140.1. DECLARACIÓN JURADA DEL 15 DE OCTUBRE DE 2021, EN DOS FOLIOS.
141	VÍCTOR ALFONSO COLLAZOS MARTINEZ, IDENTIFICADO CON CC 10306891, SUBINTENDENTE DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI	QUIEN SE UBICA EN LA DIAGONAL 51 OESTE NO. 14-242 BASE CARABINEROS.	141.1 DECLARACIÓN JURADA DEL 15 DE OCTUBRE DE 2021, EN DOS FOLIOS.
142	JHON HAROLD SANCHEZ HERNÁNDEZ, IDENTIFICADO CON CC 16944254, SUBINTENDENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CALI,	QUIEN SE UBICA EN LA CRA 61 NO. 18-16 BARRIO SAMARIA DE GUADALUPE, TORRE Q, APTO 165	142.1 DECLARACIÓN JURADA DEL 14 DE OCTUBRE DE 2021, EN DOS FOLIOS.
143	ALBERTO CARABALI, IDENTIFICADO	QUIEN SE UBICA EN LA CRA 32 NO. 35 G1-35.	143.1 DECLARACIÓN JURADA DEL 14 DE OCTUBRE DE 2021, EN DOS FOLIOS.


	CON CC 16832769, INTENDENTE JEFE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CALI.		
144	JHAN FRANKZUA GARCIA GALLEGU, IDENTIFICADO CON CC 1144066447, PATRULLERO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CALI,	QUIEN SE UBICA EN LA CLL 80 D NO. 22-92 BARRIO VALLEGRANDE.	144.1 DECLARACIÓN JURADA DEL 14 DE OCTUBRE DE 2021, EN DOS FOLIOS.
145	JHON JAIRO FIGUEROA HERNÁNDEZ, IDENTIFICADO CON CC 10491316, INTENDENTE JEFE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CALI	QUIEN SE UBICA EN LA ESTACIÓN CARABINEROS DE CALI.	142.1 DECLARACIÓN JURADA DEL 13 DE OCTUBRE DE 2021, EN DOS FOLIOS.
146	JAIRO ENRIQUE CORDOBA SÁNCHEZ, IDENTIFICADO CON CC. 16.234.201, INTENDENTE JEFE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CALI.	QUIEN SE UBICA EN EL ESCUADRÓN MÓVIL DE CARABINEROS DE CALI.	146.1 DECLARACIÓN JURADA DEL 13 DE OCTUBRE DE 2021, EN DOS FOLIOS. 146.2 ACTA DE FECHA 23 JULIO DE 2021, ENTREGA FUSIL (GOES) EN 02 FOLIOS IMPRESOS POR AMBOS LADOS, SUSCRITO POR SUBCOMANDANTE GRUPO GOES JAIRO ENRIQUE CORDOBA SÁNCHEZ.
147	JOSÉ LUIS RODRIGUEZ LONDOÑO, IDENTIFICADO CON CC 1115182330, INTENDENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CALI,	QUIEN SE UBICA EN LA CALLE 65 B NO. 2 D -7.	147.1 DECLARACIÓN JURADA DEL 13 DE OCTUBRE DE 2021, EN DOS FOLIOS.
148	AGUADO LUGO CESAR AUGUSTO, IDENTIFICADO CON CC 143826491, SUBINTENDENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CALI,	QUIEN SE UBICA EN LA CLL 40 NO. 48 A -17 BARRIO MARIANO RAMOS.	148.1 DECLARACIÓN JURADA DEL 12 DE OCTUBRE DE 2021, EN DOS FOLIOS.
149	JOSE FERNEY RODRIGUEZ PATIÑO, TÉCNICO INVESTIGADOR II, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 16775232.	II.GRUPO BALÍSTICA, SECCIÓN CRIMINALÍSTICA, CLL 25 NORTE # 6 A-11 PISO 8, OFICINA 809.	149.1 INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO NO. 76-402112 , DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2021, CONTIENE CARACTERÍSTICAS Y CALIBRE E INGRESO AL SUCOBA DE TRES VAINILLAS CALIBRE 5.56 Y DOS VAINILLAS CALIBRE 9MM. (TRAUMÁTICAS). TOTAL 04 FOLIOS., IMPRESOS POR AMBAS CARAS. 149.2 INFORME INVESTIGADOR DE LABORATORIO NO. 76-406475 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2021, SUSCRITO POR JOSE FERNEY RODRIGUEZ PATIÑO, TÉCNICO INVESTIGADOR II. GRUPO BALÍSTICA, SECCIÓN CRIMINALÍSTICA. CONTIENE INFORME SOBRE EL ANÁLISIS REALIZADO A LAS VAINILLAS ANALIZADAS

	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	Código: FGN-MP02-F-03
	FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN	Versión: 02 Página: 77 de 87


			<p>MARCADAS COMO F9100-V1-4 Y F9100-V2-4. (06 FOLIOS IMPRESOS POR AMBAS CARAS)</p> <p>149.3 INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO NO. 76-407182, DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021, CONTIENE CARACTERÍSTICAS Y CALIBRE E INGRESO AL SUCOBA DE UNA VAINILLA CALIBRE 9 MM. TOTAL 04 FOLIOS.</p> <p>149.4 INFORME INVESTIGADOR DEL LABORATORIO NÚMERO 76401809 DE FECHA 25/05/2021, CONTIENE ESTUDIOS DE UN PROYECTIL CALIBRE 9 MM Y SU INGRESO A SUCOBA. SIN ANEXOS. CONTIENE 03 FOLIOS IMPRESOS POR AMBOS LADOS</p> <p>149.5 INFORME DE LABORATORIO NO. 76-402739, DE ANALISIS DE EXPERTICIA A ARMA DE FUEGO EMITIDO POR JOSE FERNEY RODRIGUEZ, CONTENIDO EN 05 FOLIOS IMPRESOS POR AMBOS LADOS.</p>
150	DRA. ZULEIMA CAICEDO-MEDICO RURAL.	QUIEN SE UBICA EN EL HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO, CLL 72 U NO. 28E-00, POBLADO II.	150.1 HISTORIA CLÍNICA DE ANDRÉS FELIPE MORA PEÑA, DEL 30 DE ABRIL DE 2021, EMITIDA POR EL HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO, EMITIDO POR LA DRA. ZULEIMA CAICEDO-MEDICO RURAL. CONTIENE 3 FOLIOS.
151	DR. FREUD NIÑO ANDRADE-CIRUJANO GENERAL – TP. 003979/92	QUIEN SE UBICA EN LA CLINICA COLOMBIA	151.1 HISTORIA CLÍNICA DE ANDRÉS FELIPE MORA PEÑA, DEL 30-04-2021 AL 03-05-2021, (39 FOLIOS) SUSCRITO POR EL DR. FREUD NIÑO ANDRADE, QUIEN SE PUEDE UBICAR POR MEDIO DE LA CLÍNICA COLOMBIA.
152	EDISON REYES RIVERA, IDENTIFICADO CON CC 16928056,	QUIEN SE UBICA EN EL NUMERO CELULAR 3233445592 Y EN LA CRA 41 E NO. 55B-39.	152.1 ENTREVISTA DEL DIA 01-09-2021, CONTENIDA EN 03 FOLIOS.
153	LEONARDO BOADA, CC 79579986	TÉCNICO INVESTIGADOR I, PERTENECIENTE EL GRUPO DE POLICÍA JUDICIAL DE A DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, QUIEN SE ÚNICA EN EMAIL: LEONARDO.BOADA@FIS CALIA.GOV.CO- CELULAR: 3185321726	153.1 INFORME 9-478642 Y ANEXOS DEL 27-10-2021 , EN SEIS FOLIOS. RENDIDO POR EL INVESTIGADOR LEONARDO BOADA, CC 79579986, TÉCNICO INVESTIGADOR I, PERTENECIENTE EL GRUPO DE POLICÍA JUDICIAL DE A DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, QUIEN SE ÚNICA EN EMAIL: LEONARDO.BOADA@FISCALIA.GOV.CO- CELULAR: 3185321726, ESTE INFORME CONTIENE ENTREVISTA YOSERTH YAIRTH MOSQUERA PEREA, IDENTIFICADO CON CC 82361629, DELEGADO DE LA PROCURADURÍA Y QUIEN SE UBICA EN EL NÚMERO CELULAR 3135573930 (06 FOLIOS).
154	ENTREVISTA YOSERTH YAIRTH MOSQUERA PEREA, IDENTIFICADO CON CC 82361629,	DELEGADO DE LA PROCURADURÍA Y QUIEN SE UBICA EN EL NÚMERO CELULAR 3135573930, CRA 5 NO. 15-80 PISO 15 EN BOGOTÁ.	154.1. ENTREVISTA DE FECHA 19 OCTUBRE DE 2021, CONTENIDA EN 03 FOLIOS.
155	JULIO FERNANDO DE LOS RIOS MILLA,	ESPECIALISTA EN BALISTICA FORENSE DEL INML Y CF SANTIAGO DE CALI.	<p>155.1. OFICIO 031-LBAF-DRSOCCDTE-2021, DEL 15 DE OCTUBRE DE 2021</p> <p>155.2. INFORME 0000012-2022 INML DE FECHA 06-12-2022, EN 06 FOLIOS</p> <p>155.3. OFICIO NO. 017 DRSOCCDTE -2021, DE FECHA 04 JUNIO DE 2021, SE INFORMA SI LAS HERIDAS DESCRITAS EN EL PROTOCOLO DE NECROPSIA DE HEINER ALEXANDER LASSO CHARA, SON COMPATIBLES CON ARMA DE FUEGO DE ALTA O BAJA VELOCIDAD. TOTAL 04 FOLIOS.</p>

156	DARÍO ALFONSO PELÁEZ DOMÍNGUEZ, IDENTIFICADO CON CC 1130663312	QUIEN SE UBICA EN EL NÚMERO CELULAR 3006368958 Y EN LA CRA 49 SUR NO. 17 B-10 CIUDAD TERRANOV (JAMUNDI).	156.1 ENTREVISTA EN 04 FOLIOS.
157	CESAR AUGUSTO HURTADO MARÍN, PROFESIONAL UNIVERSITARIO FORENSE	INMDL Y CF DE LA UNIDAD BASICA DE CALI	157.1 10097-2021 DEL INML Y CF DEL 16-11-2021, INFORME PERICIAL DE CLÍNICA FORENSE, EN DOS FOLIOS.
158	BEATRIZ EUGENIA MANZANO CABAL	FISCAL 06 LOCAL DEL GRUPO DE AVERIGUACIÓN DE RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE CALI,	158.1 ACTA DE INSPECCIÓN DEL 29-11-2021 Y SUS ANEXOS EN 13 FOLIOS, IMPRESOS EN AMBAS CARAS. FUNCIONARIA QUE ATIENDE LA DILIGENCIA DRA. BEATRIZ EUGENIA MANZANO CABAL, FISCAL 06 LOCAL DEL GRUPO DE AVERIGUACIÓN DE RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE CALI,
159	GERMAN RIVERA CÁRDENAS, CC 167249208,	TÉCNICO INVESTIGADOR II, ADSCRITO AL GRUPO BALÍSTICA, SECCIÓN CRIMINALÍSTICA, CLL 25 NORTE # 6 A-11 PISO 8, OFICINA 809.	159.1 INFORME INVESTIGADOR DE LABORATORIO 76-408507 DEL 13 -12-2021, EN 03 FOLIOS IMPRESOS EN AMBAS CARAS. ✓ INFORME DE LABORATORIO DE FECHA 27 JULIO DE 2021, EN 06 FOLIOS IMPRESOS EN AMBOS LADOS, COTEJA EP FUSILES CON LOS EMP 03 VAINILLAS CALIBRE 5.56MM DEL INFORME DEL PERITO JOSÉ FERNEY RODRÍGUEZ 76-402112.
160	ALFREDO ISRAEL MEDINA VARELA, PROFESIONAL UNIVERSITARIO FORENSE	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, UNIDAD BASICA DE CALI.	160.1 INFORME PERICIAL DE CLÍNICA FORENSE NO. UBCALI-DSVLLC-04784-2021 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, 15 FOLIOS. FOLIOS ANEXO INFORME 0006654389 160.2 INFORME PERICIAL DE CLINICA FORNSE, NUMERO UBCALI-DSVLLC-04784-2021 , NOMBRE EXAMINADO: ROSA ICELA PACHECO CASTILLO. EN UN FOLIO IMPRESO POR AMBAS CARAS. 160.3 INFORME UBCALI-DSVLLC 04784-2021 DEL 17-06-2021, CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA ROSA ICELA PACHECO CASTILLO, EN 02 FOLIOS. TOTA 47 FOLIOS.
161	EDGAR ALEXANDER VÁZQUEZ TORRES. TÉCNICO FORENSE.	QUIÉN SE PUEDE UBICAR MEDIANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL REGIONAL SUR OCCIDENTE SECCIONAL VALLE DEL CAUCA.	161.1 <u>INFORME PROVENIENTE DE MEDICINA LEGAL, NUMERO DE DRSO-OILF-2021010176001000827-1</u> , DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, REGISTRA ELEMENTOS RECIBIDOS PARA ESTUDIO, TARJETA DE NECRO, DACTILIA Y TARJETA DE PREPARACIÓN DE CÉDULA DE CIUDADANÍA. - ESTUDIO SOLICITADO: IDENTIFICACION POR LOFOSCOPIA. VICTIMA MIGUEL ANGEL PINTO MONA CC 1.234.191.047 161.2 <u>INFORME DRSO-OILF 2021010176001000827-1 DE FECHA 2021-04-30 – COTEJO DACTILOSCÓPICO IDENTIFICACIÓN PLENA MIGUEL ANGEL PINTO MONÁ. 1 FOLIO. ANEXOS:</u> 161.3 <u>FOTOCOPIA CÉDULA DE PAOLA ANDREA OSORIO GONZALEZ.</u> 161.4 <u>OFICIO 20380-01-02-1707 SUSCRITO POR C. LILIANA VERGARA</u> 161.5 <u>OFICIO 20380 01-02-1708 SUSCRITO POR C. LILIANA VERGARA.</u> 161.6 <u>FOTOCPIA REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO DE MIGUEL ANGEL PINTO MONA.</u>
162	LILIANA VERGARA ROMERO	ASISTENTE DE FISCAL, UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SECCIONAL CALI, CLL 10 # 6-25.	162.1 <u>COPIA OFICIO 20380-01-1707</u> , ENTREGA DEL CUERPO DE MIGUEL ANGEL PINTO MONA (1 FOLIO) 162.2 <u>COPIA OFICIO 2008-01-02-1708</u> , OFICIO EMITIDO POR C. LILIANA VERGARA ROMERO, ASISTENTE DE FISCAL, FSCALIA 122 LOCAL URI, SOLICITANDO SE EMITA REGISTRO DE DEFUNCIÓN A LA REGISTRADURÍA. (1 FOLIO)


163	JOSE RAMIREZ MOYANO, FISCAL 105 URI	GRUPO DE FLAGRANCIAS -CALI	163.1 NOTICIA CRIMINAL- EN 04 FOLIOS.
164	YOLIVET RODRÍGUEZ MORALES, MÉDICO FORENSE	QUIÉN SE PUEDE UBICAR MEDIANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL REGIONAL SUR OCCIDENTE SECCIONAL VALLE DEL CAUCA.	164.1 <u>INFORME MEDICINA LEGAL, INFORME PERICIAL DE NECROPSIA NÚMERO 2021010176001000827,</u> DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2021, (FECHA DE INGRESO EL 29/04/2021), SEÑOR MIGUEL ANGEL PINTO MONA, CC 1234191047. CONTENIDO EN 3 FOLIOS IMPRESOS POR AMBAS CARAS. <u>ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA A CADAVER REALIZADA AL SEÑOR MIGUEL ANGEL PINTO MONA</u> DEL 29 DE ABRIL DE 2021. 11 FOLIOS. ANEXOS: <ul style="list-style-type: none">- REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA.- COPIA DE EPICRISIS.
165	JUAN CAMILO ORTIZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 1234192859,	QUIEN SE UBICA EN EL NÚMERO CELULAR 3148325060 Y EN LA DIRECCIÓN CALLE 49 NÚMERO 30 A- 44, BARRIO COMUNEROSI.	165.1 ENTREVISTA DEL 14 DE MAYO DE 2021, CONTENIDA EN 04 FOLIOS.
166	YOSTIN DAVID ESPAÑA CARDONA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 1234193714.	QUIEN SE UBICA EN EL NÚMERO CELULAR 3146289732 Y EN LA CARRERA 30 B NÚMERO 48-82.	166.1 ENTREVISTA DEL 14 DE MAYO DE 2021, CONTENIDA EN 05 FOLIOS.
167	CARLOS ANDRÉS VALENCIA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 1006183179,	QUIÉN SE UBICA EN EL NÚMERO CELULAR 3126842652 Y EN LA DIRECCIÓN CALLE 53 NÚMERO 29 A -10, BARRIO COMUNEROS I.	167.1 ENTREVISTA DEL 14 DE MAYO DE 2021, CONTENIDA EN 04 FOLIOS.
168	JUAN SEBASTIÁN RUBIO HURTADO, IDENTIFICADO CON CÉDULA 1151967678.	QUIEN SE UBICA EN EL NÚMERO CELULAR 3218014199 Y EN LA DIRECCIÓN CALLE 53 NÚMERO 29 A -10.	168.1 ENTREVISTA DEL 14 DE MAYO DE 2021, CONTENIDA EN 04 FOLIOS.
169	ANDRES MAURICIO JARAMILLO RAMÍREZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA 109486221. SUBINTENDENTE DE LA POLICÍA NACIONAL, ADSCRITO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE AGUA BLANCA,	QUIÉN SE PUEDE UBICAR EN EL NÚMERO CELULAR 3015317321 Y EN LA DIRECCIÓN CARRERA 28 NÚMERO 25- 81 BARRIO AGUA BLANCA.	169.1 ENTREVISTA DEL 25 DE MAYO DE 2021, CONTENIDA EN 03 FOLIOS.
170	EDUARDO LUIS PÉREZ ESTRADA, PATRULLERO, POLICÍA METROPOLITANA ADSCRITO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA AGUA BLANCA.	QUIÉN SE PUEDE UBICAR EN EL NÚMERO CELULAR 3217393178.	170.1 ENTREVISTA DEL 25 DE MAYO DE 2021, CONTENIDA EN 04 FOLIOS.

	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	Código: FGN-MP02-F-03
	FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN	Versión: 02 Página: 80 de 87

171	SEÑOR GIOVANNI ALEXANDER TORRES RAMÍREZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 6103397. CAPITÁN DE LA POLICÍA NACIONAL Y COMANDANTE DE LA ESTACIÓN AGUA BBANCA Y DEL CAI VILLA DEL SUR.	QUIÉN SE UBICA EN EL NÚMERO CELULAR 3102242007. Y EN LA CARRERA 57 NÚMERO 2 A 29.-	171.1 ENTREVISTA DEL 25 DE MAYO DE 2021, CONTENIDA EN 06 FOLIOS. 171.2 ENTREVISTA DEL 25 DE MAYO DE 2021, CONTENIDA EN 03 FOLIOS.
172	LUIS ARLEY PINTO, MONA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 1143975918,.	QUIÉN SE UBICA EN EL NÚMERO CELULAR 3174575776 Y EN LA DIRECCIÓN CARRERA 29, NÚMERO 79- 31, BARRIO COMUNEROS I.	172.1 ENTREVISTA DEL 14 DE MAYO DE 2021, CONTENIDA EN 03 FOLIOS.
173	LUIS EDUARDO PINTO MURILLO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 94379311,.	QUIÉN SE PUEDE UBICAR EN EL CELULAR 3217241179 Y DIRECCIÓN CARRERA 54 B, NÚMERO 29- 53, BARRIO, COMUNEROS I.	173.1 ENTREVISTA DEL 14 DE MAYO DE 2021, CONTENIDA EN 03 FOLIOS.
174	JHONIER STIVEN GONZALEZ H, ASISTENTE FORENSE III,	QUINE SE PUEDE UBICAR EN EL INMDL Y CF DE LA UNIDAD BASICA DE CALI	174.1 OFICIO INML Y CF, DE FECHA 08 DE MAYO DE 2021, RECEPCION DE PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO RECUPERADO EN CUERPO EN UN FOLIO.
175	MAYOR JAVIER ENRIQUE SOTO GARCIA JEFE CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO.	QUIEN SE PUEDE UBICAR EN LA CLL 21 # 1 N-65 BARRIO PILOTO, EMAIL: MECAL.CAMARAS@PONLICIA.GOV.CO .	175.1 RESPUESTA CAD MEDIANTE OFICIO 0720056, DE FECHA 09 DE MAYO DE 2021, REMITE COPIA DE LAS GRABACIONES OBTENIDAS POR CAMARAS DE SEGURIDAD. CONTIENE 02 DVD., CON NUMERO DE ANILLO CENTRAL DR5F60-50013. TOTAL, EN 02 FOLIOS.
176	CARLOS FERNANDO SUAREZ RICO, CC 1098751847	MÉDICO GENERAL, DIRECCIÓN DE SANIDAD – CLIOC – CLINICA REGIONAL DE OCCIDENTE- CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE LA CIUDAD DE CALI	176.1 EPICRISIS DEL SEÑOR WILSON ORLANDO ESPARRAGOZA, DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, FIRMADA POR DR. CARLOS FERNANDO SUAREZ RICO., QUIEN SE UBICA EN LA DIRECCIÓN DE SANIDAD – CLIOC – CLINICA REGIONAL DE OCCIDENTE- CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE LA CIUDAD DE CALI, CONTENIDA EN 07 FOLIOS.
177	GUSTAVO ADOLFO BALLESTEROS CASTAÑEDA, PROFESIONAL ESPECIALIZAD O FORENSE.	QUIEN SE UBICA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL, UNIDAD BASICA- CALI.	177.1 INFORME PERICIAL CAPACIDAD MENTAL PARA DECLARAR, NEGOCIAR PREACUERDOS Y RENDIR DILIGENCIAS DE INDAGACIÓN EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. UBCALI-DSVLLC-06529-2021- UBCALI-DSVLLC-06693-C-2021. PERSONA EN LA REFERENCIA WILSON ORLANDO ESPARRAGOZA CORCHO. TOTAL 09 FOLIOS.
178	WILSON ORLANDO ESPARRAGOZ A CORCHO, CC 1045702925	PATRULLERO POLICÍA NACIONAL, CL 26 A · 24 A- 38 AGUA BLANCA	178.1 INTERROGATORIO DE INDICIADO DE FECHA 13/08/2021 178.2 INTERROGATORIO DE INDICIADO DE FECHA 24/09/2021
179	SEBASTIÁN TARAPUEZ	TÉCNICO INVESTIGADOR I, DE LA SECCIÓN DE POLICÍA	179.1 ACTA DE INSPECCIÓN A LUGARES, FPJ-9, FECHADA 02 DE JULIO DE 2021. (04 FOLIOS)

	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	Código: FGN-MP02-F-03
	FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN	Versión: 02 Página: 81 de 87

	MARTÍNEZ, CC 1085285377	JUDICIAL CTI CALI, QUIEN SE PUEDE UBICAR EN EL CELULAR 3002010823, EMAIL: SEBASTIAN.TARAPUEZ@FISCALIA.GOV.CO	
180	ANDREY GIOVANNY GONZALEZ CAMPOS, CC 7989595.	TÉCNICO INVESTIGADOR I, DE LA SECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL CTI CALI, QUIEN SE PUEDE UBICAR EN EL CELULAR 3123810979- EMAIL: ANDREY.GONZALEZ@FISCALIA.GOV.CO	<p>180.1 ACTA DE INSPECCIÓN A LUGARES, FPJ-9, FECHADA 02 DE JULIO DE 2021. (04 FOLIOS)</p> <p>180.2 INFORME POLICÍA JUDICIAL NO. 11-6557725, DE FECHA 20-07-2021, CONTENIDO EN 06 FOLIOS. CONTIENE FIJACIÓN TOPOGRÁFICA CON ESCÁNER 3D DE LOS LUGARES DE LOS HECHOS OCURRIDOS DURANTE DE LAS MANIFESTACIONES REALIZADAS POR EL PARO NACIONAL EN LA CIUDAD DE CALI Y SUS MUNICIPIOS.</p> <p>ANEXA: 1 DVD CON LA MAQUETA VIRTUAL EN 3D (APLICATIVO START SCENE 2GO WINDOWS)</p>
181	JORGE ORLANDO ESPINOSA RODRIGUEZ,	TÉCNICO INVESTIGADOR II, DE LA SECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL CTI- GRUPO FOTOGRAFÍA, DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA, QUIEN SE PUEDE UBICAR EN EL CELULAR 3108842431, EMAIL: JORGE.ESPINOZA@FISCALIA.GOV.CO	<p>181.1 ACTA DE INSPECCIÓN A LUGARES, FPJ-9, FECHADA 02 DE JULIO DE 2021. (04 FOLIOS)</p> <p>181.2 INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO NO. 11-285078, OT 1255. RADICADO 20214620002781 DEL 16 DE JULIO DE 2021, CONTIENE FIJACIÓN FOTOGRÁFICA CON EQUIPO AÉREO NO TRIPULADO, DRON EN DILIGENCIA DE RECONSTRUCCIÓN EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, SECTOR DENOMINADO PUERTO RELLENA O PUERTO RESISTENCIA.EN 06 FOLIOS.</p>
182	JAIME GRANADA HINCAPIE, CC 10098411	TÉCNICO INVESTIGADOR III, DE LA SECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL CTI CALI, QUIEN SE UBICA EN EL CELULAR: 3155062824, EMAIL: JAGRAHI@FISCALIA.GOV.CO	<p>182.1 ACTA DE INSPECCIÓN A LUGARES, FPJ-9, FECHADA 02 DE JULIO DE 2021. (04 FOLIOS)</p> <p>182.2 INFORME INVESTIGADOR DEL LABORATORIO NÚMERO 66171870 DE FECHA 04/08/2021, CONTIENE EL ANÁLISIS DE LA MATERIALIZACIÓN DE TRAYECTORIAS DEL PROYECTIL QUE IMPACTÓ EN LA HUMANIDAD DE MIGUEL ÁNGEL PINTO MONA. TOTAL 04 FOLIOS IMPRESOS POR AMBOS LADOS.</p> <p>182.3 INFORME INVESTIGADOR DEL LABORATORIO NÚMERO 66171406, DE FECHA 22/07/20 A 21, CONTIENE EL ANÁLISIS DE LA MATERIALIZACIÓN DE TRAYECTORIAS DEL PROYECTIL QUE IMPACTÓ EN LA HUMANIDAD DE JOHAN NICOLÁS GARCÍA GUERRERO.TOTAL 04 FOLIOS IMPRESOS POR AMBOS LADOS.</p> <p>182.4 INFORME INVESTIGADOR DEL LABORATORIO NÚMERO 66174210 DE FECHA 29-11-/2021, CONTIENE AMPLIA INFORME DE INVESTIGADOR NO. 66171870, EL ANÁLISIS DE LA MATERIALIZACIÓN DE TRAYECTORIAS DEL PROYECTIL QUE IMPACTÓ EN LA HUMANIDAD DE MIGUEL ÁNGEL PINTO MONA. TOTAL 04 FOLIOS IMPRESOS POR AMBOS LADOS.</p>
183	VICTOR MARIO ROMERO , CC 17415799	TÉCNICO INVESTIGADOR III, DE LA SECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL CTI CALI, QUIEN SE UBICA EN EL CELULAR 3506011313, EMAIL: VICTOR.ROMERO@FISCALIA.GOV.CO	183.1 ACTA DE INSPECCIÓN A LUGARES, FPJ-9, FECHADA 02 DE JULIO DE 2021. (04 FOLIOS)
184	JULIÁN ANDRÉS RODAS BALSERO, IDENTIFICADO CON CÉDULA 1115184562	FUNCIONARIO DE LA ALCALDÍA DE CALI. SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, QUIÉN SE UBICA EN EL NÚMERO CELULAR 3145340375 Y EN LA DIRECCIÓN CARRERA 62	184.1 ENTREVISTA DEL 11 DE AGOSTO DE 2021. EN 04 FOLIOS.

	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	Código: FGN-MP02-F-03
	FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN	Versión: 02 Página: 82 de 87

		A NÚMERO 7-30 BARRIO LIMONAR.	
185	MAURICIO BLANCO TORRES, CONDUCTOR SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA DE LA CIUDAD DE CALI, IDENTIFICADO CON CÉDULA 6393808	QUIÉN SE UBICA EN EL CELULAR 3168361602 Y EN LA DIRECCIÓN CALLE 72 A NÚMERO 3 A 75, BARRIO QUINTAS DE SALOMIA	185.1 ENTREVISTA DEL 11 DE AGOSTO DE 2021. EN 03 FOLIOS. FOLIOS
186	SAULO OLAYA FAJARDO IDENTIFICADO CON CÉDULA 16460770.	CONTRATISTA ALCALDÍA- SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE CALI, QUIÉN SE UBICA EN EL NÚMERO CELULAR 3152777274 Y EN LA CALLE 50 A NÚMERO 32 A 12, BARRIO LAUREANO GÓMEZ.	186.1 ENTREVISTA DEL 24 DE AGOSTO DE 2021. EN 03 FOLIOS. FOLIOS
187	JUAN MANUEL GOMEZ CARDONA, CC 1053781395	ASESOR DESPACHO DE LA SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA DE LA ALCALDÍA DE CALI, QUIEN SE PUEDE UBICAR EN EL EDIFICIO SAN MARINO, CRA 14 NORTE CON AVENIDA 6 NORTE, CELULAR: 3183904677.	187.1 ENTREVISTA DEL 11 DE AGOSTO DE 2021. EN 05 FOLIOS. FOLIOS
188	NATALI GONZALEZ ARCE, CÉDULA 38666635 Y QUIEN SE UBICA EN EL CELULAR 3006104283.	QUIEN SE UBICA EN EL CELULAR 3006104283.	188.1 <u>DILIGENCIA RENDIDA EL EL 09/08/2021</u> Y QUIEN TOMA LA DILIGENCIA ES EL INVESTIGADOR JARVIS ERAZO REALPE, CONTENIDA EN 03 FOLIOS. 188.2 <u>DILIGENCIA RENDIDA EL EL 11/08/2021</u> Y QUIEN TOMA LA DILIGENCIA ES EL INVESTIGADOR JARVIS ERAZO REALPE, CONTENIDA EN 03 FOLIOS. 188.3 <u>ENTREVISTA RENDIDA EL 6 DE JULIO DE 2022-</u> RECIBIDA POR VERONICA HURTADO PALMA- ASISTENTE DE FISCAL -
189	EDISON FERNANDO REYES CÓRDOBA IDENTIFICADO CON CÉDULA 16942411.	OFICIAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y QUIEN SE UBICA EN EL NÚMERO CELULAR 3104363825 Y EN LA CALLE 52 NÚMERO 4 C -23 BARRIO SALOMÍA EN CALI.	189.1 ENTREVISTA DEL MAYOR EDINSON FERNANDO REYES CORDOBA, CC 16.942.411 DEL 12 DE AGOSTO DE 2021, EN DOS FOLIOS.
190	JOHN GERARDO GÓMEZ VELA IDENTIFICADO CON CÉDULA 1020376	TÉCNICO EN SERVICIO DE POLICÍA, QUIÉN SE UBICA EN EL CELULAR 3148146091 Y EN LA DIRECCIÓN CARRERA 26 I 1 NÚMERO 72 S- 88, BARRIO LOS LAGOS.	190.1 ENTREVISTA PATRULLERO JHON GERARDO GOMEZ VELA, CC 10290376 DEL 12 DE AGOSTO DE 2021. EN 03 FOLIOS.
191	DAYANA CAROLINA ROTAVISTA LÓPEZ	ESPECIALISTA EN SERVICIOS DE POLICÍA, QUIEN SE UBICA EN EL CELULAR 3104998887 Y	191.1 ENTREVISTA DE LA TENIENTE DAIANA CAROLINA ROTAVISTA LOPEZ, CC 1059697378, DEL 24-08-2021, EN TRES FOLIOS.

	IDENTIFICADA CON CÉDULA 1059697378	EN LA CALLE 52 NÚMERO 2-00, BARRIO EL LIDO.	
192	JEFFERSON FABIÁN AYALA CASTILLO, IDENTIFICADO CON CÉDULA 1026563449	PATRULLERO DE LA POLICÍA. Y QUIÉN SE UBICA EN EL CELULAR 3143366479, EN LA DIRECCIÓN CALLE 69 NÚMERO 7 L BIS 77 BARRIO LAS CEIBAS.	192.1 ENTREVISTA YEFFERSON FABIÁN AYALA CASTILLO EL DÍA 25/08/2021, TÉCNICO EN SERVICIO DE POLICÍA, EN 03 FOLIOS.
193	ÁNGEL ANDRÉS SERRANO ENRIQUE, IDENTIFICADO CON CÉDULA 85155169	PATRULLERO DE LA POLICÍA, QUIEN SE UBICA EN EL CELULAR 3162839146 Y EN LA CALLE 44 NÚMERO 10-100 BARRIO EL TRONCAL EN CALI.	193.1 ENTREVISTA REALIZADA A ÁNGEL ANDRÉS SERRANO ENRIQUEZ EL DÍA 25/08/2021, EN 04 FOLIOS. ANEXA CERTIFICADO DE INCAPACIDAD Y EPICRISIS.
194	JUAN PABLO DUSSAN VANEGAS,	MEDICO CLÍNICA NUESTRA DE CALI, CLL 10 - 33-51	194.1 CERTIFICADO DE INCAPACIDAD Y EPICRISIS DE ÁNGEL ANDRES SERRANO.
195	INGRID ALEXANDRA MELO SALAZAR, IDENTIFICADA CON CÉDULA 1114452497	QUIÉN SE UBICA EN EL TELÉFONO CELULAR 3156790891 Y EN LA CALLE 42 NÚMERO 85 E -48, BARRIO EL CANEY, EN CALI.	195.1 ENTREVISTA INGRID ALEXANDRA MELO SALAZAR, REALIZADA EL 26/08/2021, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PATRULLERA DE LA POLICÍA. EN 03 FOLIOS.
196	JOAQUÍN LEANDRO MEJÍA LÓPEZ , IDENTIFICADO CON CÉDULA 1122134133	QUIÉN SE DESEMPEÑA COMO UN PATRULLERO DE LA POLICÍA NACIONAL, SE PUEDE UBICAR EN EL CELULAR 3104972087 Y EN LA CARRERA 39 A NÚMERO 30C -33, BARRIO CIUDAD MODELO.	196.1 ENTREVISTA RENDIDA POR JOAQUÍN LEANDRO MEJÍA LÓPEZ EL DÍA 31/08/2021, EN 03 FOLIOS.
197	JOHN FREDY CASTRO RUALES, IDENTIFICADO CON CÉDULA 1061745675. SUBCOMANDA NTE ESTACIÓN	AGUA BLANCA, QUIEN SE UBICA EN EL CELULAR 3104040167 Y EN LA CALLE 13 NÚMERO 56-54 PRIMERO DE MAYO.	197.1 ENTREVISTA RENDIDA POR JOHN FREDY CASTRO RUALES EL DÍA 25/08/2021, EN 03 FOLIOS.
198	INTENDENTE JUAN CARLOS CEBALLOS GOMEZ, JEFE ASUNTOS POLICÍA METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CALI (E),	CLL 21 1N-65, PISO 4 BARRIO PILOTO CALI, POLICÍA NACIONAL.	198.1 OFICIO GS-2021-111469/COMAN-ASJUR-1., DEL 10-08-2021 DE ASUNTOS JURÍDICOS MECAL, EN UN FOLIO.
199	PATRULLERO STEVEN GARZON VELASCO	POLICÍA METROPOLITANA CALI.	199.1 EXTRACTO HOJA DE VIDA WILSON ORLANDO ESPARRAGOZA CORCHO, EN UN FOLIO.
200	ROSA MARÍA ORTIZ LÓPEZ, IDENTIFICADA CON CÉDULA, 1192769297,	CLL 2 OESTE # 55-25 GUADALUPE, CALI. CEL: 3022982236.	200.1 ENTREVISTA REALIZADA A LA SEÑORA ROSA MARÍA ORTIZ LÓPEZ, IDENTIFICADA CON CÉDULA, 1192769297, EL DÍA 22/09/2021, DILIGENCIA TOMADA POR EL INVESTIGADOR JARVIS ERAZO, EN TRES FOLIOS.
201	JOSE EDGAR QUINTERO MONCADA, CC 16454718	TÉCNICO INVESTIGADOR II, CUERPO TÉCNICO INVESTIGACIÓN CTI, CALI, EMAIL: JOSE.QUINTEROM@FIS	201.1 INFORME EJECUTIVO DEL 01 DE MAYO DE 2021, CONTENIDO EN 09 FOLIOS.

202	HEIDY YOHANA RICARDO VILLAREAL, CC 40341475	CALIA.GOV.CO CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN SECCIONAL TÉCNICO INVESTIGADOR IV, QUIÉN SE UBICA EN EL NÚMERO CELULAR 3112743563	202.1 ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER DEL 01 DE MAYO DE 2021 DEL SEÑOR EINER ALEXANDER LASSO, CONTENIDO EN 09 FOLIOS.
203	EDGAR OSWALDO CAICEDO TIGREROS, CC 1113628211	COMANDANTE ESTACIÓN DE POLICÍA EL DIAMANTE, CELULAR: 3175759981,	<p>203.1 ACTUACIÓN DE PRIMER RESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL DE 2021. 02 FOLIOS.</p> <p>203.2 OFICIO NO. GS-2021-0663801 DISPO-ESTPO-1.10, INFORMACIÓN APORTADA POR EL COMANDANTE DE POLICÍA DEL DIAMANTE DE LA CIUDAD DE CALI, TENIENTE EDGAR OSWALDO CAICEDO TIGREROS, RELACIONADA CON LISTADO DE FUNCIONARIOS Y ARMAS, ASÍ COMO ANOTACIÓN. OFICIO NO. 0663801 DEL 04 DE MAYO DE 2021, DIRIGIDO AL INVESTIGADOR LUIS GABRIEL LOAIZA MOLINA. TOTAL 14 FOLIOS</p> <p>203.3 OFICIO NO. GS-2021-066525 DISPO-ESTPO-1.10, DE FECHA 04 DE MAYO DE 2021, INFORMACIÓN APORTADA POR EL COMANDANTE DE POLICÍA DEL DIAMANTE DE LA CIUDAD DE CALI, TENIENTE EDGAR OSWALDO CAICEDO TIGREROS, DONDE BRINDAN INFORMACIÓN SOBRE PANDILLAS, GRUPOS ARMADOS QUE TENGAN INFLUENCIA EN EL SECTOR DE ALTERACIÓN DEL ORDEN PUBLICO DONDE SE SUSCITARON LOS HECHOS DEL 30 DE ABRIL DE 2021 EN EL BARRIO EL DIAMANTE, EXACTAMENTE CRA 29 CON CLL 41, DISTURBIOS OCASIONADOS FUERA DEL FRUVER DE RAZÓN SOCIAL MI CASA. DIRIGIDO AL INVESTIGADOR LUIS GABRIEL LOAIZA MOLINA.</p> <p>203.4 ENTREVISTA REALIZADA EL 20-05-2021. TOMADA POR ALBERTO YESID TSUCHIYA CAMARGO, CC 13501721, TÉCNICO INVESTIGADOR IV, CONTENIDO EN 04 FOLIOS</p> <p>203.5 OFICIO GS-2021 DISPO-ESTPO 29,25 INFORMANDO MUNICIÓN Y TIPO DE ARMAMENTO UTILIZADO EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA EL DIAMANTE, CONTENIDO EN 11 FOLIOS.</p>
204	DIANA MARCELA HERNÁNDEZ CASTAÑO, MEDICO FORENSE	QUIEN SE PUEDE UBICAR EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, REGIONAL SUROCCIDENTE- VALLE DEL CAUCA	204.1 INFORME PERICIAL DE NECROPSIA NO. 2021010176001000833, VICTIMA HEINAR ALEXANDER LASSO CHARA, DE FECHA 01 DE MAYO DE 2021, CONTENIDO EN 05 FOLIOS.
205	EDGAR RIASCOS CABRERA- CC 13006407- TP 627786,	CIRUJANO GENERAL, CLINICA CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS INTERNACIONALES THEM & CIA.	205.1 COPIA DE LA HISTORIA CLÍNICA DEL SERVICIO DE SALUD COSMITET LTDA DEL PACIENTE JORGE WILLIAM TORO CRUZ, FECHA DE REMISIÓN DEL DOCUMENTO EL 24 DE MAYO DE 2021. OBTENIDO POR EL INVESTIGADOR LUIS GABRIEL LOZADA MOLINA. TOTAL 81 FOLIOS
206	JOSÉ FERNANDO DIAZ, CC 1004548388	CRA 29 # 49B-41, FRUVER MI CASA- CEL: 3135376145	206.1 ENTREVISTA DE FECHA 06 DE MAYO DE 2021, CONTENIDA EN 03 FOLIOS Y RENDIDA POR INVESTIGADOR LUIS GABRIEL LOAIZA MOLINA.
207	MAURICIO ALEXANDER FIGUEROA BURBANO, CC 10004547906	CRA 29 # 41-49 BARRIO EL DIAMANTE- CEL: 3206265503.	207.1 ENTREVISTA DE FECHA 06 DE MAYO DE 2021, CONTENIDA EN 03 FOLIOS, TOMADA POR INVESTIGADOR LUIS GABRIEL LOAIZA MOLINA.

208	TENIENTE CORONEL ELIOMAR ERAZO ARTEAGA, COMANDANTE DEL BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR NO. 03	CANTÓN MILITAR PICHINCA, CLL 5 NO. 84-00	208.1 OFICIO 02408 MDN-COGFM-COEJE-SECEJ-JEMOP-DIV03 BR03-BPM03-CJM 1.5, DE FECHA 10-05-2021, RESPUESTA A PETICIÓN ELEVADA OR INVESTIGADOR LUIS GABRIEL LOAIZA, SOBRE COPIA DE ORDEN DE OPERACIONES DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2021. LO ANTERIOR CONTENIDO EN 01 FOLIO.
209	ANDRÉS ALEXANDER LASSO OCAMPO	CLL 72 A NO. 28 E BIS-16 CALIPSO- CEL: 3136348286	209.1 ENTREVISTA REALIZADA EL 14-05-2021, HIJO DEL SEÑOR EINER LASSO. TOMADA POR EL INVESTIGADOR LUIS GABRIEL LOAIZA MOLINA, CONTENIDA EN 03 FOLIOS.
210	STEPHANIA PUENTES RIASCOS	CRA 28 F # 40-67 BARRIO EL DIAMANTE- CEL: 3216676152,	210.1 ENTREVISTA DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2021, TOMADA POR EL INVESTIGADOR LUIS GABRIEL LOAIZA MOLINA, CONTENIDA EN 03 FOLIOS.
211	YANERLY TRUJILLO PACHECO	CRA 29 # 38-97, BARRIO EL DIAMANTE	211.1 ENTREVISTA DE FECHA 18-05-2021, TOMADA POR EL INVESTIGADOR LUIS GABRIEL LOAIZA MOLINA, CONTENIDA EN 03 FOLIOS.
212	ROSA ICELA PACHECO CASTILLO, CC 66818099	CRA 29 # 38-97, BARRIO EL DIAMANTE, CEL 3164497423	212.1 ENTREVISTA DE FECHA 18-05-2021, TOMADA POR EL INVESTIGADOR LUIS GABRIEL LOAIZA MOLINA, CONTENIDA EN 03 FOLIOS.ANEXA HISTORIA CLÍNICA EN 12 FOLIOS.
213	JORGE LUIS LOPEZ GARCIA, CC 1118848809, TÉCNICO EN SERVICIO DE POLICÍA, PATRULLERO.	CLL 13 B # 19-38 BARRIO GUAYAQUIL, CEL 3147211453.	213.1 ENTREVISTA DE FECHA 21-05-2021, TOMADA POR ALBERTO YESID TSUCHIYA CAMARGO, CC 13501721, TÉCNICO INVESTIGADOR IV, CONTENIDO EN 03 FOLIOS.
214	MIGUEL ANGEL ANGULO ASPRILLA, CC 94233651, TÉCNICO EN SERVICIO DE POLICÍA, PATRULLERO ADSCRITO AL GOES	CRA 11 NO. 14-11 ZARZAL- CEL 3147451395.	214.1 ENTREVISTA REALIZADA EL 20-05-2021. TOMADA POR ALBERTO YESID TSUCHIYA CAMARGO, CC 13501721, TÉCNICO INVESTIGADOR IV, CONTENIDO EN 03 FOLIOS
215	MAURICIO VIDAL RAMÍREZ, CC 1061772720, INTEGRANTE ESCUADRA GRUPO OPERACIONES GOES.	DIAGONAL 51 OESTE # 14-242, CAÑAVERALEJO CALI- CEL: 3163004485	215.1 ENTREVISTA REALIZADA EL 20-05-2021. TOMADA POR WILLIAM JARAMILLO GORDILLO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 625833, TÉCNICO INVESTIGADOR II, CONTENIDO EN 03 FOLIOS
216	JULIO CESAR GIRALDO CHAMORRO, CC 1112789939. INTEGRANTE ESCUADRA GRUPO OPERACIONES GOES.	DIAGONAL 51 OESTE # 14-242 CAÑAVERALEJO CALI- CEL: 3057254919.	216.1 ENTREVISTA REALIZADA EL 20-05-2021. TOMADA POR WILLIAM JARAMILLO GORDILLO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 625833, TÉCNICO INVESTIGADOR II, CONTENIDO EN 04 FOLIOS
217	CARLOS HUGO MERA PANTOJA, CC 1085322292, INTEGRANTE ESCUADRA GRUPO OPERACIONES GOES.	DIAGONAL 51 OESTE # 14-242 CAÑAVERALEJO CALI-CEL. 3133390039	217.1 ENTREVISTA REALIZADA EL 20-05-2021. TOMADA POR WILLIAM JARAMILLO GORDILLO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 625833, TÉCNICO INVESTIGADOR II, CONTENIDO EN 04 FOLIOS

218	FREDY GENTIL ZUÑIGA, FISCALÍA 97 GRUPO FLAGRANCIAS	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN,	218.1 <u>NOTICIA CRIMINAL 760016000193202103571 DE</u> FECHA 01 DE MAYO DE 2021.
219	JAVIER ZORRILLA PRIETO,	MEDICO RADIOLOGO, CLINICA COLSANITAS TEQUENDAMA	219.1 <u>ENTREGA INFORMA DE FECHA 10-05-2021,</u> RADIOGRAFÍA DE TÓRAX REALIZADO A LA SEÑORA ROSA ICELA PACHECO.
220	MAIRA ALEJANDRA GARCIA MENDOZA, REGISTRO MEDICO 1144167405	MEDICO CLINICA COLSANITAS. SEBASTIAN DE BELALCAZAR CALI.	220.1 <u>EPICRISIS DEL DÍA 01 -05 -2021,</u> PACIENTE ROSA ICELA PACHECO, CLÍNICA COLSANITAS SEBASTIÁN DE BELALCÁZAR. EN 02 FOLIOS
221	GUILLERMO FLOREZ CONTRERAS, CC 16606535.	MEDICO CLINICA COLSANITAS. SEBASTIAN DE BELALCAZAR CALI.	221.1 <u>EPICRISIS DEL DÍA 01 -05 -2021, PACIENTE ROSA</u> ICELA PACHECO, CLÍNICA COLSANITAS SEBASTIÁN DE BELALCÁZAR. EN 07 FOLIOS
222	WILSON PATIÑO RODRIGUEZ CC 16275595	INVESTIGADOR AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CTI- CEL 6082000 1003 CORREO WILSON.RODRIGUEZ@FISCALIA.GOV.CO	222.1 <u>INFORME IC0006447651</u> 1 FOLIO SIN ANEXOS. 222.2 <u>INFORME SN DEL 25/05/2021 ACTIVIDAD</u> CDR BARRIO EL DIAMANTE- 4 FOLIOS X AMBAS CARAS. HENRY
223	NICOLÁS PINZON CC 80727026	INVESTIGADOR CUERPO TECNICO DE INVESTIGACIÓN NIVEL CENTRAL BOGOTA	223.1 <u>INFORME POLICIA JUDICIAL 9-449883</u> DEL 16/07/2021 ANALISIS DE INFORMACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL ALCALDE DE CALI EN 20 FOLIOS.
224	CLARA LUZ ROLDAN	GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE	224.1 DECLARACIÓN JURADA
225	GLORIA STELLA HERRERA CANO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO FORENSE- INML REGIONAL SUROCCIDENTE – CALI CALLE 4B # 36-01 TEL 4069994.	225.1 <u>INFORME PERICIAL DE CLINICA FORENSE UBCALI-DSVLLC-05277-2021.</u> DE FECHA 01-07-2021. VALORACIÓN MEDICO LEGAL DE KAROL STEPHANNY MAPALLO BETANCOURT- TRES (3) FOLIOS. IMPRESO POR AMBAS CARAS.
226	MILENA MARIN TELÉFONO: +44(0)20741355 00 CORREO ELECTRÓNICO MILENA.MARIN@AMNESTY.ORG	SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIONES DIGITALES DEL PROGRAMA DE RESPUESTA A CRISIS DE AMNISTIA INTERNACIONAL	226.1 <u>VIDEO REALIZADO POR SITU - RESEARCH Y AMNISTÍA INTERNACIONAL</u> EN DONDE SE REALIZA LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS SUCEDIDOS EN LA INCURSIÓN VIOLENTA QUE TUVO LUGAR EL 3 DE MAYO DE 2021 DENOMINADA “OPERACIÓN SILOÉ”,

8. Datos del Fiscal:

Nombres y apellidos	ANDRÉS CAMILO RINCÓN BUSTOS		
Dirección:	DIAGONAL 22B NUMERO 52-01	Oficina:	224
Departamento:	Cundinamarca	Municipio:	Bogotá
Teléfono:	3184559828	Correo electrónico:	andresc.rincon@fiscalia.gov.co
Unidad	DIRECCION ESPECIALIZADA CONTRA VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS	No. de Fiscalía: 224 DECVDH – En apoyo a la Fiscalía 94 Especializada de Cali.	

Firma,



* En el evento de presentarse más acusados, víctimas y defensores proceda a copiar el cuadro completo a continuación del que contiene el formato original, sin alterar su contenido.



CIDH Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos

Observaciones y recomendaciones

Visita de trabajo a Colombia

Visita: Junio 2021

Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021

I. Introducción

1. De conformidad con la Constitución Política de 1991, Colombia es un Estado social de derecho con una institucionalidad democrática sólida, participativa y pluralista. Tal como ha hecho en ocasiones anteriores, la CIDH reconoce que esa carta política introdujo una arquitectura institucional equilibrada entre los poderes públicos y organismos autónomos con funciones específicas de control. La Comisión llama a preservar dicha arquitectura, reforzada por el Acuerdo de Paz de 2016¹, así como a consolidar un sistema operante de pesos y contrapesos.
2. Al mismo tiempo, la CIDH observa que las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril se vinculan con reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016. La Comisión constató un amplio consenso entre representantes del Estado y la sociedad civil frente a las causas del descontento que subyacen a las protestas, tal como la profunda inequidad en la distribución de la riqueza, la pobreza, la pobreza extrema, y el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, en particular, educación, trabajo y salud. Igualmente, los altos niveles de violencia e impunidad, así como la discriminación étnico-racial y de género.
3. La Comisión reconoce que estos desafíos se han visto exacerbados debido a las necesarias medidas de contención y atención de la pandemia de la COVID-19, las cuales, al igual que en otros países, han causado un gran impacto económico y social y han alterado la política general trazada por los gobiernos de turno. Adicionalmente, reconoce que los efectos de la pandemia han repercutido en la falta de acceso a la salud, así como a oportunidades laborales y educativas, especialmente entre mujeres y jóvenes.
4. Adicionalmente, la CIDH considera que las manifestaciones en Colombia tienen una complejidad especial, no solo debido a que se han extendido a diferentes regiones del país, sino además porque la multiplicidad de peticiones, reivindicaciones y demandas sociales son de índole nacional, regional y municipal. En particular, resulta extremadamente preocupante el alto número de muertes y personas lesionadas, así como las graves denuncias de personas desaparecidas, violencia sexual y la utilización de perfilamiento étnico-racial. Igualmente, las agresiones a periodistas y a misiones médicas, el uso de la figura del traslado por protección y denuncias por detenciones arbitrarias.

¹ Jurisdicción Especial para la Paz, Gobierno de Colombia, Acuerdo Final para Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 24 de noviembre de 2016.

5. Durante la visita, la CIDH constató la existencia de un clima de polarización que se relaciona de forma directa, tanto con la discriminación estructural étnico racial y de género, como con factores de carácter político. Este fenómeno está presente en diferentes sectores sociales y se manifiesta en discursos estigmatizantes que a su vez propician un acelerado deterioro del debate público. La Comisión Interamericana encuentra especialmente preocupante estos discursos cuando provienen de autoridades públicas.
6. La Comisión ha observado el fenómeno de la violencia en Colombia, el cual se distingue, entre otros factores, por la presencia y accionar de diferentes estructuras criminales con características particulares en los distintos territorios del país. En este sentido, preocupa a la Comisión que algunos grupos al margen de la ley, incluidas bandas dedicadas al narcotráfico, puedan aprovechar la coyuntura actual para promover o realizar actividades delictivas.
7. Del mismo modo, la Comisión observa con preocupación la persistencia de lógicas del conflicto armado en la interpretación y respuesta a la actual movilización social. Al respecto, reitera que los desacuerdos se dan entre personas que hay que proteger y no frente a los enemigos que hay que combatir².
8. La Comisión considera que la polarización, la estigmatización, la violencia y la persistencia de lógicas bélicas dificultan todo esfuerzo de diálogo como mecanismo para alcanzar soluciones a la conflictividad social. Es imprescindible que los diálogos tengan un enfoque territorial y sean amplios e inclusivos, de forma que involucren a las y los jóvenes, a las personas indígenas y afrodescendientes, a las mujeres, a las personas LGBTI, a las personas en situación de pobreza, a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a las personas en movilidad humana y a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
9. En las presentes observaciones, la Comisión Interamericana da cuenta de los antecedentes de la protesta social en Colombia y las jornadas de manifestaciones iniciadas el 28 de abril. Asimismo, se presentan hallazgos sobre graves violaciones a los derechos humanos, en particular respecto del derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad de manifestantes, así como otras situaciones que ponen en riesgo la protesta social. De otra parte, respecto de las afectaciones a derechos fundamentales de terceros, a bienes públicos y privados protegidos en el contexto de las protestas. Adicionalmente, se plantean consideraciones sobre los cortes de ruta e Internet como espacio de protesta. Por último, la CIDH formula al Estado un abanico de recomendaciones.

II. Las protestas sociales iniciadas en abril de 2021

2.1 Antecedentes

² CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, p.44, párr. 105.

10. La Comisión Interamericana pudo constatar que las jornadas de protestas que comenzaron el 28 de abril de 2021 tienen reclamos similares a los de las movilizaciones de años anteriores. A través de sus mecanismos de monitoreo, la CIDH registró las jornadas de movilización que se llevaron a cabo en 2019³ y 2020⁴ a nivel nacional. Entre otras cosas, estas estuvieron motivadas por el aumento de los niveles de pobreza, inequidad y violencia, aunado al creciente número de asesinatos de personas defensoras, líderes y lideresas sociales, representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como firmantes del Acuerdo de Paz.
11. En relación con la inequidad, el Banco Mundial⁵ y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)⁶ han señalado que el sistema tributario del Estado de Colombia no introduce cambios en la distribución de los ingresos, medido a través del índice de Gini, lo que es considerado un indicador de regresividad impositiva. Además, presenta un gasto social relativamente bajo.
12. En el 2020, la pobreza monetaria alcanzó el 42.5 % y la pobreza monetaria extrema fue de 15.1%. Es decir que un total de 21 millones de personas se encontraban en situación de pobreza y 7.5 millones en pobreza extrema. Los departamentos con mayor concentración de población por debajo de la línea de pobreza coinciden con las regiones donde preponderan pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes⁷.
13. Adicionalmente, el índice de desempleo a nivel nacional en el trimestre febrero-abril 2021 fue de 15.1%⁸. Según lo informado por el Estado, el desempleo ha afectado particularmente a mujeres con una tasa del 19,9% (8.3% más en comparación con los hombres) y jóvenes con una tasa del 18,1%.
14. Con respecto a los índices de violencia, según información oficial, la tasa de homicidios se situó en 23.33 muertes cada 100 mil habitantes⁹. Si bien es el valor más bajo de este indicador desde 1974, continúa siendo alarmante. La CIDH observa que la totalidad de estos homicidios se concentró en el 55% del territorio nacional; particularmente en zonas caracterizadas por una presencia limitada del Estado. Adicionalmente, reconoce que, en dichas áreas, la presencia de grupos armados ilegales como fenómeno precedente a la

³ CIDH, Comunicado de Prensa “CIDH expresa su preocupación por actos de represión por parte de agentes del Estado y rechaza toda forma de violencia en el marco de las protestas en Colombia”, diciembre 2019.

⁴ Deutsche Welle (DW), “Colombia: enfrentamientos en primera protesta de 2020 contra gobierno”, enero 2020.

⁵ Banco Mundial, Política Fiscal en Colombia: Aprovechamiento de su Potencial para lograr una Sociedad más Equitativa, 2012, p. 5.

⁶ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Estudios Económicos de la OCDE Colombia, 2019, p. 30-35.

⁷ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Pobreza Monetaria y Pobreza Extrema (<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-monetaria>), 2021.

⁸ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Tasa global de participación, ocupación y desempleo. Total nacional, abril 202-2021.

⁹ Presidencia de la República, Colombia registró en el primer semestre del 2020 la tasa de homicidios más baja de los últimos 46 años: Policía Nacional, 1 de julio de 2020.

protesta añade una capa adicional de dificultad para la garantía de los derechos humanos. Esta situación tiene, además, el potencial de afectar el ejercicio del derecho a la protesta, acentuando el deber del Estado de actuar con apego a estándares interamericanos.

15. De acuerdo con cifras del Estado, en 2020 se registraron 53 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, mientras la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH) reportó 133 asesinatos¹⁰ contra dicho colectivo en ese mismo periodo. Por otra parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) registró 310 homicidios de personas con liderazgo social y defensoras de los derechos humanos durante 2020¹¹. Adicionalmente, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia constató en el asesinato de 73 firmantes del Acuerdo de Paz en ese mismo año¹².
16. La CIDH toma nota de las recientes alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo que reportan el riesgo inminente de la población debido a la reconfiguración de la violencia y la presencia de actores armados en el territorio¹³. Al respecto, subraya la afectación diferenciada de estos riesgos en pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
17. La Comisión también ha recibido información sobre bajos niveles de confianza ciudadana en las instituciones estatales, fenómeno que podría explicarse por temas como los altos niveles de impunidad. Según la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en 2018 la tasa de impunidad frente a homicidios dolosos osciló entre el 86.58% y el 94.30%¹⁴. Asimismo, según los datos de 2018 del Latinobarómetro, existe una extendida desconfianza de la sociedad colombiana en las instituciones del Estado, la cual supera el 70% en el caso del Poder Judicial y el 75% en el caso del Poder Ejecutivo y Legislativo¹⁵.
18. En su Informe Anual 2020, la Comisión tomó nota de las expresiones de preocupación de la sociedad civil sobre la concentración de atribuciones en el Poder Ejecutivo, así como por la posible afectación del sistema de contrapesos debido a vínculos entre integrantes de esta rama del Estado y las personas elegidas para ocupar órganos de investigación y control. Esta preocupación también se puso de presente en la audiencia sobre la "situación

¹⁰ Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH), Presentación Informe Anual de la Alta Comisionada de la ONU sobre los Derechos Humanos para Colombia, febrero de 2021, p. 3.

¹¹ Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), Líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2020, junio 2020.

¹² Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Nota de Prensa del Informe Trimestral del Secretario General de Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, enero 2021.

¹³ Defensoría del Pueblo Colombia, Alertas tempranas, 2021. No. 001, 002 y 003.

¹⁴ Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH), Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General. Situación de los derechos humanos en Colombia, febrero 2019, p. 9.

¹⁵ Latinobarómetro, Análisis Online Colombia, 2018.

de derechos humanos en Colombia", celebrada en el 178 Período de Sesiones¹⁶; así como durante la vista de la Comisión.

19. En cuanto a las garantías del derecho a la protesta en Colombia, cuyo ejercicio no está aún reglamentado por una ley estatutaria como fija la Constitución Política, la Comisión fue informada de la sentencia STC 7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia, con fecha del 22 de septiembre de 2020¹⁷. En esta decisión judicial se evidenció una problemática nacional de intervención violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en varias de las manifestaciones ciudadanas.
20. En la citada sentencia, la Sala de Casación Civil encontró que la fuerza pública, en especial el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD), constituye "una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones, porque su actuar lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión individualizable en el marco de las protestas"¹⁸. Asimismo, la Sala de Casación Civil encontró estereotipos arraigados sobre las protestas y sus participantes por parte de agentes de la fuerza pública, los cuales se verían reflejados, entre otras cosas, en la permisividad frente a violaciones de garantías individuales¹⁹.
21. La Comisión reconoce que esta decisión constituye un precedente judicial importante. Además, valora que parte de los reportes que entregaron las autoridades durante la visita obedecen a las órdenes fijadas en dicha sentencia. La CIDH destaca la importancia de que las autoridades concernidas cumplan de manera integral la decisión STC 7641-2020, de forma que se brinden garantías efectivas para el ejercicio del derecho a la protesta en Colombia²⁰.

2.2 El paro nacional

22. El 28 de abril de 2021 se dio inicio el denominado paro nacional, en respuesta a un proyecto de reforma tributaria ("Ley de Solidaridad Sostenible")²¹ presentado por el gobierno nacional al Congreso el 15 de abril. Posteriormente se dio a conocer otro proyecto que reformaba la prestación de servicios de salud dentro del Sistema General de Seguridad Social (Proyecto de Ley No. 010)²². Ambas iniciativas generaron un profundo descontento social y fueron retiradas del debate parlamentario el 2 y 19 de mayo,

¹⁶ CIDH, Audiencia Pública, 178 Período de Sesiones, "Situación de los derechos humanos en Colombia", 9 de diciembre de 2020

¹⁷ Corte Suprema de Justicia, STC 7641-2020.

¹⁸ Corte Suprema de Justicia, STC 7641-2020, p. 100.

¹⁹ Corte Suprema de Justicia, STC 7641-2020, p. 122.

²⁰ Corte Suprema de Justicia, STC 7641-2020.

²¹ Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Boletín No.11 "Ley de Solidaridad Sostenible", abril 2021.

²² Ministerio de Salud y Protección Social, Proyecto de Ley No. 010, mayo 2021.

respectivamente. A juicio de la Comisión, el hecho de que las protestas persistan hasta la fecha da cuenta de la magnitud del descontento social y del carácter estructural de sus reivindicaciones.

23. La Comisión Interamericana destaca la masiva participación ciudadana en asuntos públicos a través del ejercicio del derecho a la protesta pública y pacífica, contemplado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia²³ y protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos²⁴. Asimismo, menciona que las movilizaciones han facilitado la inserción en el debate público de algunos de los reclamos sociales provenientes de la juventud, como el acceso universal a la salud y educación, y la necesidad de una reforma a la Policía Nacional de Colombia.
24. La protesta pacífica ha cumplido un rol esencial en dar visibilidad a reclamos que requieren ser atendidos y voces que deben ser escuchadas. A su vez, ha contribuido a que las autoridades de los distintos niveles tengan una mejor comprensión de asuntos que afectan a la ciudadanía. La Comisión valora este momento como una oportunidad para el fortalecimiento del sistema democrático y la garantía de los derechos humanos.
25. El Estado colombiano reportó a la CIDH que, entre el 28 de abril y el 4 de junio, en el marco del paro nacional, se realizaron 12.478 protestas en 862 municipios de los 32 departamentos, que incluyen: 6.328 concentraciones, 2.300 marchas, 3.190 bloqueos, 632 movilizaciones y 28 asambleas. El 89% de las protestas, esto es 11.060, se desarrollaron sin registrar hechos de violencia y contaron con el acompañamiento de las personerías municipales, gestores de convivencia, funcionarios de la defensoría del pueblo y agentes policiales.
26. Adicionalmente, el Estado adujo que en 1.418 protestas, correspondiente al 11%, se presentaron disturbios o acciones violentas que a su juicio afectaron la convivencia ciudadana y para las cuales fue habilitada la intervención del ESMAD. De acuerdo a lo informado, este cuerpo de seguridad no realizaría ninguna labor de patrullaje permanente, sino que interviene cuando hay actos de violencia en contextos de protestas.
27. Durante la visita, el Estado destacó el carácter excepcional del uso de la fuerza con el fin de proteger los derechos humanos de la población en general contra amenazas graves e inminentes, bajo protocolos que siguen criterios de prevención, persuasión, disuasión, reacción y contención. Igualmente, indicó que la fuerza fue utilizada únicamente en los casos en que resultó necesaria la intervención de la policía y bajo un previo análisis de la legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y razonabilidad²⁵.

²³Corte Constitucional, Constitución Política de Colombia, Artículo 37, Actualizada con actos legislativos a 2015. p.17.

²⁴Organización de los Estados Americanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión, noviembre 1969.

²⁵ Ministerio de Relaciones Exteriores, Reporte Escrito para la visita de trabajo a Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 8 de junio de 2021.

28. No obstante lo anterior, la Comisión Interamericana recibió denuncias sobre reiteradas violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales. Asimismo, recibió información sobre afectaciones a terceros y bienes públicos en el mismo contexto. A continuación, la CIDH se referirá a los hallazgos de la visita de trabajo y realizará consideraciones relativas a los cortes de ruta y sobre el Internet como espacio de protesta.

III. Principales violaciones a los derechos humanos observadas y obstáculos identificados para la garantía del derecho de protesta

29. En el marco de la visita de trabajo, la Comisión Interamericana recibió información sobre graves violaciones a los derechos humanos y distintos obstáculos para garantizar la protesta social. De igual manera, observó el impacto que la polarización y la estigmatización tienen sobre los derechos humanos de las personas manifestantes. Como principales preocupaciones identificó: el uso desproporcionado de la fuerza; la violencia basada en género en el marco de la protesta; la violencia étnico-racial en el marco de la protesta; la violencia contra periodistas y contra misiones médicas; irregularidades en los traslados por protección; y denuncias de desaparición; así como el uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar.
30. Al abordar el derecho humano a la protesta, la Comisión recuerda que los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes; es decir, que todos los derechos humanos están relacionados entre sí y se refuerzan mutuamente, sin que exista, en principio, la preeminencia de uno de ellos que vacíe el contenido esencial de otros. Asimismo, recuerda a los Estados que en el ejercicio de sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos, debe contemplarse el principio de no discriminación, como norma imperativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
31. Según la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, entre el 28 de abril y el 5 de junio se registraron 51 personas fallecidas. De estas, 21 habrían sucedido en el marco de las protestas, 11 hechos se encontraban en proceso de verificación y 19 habrían sucedido en el lapso de las jornadas del paro nacional pero no en el contexto de protestas. La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales informó que, entre el 28 de abril y el 13 de junio, se presentaron 1.113 personas civiles lesionadas²⁶. La Defensoría del Pueblo registró 18 casos de lesiones oculares²⁷.
32. Asimismo, el Estado reportó en su informe que 1.106 civiles y 1.253 policías resultaron lesionados, particularmente en las ciudades de Bogotá, Cali, Yumbo, Neiva, Medellín, Pasto y Popayán y otros municipios de Risaralda y Valle del Cauca. También informó sobre actos

²⁶ Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Boletín No. 32: Derechos Humanos en el Marco de Paro Nacional 2021, p.1.

²⁷ Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial Visita CIDH, Colombia Protesta Social abril-junio 2021, Archivo de la Comisión. p. 33.

violentos contra bienes públicos y privados; y afectaciones a varios sectores económicos cuyo impacto consolidado ascendería, de acuerdo a sus estimaciones, a COP 11,9 billones (USD 3,3 miles de millones)²⁸ según lo estimado por el Estado.

33. La Defensoría del Pueblo también informó que recibió 783 reportes de personas no ubicadas, de las cuales 318 casos fueron descartados por estar repetidos o porque las personas ya habían sido localizadas. Asimismo, informó que 465 casos se trasladaron a la Fiscalía General de la Nación. De estos, 196 casos se habrían resuelto con la localización de las personas; 153 casos no fueron admitidos; 29 están en proceso de verificación. Según la información de la Defensoría, el Mecanismo de Búsqueda Urgente se habría activado respecto de 91 personas. Al respecto, la Fiscalía General de la Nación señaló que, al 15 de junio, se habían localizado a 335 personas y se mantenía activo para esa fecha el Mecanismo de Búsqueda Urgente respecto de 84 casos²⁹.
34. Adicionalmente, según la Defensoría del Pueblo, se habían registrado 113 hechos de violencia basada en género. De esos, 112 casos fueron presuntamente ocasionados por la fuerza pública y su ESMAD, 99 contra mujeres y 13 contra personas LGBTI. Entre las denuncias se incluyen 27 casos de violencia sexual, 5 hechos de acceso carnal violento y 22 tocamientos³⁰. Asimismo, se informó sobre el caso de violencia de género sufrido por una mujer policía en el marco de las manifestaciones.
35. En cuanto al registro de cifras, en su respuesta, el Estado informó sobre la existencia de un Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos, desde el cual se hace un seguimiento de toda la situación relacionada con derechos humanos. Según información reportada en dicho Sistema, al 24 de junio se registraban 54 personas fallecidas y 1.140 personas civiles lesionadas. Asimismo, se indica que al 10 de junio solo faltaba por localizar 84 personas, de los 572 registros iniciales, de las cuales se incluye 4 denuncias de desaparición³¹.
36. Por otra parte, durante la visita de trabajo, la organización de la sociedad civil Temblores informó sobre la existencia de 4.687 casos de violencia policial. A su vez, suministró un registro de 73 personas fallecidas en el marco de las protestas, de las cuales, 44 estarían presuntamente relacionados con el accionar de la fuerza pública y 29 están en proceso de verificación³². Asimismo, las organizaciones que conforman la Campaña Defender la

²⁸Ministerio de la Defensa, Balance General del Paro Nacional, 9 de junio.

²⁹ Fiscalía General de la Nación, Nota de Prensa “Fiscalía ha ubicado a 335 personas y mantiene activo el Mecanismo de Búsqueda Urgente en 84 casos más”, junio 2021.

³⁰ Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial Visita CIDH, Colombia Protesta Social abril-junio 2021, Archivo de la Comisión. p. 49.

³¹ Consejería de Derechos Humanos, Boletín #41 de Derechos Humanos en el marco del Paro Nacional 2021 (http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2021/Paginas/140521-infografia-DDHH-Paro-Nacional-2021.aspx?TSPD_101_R0=0883a32c4dab2000bf1ee9b0a4b02c5d553bc94d80ff8b342f5fe85b41f96d2b27b36b19d7a152108a1e8960b1430004d73a4061a5c27694cf43f376ee9d8ce078b8039c6e75743fc7c035fbc4d84117abdc3ebdd1113945ab5acc3c24dc2a), 24 de junio de 2021.

³² Temblores Org, Plataforma Grita, junio 2021.

Libertad Asunto de Todas denunciaron el fallecimiento de 84 personas en el marco de las manifestaciones; en 28 de estos casos estarían involucrados integrantes de la Policía como posibles responsables, 7 serían atribuibles a personas de civil sin identificar y en 43 casos no se ha identificado a los autores; 14 casos se encontrarían en proceso de verificación³³.

37. De la misma forma, las organizaciones que conforman la Campaña Defender la Libertad registraron 1.790 personas heridas, de las cuales 84 han sido víctimas de lesiones oculares³⁴. También reportan 3.274 personas habrían sido detenidas en el marco de las protestas. Por su parte, Temblores contabilizó 1.617 víctimas de violencia física y suministró un registro de 82 personas con traumas oculares. Adicionalmente, informó sobre 2.005 detenciones arbitrarias ocurridas en el marco de las protestas. Con respecto a los hechos de violencia sexual, esa organización reportó 25 casos cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública, 18 corresponden a víctimas del sexo femenino y 9 del sexo masculino³⁶.
38. La Comisión manifiesta su preocupación por las inconsistencias en las cifras registradas por las distintas entidades del Estado, así como por las disparidades presentadas entre los números reportados por éstas y aquellos que han resultado de los hechos documentados por la sociedad civil, principalmente en relación con víctimas fatales y con personas desaparecidas. En cuanto a los casos en los que han iniciado investigaciones, la Fiscalía General de la Nación entregó un informe explicando la metodología, las líneas de investigación en curso y los criterios técnicos de tiempo, modo y lugar utilizados. Al respecto, la CIDH recibió cuestionamientos por parte de la sociedad civil sobre la falta de publicidad de los criterios utilizados por la Fiscalía para establecer cuáles muertes estarían vinculadas con las protestas y cuáles no.
39. La Comisión Interamericana considera que estas inconsistencias pueden generar desconfianza de la ciudadanía en las autoridades. Por esta razón, el Estado debe mantener un registro de información consistente, actualizado y público, con participación de la sociedad civil; así como transparencia sobre los criterios utilizados en las investigaciones y sus avances respectivos. Adicionalmente, la Comisión señala que el manejo de registros e hipótesis tan dispares sobre las personas fallecidas y lesionadas en el marco de las protestas genera un obstáculo en el acceso a la justicia de las personas que alegan ser víctimas de violaciones de derechos humanos. En cualquier escenario, la dimensión de las cifras reflejadas en los distintos reportes, en términos de pérdidas de vidas humanas, resulta de extrema preocupación para la Comisión y la condena de manera enfática.
40. Asimismo, la Comisión recuerda que el derecho de acceso a la información pública impone a los Estados, entre otros, el deber de proporcionar información fidedigna y desagregada.

³³ Campaña Defender la Libertad, Boletín informativo No.17: #ParoNacional, junio 2021.

³⁴ Campaña Defender la Libertad, Boletín informativo No.17: #ParoNacional, junio 2021.

³⁵ Temblores Org, Plataforma Grita, mayo de 2021.

³⁶ Temblores Org, Plataforma Grita, mayo de 2021.

Del mismo modo, subraya la obligación de preservar y facilitar el acceso a los archivos estatales relacionados con violaciones a los derechos humanos, no sólo para preservar las investigaciones sino para que, además, estas violaciones no vuelvan a repetirse³⁷.

41. La Comisión Interamericana manifiesta su firme condena y rechazo por los altos niveles de violencia registrados en el marco de la protesta social, tanto aquella ocasionada por el uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza pública como la provocada por grupos ajenos a la protesta misma.

3.1 Uso desproporcionado de la fuerza

42. En el marco de la visita de trabajo, la Comisión Interamericana fue informada que, en cumplimiento de la decisión ya citada de la Corte Suprema de Justicia el Estado colombiano expidió el Decreto 003 de 2021, titulado “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”. Dicha normativa establece directrices para la actuación de las autoridades de policía “en sus funciones de garantía de derechos fundamentales, conservación de la convivencia ciudadana y el orden público en el marco de las manifestaciones públicas y pacíficas”³⁸. Al respecto, la Comisión ha tomado nota de anuncios de modificación del citado decreto por parte de las autoridades del Estado.
43. Particularmente, el artículo 2 del Decreto 003 de 2021 establece la primacía del diálogo y la mediación en las protestas. En tal sentido, señala que “las autoridades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial, están en la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación en el desarrollo de las manifestaciones públicas, como elementos determinantes y principales dentro de la actuación de las autoridades administrativas y de policía (...) [l]a promoción del diálogo y la mediación serán permanentes, aun cuando los medios pacíficos de intervención se consideren agotados y se proceda al uso de la fuerza en los términos del presente protocolo”³⁹.
44. Adicionalmente, el Estado colombiano informó a la CIDH que, por medio de la Directiva 05 del 1 de marzo de 2021, la Policía Nacional estableció los “parámetros institucionales para la activación del sistema de anticipación y atención de manifestaciones públicas y control de disturbios en el territorio nacional”⁴⁰. Asimismo, para el acompañamiento de las jornadas de manifestación que se vienen desarrollando desde el 28 de abril, se

44. ³⁷ CIDH y su RELE, El derecho al acceso a la información en el marco jurídico interamericano, diciembre de 2009, p. 11, párr.

³⁸ Corte Suprema de Justicia de la Corte de Colombia, Decreto 003, “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”, 5 de enero de 2021.

³⁹ Corte Suprema de Justicia de la Corte de Colombia, Decreto 003, “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”, 5 de enero de 2021, art. 2.

⁴⁰ Policía Nacional de Colombia, Informe del Sector de Defensa, Garantías a la Manifestación Pacífica y Control de Acciones Violentas. Periodo 28 de abril al 4 de junio 2021. Directiva Operativa Transitoria 005, 1 de marzo de 2021, p. 23.

expidió la Directiva Operativa Transitoria No. 018 el 7 de mayo de 2021, sobre el “Fortalecimiento del servicio de policía para la garantía de la manifestación pública pacífica desarrollada desde el día 21 de abril de 2021”⁴¹.

45. De igual manera, en su respuesta, el Estado informó que de acuerdo a los protocolos de la Policía Nacional, existen dos dispositivos distintos. Uno de acompañamiento, protección y garantía del derecho a la manifestación pública y pacífica, prestado sin hacer uso de armas de fuego; y otro de vigilancia con actuación de patrullas de policía, cuya misión es velar por la seguridad y convivencia ciudadana, que está autorizado al porte de armas.
46. Sin embargo, la CIDH ha podido constatar que en reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal. Ello pudo ser cotejado con la información recibida a través de audios, videos, fotografías, así como en reuniones con organizaciones sociales y testimonios individuales y colectivos tomados en el marco de la visita. La Comisión considera que la correcta aplicación de los protocolos sobre uso de la fuerza pública deben responder a los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Ante escenarios complejos el actuar de las autoridades no debe ser indiscriminado, sino que debe individualizar a los actores violentos y distinguirlos respecto de aquellos que ejercen el legítimo derecho de manifestación.
47. Particularmente, la Comisión recibió reiteradas denuncias señalando que, desde el inicio de las protestas sociales, una parte considerable de las actuaciones de la fuerza pública estuvo dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones. Esto también habría impactado a quienes no participaban en las protestas y contribuido a un escalamiento de la tensión. En este sentido, se recibieron denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza con armas no letales; por ejemplo, mediante el uso indiscriminado de gases irritantes vencidos, o la utilización del dispositivo lanzagranadas Venom, cuya utilización fue prohibida por parte de un juez administrativo de Popayán el 2 de junio⁴².
48. La CIDH también recibió graves denuncias sobre el empleo indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes y personas que no participaban en las protestas, especialmente en Cali y distintos municipios del Valle del Cauca, así como en Pereira, Risaralda. Las denuncias recibidas darían cuenta del empleo de este tipo de armamento presuntamente por parte de algunos integrantes de la fuerza pública, algunos de los cuales no estarían plenamente identificados. La Comisión también recibió información extremadamente preocupante sobre la posible actuación de personas armadas vestidas de civil, algunas de las cuales habrían obrado aparentemente con aquiescencia de miembros de la policía. De acuerdo con información pública, esto sucedió en diversas

⁴¹ Policía Nacional de Colombia, Informe del Sector de Defensa, Garantías a la Manifestación Pacífica y Control de Acciones Violentas. Periodo 28 de abril al 4 de junio 2021. Directiva Operativa Transitoria 005, 1 de marzo de 2021, p. 23.

⁴² Juzgado Décimo Administrativo Mixto y de la Oralidad del Circuito de Popayán, Sentencia No. 065 de 2021, 2 de junio.

fechas y lugares, alcanzando el punto más álgido el 28 de mayo en la ciudad de Cali, cuando se registraron 13 personas muertas y 36 lesionadas⁴³.

49. Por otra parte, la CIDH recibió información señalando que, en algunos departamentos como el Valle del Cauca, las personas civiles armadas se desplazaban en motocicletas y camionetas con las placas tapadas al momento de intimidar, agredir y hostigar a manifestantes o a quienes huían de los enfrentamientos. Por ejemplo, la Comisión tomó nota de la información pública sobre un grupo de personas de civil portando armas de fuego que se trasladaba en un camión presuntamente registrado como propiedad de la Policía Nacional de Colombia⁴⁴. Al respecto, las autoridades del Estado manifestaron que existieron infiltraciones en las protestas de terceros armados. También señalaron que han pedido a la Fiscalía General de la Nación que realice las investigaciones correspondientes.
50. Es de indicar que relatos recibidos por la CIDH refieren de manera consistente el uso desproporcionado de la fuerza por agentes del ESMAD. Según lo indicado en dichos relatos, agentes de ese escuadrón habrían irrumpido en diferentes movilizaciones, puntos de resistencia y otros eventos de concentración pacífica mediante agresiones físicas, sexuales, verbales. De igual forma, los testimonios recibidos refieren el empleo de canicas de vidrio, balas o municiones de goma, así como el disparo de gases lacrimógenos o asfixiantes de manera indiscriminada, ininterrumpida y en ocasiones, directamente hacia la cabeza y tórax de las personas manifestantes. Esto habría resultado en un alto número de personas heridas, con lesiones oculares y fallecidas. Particularmente, la Comisión recibió al menos una decena de testimonios de personas que sufrieron lesiones oculares de diversa gravedad.
51. Asimismo, la Comisión recibió testimonios que dan cuenta del uso de helicópteros oficiales sobrevolando a baja altitud y de manera intimidante durante las manifestaciones. Al respecto, la Vice Fiscal de la Nación manifestó a la delegación de la Comisión que hasta ese momento no se contaba con denuncia alguna relativa al sobrevuelo de aeronaves. Por otra parte, la CIDH recibió información pública sobre el atropellamiento de personas manifestantes mediante tanquetas antidisturbios⁴⁵.
52. La CIDH también recibió denuncias consistentes respecto a que, en algunos casos, los gases lacrimógenos fueron disparados directamente contra los espacios de refugio y cobijo de manifestantes, puestos médicos improvisados e inclusive en zonas habitacionales, lo que habría afectado de manera desproporcionada a personas adultas mayores, así como a niños, niñas y adolescentes que no participaban en las protestas.
53. La Comisión advierte que según los testimonios recibidos en el Valle del Cauca, los grupos más afectados son las personas jóvenes, estudiantes, periodistas, pueblos

2021. ⁴³ El País, Nota de Prensa: Balance preliminar del 28 de mayo en Cali: 13 muertes violentas y 36 heridos, 28 de mayo de 2021.

⁴⁴ El Espectador, Paro Nacional: Policía admite que camión con hombres vestidos de civil es suyo, 6 de mayo de 2021.

⁴⁵ El tiempo, Joven atropellado por tanqueta del Esmad en Popayán se recupera, 19 de mayo de 2021.

indígenas, afrodescendientes y mujeres, constituyen los grupos más afectados por las diversas formas de violencia desplegada por el Estado.

54. Por su parte, ante las denuncias efectuadas por presuntas agresiones por lesiones oculares, el Estado informó a la CIDH sobre la apertura de 11 investigaciones disciplinarias, 5 en Bogotá, 1 en Popayán, 3 en Risaralda, 1 en Medellín y 1 en Neiva. De estas, 1 fue asumida por la Procuraduría General de la Nación en uso del poder preferente.
55. Considerando lo irreversible de las consecuencias que podrían derivarse del uso de la fuerza, la CIDH la concibe como un recurso último que, limitado cualitativa y cuantitativamente, pretende impedir un hecho de mayor gravedad que el que provoca la reacción estatal. Dentro de ese marco caracterizado por la excepcionalidad, tanto la Comisión como la Corte IDH, han coincidido en que, para que el uso de la fuerza se encuentre justificado, se deberán efectivamente satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad⁴⁶. Esto, en términos generales, supondría que la misma se encuentre establecida en una ley y persiga un fin legítimo; que se realice una evaluación que permita verificar la existencia y disponibilidad de medios menos lesivos; y que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el riesgo real que representa la persona y con el nivel de resistencia, lo cual implicaría un equilibrio entre la situación que enfrenta el funcionario y su respuesta, considerando el daño potencial que podría ser ocasionado.
56. Asimismo, en concordancia con el principio de excepcionalidad, los Estados deberán utilizar, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Esta restricción en el uso de la fuerza no se refiere únicamente a armas letales. Entre las medidas cuyo uso debe ser controlado se encuentran también aquellas consideradas como “no letales” o “menos letales”. En esta categoría es posible englobar diferentes tipos de balas de goma, gases lacrimógenos, proyectiles de caucho, balas de plástico, dispositivos sonoros, entre otros.
57. En su informe Protesta y Derechos Humanos, la CIDH señaló que la dispersión o desconcentración de las manifestaciones de forma legal y legítima sólo puede permitirse en casos muy excepcionales, “mediante una orden expresa y fundamentada en un riesgo grave para la vida o la integridad física de las personas, cuando se haya intentado el diálogo y no fueran posibles otras medidas menos lesivas para proteger esos derechos”⁴⁷.
58. A través de sus mecanismos de monitoreo, la CIDH ha podido constatar que en el caso de las protestas en Colombia, el uso de artefactos no letales han producido lesiones graves, mutilaciones, así como la muerte de al menos una persona. La Comisión recuerda que,

⁴⁶ Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012, Serie C No. 251, párr. 85

⁴⁷ CIDH, Protesta y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 22/19, septiembre 2019, párr. 153; Consejo de Derechos Humanos, Informe conjunto del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial sobre las violaciones, sumarias o arbitrarias acerca de la gestión adecuada de las manifestaciones, A/HRC/31/66, 4 de febrero de 2016, párr. 61-62.

bajo ciertas circunstancias, la letalidad de un arma depende de su uso y control. En ese sentido, reafirma al Estado su deber de garantizar la aplicación práctica y efectiva de los protocolos de uso de la fuerza.

59. La Comisión reafirma que el derecho a la vida, protegido bajo la Convención Americana, es inviolable, y por su carácter esencial es la precondition para el ejercicio de todos los demás derechos humanos. Los órganos del Sistema Interamericano han reiterado que el uso de la fuerza por el Estado debe ajustarse a los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad. Asimismo, se recuerda al Estado colombiano que la fuerza letal no puede ser utilizada para meramente mantener o restituir el orden público; sólo la protección de la vida y la integridad física ante amenazas inminentes y reales puede ser un objetivo legítimo para aplicar la fuerza letal por parte de agentes estatales.
60. Adicionalmente, la CIDH urge al Estado a que implemente en forma inmediata y apremiante mecanismos para prohibir e impedir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso de control del orden público en casos de protestas. La Comisión, además, reitera que las armas de fuego y las respectivas municiones deben estar excluidas de los operativos de control de las protestas sociales y que los funcionarios policiales o militares que pudieran entrar en contacto con la manifestación no deben portar armas de fuego.
61. En ese sentido, la Comisión valora la información presentada por la alcaldía de Bogotá, según la cual, debido a la efectiva implementación del art. 33 del Decreto 003 de 2021⁴⁸, que prohibió el porte y uso de armas de fuego en el marco de las protestas, disminuyó el número de personas fallecidas en el paro nacional en comparación con las manifestaciones sucedidas el 9 y 10 de septiembre de 2020. Al respecto, la CIDH destaca la importancia de la participación de la sociedad civil en el proceso de diseño de dicha reforma.
62. Asimismo, toma nota de la información aportada por el Estado sobre la reforma institucional para reforzar la naturaleza civil del cuerpo policial y su finalidad de proteger a todas las personas residentes en Colombia, garantizar el ejercicio de las libertades públicas, y la convivencia ciudadana con un enfoque de derechos humanos⁴⁹.

⁴⁸ Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Decreto 003, Artículo 33, 5 de enero de 2021.

⁴⁹ Según la respuesta del Estado de fecha de 30 de junio de 2021: “Esta reforma propone: (i) Crear el Viceministerio de Políticas de Defensa y Seguridad Ciudadana, el cual trabajará con las autoridades político administrativas, articulando los fines y mecanismos que permitan consolidar de manera efectiva la política pública en materia de seguridad ciudadana; (ii) Denominar el Ministerio de Defensa Nacional como Ministerio de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana; (iii) expedir un decreto para modernizar la estructura orgánica de la Policía Nacional con el enfoque de fortalecer la política de Derechos Humanos y los estándares para la prestación del servicio; (iv) presentar al Congreso de la República el Proyecto de Ley para crear el Estatuto Disciplinario Policial, el cual se armonizará con los pronunciamientos en materia de Derechos Humanos del Sistema Interamericano, de la ONU y de la Corte Constitucional, priorizando la investigación disciplinaria en casos relacionados con violaciones a los DD.HH, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las conductas que deben ser investigadas penalmente; (v) solicitar a los congresistas ponentes y coautores, en el marco de la colaboración armónica de poderes, priorizar el trámite del proyecto de ley de Carrera y Profesionalización Policial debido a que la profesionalización de nuestros policías es uno de los ejes fundamentales en la transformación de la cultura de trabajo de la Policía Nacional; (vi) en cuanto al uso de la fuerza, presentar un proyecto ley que dará el

63. Por último, la CIDH condena el alto número de violaciones a los derechos humanos denunciados en el contexto de la protesta social; e insta a las autoridades de Colombia a investigar con debida diligencia, a identificar y sancionar a los responsables e informar los resultados debidamente a la ciudadanía, y reparar las víctimas y sus familiares.

3.2 Violencia basada en género en el marco de la protesta

64. La Comisión, conforme a lo dispuesto en la Convención de Belém do Pará (Arts. 1 y 2)⁵⁰, los estándares interpretativos de la misma y la jurisprudencia de la Corte IDH, comprende por violencia basada en género cualquier acción o conducta basada en la identidad y/o expresión de género que cause daño o sufrimiento físico, psicológico, o sexual⁵¹.
65. En el marco de su vista, la CIDH recibió testimonios relacionados con diferentes tipos de violencia basada en el género. A partir de la información recabada, la Comisión pudo observar reiteradas denuncias respecto de actos cometidos por agentes de las fuerzas del orden, los cuales indicarían la utilización de la violencia de género como mecanismos de represión contra mujeres, niñas y personas LGBTI. Estos habrían sido utilizados tanto contra aquellas personas que se encontraban en la protesta como también contra aquellas que se ubicaban en zonas aledañas a la misma.
66. Al respecto, la CIDH recibió información sobre la grave denuncia de la adolescente que habría sido agredida sexualmente por varios agentes de la fuerza pública en la ciudad de Popayán y que posteriormente se habría suicidado el día 12 de mayo⁵². La Comisión fue informada por el Estado que estos hechos están bajo investigación.
67. Además, la Comisión observa con extrema preocupación los casos graves de violencia de género denunciados, incluyendo la sexual, contra mujeres indígenas quienes denuncian haber sido violentadas y estigmatizadas por sus expresiones culturales y simbología ancestral durante las manifestaciones. En este contexto, se recibió el testimonio de una mujer indígena en Puerto Madera, Cali, que fue abordada por dos agentes de la policía que se transportaban en una motocicleta, y luego la habrían agredido físicamente y abusado sexualmente de ella.

marco legal al uso y comercio de las armas menos letales en Colombia, y se expedirá el decreto que reglamenta las armas traumáticas; (vii) para el fortalecimiento de los procedimientos que realiza el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), convocar a países amigos para recibir recomendaciones de expertos internacionales sobre los protocolos de mediación, uso de la fuerza e intervención, y otras buenas prácticas internacionales que contribuirán a la profesionalización permanente del ESMAD; (viii) adoptar el uniforme color azul para la Policía Nacional de Colombia, alineándose a los estándares internacionales de cuerpos de Policía y de cumplimiento de ley en el mundo, lo cual refuerza su naturaleza civil; (ix) crear una Comisión para la Transformación Integral de la Policía Nacional de Colombia, la cual evaluará los aportes de la ciudadanía, la academia y la sociedad civil”.

⁵⁰ Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém do Pará”, junio de 1994. Arts. 1 y 2.

⁵¹ Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160.

⁵² El País, Nota de Prensa: “La fiscalía de Colombia investiga el caso de una menor que se suicidó tras ser retenida por la policía”, mayo de 2021.

68. Asimismo, la CIDH recibió testimonios de mujeres que narraron haber sufrido tocamientos durante su detención, amenazas de violación y abuso sexual, así como haber sido víctimas de estigmatización por agentes de la policía quienes las calificaban de “vándalas” o “guerrilleras” por encontrarse en las manifestaciones. Otra de las mujeres entrevistadas por la CIDH, denunció el disparo a quemarropa contra sus genitales, lo que le habría causado graves lesiones.
69. Adicionalmente, la Comisión tuvo noticia sobre la ocurrencia de 15 casos de violencias basadas en género en contra de mujeres afrodescendientes en el marco del paro nacional. La CIDH recuerda los riesgos específicos a los que se encuentran expuestas las mujeres afrodescendientes e indígenas debido a la discriminación racial y estructural a la que han estado sometidas por cuenta de los patrones históricos de violencia particulares que tienen su origen en la figura de la esclavización.
70. La Comisión, también recibió información y denuncia sobre un presunto caso de violencia sexual en contra de un hombre gay en Barranquilla durante una detención arbitraria; y denuncias de agresiones físicas y sexuales contra mujeres trans por parte de la fuerza pública en Tunja y Pasto.
71. Igualmente, la CIDH reafirma su condena por la violencia sexual que habría sufrido una agente de la fuerza pública dentro de una estación de policía vandalizada en la ciudad de Cali el 29 de abril⁵³.
72. Respecto de la violencia contra mujeres, en su respuesta el Estado informó que la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer trabaja de manera articulada con las 32 Secretarías de la Mujer y mecanismos de género a nivel departamental y de ciudad capital, para la identificación, acompañamiento y activación de rutas en casos de violencia contra las mujeres en el marco de las protestas sociales. Asimismo, a nivel judicial, es preciso anotar que la Fiscalía General de la Nación ha trabajado de manera decidida en: (i) el diseño e implementación del protocolo de investigación de violencia sexual; (ii) el fortalecimiento de las seccionales para la investigación de delitos de violencia sexual y; (iii) el apoyo a la estrategia interinstitucional de lucha contra la impunidad.
73. Por su parte, la Comisión recuerda al Estado, en relación con las denuncias de violencia de género, su obligación de investigar estos actos tomando en cuenta el principio de debida diligencia reforzada, en consonancia con su deber de protección y prevención de la violencia contra las mujeres y procurando que la investigación sea llevada a cabo bajo una perspectiva de género interseccional con otros factores de discriminación. También recuerda disponer de los mecanismos necesarios para garantizar a las víctimas el efectivo acceso a la justicia y reparación.

⁵³ Semana, Nota de Prensa: El desgarrador relato de una patrullera que fue abusada sexualmente por vándalos en un CAI, 5 de mayo de 2021.

74. Asimismo, la CIDH reconoce que, si bien es difícil determinar cuándo los actos de violencia contra las personas LGBTI son motivados por el prejuicio, al realizar las investigaciones, los Estados deben contar, como mínimo, con una averiguación exhaustiva de las razones que motivaron la violencia, sea perpetrada por agentes privados o agentes estatales.
75. En el caso particular de las mujeres indígenas y afrodescendientes, el Estado debe considerar todos los factores de riesgo que ellas puedan encontrar debido a su origen étnico-racial y su edad, según lo dispuesto en los artículos 6 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La CIDH recuerda las graves repercusiones que produce la falta de debida diligencia al investigar y sancionar los actos de violencia de género. Del mismo modo, resalta que la impunidad de estos delitos envía el mensaje de que esta violencia es tolerada, lo que favorece su perpetuación.
76. Por último, advierte que las vulneraciones a los derechos de niñas y mujeres indígenas y afrodescendientes no sólo les impactan a ellas individualmente, sino que también afectan negativamente a sus pueblos de origen, produciendo graves quiebres en el tejido social y aumentando la sensación de indefensión e impunidad. Por lo anterior, la CIDH insta al Estado a tomar en cuenta estos factores, a efecto de que los hechos sean investigados con prioridad y que se presta especial atención a la situación de violencia que podrían haber enfrentado las mujeres, niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes en el marco del paro nacional por parte de agentes estatales y no estatales. Además, insta a que se adopten de inmediato todas las medidas necesarias para prevenir, reducir y eliminar cualquier acto de discriminación, incluyendo la violencia sexual, y que se garantice el respeto y la protección de los territorios indígenas y de comunidades afrodescendientes ante la presencia de actores armados estatales y no estatales.

3.3 Violencia basada en discriminación étnico-racial en el marco de la protesta: Pueblos indígenas, Personas Afrodescendientes y Comunidades tribales

77. La CIDH entiende por violencia étnico-racial, conforme a lo dispuesto en la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia (Arts. 1 y 4), cualquier acción o conducta basada en el origen étnico-racial que cause estigmatización, exclusión o cualquier tipo de violencia, de forma directa o indirecta⁵⁴.
78. La Comisión toma nota, conforme a fuentes públicas disponibles, que algunas zonas con más tensión social en el marco de las protestas iniciadas desde el 28 de abril de 2021, concentran comunidades étnico-raciales. La CIDH observa que Cali, es la ciudad con

⁵⁴OEA, Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, arts. 1 y 4.

mayor población afrodescendiente en Colombia, y la segunda en América Latina⁵⁵. Por su parte, el departamento del Cauca alberga el mayor porcentaje de población indígena del país, agrupando 8 grupos étnicos, asentados en 26 de los 39 municipios del departamento del Cauca.

79. En ese sentido, recibió denuncias, por parte de organizaciones de la sociedad civil, sobre la situación de pueblos étnicos en el marco de las protestas; particularmente tomó nota de que al menos 82 personas afrodescendientes entre 13 y 60 años habrían sido víctimas de represión por parte de la fuerza pública en el marco de las protestas⁵⁶. Por ejemplo, fuentes públicas señalan que entre el 28 de abril y el 21 de mayo de 2021, de las 39 personas fallecidas en el marco de la protesta en Cali y Yumbo que estarían vinculadas con el uso excesivo de la fuerza, al menos 11 serían afrodescendientes⁵⁷.
80. Particularmente, la CIDH recibió con preocupación testimonios de integrantes de pueblos indígenas del departamento del Valle del Cauca sobre los graves efectos para sus comunidades tanto por la muerte de sus autoridades o líderes tradicionales, como por las agresiones contra los mismos. La CIDH también recibió información sobre agresiones, actos de intimidación, hostigamiento y estigmatización cometidos por civiles, al vincular a estos pueblos con las manifestaciones registradas en Cali.
81. Según lo informado por organizaciones étnicas a la CIDH, se registran 50 casos de ataques contra integrantes de la Minga Nacional, Social, Popular y Comunitaria desde el inicio de las movilizaciones el 28 de abril de 2021. Particularmente con relación a los pueblos indígenas, se han denunciado 2 fallecimientos, 3 agresiones físicas, 159 hostigamientos y 21 presuntas víctimas de atentados en el marco de las protestas sociales⁵⁸.
82. La Comisión reitera su preocupación por las expresiones públicas estigmatizantes sobre personas manifestantes de pueblos étnicos, y en ese sentido, recuerda el deber del Estado de prevenir y combatir las prácticas de discriminación racial directas e indirectas, así como a reparar integralmente a las víctimas.
83. La CIDH ha señalado que, debido a la discriminación estructural e histórica, las personas afrodescendientes e integrantes de pueblos indígenas, así como residentes de áreas geográficas en situación de pobreza y pobreza extrema, se encuentran más expuestas a

⁵⁵ Gobierno de Cauca, Cali, segunda ciudad con mayor población afrodescendiente en el país, 21 de mayo de 2013.

⁵⁶ Race and Equality, Informe afectaciones a pueblo negro afrodescendiente en Colombia el marco del Paro Nacional, 9 de junio de 2021, p.7.

⁵⁷ Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Análisis étnico-racial del uso excesivo de fuerza por parte de los agentes del Estado en Cali, 21 de mayo de 2022, p. 11.

⁵⁸ Organización Nacional Indígena de Colombia, Informe Ejecutivo sobre el contexto y las afectaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas dentro del Paro y Minga Nacional en Colombia, p. 12.

prácticas de perfilamiento racial por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, y por consiguiente a ser detenidas arbitrariamente y sufrir abusos⁵⁹.

84. La CIDH enfatiza en la urgencia de adoptar políticas integrales de seguridad ciudadana que prevengan y combatan el uso de criterios discriminatorios en acciones policiales, con el fin de erradicar el perfilamiento racial y el uso excesivo de la fuerza en consonancia con los principios de igualdad y no discriminación. La CIDH urge al Estado a combatir la discriminación étnico-racial y estructural que afecta principalmente a las personas en situación de pobreza.
85. Asimismo, la Comisión insta al Estado a adoptar medidas urgentes para investigar, juzgar y sancionar a los responsables por los hechos de violencia étnico-racial, así como a otorgar reparación integral de manera individual y colectiva con enfoque étnico-racial a víctimas y familiares.

3.4 Violencia contra periodistas

86. La Comisión tuvo noticia que el desarrollo de las protestas contó desde un principio con un importante despliegue de cobertura de la prensa. Al mismo tiempo, distintos testimonios recibidos coinciden en que las garantías para el cubrimiento se han venido deteriorando. De hecho, se recibieron reportes de periodistas que fueron víctimas de diversos ataques y limitaciones a su labor informativa en el contexto de las manifestaciones sociales.
87. De acuerdo a la información recibida, se habrían registrado por lo menos 236 ataques desde el comienzo de las protestas. Dichos ataques incluyen agresiones físicas, amenazas relacionadas con su labor en la cobertura de las protestas, robos y eliminaciones de material documental, hostigamientos, obstrucciones al trabajo periodístico, detenciones ilegales, ataques a medios de comunicación, entre otras. Según el Proyecto Antonio Nariño, que agrupa a varias organizaciones y gremios vinculadas al periodismo en Colombia, el periodo de protestas ha sido el mes más violento contra la prensa en las últimas décadas⁶⁰. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, el 54.1% de las 236 agresiones son atribuibles a la fuerza pública, el 31.6% a particulares, el 4% a funcionarios públicos y el 10.8% restante es desconocido⁶¹.
88. El 4 de junio de 2021, según hechos denunciados e información que circuló en redes sociales, los periodistas de *Canal 2* de Cali, Alberto Tejada y Jonathan Buitrago, fueron víctimas de disparos por parte del ESMAD mientras cubrían una protesta, pese a que ambos se identificaron como periodistas. La CIDH también recibieron información sobre

⁵⁹ CIDH, *Informe País: Situación de Derechos Humanos en Brasil*, 12 de febrero de 2021, p.19 - 40.

⁶⁰ Fundación Gabo. 11 de junio de 2021. *Peticiones urgentes por una prensa libre de violencia en Colombia*.

⁶¹ Ver información en www.flip.org.co.

el temor entre las mujeres periodistas a la violencia sexual al momento de reportar. Al respecto, la Comisión fue informada sobre un caso de violencia sexual contra una periodista en la ciudad de Cali.

89. Según los testimonios recibidos de más de 40 reporteros de Bogotá, Cali y Popayán, los hostigamientos a la prensa han provenido tanto por parte de agentes de seguridad como de manifestantes y civiles armados. Si bien el Estado ha informado sobre la apertura de al menos 8 investigaciones disciplinarias por agresiones contra periodistas, también se recibieron denuncias respecto de que la mayoría de estos ataques no habrían sido atendidos diligentemente por las autoridades.
90. Los hechos de violencia contra la prensa, aunados a la falta de respuesta institucional frente a estos hechos, habrían generado, según los testimonios recibidos, un clima generalizado de silenciamiento y “zonas vedadas” para ejercer el periodismo. La Comisión fue informada sobre un clima generalizado de autocensura por miedo a represalias, agresiones o estigmatización. Esto ha ocasionado, según lo indicaron varios periodistas que se reunieron con la Comisión, que personas comunicadoras decidan no salir a reportar o, en algunos casos, opten por no llevar de forma visible su identificación de prensa o distintivos del medio de comunicación al que pertenecen. Adicionalmente, según la información recibida, a raíz de la escalada de violencia contra la prensa en las calles, parte de la cobertura de las protestas comenzó a realizarse a partir de imágenes y videos tomados de Internet.
91. La Comisión expresó, también, su preocupación ante las agresiones sufridas por dos periodistas y un manifestante durante las protestas del 30 junio en Suba. Según información disponible, estas habrían sido efectuadas por agentes de la policía. La CIDH toma nota de que, según información pública, tres de los agentes policiales que habían participado de los hechos fueron suspendidos de sus cargos.
92. La CIDH recibió con preocupación reportes de ataques contra instalaciones de medios de comunicación por parte de algunos manifestantes y de acoso *online* principalmente a mujeres periodistas por sus publicaciones. Según testimonios recibidos, estos ataques ocurren en un contexto en el que autoridades y líderes políticos o sociales incurren en señalamientos estigmatizantes que animan a un rechazo ciudadano contra la prensa que tiene líneas editoriales distintas a las de su preferencia. Los ataques a instalaciones de los medios de comunicación también ponen en riesgo la integridad de periodistas y trabajadores.
93. La creciente desconfianza en los medios profundiza el deterioro del debate público y las agresiones contra la prensa dificultan la satisfacción del derecho de las personas a estar informadas desde todos los puntos de vista posibles. Algunos medios de comunicación también indicaron que no hay garantías para denunciar públicamente los ataques que están recibiendo debido al temor a que se repitan las agresiones. Adicionalmente, la CIDH recuerda que no existe nada más permisivo a la repetición de las violencias contra la

prensa que la ausencia de una reacción institucional contundente⁶². Por tanto, es fundamental que las autoridades al más alto nivel repudien enfáticamente cualquier escalada de violencia y se desvinculen de cualquier discurso que incite a este tipo de actos⁶³. Asimismo, es importante hacer un llamado y dar señales claras de un compromiso de investigar diligentemente las denuncias realizadas.

94. La Comisión recibió, también, información sobre la estigmatización de algunos medios de comunicación por personas con responsabilidades públicas y cómo ello habría derivado en manifestaciones de violencia en contra de la prensa. El cubrimiento de las protestas también ha generado profundas diferencias dentro del mismo ecosistema mediático. Sobre este punto, la CIDH considera que es fundamental que se respete el espacio para visiones plurales, alternativas y diversas sobre asuntos que conciernen a todas y todos como ciudadanos.
95. La violencia contra la prensa no sólo afecta el derecho a la libertad de expresión en su dimensión individual, sino también en su dimensión social o colectiva, ya que limita las posibilidades de la sociedad de mantenerse informada sobre los asuntos de interés público⁶⁴. La CIDH resalta que estas limitaciones a la libertad de prensa tienen también un impacto negativo en la búsqueda de profesionalización del periodismo y su papel esencial como labor y como método para la convivencia democrática⁶⁵.
96. La CIDH valora la importante labor ejercida por las y los periodistas durante las manifestaciones sociales en Colombia. Asimismo, considera importante recordar al Estado que las y los trabajadores de prensa cumplen una función crucial al recabar y difundir información de lo que sucede en las protestas, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad, por lo que las autoridades deben brindarles el más alto grado de protección para que puedan realizar su trabajo libremente. En la Declaración Conjunta de 2013, los Relatores Especiales de la ONU y la OEA indicaron que en el contexto de manifestaciones y situaciones de alta conflictividad social, el trabajo de comunicadores y el libre flujo de información “es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la

⁶² CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 11 de noviembre de 2020. Comunicado de prensa R271/20. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recuerda que no existe nada más permisivo a la repetición de las violencias contra la prensa que la ausencia de una reacción institucional contundente.

⁶³ Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Relatora Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). 25 de junio de 2012. Declaración conjunta sobre delitos contra la libertad de expresión.

⁶⁴ CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Violencia contra periodistas y trabajadores de medios. Estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de justicia. OEA/Ser.L/V/II. CIDH/RELE/INF. 12/13, 31 de diciembre de 2013, párr. 1; Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, párr. 142-149.

⁶⁵ CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 3 de mayo de 2021. Comunicado de prensa R112/21. En el Día Mundial para la Libertad de Prensa, la Relatoría Especial presenta su Informe Anual 2020 y reafirma su compromiso de respaldar el periodismo en el hemisferio.

actuación del Estado [...] previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad”⁶⁶.

97. Al respecto, la CIDH valora positivamente la adopción de la Directiva 011 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación, que exhorta a los miembros del gobierno nacional, alcaldías, gobernaciones, fuerza pública y, en general, a todos los servidores del Estado, a ser garantes de los derechos a la libertad de expresión e información. Esto sería especialmente importante, de acuerdo a la Procuraduría, debido a la coyuntura que atraviesa el país desde el pasado 28 de abril en la que la ciudadanía está ejerciendo su derecho a manifestarse pacíficamente, “lo cual debe ser respetado y protegido al igual que las expresiones de quienes no se encuentran de acuerdo y han fijado una posición diferente”⁶⁷.
98. La Comisión insta al Estado a condenar públicamente todo acto de violencia contra la prensa y recuerda la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los perpetradores de dichas agresiones. Al mismo tiempo, la Comisión invita a la prensa colombiana a velar por los estándares más altos de calidad periodística preservando la integridad de los hechos y la información. El fortalecimiento de la institucionalidad democrática requiere del periodismo como método y labor, el cual contribuye a que la sociedad cuente con puntos de vista diversos, balanceados y referenciales sobre los hechos de interés público que se están desarrollando.

3.4 Violencia contra misiones médicas

99. Por otra parte, en el marco de la visita, la CIDH recibió múltiple información sobre ataques a las misiones médicas por parte de la fuerza pública, poniendo en riesgo la vida e integridad del personal de salud, así como sobre denuncias de obstáculos para el tránsito regular de vehículos de emergencia sanitaria, transporte de insumos médicos y alimentos, frente a los que se precisa que éstos se habrían dado de forma excepcional en el marco de algunos cortes de vías. Adicionalmente, se recibieron denuncias sobre la presunta obstrucción del paso de ambulancias por parte de la fuerza pública, como sobre su uso en algunos casos para el transporte de fuerza pública y/o su armamento, en lugar de con fines de salud, lo que no sólo desvirtuaría la labor de las misiones médicas, sino que eleva el nivel de riesgo que enfrenta el personal de las mismas en el actual contexto.
100. Adicionalmente, la CIDH recibió por parte del Estado y de personal médico denuncias sobre la existencia de amenazas y de hostigamientos a unidades médicas y a personal de

⁶⁶ Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales. 13 de septiembre de 2013.

⁶⁷ Procuraduría General de la Nación, Directiva No. 011 de 2021, Garantía de libertad de expresión y libertad de información de las personas y los medios de comunicación, 8 de junio de 2021.

salud, especialmente a quienes estarían brindando soporte a las personas de la primera línea, así como hacía estudiantes que se han organizado para apoyar las manifestaciones. De igual manera, se recibió información sobre presuntos impedimentos por parte de la fuerza pública, particularmente del ESMAD, para la atención oportuna de personas manifestantes heridas, junto al temor de estas personas para acudir a centros de salud por el riesgo de ser judicializadas.

101. La CIDH también recibió información del personal médico y de enfermería sobre presuntas indicaciones de agentes del Estado para recusar la atención a las personas heridas en las manifestaciones. Además, se han denunciado presiones y amenazas hacia el personal de salud para que no se pronuncie sobre las protestas, así como para que proporcione registros médicos de las personas heridas en el marco de las manifestaciones so pena de sanciones y en contra de su obligación de salvaguardar el secreto profesional. La Comisión reitera al Estado la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los autores de las citadas agresiones.

3.5 Traslado por protección

102. Según información de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, en el marco de las protestas se realizaron más de 7,020 detenciones de personas mediante la figura jurídica denominada “traslado de protección”, regulado en el artículo 155 del Código Nacional de la Policía. Dicha figura tiene por finalidad declarada proteger la vida e integridad de una persona o de terceros cuando esté en riesgo o peligro y sólo si el traslado es el único medio disponible para evitar dicho riesgo. Según lo informado por el Estado en su respuesta, el traslado por protección no constituye una sanción, debiéndose proveer a la persona trasladada de todas las garantías necesarias.
103. Al respecto, la Comisión conoció que la Corte Constitucional colombiana concluyó desde el 2017 en la Sentencia C-281/17 que la figura del artículo 155, tal como está regulado “no ofrece suficientes garantías previas ni posteriores de debido proceso”. En este sentido, condicionó su constitucionalidad a la observancia de ciertas garantías, lo cual fue confirmado por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia STC 7641-2020⁶⁸, citada en los antecedentes.
104. La CIDH también conoció que la Policía y la Procuraduría General de la Nación desarrollaron la “Guía de acompañamiento a las movilizaciones ciudadanas: Alcance de intervención del Ministerio Público” que reiteró que tales “traslados” tienen un carácter excepcional y no deberían de realizarse a lugares destinados a la privación de la libertad.

⁶⁸Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, STC 7641-2020, 22 de septiembre de 2022.

Asimismo, el protocolo exige que se elabore un informe en el que se indiquen las circunstancias de la detención e identificación del policía que la realizó⁶⁹.

105. No obstante lo anterior, ante la excepcionalidad de la medida, llama la atención de la CIDH el alto número de traslados por protección reportados por el Estado. Adicionalmente, la Comisión recibió denuncias según las cuales no se conocerían los parámetros objetivos utilizados por la policía para realizar tales figuras policiales. En este sentido, se denunció que la detención se habría extendido, en algunos casos, más allá del plazo de 12 horas permitido y en lugares no habilitados. Además, se estaría utilizando, tanto para amedrentar a algunos manifestantes, como para eludir las exigencias de acreditar la flagrancia u orden judicial para la detención por la presunta comisión de actos delictivos.
106. Asimismo, durante la visita se recibieron reiterados relatos por parte de la sociedad civil, así como de Defensoría del Pueblo⁷⁰ y Procuraduría General en relación con las dificultades para poder acceder a la información sobre las detenciones, así como deficiencias en el registro de ingreso o egreso de las personas detenidas, lo que pudo haber incidido en el alto número de denuncias de desapariciones. Además, se informó en diversos testimonios que, ni se agotaron las posibilidades de entregar a las personas detenidas a sus familias, ni existiría información transparente sobre los lugares donde serían trasladadas las personas detenidas.
107. La CIDH también recibió denuncias sobre situaciones de violencia e, inclusive, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que podrían configurar tortura, y que habrían sido realizadas bajo la figura del traslado por protección. En particular, las personas entrevistadas informaron a la CIDH que, en todo momento, fueron víctimas de golpes y maltratos durante los trasladados. En algunos casos, habrían recibido amenazas de ser desaparecidas por encontrarse participando en las protestas.
108. Los testimonios recabados son consistentes al señalar que los traslados por protección están siendo aplicados en varios casos con fines de carácter punitivo, o como un medio para disuadir la protesta. Esto, en el análisis de la Comisión, es especialmente grave debido a que dicha figura, como fue concebida, carece de control judicial, traducándose en una restricción a la libertad que depende de la valoración del propio policía que la realiza.

⁶⁹ Procuraduría General de la Nación - Defensoría del Pueblo, Guía de acompañamiento a las movilizaciones ciudadanas: Alcance de intervención del Ministerio Público, octubre de 2020.

⁷⁰ Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial Visita CIDH, Colombia Protesta Social abril-junio 2021, Archivo de la Comisión. p. 49.

109. En consecuencia, la CIDH insta al Estado a evitar privaciones de la libertad mediante el uso arbitrario del traslado por protección. En el caso *Fernández Prieto y Tumbeiro Vs. Argentina*, la Corte Interamericana estableció que cuando exista una condición habilitante que permita una detención sin orden judicial o en flagrancia, además de que cumpla con los requisitos de finalidad legítima, idoneidad y proporcionalidad, “debe contemplar la existencia de elementos objetivos, de forma que no sea la mera intuición policiaca ni criterios subjetivos, que no pueden ser verificados, los que motiven una detención”. Según lo sostenido por la Corte Interamericana en dicho caso, “este tipo de regulaciones deben, además, ser acorde al principio de igualdad y no discriminación, de forma tal que evite la hostilidad en contra de grupos sociales [...]”⁷¹.

3.6 Denuncias de desaparición

110. La CIDH recibió denuncias sobre personas reportadas como desaparecidas en el marco de la protesta. Según información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, al 15 de junio se mantenía activo el Mecanismo de Búsqueda Urgente por 84 casos de personas reportadas como desaparecidas⁷².
111. De otra parte, la Comisión recibió con extrema preocupación informes de que algunas de las personas reportadas como desaparecidas han sido encontradas sin vida. Según lo informado por la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada (MDTDF), estos casos serían los de Brahian Gabriel Rojas López, quien fue encontrado sin vida el 9 de mayo, en Risaralda; el líder Cristian Torres, hallado el 16 de mayo sin vida en Nariño; Shirley Osnas Orozco y José David Díaz Hormiga ubicado sin vida, presuntamente el 8 de junio en Caloto, Cauca y; Maicol Stiven Sanchez, quien fue encontrado el 2 de junio incinerado en un local comercial luego de que se había denunciado su detención por el ESMAD⁷³.
112. La Comisión celebra la existencia del Mecanismo de Búsqueda Urgente, creado por la Ley 971 del 15 de julio 2005⁷⁴, el cual puede ser activado por cualquier persona ante un juez o fiscal y cuyo objetivo central es que las autoridades judiciales puedan ordenar en forma inmediata todas las diligencias necesarias tendientes a la localización de las personas desaparecidas. Sin embargo, la CIDH observa con suma preocupación los datos relativos a personas desaparecidas generados por diversas instituciones del Estado, así como la demora en la apertura de las investigaciones de los casos reportados.

⁷¹ Corte IDH. *Caso Fernández Prieto y Tumbeiro Vs. Argentina*. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 1 de septiembre de 2020. Serie C No. 411, párr. 90.

⁷² Fiscalía General de la Nación, Nota de Prensa “*Fiscalía ha ubicado a 335 personas y mantiene activo el Mecanismo de Búsqueda Urgente en 84 casos más*”, junio de 2021.

⁷³ Mesa de Trabajo de Desaparición Forzada (MDTDF), Informe, junio de 2021, archivo de la Comisión.

⁷⁴ Congreso de Colombia, *Reglamentación del Mecanismo de Búsqueda Urgente*, Ley 971 de 14 de julio de 2005.

113. Al respecto, la sociedad civil informó que las diferencias en la cantidad de personas reportadas como desaparecidas podría explicarse por el hecho de que las instituciones del Estado catalogan estas situaciones como personas “no localizadas”, postergando así el inicio de investigaciones de oficio.
114. En ese sentido, la Comisión Interamericana reitera que, siempre que haya motivos para sospechar de la desaparición de una persona, debe iniciarse la investigación ex officio, sin dilación, de una manera seria, imparcial y efectiva y orientada a la determinación de la verdad. La Comisión también ha reforzado que los Estados deben efectuar una búsqueda rigurosa por la vía judicial y administrativa pertinente, la cual deberá realizarse de manera sistemática mediante la conformación de unidades o comisiones especializadas y contar con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos a la localización e identificación de las víctimas desaparecidas. Dicho procedimiento debe contar con estrategias de búsquedas claras y concretas además de la articulación de mecanismos de coordinación entre los diferentes órganos e instituciones estatales. Una obligación fundamental de los Estados en esta materia es que se debe garantizar la participación de los familiares durante el todo el proceso de búsqueda.

3.7 Asistencia Militar

115. Según informado por el Estado, frente a la situación presentada en el marco del paro nacional, durante los meses de abril y mayo de 2021, se acudió a la Asistencia Militar, como lo establece el Artículo 170 del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Para tales efectos, en el contexto de las protestas, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 575 de 2021, mediante el cual ordenó a varios gobernadores y alcaldes coordinar la “asistencia militar” para “afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de la seguridad y la convivencia en las vías de sus jurisdicciones”⁷⁵.
116. El Gobierno Nacional explicó a la CIDH que el decreto habilitaría que las fuerzas armadas pudieran participar con la finalidad de proteger la infraestructura estratégica de actos violentos al margen de la ley. Asimismo, la Comisión conoció la Sentencia C-281/17 de la Corte Constitucional del 2017 donde se afirmó que sólo se podía disponer de las fuerzas armadas para garantizar las movilizaciones sociales, pero no para su control ni su contención⁷⁶.
117. Sin embargo, la Comisión observa que este Decreto procura una “coordinación” con las fuerzas armadas con el objeto de “levantar los bloqueos internos”, así como “evitar la instalación de nuevos” en determinadas jurisdicciones. La Comisión considera que la prohibición absoluta de todo bloqueo, en los términos del decreto, puede tener el efecto de desvirtuar la participación excepcional de las fuerzas militares, evadiendo el análisis

⁷⁵ Ministerio del Interior Colombia, Decreto 575, 28 de mayo de 2021.

⁷⁶ Corte Constitucional, Sentencia C-281/17, 3 de mayo de 2017.

de las circunstancias particulares de cada bloqueo y sin que se agoten las medidas menos lesivas como el diálogo. La CIDH considera que esto podría constituir una restricción desproporcionada a la libertad de expresión, manifestación y reunión.

118. Del mismo modo, la CIDH nota que el decreto no establece explícitamente el límite operativo que tendrá la participación de las fuerzas militares, ni la temporalidad de tal medida, de forma que garantice su excepcionalidad. Por el contrario, al indicar que, “en coordinación con la fuerza pública”, los gobernadores deben adoptar todas las medidas necesarias “para levantar los bloqueos internos”, dicha disposición, por su amplia redacción, sugiere la priorización del uso de las fuerzas armadas con tal finalidad, sin que la intervención esté justificada a la luz de los parámetros que exige el derecho internacional.
119. La CIDH recuerda que, según lo indicado por la Corte Interamericana en el caso *Mujeres Víctima de Tortura Sexual en Atenco vs. México*, “la seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma de uso de la fuerza que apunte a tratar a la población civil como el enemigo, sino que debe consistir en la protección y control de los civiles”⁷⁷. Además, conforme a los estándares interamericanos reflejados por la Corte Interamericana en el caso *Alvarado Espinoza vs. México*, el Estado debe limitar al máximo la participación de fuerzas militares en tareas de seguridad interna⁷⁸. Asimismo, en todo caso, de conformidad con la jurisprudencia interamericana, corresponde demostrar que tal participación es extraordinaria, excepcional, temporal, restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles; así como regulada y fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.
120. Finalmente, la CIDH nota que el Decreto establece que serán sancionadas las autoridades locales que no lo cumplan. Esto tiene un efecto disuasorio para que Gobernadores y Alcaldes prioricen la adopción de otras medidas, como el diálogo, que han demostrado ser efectivas en algunas ciudades del país.
121. En virtud de los problemas expuestos, la CIDH exhorta al Estado a que reforme el referido Decreto conforme a los estándares interamericanos, de forma que asegure que la asistencia militar sea extraordinaria, excepcional, temporal, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles.

3.8 Uso de facultades disciplinarias

122. La Comisión fue informada por parte de la Procuraduría General que al 7 de junio de 2021 se estaban realizando 172 acciones disciplinarias por hechos relacionados con las

⁷⁷ Corte IDH, *Caso Mujeres Víctima de Tortura Sexual en Atenco vs. México*, Sentencia de 28 de noviembre de 2018, párr.168.

⁷⁸ Corte IDH, *Caso Alvarado Espinoza vs. México*, Sentencia de 28 de noviembre de 2018, párr. 182.

jornadas. De estas, 143 expedientes corresponden a integrantes de la fuerza pública, incluyendo 139 indagaciones preliminares y 4 investigaciones disciplinarias. Asimismo, se estarían adelantando 8 acciones disciplinarias contra otros funcionarios públicos, entre ellos, 2 funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Igualmente, la Procuraduría informó que se han abierto al menos 20 “actuaciones” respecto de autoridades de elección popular, entre ellos, 3 congresistas, 1 gobernador, 10 alcaldes y 6 concejales⁷⁹.

123. La Comisión no cuenta con información sobre los fundamentos específicos de tales actuaciones o su posible relación con eventuales sanciones que deriven del incumplimiento del Decreto 575 de 2021. No obstante, algunos funcionarios de elección popular informaron a la CIDH sobre el temor de enfrentar procesos disciplinarios que puedan derivar en sanciones como la separación de sus cargos o inhabilitación para ejercer la función pública. Del mismo modo, se recibió información por parte de alcaldes, gobernadores e inclusive congresistas que manifestaron que su capacidad para priorizar el diálogo se ha visto menoscabada ante la posibilidad de enfrentar procesos disciplinarios.
124. La Comisión resalta que el Estado debe investigar y, de ser el caso, sancionar cualquier irregularidad de parte de funcionarios públicos. Sin perjuicio de lo anterior, la CIDH resalta que, de acuerdo con la jurisprudencia interamericana en los casos *López Mendoza vs. Venezuela*⁸⁰ y *Petro Urrego vs. Colombia*⁸¹, las sanciones de inhabilitación y destitución de autoridades democráticamente electas sólo pueden ser impuestas mediante una “condena, por juez competente, en proceso penal”; lo anterior, garantizando un efectivo derecho de defensa y todas las garantías propias del debido proceso.
125. En este sentido, la Corte Interamericana estableció en el caso *Petro Urrego vs. Colombia* que “el artículo 23.2 de la Convención Americana es claro en el sentido de que dicho instrumento no permite que órgano administrativo alguno pueda aplicar una sanción que implique una restricción (por ejemplo, imponer una pena de inhabilitación o destitución) a una persona por su conducta social (en el ejercicio de la función pública o fuera de ella) para el ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegido: sólo puede serlo por acto jurisdiccional (sentencia) del juez competente en el correspondiente proceso penal”⁸².
126. En este sentido, urge al Estado a que, en cumplimiento de lo decidido por la Corte Interamericana, ajuste su legislación interna para asegurar que la Procuraduría General de la Nación no pueda procesar ni sancionar con destitución o inhabilitación a autoridades de elección popular.

⁷⁹ Procuraduría General de la Nación, República de Colombia, Informe, 7 de junio de 2021. Archivo de la Comisión.

⁸⁰ Corte IDH, *Caso López Mendoza vs. Venezuela*. Sentencia 1 de septiembre de 2011, p. 41, párr. 202.

⁸¹ Corte IDH, *Caso Petro Urrego vs. Colombia*. Sentencia 8 de julio de 2020, p.32

⁸² Corte IDH, *Caso Petro Urrego vs. Colombia*. Sentencia 8 de julio de 2020, p.32.

3.9 Uso de la jurisdicción penal militar

127. La CIDH observó con preocupación que casos relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por policías, particularmente del ESMAD, están siendo conocidos por la justicia penal militar, al estimar que se encuentran comprendidos dentro de la noción de “actos del servicio”. Al respecto, la Fiscalía reportó que los casos relacionados con la muerte de Santiago Andrés Murillo y Brayan Fernando Niño Araque están siendo conocidos en la justicia penal militar, por lo que interpuso conflictos de competencia. Asimismo, en carta de 31 de mayo de 2021, la Fiscalía General de la Nación solicitó al Ministerio de Defensa “la remisión inmediata de las diligencias y elementos de pruebas relativos a los casos que (...) [hayan sido cometidos con ocasión de posibles excesos por miembros de la fuerza pública en el marco de la jornada del paro nacional y] se relacionen con la presunta comisión de homicidios, lesiones personales dolosas y delitos sexuales”⁸³.
128. Por otra parte, el Estado indicó que, desde el 28 de abril hasta el 4 de junio del presente año, la jurisdicción penal militar ha iniciado diferentes investigaciones en contra de integrantes de la Policía Nacional, por delitos conexos a la intervención policial en el restablecimiento del orden público a nivel nacional, refiriendo 12 procesos por presunto homicidio y 19 por lesiones personales. La Fiscalía reportó que ha interpuesto conflictos de competencia en los casos relacionados con la muerte de Santiago Andrés Murillo y Brayan Fernando Niño Araque⁸⁴.
129. En este contexto, la CIDH saluda que, el pasado 17 de junio, la Corte Constitucional anunció su decisión de dejar sin efecto el auto del Consejo Superior de la Judicatura que otorgó a la justicia penal militar la competencia para investigar y juzgar a integrantes del ESMAD por la muerte de Dilan Cruz⁸⁵, quien murió en las manifestaciones de 2019 por el presunto accionar de un agente de la fuerza pública. La Comisión dará seguimiento a los resultados de la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables en la justicia penal ordinaria.
130. Al respecto, los órganos del Sistema Interamericano han señalado de manera consistente que la aplicación del fuero militar es incompatible con la Convención Americana, pues supone que las propias fuerzas de seguridad juzguen a sus pares; especialmente por cuenta del hecho de que sean las propias fuerzas armadas las encargadas de juzgar a sus mismos pares. De esta forma, el Sistema Interamericano ha sido enfático en indicar que,

⁸³ Fiscalía General de la Nación, Carta: Ref. Remisión de Diligencias de Competencias de la Jurisdicción Ordinaria, 31 de mayo de 2021.

⁸⁴ Fiscalía General de la Nación, Informe sobre las actualizaciones investigativas y de interlocución que ha llevado a cabo la Fiscalía General de la Nación, con ocasión a los hechos ocurridos en el marco del Paro Nacional. 7 de junio de 2021, p.21.

⁸⁵ Corte Constitucional de Colombia, Comunicado de Prensa 22 de la Sentencia SU-190-21, junio 17 de 2021.

tratándose de fueros especiales, como la jurisdicción militar, sólo deben juzgar a personal activo por la comisión de delitos o faltas que por su naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar o policial⁸⁶.

131. Tal y como lo ha hecho en múltiples ocasiones, tanto a través de sus labores de monitoreo, como del sistema de peticiones y casos, la CIDH insta al Estado colombiano a que todos los casos y especialmente los relacionados con violaciones a derechos humanos por parte de la fuerza pública sean conocidos por la justicia ordinaria y no por la penal militar.

IV. Afectaciones a derechos fundamentales de terceros y bienes públicos en el marco las protestas

132. La Comisión recibió información sobre vulneraciones a derechos fundamentales de terceras personas protegidos por la normativa legal interna, los que presuntamente habrían tenido lugar en el marco de las manifestaciones. Asimismo, tomó nota sobre afectaciones a bienes públicos que se presentaron en dicho contexto.
133. Adicionalmente, se registraron denuncias tanto por el Estado, como por las organizaciones de la sociedad civil, sobre la infiltración de las protestas por parte de grupos o sujetos que han efectuado actos violentos y/o vandálicos durante el transcurso de las manifestaciones. Asimismo, se tuvo noticias que, en algunas situaciones específicas, el carácter de las protestas cambiaba con el transcurrir de las horas y, en ocasiones, se tornaban violentas.
134. Según datos oficiales, desde el inicio de las protestas hasta el 10 de junio, se han registrado daños a: 1.660 bienes privados, entre ellos 457 oficinas bancarias y 438 cajeros automáticos; 706 bienes de la policía, donde se registran 556 vehículos institucionales y 116 Comandos de Atención Inmediata. Además, se observan afectaciones en más de 2.158 bienes públicos, dentro de los cuales se encuentran 1.251 vehículos y 240 estaciones del transporte público. Respecto de este último punto, la Comisión recibió información sobre graves afectaciones al sistema de transporte público de Bogotá.
135. Resultan especialmente preocupantes los ataques e incendios provocados al Palacio de Justicia de Tuluá, al Instituto de Medicina Legal en Popayán y a la Gobernación de Nariño; así como las afectaciones a las instalaciones de la Fiscalía de Popayán, Cauca, y a la Alcaldía Municipal de La Plata, Huila. La Comisión también tuvo noticia de ataques a las instalaciones de diferentes personerías municipales. La Comisión visitó una URI en la ciudad de Popayán y constató cuantiosas pérdidas económicas, destrucción de material probatorio y expedientes judiciales y robo de armas de fuego.
136. Asimismo, la CIDH mantuvo reuniones con gremios empresariales y tomó testimonios a personas que denunciaron afectaciones económicas por actividades relacionadas con las

⁸⁶ Corte IDH. Caso Usón Ramírez vs. Venezuela, sentencia del 20 de noviembre de 2009, párrs. 108

manifestaciones. En una reunión, la CIDH recibió información sobre actos vandálicos con una bomba Molotov contra un bus que transportaba trabajadores, registrándose personas con quemaduras de tercer grado. Asimismo, tuvo noticia sobre supuestos cobros de tarifas ilegales para permitir el paso o circulación en determinados puntos del país.

137. De acuerdo con información suministrada por el Estado, las actividades de protesta habrían afectado el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles en 26 departamentos y 311 municipios del país, especialmente en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Cundinamarca y Bogotá. Por otra parte, el 94% de las empresas del país han denunciado afectaciones a sus ventas por actividades relacionadas con la protesta, siendo los sectores más damnificados la construcción, el comercio, el transporte, alojamiento y agricultura. Por ejemplo, grupos empresariales del Valle del Cauca indicaron que tras 43 días de corte de ruta en la vía Panamericana se habría generado la pérdida de alrededor de 97 mil empleos.
138. La Comisión expresa especial consternación por el fallecimiento de dos bebés, presuntamente sucedida debido a la falta de atención médica en el marco de las disrupciones ocasionadas por las protestas.
139. La CIDH condena el fallecimiento de 3 integrantes de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones. Asimismo, deplora el presunto ecuestro, la desaparición y asesinato del agente Carlos Andrés Rincón Martínez, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado con señales de tortura en la ciudad de Cali. Adicionalmente, la Comisión tomó nota el incendio de un CAI de la Aurora con 10 policías en su interior; el ataque a 6 policías con una bomba incendiaria en Pasto; así como los 1.343 policías lesionados, 4 de los cuales aún continuaban internados. De igual manera, el Estado indicó que, “en el marco del paro, 14 policías prestando su servicio para garantizar la manifestación pública y pacífica han sufrido lesiones oculares, 12 con objetos contundentes, 1 con arma de fuego y 1 con agente químico”⁸⁷.
140. La CIDH condena enérgicamente todo acto de violencia, especialmente, aquellos que afectan la vida e integridad personal y el transcurso de las manifestaciones. En este sentido, hace un llamado al Estado para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de delitos cometidos en el marco de las protestas.

V. Consideraciones relativas a los cortes de ruta

141. La Comisión advierte que si bien hay un reconocimiento común de las causas legítimas que movilizan la protesta en Colombia, existe un debate nacional complejo en torno a los cortes de ruta, conocidos como bloqueos. La CIDH considera que en el actual contexto colombiano los estándares interamericanos sobre el derecho a la protesta y libertad de

⁸⁷ Ministerio de Defensa, Garantías a la manifestación pacífica y control de acciones violentas, 28 de abril a 4 de junio de 2021, pág. 52-53

expresión pueden contribuir a una mejor comprensión sobre el alcance de estos derechos y sus eventuales restricciones.

142. De conformidad a lo indicado por la Comisión en su informe sobre Protesta y Derechos Humanos, "la protesta social puede manifestarse de muy diversas formas y en las Américas se conocen algunas como cortes de ruta, cacerolazos, vigili­as. Las condiciones en las que se presentan muchas de estas manifestaciones y reivindicaciones son complejas y requieren por parte de las autoridades respuestas adecuadas en materia de respeto y garantía de los derechos humanos"⁸⁸. En su informe, también indicó que las personas manifestantes tienen la libertad de elegir la modalidad, forma, lugar y mensaje para llevar a cabo la protesta pacífica⁸⁹, esto implica que el Estado no debe imponer restricciones previas o prohibiciones generales que terminen desnaturalizando la protesta o privándola de su contenido real⁹⁰.
143. Durante la visita, la CIDH pudo observar que no todos los cortes de ruta ocurren de la misma forma o tienen características equivalentes. Según lo informado por la Policía Nacional, en las jornadas de manifestaciones se presentaron al menos 1.937 puntos de bloqueos de vía. De estos, 1.776 tuvieron una duración de 1 a 3 días, 46 duraron de 4 a 6 días, 115 se extendieron por más de 7 días y 9 se mantuvieron por 30 o más días⁹¹, particularmente en el departamento del Valle del Cauca.
144. Por otra parte, tanto el Estado como personas que dieron sus testimonios informaron durante la visita, varios de estos bloqueos habrían causado vulneraciones al derecho a la vida, a la salud, a la libertad de locomoción y al trabajo. Adicionalmente, dichos bloqueos habrían afectado a diferentes sectores económicos del país, incluyendo la producción y distribución de alimentos e insumos básicos, el traslado de pacientes e insumos médicos y el abastecimiento de combustible. De manera particular, el Estado informó que algunos bloqueos obstaculizaron la circulación de ambulancias y el tránsito de bienes vitales en vías estratégicas. Tal es el caso de la vía que conduce al puerto de Buenaventura, donde llega el 35 por ciento de la carga nacional y desde donde se trasladan insumos químicos para potabilizar el agua en el país.
145. Adicionalmente, el Estado indicó en su respuesta que, en casos específicos de cortes de vías se dinamizaron acciones delictivas contra la infraestructura de un sistema de transporte. Asimismo, señaló lo ocurrido el 25 de junio de 2021, cuando se presentó el fallecimiento de una persona que se movilizaba en su motocicleta en un bloqueo tras colicionar con un obstáculo que había sido instalado en la vía.

⁸⁸ CIDH, Protesta y derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 22/19, septiembre de 2019, p. 1 y párr 89.

⁸⁹ CIDH, Protesta y derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 22/19, septiembre de 2019, párr. 154.

⁹⁰ CIDH, Protesta y Derechos Humanos, septiembre de 2019, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 22/19, párr. 37.

⁹¹ Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial visita CIDH Protesta Social Abril-Julio de 2021, págs. 23-25.

146. Por otra parte, la Comisión también observó que en algunos bloqueos se registran múltiples expresiones pacíficas y culturales protegidas bajo amparo del derecho a la protesta. La CIDH se encontró con grupos de jóvenes que denunciaron de forma reiterada y consistente acciones de represión por parte de la fuerza pública, así como una situación social de riesgo alimentario y desafiliación familiar e institucional. En este sentido, la Comisión hace un llamado a desarrollar un diálogo que incluya especialmente a personas jóvenes a los efectos de buscar alternativas y oportunidades, así como a tender puentes entre el Estado y todos los sectores sociales.
147. El Estado informó que, en la mayoría de los casos, fueron atendidos mediante procesos de diálogo local. La Comisión subraya el acuerdo alcanzado por la Mesa de Diálogo entre la Unión de Resistencia de Cali (URC) - Primera Línea Somos Todos y Todas y la alcaldía de esa ciudad. Este acuerdo derivó en la creación del Plan de Inclusión Social de Emergencia que será implementado con enfoque diferencial de género, étnico-racial, etario, de orientación sexual y territorial. Además, dicho acuerdo busca intervenir en materias de seguridad alimentaria; atención a la salud, incluyendo un componente psicosocial y de farmacodependencia; programas de empleabilidad y el fortalecimiento de procesos sociales en el marco del Decreto 0304 del 31 de mayo 2021⁹².
148. El Estado informó a la CIDH sobre su estrategia de diálogo social que comprende: i) encuentros de Escucha donde destacan 18 sesiones con autoridades y voces de referencia; ii) diálogos Regionales que comprenden 17 procesos y 70 jornadas de trabajo; iii) interlocución con el Comité Nacional del Paro; iv) la Mesa Nacional de evaluación de las garantías para las manifestaciones públicas; y vi) la estrategia social y de escucha a la juventud, como un espacio de diálogo y de confianza.⁹³ La CIDH también recibió información sobre la creación de los Gestores de Convivencia y Diálogo Social y su implementación en ciudades como Bogotá.
149. En adición a lo anterior, en su respuesta, el Estado resaltó los múltiples encuentros que el Gobierno Nacional ha concertado con el Comité Nacional del Paro, con el fin de lograr acuerdos para la atención y respuesta de cada de sus solicitudes; como el “Pacto Colombia con las juventudes”, construido desde los territorios. En ese marco, informó que actualmente se mantienen 202 mesas de escucha activa, con 5.273 participantes.
150. Por otra parte, la Comisión fue informada por las organizaciones de la sociedad civil sobre la presunta falta de voluntad de las autoridades a nivel nacional para concertar espacios de diálogo y negociación amplios e inclusivos. Asimismo, las organizaciones también han denunciado incumplimientos sobre los acuerdos alcanzados en manifestaciones pasadas, como, por ejemplo, los acuerdos firmados en el marco del Paro Cívico en Buenaventura⁹⁴. Estas situaciones habrían profundizado la desconfianza en las instituciones, así como

⁹² Alcaldía Santiago de Cali, Decreto 0304, 31 de mayo de 2021.

⁹³ Reporte Escrito del Estado a la CIDH. Junio 8 de 2021. Pág 29

⁹⁴ Alcaldía de Buenaventura, Gobierno Nacional y Comité Ejecutivo del Paro Cívico firmaron acuerdo para levantar el paro, 6 de junio de 2017.

habrían incidido en la postura de varios colectivos de permanecer en los cortes de ruta como manera de protesta en tanto no se concreten las negociaciones.

151. La Comisión advierte que la ausencia de una ley estatutaria que reglamente acorde a estándares interamericanos el derecho a la protesta da un margen de discrecionalidad a las autoridades con relación al ejercicio de dicho derecho y sus restricciones. Ante la falta de dicha ley, la CIDH considera relevante que la respuesta del Estado se ajuste a los estándares interamericanos aplicables al derecho a la protesta; y resalta la importancia de la participación social amplia, plural y extensa en la construcción de esta normativa.
152. En el actual contexto colombiano, se advierte que la calificación oficial genérica de los bloqueos como conductas al margen de la ley puede perder de vista las especificidades de cada corte de vía en particular, así como afectar la posibilidad de alcanzar soluciones negociadas por la vía del diálogo y la mediación. Cada uno de los cortes de ruta tiene actores distintos, peticiones diferentes y potenciales efectos sobre derechos fundamentales de terceros que no forman parte de la protesta. En consecuencia, la Comisión recuerda que se deben evaluar las circunstancias caso por caso, procurando la coexistencia entre el ejercicio del derecho humano a la protesta y los derechos fundamentales de terceros.
153. La Comisión insta a que se evite el uso de enfoques generalizantes y prohibitivos a las diversas formas de manifestarse en el ejercicio del derecho a la protesta, en tanto que algunos de ellos son modalidades de la protesta que canalizan la escucha social de algunas voces que de otro modo difícilmente ingresarían a la agenda o serían parte de la deliberación pública⁹⁵.
154. La CIDH pudo observar que las consecuencias de ciertos cortes de ruta en Colombia han derivado en un profundo malestar y agotamiento en algunos representantes del Estado, cuerpos policiales y parte de la sociedad. La Comisión reconoce que este malestar se origina en serias afectaciones particulares y colectivas; y condena que algunos bloqueos hayan comprometido gravemente derechos como la vida, la provisión de alimentos, la potabilización de agua, la salud, entre otros.
155. La CIDH encuentra preocupante que las inadmisibles afectaciones provocadas por algunos de los cortes de ruta conduzcan a que el Estado desatienda su deber de tolerar cierto grado de perturbación con respecto a esta modalidad de protesta. Esto puede tener varias consecuencias. Por un lado, puede contribuir al escalamiento de la tensión social. Por otro lado, puede obstaculizar la gestión del conflicto social desde la perspectiva del diálogo.
156. La CIDH recuerda que es preciso tolerar que las manifestaciones generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades

⁹⁵ CIDH, Protesta y Derechos Humanos, septiembre de 2019, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 22/19, párr. 10-13.

comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica⁹⁶. Para la Comisión, el “grado de tolerancia” adecuado no puede definirse *en abstracto* y por lo tanto corresponde al Estado examinar las circunstancias particulares de cada caso con respecto al alcance de la perturbación admisible a la vida cotidiana⁹⁷.

157. Cuando la eventual perturbación a la vida cotidiana en el seno de las protestas se extiende en el tiempo y escala a punto de comprometer gravemente la garantía de otros derechos como por ejemplo el i) derecho a la vida, ii) aprovisionamiento de alimentos; y/o iii) el derecho a la salud, se acentúa el deber del Estado de facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles y la coexistencia de todos los derechos en tensión, teniendo el uso de la fuerza como último recurso.
158. La Comisión considera que la aproximación estatal a los cortes de ruta debe tener un enfoque interseccional e interdependiente de los derechos humanos con el fin de prevenir situaciones que afecten a la misma protesta, así como a los derechos de terceros que no participan en ella. La prevención de la violencia, la transparencia y rendición de cuentas de los agentes del Estado que atiende las protestas es fundamental para la garantía de los derechos en tensión.
159. A efectos, tanto de proteger la misma protesta, como de prevenir que algunos factores de violencia precedentes a la protesta puedan incrementar su potencial de afectación a los derechos humanos, la CIDH hace un llamado especial a las autoridades a distinguir entre manifestantes y quienes realizan actividades delictivas. La Comisión ha sostenido que el Estado no es el único generador de interferencias al ejercicio de la protesta y en este sentido las obligaciones del Estado se extienden a la protección de manifestantes frente a violaciones y abusos por parte de terceros⁹⁸.
160. De la misma forma en que la respuesta a los cortes de vía no puede vaciar de contenido el derecho de las personas manifestantes, dicha modalidad de protesta no puede conllevar a la anulación o suspensión de facto de los derechos de terceras personas que no participan en las manifestaciones. Es deber del Estado garantizar el derecho a la protesta, así como brindar condiciones para el ejercicio de los derechos de terceros que no participan en las manifestaciones. Al mismo tiempo, la Comisión destaca la importancia de que las personas manifestantes que acudan al corte de ruta no pongan en riesgo la vida de las demás personas y permitan la circulación de insumos, servicios y provisiones esenciales.

⁹⁶ CIDH, Protesta y Derechos Humanos, septiembre de 2019, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 22/19, párr. 154; CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 31 de diciembre de 2011, OEA/Ser.L/V/II. Doc 57, párr.198.

⁹⁷ Tribunal Europeo de Derechos Humanos - Caso Primov y otros, 2014, párr. 145.

⁹⁸ CIDH, Protesta y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 22/19, septiembre 2019, párr. 53; Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, 14 de abril de 2014, A/HRC/26/29, párr. 9.

161. La CIDH ha establecido que la protesta no es un derecho absoluto y excepcionalmente admite restricciones⁹⁹. Sin embargo, la protección de los derechos y libertades de otros no deben ser empleados como una mera excusa para restringir las protestas pacíficas¹⁰⁰. Toda restricción al derecho a la protesta debe estar prevista en la ley, perseguir un objetivo legítimo y ser necesaria en una sociedad democrática bajo los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad¹⁰¹. La aplicación de este test debe guiar la acción del Estado, asegurando que los cuerpos policiales, las instituciones de derechos humanos y los jueces jueguen un papel fundamental con el fin de armonizar el derecho a la protesta con otros derechos en tensión.
162. Los estándares interamericanos son enfáticos al exigir que las restricciones estén previstas en la ley en forma previa y de manera expresa, taxativa, precisa y clara, tanto en sentido formal como material. La Corte Interamericana ha señalado que sólo la ley formal “tiene aptitud para restringir el goce o ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención”¹⁰².
163. La Comisión observa con preocupación el anuncio del Ministerio del Interior mediante el cual “se establece que no constituye manifestación pacífica aquella que promueva el empleo de medios para obstaculizar temporal o permanentemente vías o infraestructura”¹⁰³. Al respecto, insta al Estado a que a través de la deliberación parlamentaria y por medio de una ley se definan las restricciones excepcionales a los cortes de ruta. A la luz de los estándares interamericanos, no corresponde al Poder Ejecutivo definir los límites al derecho de la protesta, máxime cuando éste es el destinatario de las reivindicaciones sociales.
164. En relación con el requisito de fin legítimo, las restricciones a los cortes de vía deben estar orientadas al logro de los objetivos autorizados por la Convención Americana¹⁰⁴. Durante la visita, la Comisión fue informada por el Estado sobre las implicaciones negativas de algunos cortes de vías para la garantía de los derechos y libertades de los demás, como la salud pública, la seguridad y el orden público.
165. Ahora bien, la Comisión recuerda que, según ha señalado la Corte Interamericana, no basta con invocar genéricamente un objetivo legítimo pues los Estados no son libres de

⁹⁹ CIDH, Protesta y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 22/19, septiembre 2019, párr. 31.

¹⁰⁰ CIDH, Protesta y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 22/19, septiembre 2019, párr. 32; Consejo de Derechos Humanos, Medidas efectivas y mejores prácticas para asegurar la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las protestas pacíficas, Informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, A/HRC/22/28, 21 de enero de 2013, párr. 12.

¹⁰¹ CIDH, Protesta y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 22/19, septiembre 2019, párr. 33-45.

¹⁰² Corte IDH, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986, La expresión “leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, párr. 35.

¹⁰³ Cuenta de Twitter de Daniel Palacios (@DanielPalam). 18 de junio de 2021.

¹⁰⁴ CIDH, Protesta y Derechos Humanos, septiembre 2019, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 22/19, párr. 36.

interpretar de cualquier forma su contenido¹⁰⁵. A propósito de “la protección de los derechos de los demás” como objetivo que justifica limitar la libertad de expresión, la jurisprudencia interamericana ha sido clara en precisar que en los casos en que se impongan límites es necesario que estos derechos se encuentren claramente lesionados o amenazados y corresponde demostrarlo a la autoridad que impone la limitación¹⁰⁶. Por su parte, cualquier afectación al “orden público” invocada como justificación para limitar el derecho a la protesta debe obedecer a causas reales y objetivamente verificables, que planteen una amenaza cierta y creíble de una perturbación potencialmente grave de las condiciones básicas para el funcionamiento de las instituciones democráticas¹⁰⁷.

166. Las limitaciones a la protesta social deben ser necesarias en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que persiguen y estrictamente proporcionadas a la finalidad que buscan¹⁰⁸. Se debe establecer la necesidad social cierta e imperiosa para efectuar la limitación y constatar que el objetivo legítimo invocado no pueda alcanzarse por un medio menos restrictivo de los derechos humanos involucrados¹⁰⁹.
167. Por otra parte, en cuanto a la respuesta a los cortes de ruta, la CIDH reitera que los Estados tienen la obligación de gestionar el conflicto social desde la perspectiva del diálogo y deben respetar el limitado espacio que tienen para establecer restricciones legítimas a manifestaciones y protestas¹¹⁰.
168. Asimismo, cuando se trata de un corte de vía pacífico, la decisión de dispersar una protesta por parte del Estado como último recurso debe ser comunicada y explicada de manera clara, de modo tal que permita su comprensión y cumplimiento por parte de los manifestantes, ofreciéndoles tiempo suficiente para dispersarse sin acudir al uso de la fuerza¹¹¹. Es importante resaltar que la dispersión también puede intensificar las tensiones entre quienes protestan y las fuerzas de seguridad¹¹².

¹⁰⁵ CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 2/09, 30 de diciembre 2009, párr. 75.

¹⁰⁶ CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 2/09, 30 de diciembre 2009, párr. 77.

¹⁰⁷ CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 2/09, 30 de diciembre 2009, párr. 82.

¹⁰⁸ CIDH, Protesta y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 22/19, septiembre de 2019, párr. 38; CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 2/09, 30 de diciembre 2009, párr. 67.

¹⁰⁹ CIDH, Protesta y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 22/19, septiembre de 2019, párr. 39; CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, 2010, párrs. 85.

¹¹⁰ CIDH, Protesta y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 22/19, septiembre de 2019, p. 1.

¹¹¹ CIDH, Protesta y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 22/19, septiembre de 2019, párr. 155; Consejo de Derechos Humanos, Informe conjunto del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca de la gestión adecuada de las manifestaciones, A/HRC/31/66, 4 de febrero de 2016, párr. 63.

¹¹² CIDH, Protesta y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 22/19, septiembre de 2019, párr. 108 y 155;

169. Cuando en el marco de un corte de vía se adviertan actos de violencia que representen una amenaza inminente para la garantía de otros derechos en tensión, las autoridades deben distinguir entre las personas que actúan con violencia y quienes participan de la protesta por vías pacíficas¹¹³. En aquellos casos en los que el uso de la fuerza sea imprescindible para cumplir un fin legítimo en el contexto de una manifestación, sólo se podrá recurrir a la fuerza mínima necesaria y, una vez que haya pasado tal necesidad, por ejemplo, cuando se detiene a una persona violenta sin peligro, ésta deberá cesar¹¹⁴.
170. A juicio de la Comisión, privilegiar el diálogo también implica garantizar las condiciones para que quienes participan de las protestas a su vez puedan participar de las instancias de diálogo o mediación sin temor. Durante la visita, la Comisión recibió información sobre la apertura de indagaciones criminales contra manifestantes. Al respecto, la CIDH reitera que “los Estados deben dejar de aplicar tipos penales que convierten en actos criminales conductas comúnmente observadas en protestas, como los cortes de ruta o los actos de desorden que, en sí mismos, no afectan bienes como la vida, la seguridad o la libertad de las personas, pues en el contexto de las protestas ellas constituyen formas propias del ejercicio de los derechos de libertad de expresión, de reunión y de libre asociación”¹¹⁵.
171. Finalmente, la CIDH reitera que la protesta es un derecho protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en determinadas circunstancias puede ser restringido, no en razón a su modalidad sino a la gravedad de la afectación a otros derechos fundamentales; entre ellos, el derecho a la vida, a la protesta libre de violencia, el aprovisionamiento de alimentos y el derecho a la salud. Al Estado le corresponde constatar en cada caso la gravedad de las afectaciones y asegurarse de que las eventuales restricciones atiendan estrictamente al principio de legalidad, persigan un fin legítimo, y sean necesarias y proporcionales en una sociedad democrática.

VI. Consideraciones sobre Internet como espacio de protesta

172. Durante la visita, la Comisión recibió apreciaciones sobre Internet como un instrumento clave para desplegar el potencial del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información durante las protestas. Por ejemplo, distintas instancias estatales entregaron información a la CIDH sobre esfuerzos para transmitir información oficial de forma rápida y amplia a través de distintas plataformas e interactuar con la ciudadanía de forma

¹¹³ Consejo de Derechos Humanos, Informe conjunto del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca de la gestión adecuada de las manifestaciones, A/HRC/31/66, 4 de febrero de 2016, párr. 61; Comité de Derechos Humanos, Observación general No. 37: derecho de reunión pacífica (artículo 21), CCPR/C/GC/37, 17 de septiembre de 2020, párr. 17.

¹¹⁴ Comité de Derechos Humanos, Observación general No. 37: derecho de reunión pacífica (artículo 21), CCPR/C/GC/37, 17 de septiembre de 2020, párr. 79.

¹¹⁵ CIDH, Protesta y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 22/19, septiembre de 2019, párr. 208.

directa. Por parte de la ciudadanía, se constató el uso de Internet como medio de interacción y organización para aquellas personas que salieron a manifestarse.

173. A su vez, Internet ha permitido a las personas manifestantes comunicar incidentes y hacer denuncias abiertas, muchas veces en tiempo real, sobre posibles excesos en el uso de la fuerza, además de solicitar la protección de sus derechos. De esta forma, Internet ha constituido una herramienta fundamental para facilitar y enriquecer la deliberación pública y la denuncia de violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones. Los hechos mencionados han puesto en evidencia la necesidad de proteger el ecosistema digital y de garantizar el libre acceso a la red.
174. A pesar del potencial de Internet, y su rol para amplificar las voces en el debate público, la CIDH recibió con preocupación denuncias que deben ser investigadas sobre presuntas medidas estatales que podrían cercenar las libertades en este medio. Según la información entregada por distintos actores, dichas acciones estarían siendo emprendidas por criterios subjetivos en vez de parámetros objetivos, legítimos y transparentes, conforme a estándares internacionales de derechos humanos.
175. La Comisión observa que la conversación digital reviste de una creciente importancia para la mayoría de actores entrevistados durante la visita. A la vez que expresaron que Internet es una plataforma trascendente para la deliberación pública, manifestaron temores de que algunos discursos incentiven la violencia o sean la base para la toma de decisiones sobre Internet que resten voz a quienes quieren expresarse sobre asuntos de interés público. La CIDH advierte una generalizada percepción sobre posibles excesos y censuras de discursos en Internet que aumenta los niveles de ansiedad por asegurar que la voz propia sea la única relevante. Esta zozobra afecta el diálogo y tiene el potencial de afectar tanto a voces institucionales como de la sociedad civil independientemente de su posición frente a la protesta.
176. Al respecto, la CIDH recibió información sobre prácticas de “ciberpatrullaje” orientadas a un monitoreo proactivo de contenidos presuntamente falsos sobre el desarrollo de las protestas, desprestigio de la imagen de las fuerzas públicas, así como la instigación al odio público. Estas medidas tendrían como fin determinar que información es falsa o verdadera, y de esta manera, combatir supuestas actividades de “terrorismo digital” que pudieran tener el potencial de exacerbar la violencia. Durante la visita, el Estado reportó que se adelantaron 21.675 horas de ciberpatrullaje y que se identificaron al menos 154 noticias falsas y más de 2.300 publicaciones que contienen amenazas a la vida o la integridad física¹¹⁶.
177. En este sentido, la Comisión observa con preocupación que las fuerzas de seguridad se estarían abrogando facultades de chequeo de información, clasificando estos contenidos

¹¹⁶ Reporte escrito del Estado a la CIDH. 8 de junio de 2021. Pág 64.

como verdaderos o falsos. Esto resulta especialmente preocupante cuando la información que categoriza corresponde, en su mayoría, sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.

178. En este contexto, la CIDH hace un llamado para que dejen de calificar los contenidos y reaccionen aportando más información sobre el tema, evitando así incurrir en prácticas de censura. Tal como la Relatoría señaló en su Guía para la desinformación en contextos electorales, resulta claro que la propagación deliberada de información falsa empobrece al debate público y hace más difícil a las y los ciudadanos ejercer su derecho a recibir información de diversas fuentes¹¹⁷.
179. La Comisión también recibió denuncias por parte de las autoridades respecto de personas que publican información que contienen, que en su criterio, mensajes de “odio” o de “incitación a la violencia”. La CIDH insta a las autoridades para que, en estos casos, presenten denuncias respectivas para que se adelanten las investigaciones.
180. Adicionalmente, preocupa a la Comisión Interamericana las reiteradas denuncias sobre el perfilamiento de personas usuarias de redes sociales, participantes o no de las protestas. La caracterización genérica a través de términos como “terrorismo”, “vandalismo” o “criminales” estigmatiza a las personas manifestantes, activa un ambiente hostil al ejercicio de la protesta y a la libertad de expresión en Internet. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha señalado que las sanciones penales por la difusión de información presuntamente falsa podrían retrotraer a la región a una lógica de criminalizar expresiones sobre asuntos de interés público y establecer una herramienta con un fuerte efecto inhibitorio de la difusión de ideas, críticas e información¹¹⁸.
181. Asimismo, organizaciones de la sociedad civil reportaron preocupación sobre alegadas interrupciones del servicio de Internet en el contexto de las protestas. Según señalaron, esto habría generado un escenario de obstaculización de las denuncias sobre el actuar de la fuerza pública y minimizan las oportunidades de escrutinio público. Los reportes recibidos enseñan tanto el posible uso de tecnología dirigida a inhibir o restringir la señal de Internet, como el bloqueo de las direcciones de dos páginas (URL) en Internet que contenían información sobre las protestas.
182. Sobre el tema, la Relatoría Especial ha sostenido que el bloqueo obligatorio de sitios web enteros, direcciones IP, puertos, protocolos de red o ciertos tipos de usos (como las redes sociales) constituye una medida extrema que solo podría estar justificada conforme a

¹¹⁷ OEA, Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales, OEA/Ser.D/XV.22 OEA/Ser.G CP/CAJP/INF.652/19, p. 18.

¹¹⁸ CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 18 de abril de 2020. [Comunicado de prensa R78/20. CIDH y su RELE expresan preocupación por las restricciones a la libertad de expresión y el acceso a la información en la respuesta de Estados a la pandemia del COVID-19.](#)

estándares internacionales, por ejemplo, cuando sea necesaria para proteger a menores de explotación sexual¹¹⁹.

183. La CIDH recomienda que estas restricciones de acceso a las redes, servicios y contenidos de Internet, tanto por medio del uso de tecnología con capacidad de alterar su acceso habitual, como por decisiones de restricción de acceso a contenidos, deben de estar previstas por una ley; perseguir un objetivo legítimo, necesario y estrictamente proporcional al fin que persiguen, así como estar sujetas al control judicial.
184. La CIDH llama al Estado a brindar, de manera proactiva y periódica, información sobre el funcionamiento de las redes de Internet con el fin de que las denuncias sobre eventuales interrupciones y bloqueos sean contrastables con información técnica, actualizada y accesible. De igual forma, recomienda que las autoridades se abstengan de asignar calificaciones estigmatizantes o tendientes a la criminalización de quienes se expresan sobre las protestas a través de Internet.

VII. Recomendaciones

Con base en sus observaciones y a la luz de las normas que rigen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH emite las siguiente recomendaciones al Estado de Colombia:

Recomendaciones generales

1. Promover y reforzar, desde el más alto nivel del Estado, un proceso nacional de diálogo genuino, con enfoque territorial, que permita la escucha de todos los sectores, en especial a aquéllos que han sido más afectados por discriminación histórica, social y estructural en el país.
2. Tomar medidas con el objeto de reforzar la confianza de la ciudadanía en el Estado a partir del perfeccionamiento de la independencia práctica y efectiva de los poderes públicos y entes de control.
3. Fortalecer la garantía y protección de los DESCAs, particularmente los derechos a la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo y a la seguridad social, con un enfoque de igualdad y no discriminación, participación ciudadana y rendición de cuentas que favorezca la inclusión social y la creación de oportunidades.
4. Adoptar las disposiciones necesarias para garantizar la vida, integridad personal y seguridad de todas y cada una de las personas que dialogaron y testificaron

¹¹⁹ Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). 1 de junio de 2011. [Declaración conjunta sobre libertad de expresión e internet.](#)

ante la Comisión Interamericana en su visita. Asimismo, abstenerse de tomar represalias y/o de permitir que estas sean tomadas por terceros en su contra.

Recomendaciones generales sobre el derecho a la protesta social

5. Respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población.
6. Promover el estándar interamericano según el cual los funcionarios públicos tienen el deber de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o inciten a la violencia contra las personas que participan de las manifestaciones y protestas, en especial jóvenes, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, mujeres, personas LGBTI y personas defensoras de derechos humanos.
7. Elaborar y aprobar una ley estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta en Colombia, de acuerdo con lo dictado por la Corte Suprema y en conformidad a los estándares internacionales en la materia.

Recomendaciones sobre el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en el marco de las protestas

8. Ejecutar, en el marco de las protestas y manifestaciones, los operativos de seguridad con estricto apego a los protocolos del uso legítimo de la fuerza y en cumplimiento a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad establecidos en los estándares internacionales. Asimismo, tomar las medidas necesarias para el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad de Colombia en el marco de las protestas sociales.
9. Asegurar que las fuerzas de seguridad que intervengan para proteger y controlar el desarrollo de las manifestaciones y protestas tengan como prioridad la defensa de la vida y la integridad de las personas, absteniéndose de detener arbitrariamente a manifestantes o de violar sus derechos en cualquier otra forma, de acuerdo con los protocolos vigentes.
10. Asegurar que el uso de medios no letales de control del orden público estén sometidos a un protocolo estricto que prevenga y sancione su uso en grave afectación de la integridad y salud de personas manifestantes.
11. Implementar, de manera inmediata, mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas.
12. Reforzar y reestructurar los procesos de formación, entrenamiento y capacitación de las personas integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo un enfoque étnico-racial y de género, así como, sobre los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas,

con la finalidad de consolidar su más amplio entendimiento y respeto sobre el derecho a la libertad de expresión, la debida y legítima actuación en el marco de las protestas, así como, las excepciones y limitantes del uso de la fuerza.

13. Tomar medidas urgentes, en ámbitos de formación, utilización de protocolos de actuación y creación de mecanismos de rendición de cuentas, que promuevan que el ESMAD cumpla funciones de garantía del orden público y el ejercicio del derecho a la protesta, así como limitar su actuación solamente a casos estrictamente necesarios .
14. Separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares.
15. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad del Estado, por medio de la investigación, de forma imparcial, exhaustiva y expedita de las denuncias de violación de derechos humanos; así como juzgar y sancionar a los responsables. De igual manera, reparar a las víctimas y sus familiares.
16. Sistematizar los datos sobre personas fallecidas, heridas, detenidas, desaparecidas y víctimas de violencia de género como consecuencia de las protestas sociales de manera transparente, actualizada, clara, concisa y articulada con la información brindada por la sociedad civil. El registro debe ser específico y tomar en cuenta datos desagregados por origen étnico-racial, edad, sexo, orientación sexual, identidad y/o expresión de género. Asimismo, este debe proveer un sustento informativo básico para las acciones de reparación de los daños causados, incluyendo la garantía por parte del Estado de que aquellas personas que requieran atención integral de salud podrán recibirla gratuitamente.
17. Proveer y coordinar con urgencia programas de reparación integral a las víctimas, especialmente en aquellos casos en la que agentes de seguridad del Estado incurrieron en actos de violencia sexual como mecanismo de tortura y provocaron traumas oculares con la finalidad de ejercer control sobre las personas manifestantes. Dichos programas deberán tener una cobertura nacional, ser integrales, basarse en las perspectivas de género, interculturalidad e intergeneracionalidad, además de cubrir la atención psicosocial y de salud mental de las víctimas, familiares y comunidad en general.

Recomendaciones respecto a la violencia basada en género

18. Adoptar las medidas necesarias para reforzar los mecanismos de acceso a la justicia para mujeres, niñas y personas LGBTI víctimas de violencia de género en

el contexto de las protestas sociales, incluyendo mecanismos de denuncia, atención, investigación y reparación con perspectiva diferenciada, de proximidad y de atención por personal especializado.

19. Reforzar los mecanismos tradicionales de respuesta a la violencia de género, adoptando canales alternativos de comunicación y fortaleciendo las redes comunitarias para ampliar los medios de denuncia y órdenes de protección.

Recomendaciones sobre la violencia basada en discriminación étnico-racial: Pueblos indígenas, Personas Afrodescendientes y Comunidades tribales

20. Adoptar todas las medidas razonables y positivas necesarias para prevenir, eliminar y revertir o cambiar las situaciones discriminatorias que perpetúen la estigmatización, los prejuicios, las prácticas de intolerancia y la criminalización contra las personas por su origen étnico-racial, identidad de género, situación migratoria, origen nacional, o cualquier otra situación que obre en el deterioro de su dignidad humana.

Recomendaciones sobre el uso de la figura de traslado de protección y desaparición de personas

21. Tomar las medidas necesarias restringir el uso de la figura del traslado por protección a situaciones de debilidad o vulnerabilidad, circunstancial o permanente de personas en concordancia al Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. Asimismo, abstenerse de utilizar dicha figura policial de manera generalizada en el marco de las protestas y manifestaciones.
22. Garantizar el derecho al debido proceso a las personas que hayan sido detenidas en el marco de las protestas.
23. Asegurar que los familiares de personas detenidas, y en su caso sus representantes legales, tengan acceso a toda la información sobre el proceso de detención.
24. Realizar una revisión legal independiente e individualizada de todas las imputaciones interpuestas a las personas arrestadas y detenidas durante las protestas.
25. Liberar en forma inmediata a quienes hayan sido detenidos en forma arbitraria o injustificada y aún se encuentren privadas de la libertad.
26. Crear una comisión especial para dar con el paradero de las personas que siguen reportadas como desaparecidas; en la que se garantice la participación de los familiares.

Recomendaciones sobre el uso de las facultades disciplinarias

27. Adecuar el marco normativo interno para asegurar que la Procuraduría General de la Nación no pueda procesar ni sancionar con destitución o inhabilitación a autoridades de elección popular de conformidad a los estándares interamericanos en la materia.

Recomendaciones respecto a la asistencia militar y la aplicación de la jurisdicción penal militar

28. Garantizar que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana esté primariamente reservado a los cuerpos de seguridad civiles.
29. Asegurar que, en caso de necesidad de participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, esa sea extraordinaria, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles. De igual manera debe de ser regulada y fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.
30. Reformar el Decreto 575 de 2021 a fin de asegurar que la intervención de las fuerzas armadas esté compatible con el derecho internacional en la materia.
31. Asegurar que el fuero militar sólo sea utilizado para juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.
32. Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que la justicia ordinaria sea el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos..

Recomendaciones sobre las afectaciones a derechos de terceros y bienes públicos en el marco las protestas

33. Investigar y, en su caso, juzgar y sancionar, con apego a las garantías del debido proceso, a los responsables de los delitos cometidos en el marco de las protestas.

Recomendaciones sobre los cortes de ruta

34. Abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta como modalidades de protestas.
35. Responder a eventuales restricciones a esta modalidad de protesta con base en consideraciones particulares, siempre y cuando sus eventuales restricciones atiendan estrictamente al principio de legalidad, persigan un fin legítimo y sean necesarias en una sociedad democrática.
36. Crear un mecanismo permanente de diálogo en la estructura del Estado, conformado por negociadores entrenados en mediación de conflictos y que tengan la capacidad necesaria para avanzar con procesos de diálogos

transparentes y voluntarios, incorporando a autoridades locales, como gobernadores y alcaldes, para atender las particularidades de los territorios.

Recomendación sobre la protección a periodistas, a la libertad de expresión y el acceso a Internet

37. Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con los estándares interamericanos, en particular, mediante la protección de los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios frente a persecuciones, intimidaciones, hostigamientos, agresiones de cualquier tipo, y mediante el cese de acciones estatales que intervengan con el libre funcionamiento de los medios de comunicación.
38. Garantizar el respeto de la independencia de los medios y abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura.
39. Brindar proactiva y periódicamente información sobre el funcionamiento de las redes Internet con el fin de que las denuncias sobre eventuales interrupciones y bloqueos sean contrastables con información técnica actualizada y accesible.
40. Cesar las actividades de categorización policial de contenidos como “falsos” o “verdaderos” y abstenerse de asignar calificaciones estigmatizantes o tendientes a la criminalización de quienes se expresan a través de internet sobre las protestas.

Recomendaciones sobre misiones médicas

41. Reconocer la importancia de la labor de las misiones médicas en el ejercicio de sus tareas humanitarias en el marco de las protestas, garantizando su protección reforzada para que brinden sin obstáculos atención de salud a todas las personas sin discriminación y sin temor a represalias ni sanciones.
-
185. Finalmente, la Comisión advierte sobre los desafíos de derechos humanos que se pudieran presentar en futuras movilizaciones sociales. El Estado de Colombia y la sociedad en su conjunto tienen una oportunidad única para revertir la situación actual hacia una nueva etapa de participación ciudadana. Esto mediante un diálogo efectivo e inclusivo para abordar las demandas legítimas de la población, con el máximo respeto a los derechos humanos y en el marco democrático del Estado de Derecho.
 186. Para dichos efectos, la Comisión insta al Estado a reforzar desde el más alto nivel del Estado un proceso de diálogo y reconciliación multidimensional que permita desactivar las tensiones y hostilidades latentes en la sociedad colombiana, así como incrementar la confianza en las instituciones estatales.

-
187. La CIDH continuará monitoreando el desarrollo de las protestas sociales al tiempo que expresa su más amplia disposición para brindar asistencia técnica al Estado para el seguimiento de las recomendaciones, para lo cual anuncia la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad.



CALI:

EN EL EPICENTRO DE LA REPRESIÓN

VIOLACIONES A
LOS DERECHOS HUMANOS
DURANTE EL PARO NACIONAL
2021 EN CALI, COLOMBIA

AMNISTÍA
INTERNACIONAL



Amnistía Internacional es un movimiento integrado por 10 millones de personas que activa el sentido de humanidad dentro de cada una de ellas y que hace campaña en favor de cambios que permitan que todo el mundo disfrute de sus derechos humanos. Nuestra visión es la de un mundo donde quienes están en el poder cumplen sus promesas, respetan el derecho internacional y rinden cuentas. Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso, y nuestro trabajo se financia principalmente con las contribuciones de nuestra membresía y con donativos. Creemos que actuar movidos por la solidaridad y la compasión hacia nuestros semejantes en todo el mundo puede hacer mejorar nuestras sociedades.

© Amnesty International 2021

Salvo cuando se indique lo contrario, el contenido de este documento está protegido por una licencia 4.0 de Creative Commons (atribución, no comercial, sin obra derivada, internacional).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

Para más información, visiten la página *Permisos* de nuestro sitio web:

<https://www.amnesty.org/es/about-us/permissions/>.

El material atribuido a titulares de derechos de autor distintos de Amnistía Internacional no está sujeto a la licencia Creative Commons.

Publicado por primera vez en 2021

por Amnesty International Ltd.

Peter Benenson House, 1 Easton Street
London WC1X 0DW, Reino Unido

Índice: AMR 23/4405/2021 Spanish

Idioma original: Español

amnesty.org



Foto de portada: Velatón en la glorieta de Siloé, Cali, 3 de mayo de 2021.

© Testigo de los hechos que solicita mantenerse en el anonimato por razones de seguridad.

**AMNISTÍA
INTERNACIONAL**



ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO	4
2. METODOLOGÍA	8
3. CONTEXTO NACIONAL	10
3.1 DENUNCIAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DEL PARO NACIONAL	12
3.2 DENUNCIAS REITERADAS DE USO EXCESIVO DE LA FUERZA POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ESCUADRÓN MÓVIL ANTIDISTURBIOS (ESMAD) CONTRA LA PROTESTA SOCIAL	15
3.3 LA ESTIGMATIZACIÓN DE LA PROTESTA PACÍFICA COMO JUSTIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA Y DE LA REPRESIÓN POLICIAL	16
4. CALI: EPICENTRO DE LA VIOLENCIA CONTRA MANIFESTANTES POR PARTE DE LA FUERZA PÚBLICA Y DE GRUPOS DE CIVILES ARMADOS	21
4.1 LA “OPERACIÓN SILOÉ”: 3 DE MAYO DE 2021	25
4.2 ATAQUE ARMADO CONTRA LA MINGA INDÍGENA	33
4.3 ATAQUES ARMADOS DE CIVILES CON LA AQUIESCENCIA Y LA COMPLICIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL: GOLPIZAS, DETENCIONES ILEGALES, TORTURA Y AMENAZAS DE DESAPARICIÓN FORZADA CONTRA MANIFESTANTES	38
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	43

1. RESUMEN EJECUTIVO

“Los sueños y esperanzas de nuestras futuras generaciones poco a poco se acaban. Los jóvenes se llenan de odio, ven morir a sus amigos sin que pase nada. No se puede atacar violencia con más violencia”.

Erlendy Cuero, defensora de derechos humanos¹

Desde el 28 de abril de 2021 en la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, ubicada al occidente de Colombia, se han presentado manifestaciones multitudinarias. Al mismo tiempo, en esta ciudad se concentran las más graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional que se cometen en el país en estos días. Cientos de reportes y llamados urgentes de organizaciones de derechos humanos locales y denuncias de víctimas y sus familiares, muchas de las cuales Amnistía Internacional ha podido verificar, dan cuenta de la represión violenta sufrida por jóvenes manifestantes en las calles de Cali a manos de la fuerza pública y de civiles armados².

Una ley de reforma tributaria, que contenía medidas económicas que la población no percibía como justas, desató una ola de manifestaciones en casi todo el país, que rápidamente fueron mostrando la acumulación de demandas y reivindicaciones sociales históricas. En uno de los países más desiguales del continente³, las personas manifestantes han demandado mayor igualdad y la garantía de derechos económicos sociales y culturales como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y a la seguridad social, con desafíos exacerbados por la pandemia del COVID-19. A la vez, miles se manifestaron por el incumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en el 2016 y el recrudecimiento de la violencia contra personas defensoras de los derechos humanos y líderes y lideresas sociales.

La mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas. Al respecto, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez reconoció que el 88.5% de las manifestaciones fueron de carácter pacífico⁴. Sin embargo, también se tiene registro de daños a bienes públicos y privados, como daños a estaciones y buses de servicio de transporte público. Algunas personas manifestantes construyeron barricadas, lo que supuso obstrucción temporal de las vías públicas en varias ciudades de Colombia.

Ante estas masivas protestas, el gobierno del presidente Iván Duque Márquez respondió con estigmatización, calificando a las personas manifestantes como “vándalos”, “terroristas” y otros calificativos que implicarían la comisión de delitos, criminalización y represión policial. El 28 de mayo, el presidente Duque decretó la militarización de varias ciudades del país, entre ellas, Cali, en el Valle del Cauca. La presencia de militares

¹ Entrevista a Erlendy Cuero Bravo, Afrodes, 15 de junio de 2021.

² Personas privadas armadas.

³ IDERE Latam, Índice de Desarrollo Regional – Latinoamérica, 2020., disponible en: <http://www.iderelatam.com/wp-content/uploads/2020/10/IDERE-LATAM-2020-Resumen-Ejecutivo.pdf> (último acceso el 23 de julio de 2021).

⁴ Declaración de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, al término de la reunión con la Representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Juliette de Rivero, 25 de junio de 2021, disponible en: <https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/video/declaracion-vicepresidente-canciller-marta-lucia-ramirez-termino-reunion> (último acceso el 5 de julio de 2021).

con más de seis décadas de formación para responder al conflicto armado, en las calles de centros urbanos, lejos de dar un mensaje de diálogo, avivó las protestas.

Amnistía Internacional realizó una exhaustiva verificación digital de material audiovisual, que da cuenta del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de agentes de Policía Nacional, en particular, de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Este Escuadrón fue creado a finales de los años noventa con una disposición transitoria, con el objetivo de controlar disturbios y restablecer el orden público. Sin embargo, sigue en operación y es objeto de constantes denuncias por uso excesivo e innecesario de la fuerza en su intervención en protestas, dejando a su paso cientos de muertes violentas y graves lesiones a manifestantes, la mayoría que permanecen en la impunidad.

En ese contexto, organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron la muerte de al menos 28 personas entre el 28 de abril y el 28 de junio pasados⁵, como resultado del accionar ilegal de la fuerza pública. Además, han documentado al menos 90 casos de lesiones oculares⁶ y 28 casos de violencia sexual en el marco de manifestaciones⁷. Las cifras de detenciones arbitrarias denunciadas por organizaciones consultadas por Amnistía Internacional ascienden a 2.000 casos aproximadamente⁸. Tales organizaciones denunciaron además más de 300 personas presuntamente desaparecidas en el marco de las protestas⁹, de las cuales al menos dos fueron encontradas sin vida en circunstancias por esclarecer¹⁰ y la demás estarían pendientes de ser localizadas.

Amnistía Internacional centró la presente investigación en las violaciones a los derechos humanos en la ciudad de Cali por la dimensión de la crisis y la concentración de las denuncias. Cali es una ciudad conectada al Pacífico colombiano, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado interno y que, en la actualidad, tiene reportes de proliferación de actores armados ilegales que continúan dejando miles de personas desplazadas y asesinadas¹¹. La ciudad Cali ha acogido históricamente a poblaciones Afrodescendientes desplazadas forzosamente por el conflicto armado desde los departamentos del Chocó, Cauca, Nariño y ciudades como Buenaventura¹². De acuerdo a su alcaldía, Cali es la tercera ciudad más grande de Colombia y la segunda con mayor población Negra/Afrodescendiente en Latinoamérica¹³. Organizaciones que defienden los derechos de las personas afrodescendientes en Cali, como Afrodes¹⁴, han denunciado que Cali es una ciudad caracterizada por la desigualdad, la exclusión y el racismo estructural. Por lo que no resulta sorprendente que Cali se convirtiera en el epicentro de la ola de manifestaciones de los últimos meses, y que la respuesta a estas protestas fuera tan violenta.

A través de una rigurosa investigación y verificación de material audiovisual, Amnistía Internacional documentó ataques de civiles armados, quienes, acompañando a agentes de la Policía Nacional, y con su aquiescencia y tolerancia, atacaron a manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos, constituyendo así expresiones de paramilitarismo urbano.

La organización realizó más de cincuenta entrevistas a profundidad con víctimas, sus familiares, testigos, personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos y periodistas que denunciaron la represión violenta de las manifestaciones. Además, realizó un exhaustivo trabajo de verificación y análisis de más de

⁵ Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas, Boletín informativo 19, 22 de junio de 2021, disponible en: <https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-20-paronacional/> (último acceso el 5 de julio de 2021).

⁶ Temblores ONG, Indepaz y Programa PAIIS de la Universidad de Los Andes, Boletín disponible en: <https://www.instagram.com/p/CQeyeEQJjub/>

⁷ Temblores ONG, Boletín del 26 de junio de 2021, disponible en: https://www.instagram.com/p/CQr4h6TJ9vK/?utm_source=ig_web_copy_link (último acceso el 5 de junio de 2021).

⁸ Temblores ONG, Boletín del 26 de junio de 2021, disponible en: https://www.instagram.com/p/CQr4h6TJ9vK/?utm_source=ig_web_copy_link (último acceso el 5 de junio de 2021).

⁹ Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Comunicado conjunto, Después de un mes de Paro Nacional continúan desaparecidas 327 personas, 27 de mayo del 2021, disponible en: <https://coeuropa.org.co/después-de-un-mes-de-paronacional-continuan-desaparecidas-327-personas/>

¹⁰ Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas, Boletín informativo 21, 22 de julio de 2021, disponible en: <https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-nacional-21-paronacional/> (último acceso el 22 de julio de 2021).

¹¹ Defensoría del Pueblo de Colombia, 28.509 personas fueron desplazadas y confinadas en 2020 por hechos violentos, 7 de enero de 2021, disponible en: <https://www.defensoria.gov.co/es/nube/destacados/9802/28509-personas-fueron-desplazadas-y-confinadas-en-2020-por-hechos-violentos.htm> (último acceso el 5 de julio de 2021).

¹² Gobernación de Valle del Cauca, Desplazamiento Forzado en las Comunas de Santiago de Cali: Análisis Espacial de Efecto de Vecindad, 15 de noviembre de 2021, <https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?Servicio=Tools2&ITipo=viewpdf&id=28753> (último acceso 5 de julio de 2021).

¹³ Alcaldía de Santiago de Cali (2013). Cali, segunda ciudad con mayor población afrodescendiente en el país. Disponible en: https://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/51642/cali_segunda_ciudad_con_mayor_poblacion_afrodescendiente_en_el_pas/ (último acceso el 3 de julio de 2021).

¹⁴ Entrevista a Erlendy Cuero Bravo, Afrodes, 15 de junio de 2021.

quinientas piezas audiovisuales que dan cuenta del uso excesivo e innecesario de la fuerza y la violencia desplegada contra las personas que ejercían su derecho a la protesta pacífica.

Asimismo, la organización envió solicitudes de información al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo del Valle del Cauca, siendo ésta última y el Juez 158 de Instrucción Penal Militar las únicas instituciones que dieron respuesta a la solicitud hasta el cierre del presente informe¹⁵.

En este informe se analizan **tres acontecimientos específicos que acumularon diversos casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en Cali**.

El **primero denominado “Operación Siloé”, ocurrida el 3 de mayo de este año**, en el que se evidencia una incursión de agentes de Policía Nacional en conjunto con agentes del ESMAD y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Colombia (GOES), que usaron armas letales como fusiles Tavor 5.56 mm contra manifestantes pacíficos. Esa noche se registraron al menos tres personas muertas por herida de arma de fuego, cientos de personas lesionadas y varias detenciones arbitrarias.

El **segundo evento ocurrido el 9 de mayo, es el ataque contra la Minga Indígena**, llevado a cabo por civiles armados, en presencia y con aquiescencia y tolerancia de agentes de la Policía Nacional. Ese día resultó herida la defensora de derechos humanos Indígena Daniela Soto y resultaron heridas 10 personas pertenecientes a Pueblos Indígenas.

Por último, en el informe se presentan los hechos ocurridos el **28 de mayo**, cuando agentes de la Policía Nacional usando la fuerza de manera excesiva actuaron coordinadamente con civiles armados y atacaron a los manifestantes en el barrio aledaño a la Universidad del Valle. Ese día una decena de jóvenes manifestantes, entre ellos Álvaro Herrera, Noé Muñoz y Sebastián Mejía, fueron golpeados y detenidos por civiles armados, quienes luego los entregaron a la Policía Nacional. Álvaro y Sebastián denunciaron haber sido sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos durante esa detención ilegal.

Las prácticas evidenciadas en Cali -que incluyen uso de armas letales contra manifestantes, uso excesivo e ilegítimo de armas menos letales como gases lacrimógenos, detenciones ilegales y torturas-, son un reflejo de cientos de denuncias recibidas por manifestantes, personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos y demuestran un modus operandi llevado a cabo a lo largo del país. **Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, como la tortura y la desaparición forzada de personas, cometidos por agentes de la fuerza pública no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón de accionar violento, destinado a infligir miedo y desincentivar la protesta pacífica.**

El presente informe constituye uno de varios documentos que Amnistía Internacional publicará dando cuenta de las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en Colombia en el contexto del Paro Nacional. El análisis se centra en Cali en vista de la desproporcionada y violenta respuesta de las autoridades estatales contra jóvenes desarmados, en su mayoría Afrodescendientes y pertenecientes a familias de bajos ingresos, y contra Pueblos Indígenas.

A través del informe Amnistía Internacional concluye cómo en Cali se manifiesta la esencia de la respuesta represiva del Estado colombiano y los verdaderos objetivos detrás de esta represión. Cali muestra las luces y sombras de un país atravesado por la desigualdad y la lucha orgullosa y valiente, creativa y diversa de sus comunidades, que resisten y exigen vivir en un país más justo. Los hechos y casos documentados en el informe evidencian el contexto de discriminación, estigmatización y violencia contra los Pueblos Indígenas y comunidades Afrodescendientes quienes de manera histórica han sufrido desproporcionalmente las consecuencias del conflicto armado y la falta de protección por parte de las autoridades.

En el presente informe Amnistía Internacional hace una serie de recomendaciones a las autoridades colombianas entre las que se incluyen:

- Dar una orden inequívoca de detener la represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad;
- Atender de manera urgente las causas estructurales que afectan el ejercicio de derechos humanos y las demandas sociales que dan origen a las protestas pacíficas;
- Reconocer el carácter mayoritariamente pacífico de las manifestaciones, y tomar todas las medidas para garantizar los derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica de todas las personas en el país, sin distinción;

¹⁵ El presente informe tiene como fecha de cierre el 23 de julio de 2021.

- Abstenerse de emitir pronunciamientos que estigmaticen y criminalicen la protesta y a sus participantes;
- Retirar a las fuerzas militares de las operaciones de orden público, incluyendo durante las protestas;
- Asegurar que las fuerzas de seguridad encargadas de hacer cumplir la ley cumplen plenamente con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley;
- Reconocer el accionar represivo de la fuerza pública en el contexto del Paro Nacional y adoptar medidas para asegurar una investigación diligente, independiente e imparcial y abstenerse de impedir el juzgamiento y sanción de las personas que sean halladas responsables de las violaciones de derechos humanos y de crímenes de derecho internacional, según corresponda;
- Establecer un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas de la represión y sus familias;
- Reconocer públicamente la labor legítima de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en el contexto del Paro Nacional;
- Adoptar medidas para garantizar el trabajo de los periodistas, comunicadores sociales en el contexto del Paro Nacional;
- Cumplir sin demora con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
- Cooperar con y no obstaculizar la labor del Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia de la CIDH; e
- Iniciar investigaciones de manera diligente, independiente e imparcial sobre las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto del Paro Nacional, concretamente en la ciudad de Cali y los casos presentados en este documento, y de existir pruebas suficientes y admisibles contra las personas sospechosas de responsabilidad penal, someterlas a un proceso justo ante los tribunales civiles ordinarios. La investigación debe incluir todas las responsabilidades dentro de la línea de mando de la fuerza pública, así como en la participación de civiles armados con su aquiescencia y tolerancia.

2. METODOLOGÍA

Amnistía Internacional investigó, a través de cientos de piezas audiovisuales de fuentes abiertas, así como aquellas recibidas de periodistas, personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos y víctimas de represión, el accionar desproporcionado y represivo de la fuerza pública desde el 28 de abril de 2021, fecha en la que inició el paro nacional, a la actualidad.

El Laboratorio de Evidencias de Crisis de Amnistía Internacional analizó y verificó más de 500 piezas audiovisuales de tres hechos ocurridos en la ciudad de Cali y que resultan emblemáticos para mostrar la gravedad de la crisis de derechos humanos en dicha ciudad. Asimismo, un experto en armas de la organización proporcionó un análisis en profundidad de algunos de los videos.

El primero, la incursión armada al barrio Siloé la noche del 3 de mayo, en la que murió asesinado el joven Kevin Agudelo; el segundo, el ataque armado contra la Minga Indígena el 9 de mayo, en el cual resultó gravemente herida la defensora de derechos humanos indígena Daniela Soto y, por último, los ataques de civiles armados en coordinación con la Policía Nacional ocurridos el 28 de mayo en cuyo contexto ocurrieron las detenciones arbitrarias y torturas denunciadas por los jóvenes Sebastián Mejía, Noé Muñoz y Álvaro Herrera.

Amnistía Internacional realizó entrevistas a familiares de víctimas, testigos de los hechos del 3 de mayo en la noche, así como personas de la comunidad. A partir de sus testimonios y de la verificación de material audiovisual, Amnistía Internacional documentó este episodio considerado emblemático, por los niveles de violencia registrados que dejaron al menos tres personas muertas y decenas de personas heridas.

La organización también realizó entrevistas a víctimas del ataque armado del 9 de mayo, así como representantes de las organizaciones defensoras de los derechos humanos que las acompañan, líderes de la Guardia Indígena, voceros de la Asociación Indígena del Cauca y testigos. La organización tuvo también acceso a material audiovisual que verificó y recibió numerosos informes de organizaciones indígenas como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que dan cuenta del nivel de violencia y represión que han vivido durante las jornadas de manifestaciones¹⁶.

En el caso del 28 de mayo, Amnistía Internacional realizó entrevistas a testigos, víctimas de hechos violentos, organizaciones de derechos humanos y funcionarios de la Defensoría del Pueblo y realizó una exhaustiva verificación de materiales audiovisuales en los que se evidencia que ese día, civiles armados atacaron a manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos, con aquiescencia y tolerancia de agentes de la Policía. Además, la organización documentó casos de detenciones violentas realizadas por civiles armados, quienes luego entregaron las personas a la Policía. Las víctimas denunciaron detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles e inhumanos.

La documentación de los hechos incluyó cerca de 50 entrevistas con víctimas, sus familiares, periodistas y las organizaciones de derechos humanos que las acompañan.

Por razones de seguridad, la identidad de las víctimas o familiares que brindaron su testimonio a Amnistía Internacional se mantienen en reserva.

¹⁶ Organización Nacional Indígena, ONIC, Informe Ejecutivo sobre el contexto y las afectaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas dentro del Paro y Minga Nacional en Colombia, 10 de junio de 2021, disponible en: <https://www.onic.org.co/comunicados-onic/4304-informe-ejecutivo-sobre-el-contexto-y-las-afectaciones-a-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-dentro-del-paro-y-minga-nacional-en-colombia> (último acceso el 3 de julio de 2021).

La investigación incluyó la revisión de prueba documental como informes de la sociedad civil e informes oficiales de autoridades nacionales de distintos niveles, de la fuerza pública y representantes de los órganos de control y de la Fiscalía General de la Nación.

Amnistía Internacional también entrevistó a funcionarios de la Defensoría del Pueblo que realizan seguimiento en terreno a las manifestaciones y el 23 de junio de 2021 realizó una solicitud de información a la Defensoría Regional del Valle del Cauca¹⁷, la cual respondió el 6 de julio de 2021¹⁸. Asimismo, mediante comunicación de 12 de julio de 2021, la organización solicitó al Ministro de Defensa, Director Nacional de la Policía y al Fiscal General de la Nación información concreta sobre los hechos descritos en el presente informe a fin de ser incluidos, en lo pertinente, en este documento¹⁹. Transcurrido el plazo de diez días Amnistía Internacional únicamente recibió respuesta del Juez 158 de Instrucción Penal Militar²⁰.

Dado el corto tiempo transcurrido desde los hechos el presente informe no aborda el avance y conducción de las investigaciones penales de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, Amnistía Internacional alerta que es contrario al derecho internacional de los derechos humanos que las violaciones a estos derechos y los crímenes de derecho internacional sean juzgados por la justicia penal militar.

¹⁷ Comunicación de referencia TG AMR 23/2021.1809 de 23 de junio de 2021 recibida y radicada en la misma fecha.

¹⁸ Comunicación con radicado No. 20210060341662842, respuesta con el número 20210060342301041 de 6 de julio de 2021.

¹⁹ Comunicación de referencia TG AMR 23/2021.1854 de 12 de julio de 2021. La comunicación otorgó un plazo de diez días a las instituciones referidas para recibir sus comentarios u observaciones a fin de que sean incluidos, según corresponda, en el presente informe.

²⁰ Comunicación de referencia No. 832/MDN-DEJPMGDJ-J158IPM-1.10 del Juez 158 de Instrucción Penal Militar (E) de 23 de julio de 2021.

3. CONTEXTO NACIONAL

Desde el 28 de abril de 2021, miles de personas se han manifestado, en su mayoría, de manera pacífica en las calles de distintas ciudades de Colombia, en el marco del denominado “Paro Nacional”. El factor desencadenante de esta movilización ciudadana fue la propuesta de ley de reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque en un momento de crisis social y de salud pública, que se vive en el país en el contexto de la pandemia del COVID-19²¹. Debido a la presión social ejercida por las manifestaciones en distintas ciudades, el 2 de mayo el gobierno anunció el retiro del proyecto de reforma y el 5 de mayo las comisiones tercera y cuarta del Congreso votaron por su retiro²². Sin embargo, las manifestaciones continúan y reflejan demandas sociales más amplias, a las que se suman la exigencia de justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza pública en el marco de las manifestaciones.

Las protestas han visibilizado los reclamos históricos de poblaciones marginalizadas en el país. La desigualdad, el racismo, la violencia y las consecuencias del conflicto armado interno son causas estructurales del estallido social en Colombia. Los reclamos sociales se basan en la ausencia de garantía de derechos económicos y sociales²³ como la educación y la salud, así como medidas para mitigar los efectos de la pandemia, en uno de los países más desiguales de la región²⁴. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)²⁵, en el año 2020, 42,5% de la población colombiana estuvo en condición de pobreza, con un aumento de 6.8 puntos respecto al año 2019. Esto significa que, de una población total de 48,258,494 al 2018²⁶, más de 21 millones de personas viven en condiciones de pobreza y 7.5 millones en condiciones de pobreza extrema.

De acuerdo a los manifestantes, la pandemia ha exacerbado las desigualdades y ha develado las debilidades del sistema de salud y de protección social. En abril de 2020²⁷, Amnistía Internacional hizo un llamado al Estado colombiano a tomar medidas adecuadas para garantizar el derecho a la salud, al agua y a la alimentación de poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre ellas los Pueblos Indígenas, para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria declarada en marzo de ese año.

A pesar de los altos niveles de contagio con Covid-19 y de que Colombia superó las 100.000 muertes²⁸ como consecuencia de este virus, las personas se han mantenido en la calle. Al Paro se han unido expresiones sociales diversas que suman reclamos territoriales de garantía de los derechos humanos: el cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en el 2016, la necesidad de tomar acciones decididas para proteger a las personas

²¹ Senado de Colombia. Proyecto de Ley 439 de 2021. Disponible en: <http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-ley-2020-2021/2191-proyecto-de-ley-439-de-2021> (último acceso el 4 de julio de 2021).

²² Senado de la República, <https://twitter.com/senadogovco/status/1389994803186839560> (último acceso el 4 de julio de 2021).

²³ Comunicado Comité del Paro, 3 de mayo de 2021, disponible en: <https://twitter.com/CGTCol/status/1389240895501967362/photo/1> (último acceso el 2 de julio de 2021).

²⁴ Revista Forbes, Colombia es el país más desigual de toda América Latina, 30 de octubre de 2020, disponible en: <https://forbes.co/2020/10/30/economia-y-finanzas/colombia-es-el-pais-mas-desigual-de-toda-america-latina/> (último acceso el 2 de julio de 2021).

²⁵ Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, Rueda de prensa sobre pobreza monetaria año 2020, 29 de abril de 2021, disponible en: <https://www.facebook.com/DANEColombia/videos/598775167673122/> (último acceso el 2 de julio de 2021).

²⁶ DANE. Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/centro-nacional-de-poblacion-y-vivienda-2018/cuantos-somos> (último acceso el 4 de julio de 2021).

²⁷ Amnistía Internacional, Colombia: A los pueblos indígenas los matará el COVID 19 o el hambre si el Estado no actúa inmediatamente, 17 de abril de 2020, disponible en: <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/04/colombia-pueblos-indigenas-covid19-hambre/>.

²⁸ Ministerio de Salud de Colombia, 26 de junio de 2021 cifras disponibles en: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx (último acceso el 2 de julio de 2021).

defensoras de derechos humanos²⁹ y personas que ejercen liderazgos sociales, la implementación de medidas para prevenir y proteger a las mujeres, niñas y personas con orientación sexual y de género diversa contra la violencia y el cumplimiento de acuerdos logrados con comunidades de pueblos Negros e Indígenas en años anteriores, para garantizar su vida, su integridad y su autonomía.

En varias ciudades, como Bogotá, Pereira, Cali, Facatativá, Barranquilla y Pasto -entre muchas otras- se han registrado multitudinarias manifestaciones, en su mayoría pacíficas. Sin embargo, en sus observaciones de la visita a Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también dio cuenta de denuncias del Estado y organizaciones de la sociedad civil, sobre la infiltración de las protestas por parte de grupos o sujetos que efectuaron actos violentos o “vandálicos” durante el transcurso de las manifestaciones. Asimismo, se informó por parte de fuentes oficiales que, desde el inicio de las protestas hasta el 10 de junio, se registraron daños a 1.660 bienes privados, 706 bienes de la policía (556 vehículos institucionales y 116 Comandos de Atención Inmediata) y afectaciones en más de 2.158 bienes públicos (1.251 vehículos y 240 estaciones del transporte público)³⁰.

Asimismo, el Estado informó a la CIDH con relación a los bloqueos/cortes de ruta e indicó que varios de estos bloqueos habrían causado vulneraciones al derecho a la vida, a la salud, a la libertad de locomoción y al trabajo y habrían afectado a diferentes sectores económicos del país, incluyendo la producción y distribución de alimentos e insumos básicos, el traslado de pacientes e insumos médicos y el abastecimiento de combustible³¹ y que en casos específicos se habían realizado acciones delictivas contra la infraestructura de un sistema de transporte³². Por su parte, la CIDH observó que en algunos bloqueos se registran múltiples expresiones pacíficas y culturales protegidas bajo amparo del derecho a la protesta y se reunió con grupos de jóvenes que denunciaron de forma reiterada y consistente acciones de represión por parte de la fuerza pública, así como una situación social de riesgo alimentario y desafiación familiar e institucional³³.

Al respecto, la CIDH señaló que cada uno de los cortes de ruta tiene actores distintos, peticiones diferentes y potenciales efectos sobre derechos fundamentales de terceros que no forman parte de la protesta y que se deben evaluar las circunstancias caso por caso, procurando la coexistencia entre el ejercicio del derecho humano a la protesta y los derechos fundamentales de terceros. Asimismo, la Comisión instó “a que se evite el uso de enfoques generalizantes y prohibitivos a las diversas formas de manifestarse en el ejercicio del derecho a la protesta, en tanto que algunos de ellos son modalidades de la protesta que canalizan la escucha social de algunas voces que de otro modo difícilmente ingresarían a la agenda o serían parte de la deliberación pública”³⁴.

Cali ha sido un epicentro alarmante de reportes de represión violenta y violaciones a los derechos humanos. En la capital del departamento del Valle del Cauca, se reporta al menos el 70% de los asesinatos de personas en el contexto de manifestaciones sociales, así como graves denuncias de posibles desapariciones forzadas, violencia sexual, detenciones arbitrarias y violencia armada por parte de civiles con aquiescencia y tolerancia de la fuerza pública. Por esta razón, el presente documento se enfoca en denunciar las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional documentados en esta ciudad del Pacífico colombiano.

Desde el inicio de las manifestaciones, Amnistía Internacional ha denunciado que la respuesta de las autoridades colombianas se ha centrado en la estigmatización de la protesta social y, con ello, en la represión violenta a través del uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de agentes de la fuerza pública. Si bien se han presentado hechos aislados, que han generado daños en bienes públicos y privados durante los más de cincuenta días de protestas, la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas. Sin embargo, desde el 1º de mayo, el presidente Iván Duque ordenó la presencia militar en los centros urbanos aduciendo que, por la vía de la violencia, el vandalismo y el ‘terrorismo’, se pretendía amedrentar a la sociedad y doblegar las instituciones³⁵. Así, el discurso del presidente y autoridades del gobierno se ha centrado en deslegitimar y

²⁹ Amnistía Internacional, Colombia: ¿Por qué nos quieren matar?: la falta de un espacio seguro para defender los derechos humanos en Colombia, 8 de octubre de 2020, disponible en <https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/3009/2020/es/>

³⁰ CIDH. Observaciones y Recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021, paras. 133 y 134, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf.

³¹ CIDH. Observaciones y Recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021, para. 144, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf.

³² CIDH. Observaciones y Recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021, para. 145, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf.

³³ CIDH. Observaciones y Recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021, para. 146, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf.

³⁴ CIDH. Observaciones y Recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021, paras. 152 y 153, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf.

³⁵ Alocución del presidente Iván Duque, 1 de mayo de 2021, disponible en <https://twitter.com/infopresidencia/status/1388692317922631680> (último acceso el 2 de julio de 2021).

criminalizar la protesta social y con ello, justificar su represión violenta desconociendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Asimismo, Amnistía Internacional ha recibido denuncias sobre cumplimiento parcial del mandato de monitoreo, verificación, denuncia y acompañamiento a víctimas y sus familiares por parte de los órganos de control, concretamente del Ministerio Público, conformado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías distritales y municipales.

Amnistía Internacional considera que es posible determinar un patrón en las violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco de manifestaciones sociales en diferentes partes del país. Los hechos denunciados por organizaciones de derechos humanos nacionales no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un “modus operandi” de represión violenta documentado en manifestaciones de años anteriores. En ese contexto, la organización ha denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado en el contexto de control de manifestaciones en noviembre del 2019³⁶ y septiembre del 2020³⁷. Así, Amnistía Internacional documentó el uso excesivo de la fuerza por las fuerzas del Estado en diferentes regiones del país al aplicar las medidas de aislamiento durante la pandemia y denunció que la policía nacional empleó tortura e hizo uso excesivo de la fuerza letal, lo que causó la muerte de 10 personas en septiembre del 2020³⁸.

3.1 DENUNCIAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DEL PARO NACIONAL

En la inauguración de la sesión 47 del Consejo de Derechos Humanos, llevada a cabo entre el 21 de junio y el 13 de julio de 2021, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su profunda preocupación por las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública en Colombia y refirió que la Oficina ha recibido denuncias de 56 muertes (54 civiles y dos policías) en el contexto de las protestas, principalmente en la ciudad de Cali, así como 49 presuntas víctimas de violencia sexual³⁹.

Los informes de organizaciones y plataformas de derechos humanos nacionales e internacionales, dan cuenta de la represión policial constante desde el inicio del Paro Nacional. En ese contexto, del 8 al 10 de junio CIDH realizó una visita de trabajo a Colombia realizar una visita de trabajo durante la cual, visitó Bogotá, Cali, Tuluá, Buga y Popayán con el fin de observar la situación de derechos humanos y emitir recomendaciones sobre la materia. El 7 de junio de 2021 la CIDH publicó sus observaciones y recomendaciones. Al respecto, Amnistía Internacional ha destacado la importancia de la visita y el anuncio de instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia y reitera que las autoridades deben cumplir con las recomendaciones de la CIDH relativas a las violaciones de derechos humanos denunciadas en el contexto del paro nacional⁴⁰.

Temblores ONG, Indepaz y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de Los Andes, denunciaron la sistematicidad en la violencia por parte de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones del 2021. Según informe presentado ante la CIDH estas prácticas son:

(i) el uso indiscriminado, desmedido y desproporcionado de armas de fuego en contra de las personas manifestantes por parte de la fuerza pública, (ii) el uso de armamentos de letalidad reducida en contra de los cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas pacíficas, (iii) los disparos horizontales con arma venom de largo alcance en lugares residenciales y en contra de manifestantes, (iv) el lanzamiento de

³⁶ Amnistía Internacional, Colombia: las autoridades deben investigar imparcialmente la represión de las protestas, 22 de noviembre de 2019, disponible en: <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/11/colombia-autoridades-deben-investigar-represion-de-protestas/>

³⁷ Amnistía Internacional, Colombia: Amnistía Internacional condena actos de tortura y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, 11 de septiembre de 2020, disponible en: <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/09/colombia-amnistia-condena-tortura-uso-excesivo-fuerza/>

³⁸ Amnistía Internacional, Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, disponible en: <https://www.amnesty.org/es/countries/americas/colombia/report-colombia/>

³⁹ Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Comunicado “La Alta Comisionada informa de retrocesos graves de los derechos humanos en el mundo”, 21 de junio de 2021, disponible en: <https://news.un.org/es/story/2021/06/1493562> (último acceso el 2 de julio de 2021).

⁴⁰ Amnistía Internacional, Colombia: la CIDH debe escuchar las voces de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, 7 de junio del 2021, disponible en: <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/06/colombia-cidh-debe-escuchar-victimas-violaciones-derechos-humanos/>; Amnistía Internacional, Colombia: las autoridades deben cumplir con las recomendaciones de la CIDH relativas a las violaciones de derechos humanos denunciadas en el contexto del paro nacional, 7 de julio de 2021, disponible en: <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/colombia-las-autoridades-deben-cumplir-con-las-recomendaciones-de-la-cidh-relativas-a-las-violaciones-de-derechos-humanos-denunciadas-en-el-contexto-del-paro-nacional/>.

gases lacrimógenos y aturdidoras al interior de viviendas y de barrios residenciales, (v) la vulneración del principio de publicidad de los procedimientos policiales, (vi) la imposición de requisitos y medidas paralegales a las personas detenidas arbitrariamente por parte de la Policía Nacional a cambio de su libertad, (vii) la violencia sexual y basada en género contra manifestantes, (viii) la generación de traumas oculares a manifestantes y (ix) la desaparición forzada de manifestantes⁴¹.

ASESINATOS Y LESIONES

La ‘Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas’ -red de organizaciones sociales, estudiantiles, culturales, comunales y derechos humanos- reportó en su último boletín del 30 de junio⁴², que desde el 28 de abril se han registrado 84 personas muertas en el marco del Paro Nacional, de las cuales 28 son presuntamente atribuibles a la fuerza pública, siete presuntamente cometidos por civiles armados y 16 de estos casos se encuentran en verificación de su relación con la protesta social. La Campaña denunció que 1.790 personas fueron heridas como consecuencia del accionar desproporcionado del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y civiles armados no identificados.

Por su parte, Temblores ONG, Indepaz y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIS) de la Universidad de Los Andes registran que 90 personas han resultado víctimas de trauma ocular, de los cuales 42 casos se han denunciado en Bogotá⁴³.

VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO

Preocupan las graves denuncias de violencias policiales basadas en género, incluidas distintas formas de violencia sexual. De acuerdo a un informe presentado ante la CIDH, por la Campaña Defender la Libertad, Sisma Mujer, Humanas Colombia, Ruta Pacífica de las Mujeres, Women’s Link Worldwide y la Corporación Casa de la Mujer, entre otras, entre el 28 de abril y el 2 de junio, se han registrado 491 mujeres víctimas de violencias policiales en el marco de manifestaciones⁴⁴. Por su parte Temblores ONG reporta 28 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública, en su boletín con corte al 26 de junio⁴⁵. En informe conjunto presentado ante la CIDH, las organizaciones Caribe Afirmativo, Colombia Diversa y la Fundación GAAT, entre otras organizaciones, reportaron cinco casos de violencia contra personas LGBTIQ+ que han participado en las manifestaciones⁴⁶.

DESAPARICIÓN FORZADA

Al 27 de mayo, las denuncias sobre personas presuntamente desaparecidas en el marco del Paro Nacional son alarmantes. La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada registró que 775 personas estuvieron desaparecidas, de las cuales aún faltaba localizar a 327⁴⁷. El 22 de julio la ‘Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas’ informó que en julio al menos dos personas reportadas como desaparecidas en el marco de las protestas fueron halladas sin vida en circunstancias por esclarecer⁴⁸.

Por su parte, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) Luz Marina Monzón, hizo un llamado a “no utilizar eufemismos en relación a la desaparición de personas, como

⁴¹ Temblores ONG, Indepaz y Programa PAIS de la Universidad de Los Andes, Informe sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021, Informe presentado ante la CIDH en su visita de trabajo, junio de 2021, disponible en: <http://www.indepaz.org.co/informe-de-temblores-ong-e-indepaz-a-la-cidh/> (último acceso el 2 de julio de 2021). Cifra actualizada al 20 de julio de 2021.

⁴² Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas, Boletín informativo 19, 22 de junio de 2021, disponible en: <https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-20-paronacional/> (último acceso el 5 de julio de 2021).

⁴³ Temblores ONG, Indepaz y Programa PAIS de la Universidad de Los Andes, Boletín disponible en: <https://www.instagram.com/p/CQeyeEQJjub/>

⁴⁴ Sisma Mujer, Resumen del informe presentado a la CIDH durante su visita a Colombia entre el 8 y el 10 de junio de 2021, junio 10 de 2021, disponible en: https://www.sismamujer.org/2021/06/10/resumen-del-informe-presentado-a-la-cidh-durante-su-visita-a-colombia-entre-el-8-y-el-10-de-junio-de-2021/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=resumen-del-informe-presentado-a-la-cidh-durante-su-visita-a-colombia-entre-el-8-y-el-10-de-junio-de-2021 (último acceso el 2 de julio de 2021).

⁴⁵ Temblores ONG, Boletín del 26 de junio de 2021, disponible en: https://www.instagram.com/p/CQr4h6TJ9vK/?utm_source=ig_web_copy_link (último acceso el 5 de junio de 2021).

⁴⁶ Caribe Afirmativo, Fundación Grupo de Acción & Apoyo a Personas Trans, Santamaría Fundación, Plataforma LGBTI por la Paz, Corporación Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Raza e Igualdad, Colombia, Colombia Diversa y Asociación Líderes en Acción, Informe sobre la situación de violencia policial contra personas LGBTI en el marco del Paro Nacional, 9 de junio del 2021, disponible en: <https://caribeaafirmativo.lgbt/caribe-afirmativo-junto-con-otras-organizaciones-entrega-informe-ante-la-cidh-sobre-violencia-en-el-marco-de-la-protesta-social-contra-personas-lgbt/> (último acceso el 2 de julio de 2021).

⁴⁷ Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Comunicado conjunto, Después de un mes de Paro Nacional continúan desaparecidas 327 personas, 27 de mayo del 2021, disponible en: <https://coeuropa.org.co/despues-de-un-mes-de-paronacional-continuan-desaparecidas-327-personas/>

⁴⁸ Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas, Boletín informativo 21, 22 de julio de 2021, disponible en: <https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-nacional-21-paronacional/> (último acceso el 22 de julio de 2021).

por ejemplo la expresión ‘persona no localizada’, pues al negar que hay una desaparición, no se activan los mecanismos de búsqueda existentes a nivel nacional e internacional que garanticen la protección de las personas contra la desaparición”⁴⁹.

Aunado a lo anterior, en el informe que Defensoría del Pueblo presentó ante la CIDH sobre la protesta social en el periodo entre abril y junio⁵⁰, llama la atención de la organización el uso de conceptos como “personas no ubicadas” en referencia a personas presuntamente dadas por desaparecidas y “fallecidas” en referencia a personas que han muerto en circunstancias violentas.

DETENCIÓN ARBITRARIA

Según Temblores ONG, desde el inicio del paro hasta el 26 de junio, se tienen reportes de 2.005 detenciones arbitrarias de manifestantes⁵¹. Amnistía Internacional hace un llamado al Estado de Colombia a garantizar que los procesos de detenciones cumplan con los estándares de derechos humanos y se respete el derecho al debido proceso y el derecho a la información.

ATAQUES CONTRA PERIODISTAS

Organizaciones de la sociedad civil han reportado graves denuncias de ataques y amenazas a periodistas en su función de reportar sobre las manifestaciones. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció que, del 28 de abril al 26 de junio, se reportaron 91 agresiones físicas contra periodistas que cubren las manifestaciones del paro nacional. También denunciaron 42 amenazas, nueve detenciones arbitrarias y 14 hechos de eliminación de material periodístico. Estas denuncias deben ser objeto de investigación por parte de las autoridades nacionales. La organización recuerda que las autoridades estatales tienen, bajo el derecho internacional, la obligación de garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa en un contexto de crisis de los derechos humanos.

ATAQUES CONTRA PERSONAS Y ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

Las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos tienen un papel fundamental en el contexto actual. Las autoridades colombianas tienen la responsabilidad de protegerles y de reconocer su legítima labor y su aporte para el acompañamiento a las víctimas y familiares de graves violaciones a los derechos humanos. Preocupan las denuncias de amenazas, agresiones y violencia ejercida por agentes de la policía y el ESMAD contra defensores y defensoras que acompañan las manifestaciones, así como el reporte del asesinato del joven defensor indígena Sebastián Jacanamejoy el 28 de mayo en Cali⁵². Amnistía Internacional recibió numerosas denuncias de agresiones, ataques armados, actos de intimidación y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos en todo el país y, particularmente, en la ciudad de Cali. Sumado a esto, la organización recibió numerosas denuncias de agresiones, amenazas y violencia ejercida contra misiones médicas, al punto de limitar la posibilidad de salvar vidas de personas heridas.

En especial, le preocupan a la organización las numerosas denuncias de la violencia ejercida contra mujeres defensoras de los derechos humanos⁵³ en Cali, Bogotá, Popayán y Palmira. Amnistía Internacional documentó el caso de Daniela Soto, defensora de los derechos humanos indígena, que resultó herida el 9 de mayo en Cali como consecuencia del ataque armado presuntamente llevado a cabo por civiles armados y con aquiescencia de la Policía Nacional, contra la Minga Indígena. Las autoridades colombianas deben investigar estos hechos de manera inmediata, exhaustiva y sin dilaciones para identificar a los responsables de estos graves hechos y garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas.

Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por estas graves denuncias⁵⁴ y reitera que las autoridades colombianas deben investigar sin dilaciones estos hechos y garantizar los estándares de derechos humanos frente al derecho a la información y al debido proceso de personas detenidas en el marco de manifestaciones, en estricto cumplimiento de su deber de debida diligencia y de rendición de cuentas.

⁴⁹ Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas UBDP, comunicado público, 28 de mayo del 2021, disponible en: <https://www.ubdpbusquedadesaparecidos.co/actualidad/urge-dejar-de-negar-la-desaparicion-de-personas-en-las-protestas-ubdp/>

⁵⁰ Defensoría del Pueblo, Informe defensorial visita CIDH Colombia protesta abril-junio 2021, junio de 2021 (último acceso el 2 de julio de 2021).

⁵¹ Temblores ONG, Boletín del 26 de junio de 2021, disponible en: https://www.instagram.com/p/CQr4h6TJ9vK/?utm_source=ig_web_copy_link (último acceso el 5 de junio de 2021).

⁵² Indepaz, comunicado, 28 de mayo de 2021, disponible en: <https://twitter.com/indepaz/status/1398682228641746945?s=24>.

⁵³ Manifiesta org, “Doble amenaza: ser mujer y defensora de Derechos Humanos en Colombia”, 9 de junio del 2021, disponible en: <https://manifiesta.org/doble-amenaza-ser-mujer-y-defensora-de-derechos-humanos-en-colombia/?fbclid=IwAR2G8I9h20J-SPchsgX8f4dXPQtk9kz3u3RvmW17ABypEbMKCg>

⁵⁴ Amnistía Internacional, Colombia: preocupan las denuncias de desapariciones y de violencia sexual contra manifestantes, 7 de mayo del 2021, disponible en: <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/05/colombia-preocupan-las-denuncias-de-desapariciones-y-violencia-sexual-contra-manifestantes/>

3.2 DENUNCIAS REITERADAS DE USO EXCESIVO DE LA FUERZA POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ESCUADRÓN MÓVIL ANTIDISTURBIOS (ESMAD) CONTRA LA PROTESTA SOCIAL

Amnistía Internacional ha denunciado en numerosas oportunidades violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidas por agentes de la Policía Nacional en el marco de manifestaciones sociales. En junio del año 2017, la organización denunció el uso desmedido de la fuerza contra los manifestantes en el marco del Paro Cívico de Buenaventura⁵⁵. En noviembre del año 2019⁵⁶, Amnistía Internacional verificó al menos cinco violaciones a los derechos humanos cometidas por el ESMAD en respuesta a protestas sociales. Asimismo, en septiembre del año 2020⁵⁷, la organización denunció el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública e incluso crímenes de derecho internacional, como la tortura, y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En septiembre del 2020, la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió un fallo histórico⁵⁸ en el cual amparó el derecho a la manifestación pacífica y reiteró el deber de las autoridades nacionales de “conjurar, prevenir y sancionar la intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas”, tras verificar hechos de violencia desmedida ocurridos en noviembre y diciembre del año 2019. En este fallo, el alto tribunal afirmó que “existió -y puede seguir existiendo- una reiterada y constante agresión desproporcionada de la fuerza pública respecto de quienes, de manera pacífica, se manifestaron”⁵⁹.

El 6 de mayo de 2021, organizaciones de derechos humanos denunciaron que el Gobierno colombiano incumplió sistemáticamente las órdenes de la Corte Suprema y, por lo tanto, solicitaron que se declare el desacato del presidente de la República, del ministro de Defensa, del director de la Policía Nacional, del defensor del pueblo, de la procuradora general de la Nación y del fiscal general⁶⁰.

Para Amnistía Internacional este antecedente de derecho interno es relevante y constituye un indicio de la responsabilidad de las autoridades en la omisión de realizar acciones tendientes a garantizar los derechos a la protesta pacífica, a la vida y a la integridad de manifestantes. A pesar de las órdenes explícitas, el Poder Ejecutivo no ha tomado hasta el presente las medidas idóneas para evitar su repetición. Por el contrario, las declaraciones públicas del presidente Iván Duque y su gabinete están orientadas a estigmatizar y criminalizar la protesta social, en lugar de condenar la violencia por parte de agentes del Estado y hacer un llamado a garantizar los derechos de las víctimas. Esto ha incentivado el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales y es posible afirmar que la represión de la protesta social se ha convertido en un patrón de accionar de la fuerza pública.

El Ministerio de Defensa, en su balance al 24 de junio de 2021, informó sobre cuatro expedientes de investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación contra integrantes de la fuerza

⁵⁵ Amnistía Internacional, Colombia: Hechos violentos en el marco del Paro Cívico de Buenaventura deben parar, 1 de junio de 2017, disponible en: <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/06/colombia-hechos-violentos-en-el-marco-del-paro-civico-de-buenaventura-deben-parar/>

⁵⁶ Amnistía Internacional, Colombia: las autoridades deben investigar imparcialmente la represión de las protestas, 22 de noviembre del 2019, disponible en: <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/11/colombia-autoridades-deben-investigar-represion-de-protestas/>.

⁵⁷ Amnistía Internacional, Colombia: Amnistía Internacional condena actos de tortura y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, 11 de septiembre de 2020, disponible en: <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/09/colombia-amnistia-condena-tortura-uso-excesivo-fuerza/>

⁵⁸ Corte Suprema de Justicia. STC7641-2020 Radicación n.º 11001-22-03-000-2019-02527-02, Magistrado Ponente Luis Armando Tolosa Villabona, 22 de septiembre de 2020. Disponible en: <https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2020/09/22/corte-suprema-ordena-medidas-para-garantizar-derecho-a-protesta-pacifica/> (último acceso el 4 de julio de 2021). Dejusticia, Corte Suprema de Justicia protege el derecho a la protesta frente a la violencia policial, septiembre 22 de 2020, disponible en: <https://www.dejusticia.org/corte-suprema-protege-el-derecho-a-la-protesta/> (último acceso el 2 de julio de 2021).

⁵⁹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, STC7641-2020, 22 de septiembre del 2020, disponible en: <https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2020/09/22/corte-suprema-ordena-medidas-para-garantizar-derecho-a-protesta-pacifica/> (último acceso el 4 de julio de 2021).

⁶⁰ Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, Le pedimos a la Corte Suprema que declare el desacato de la sentencia que protegió el derecho a la protesta, 6 de mayo de 2021, disponible en <https://flip.org.co/index.php/en/informacion/pronunciamentos/item/2718-le-pedimos-a-la-corte-suprema-que-declare-el-desacato-de-la-sentencia-que-protegio-el-derecho-a-la-protesta>

pública y 34 investigaciones iniciadas por la Justicia Penal Militar⁶¹. A su vez, el director de la Policía Jorge Luis Vargas declaró públicamente que se “está enviando a la Justicia Penal Militar a la ciudad de Cali información sobre uniformados ya identificados, donde presuntamente hayan cometido actos contrarios a la ley o haya omitido sus funciones”⁶².

La respuesta de las autoridades de Colombia debe centrarse en garantizar investigaciones independientes, exhaustivas e imparciales sobre las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de derecho internacional.

Cabe recordar que los tribunales militares no deben tener competencia para juzgar a miembros del Ejército y de las fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos⁶³ o crímenes de derecho internacional. Dado que la mayoría de los tribunales militares están formados por miembros del Ejército, el respeto del derecho a ser juzgado por un tribunal que sea y también parezca independiente e imparcial se vuelve ilusorio⁶⁴.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado su jurisprudencia definiendo las limitaciones que debe observar la jurisdicción militar: a) no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de todas las violaciones de derechos humanos, b) sólo puede juzgar a militares en servicio activo, y c) sólo puede juzgar la comisión de delitos o faltas (cometidos por militares activos) que atenten, por su propia naturaleza, contra bienes jurídicos propios del orden militar⁶⁵.

3.3 LA ESTIGMATIZACIÓN DE LA PROTESTA PACÍFICA COMO JUSTIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA Y DE LA REPRESIÓN POLICIAL

La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez reconoció que el 88.5% de las manifestaciones han sido pacíficas⁶⁶.

En efecto, desde los primeros días de las protestas, se presentaron multitudinarias manifestaciones pacíficas. Sin embargo, Amnistía Internacional también ha recibido denuncias de destrucción y daño a bienes públicos y privados, así como cortes de ruta/bloqueo de vías. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, estas expresiones violentas dejan un saldo lamentable de policías lesionados y dos agentes fallecidos a nivel nacional⁶⁷. El balance para la ciudad de Cali al 18 de mayo de 2021⁶⁸ es de siete civiles fallecidos y 494 lesionados, ningún agente de Policía Nacional fallecido y 204 agentes lesionados. El reporte del Ministerio también da cuenta de la realización de 116 concentraciones, 47 marchas, 243 bloqueos que afectan ejes

⁶¹ Ministerio de Defensa Nacional, balance del paro nacional del 28 de abril al 24 de junio, disponible en: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios_sectoriales/info_estadistica/InformeCorrido_Balance_Paro_2021.pdf (último acceso el 2 de julio de 2021).

⁶² Revista Semana, “Balance trágico: 13 personas perdieron la vida anoche en Cali en medio de actos violentos”, disponible en: <https://www.semana.com/nacion/articulo/balance-tragico-11-personas-perdieron-la-vida-anoche-en-cali-en-medio-de-actos-violentos/202100/> (último acceso el 2 de julio de 2021).

⁶³ Principio 29 del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos; véase principios 5, 8 y 9 del Proyecto de Principios sobre la Administración de Justicia por los Tribunales Militares, Doc. ONU: E/CN.4/2006/58; relator especial sobre la cuestión de la tortura, Doc. ONU: A/56/156 (2001), párr. 39.j; CAT, Observaciones finales: Perú, Doc. ONU: CAT/C/PER/CO/4 (2006), párr. 16.a. Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria: Ecuador, Doc. ONU: A/HRC/4/40/Add.2 (2006), párr. 101.e en: Amnistía Internacional. Manual de Amnistía Internacional. Juicios Justos. Segunda Edición, 2014, pág. 244.

⁶⁴ Amnistía Internacional. Manual de Amnistía Internacional. Juicios Justos. Segunda Edición, 2014, pág. 244.

⁶⁵ Corte IDH. Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2015. Serie C No. 308, para. 146.

⁶⁶ Declaración de la Vicepresidenta y Canciller, Marta Lucía Ramírez, al término de la reunión con la Representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Juliette de Rivero, 25 de junio de 2021, disponible en: <https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/video/declaracion-vicepresidente-canciller-marta-lucia-ramirez-termino-reunion> (último acceso el 5 de julio de 2021).

⁶⁷ Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, Balance general- paro nacional 2021, corte 24 de junio de 2021, disponible en: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios_sectoriales/info_estadistica/InformeCorrido_Balance_Paro_2021.pdf

⁶⁸ Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, Balance Cali paro nacional 2021, 18 de mayo de 2021, disponible en: <https://twitter.com/mindefensa/status/1395205375322886151?s=20> (último acceso el 2 de julio de 2021).

viales y 4 movilizaciones. Asimismo, la Policía Nacional reporta una grave denuncia de violencia sexual cometida contra una de sus agentes⁶⁹.

Algunos manifestantes han denunciado ante Amnistía Internacional que los hechos de violencia en las manifestaciones son aislados y corresponden, en algunos casos, a personas ajenas a la protesta, que pretenden deslegitimarla y justificar el uso excesivo de la fuerza. En la ponderación analítica entre las posibles expresiones violentas de algunas personas y la garantía del derecho a la protesta, Amnistía Internacional recuerda la Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos en la que se establece una presunción en favor de considerar que las reuniones son pacíficas y que actos de violencia aislados de algunos participantes no tornan toda la protesta como violenta. Además, las medidas que dispongan cualquier tipo de restricción a la participación en reuniones pacíficas deben basarse en una evaluación diferenciada o individualizada de la conducta de los participantes pues las restricciones generales son consideradas desproporcionadas⁷⁰.

Por ejemplo, las cifras de violencia policial denunciadas por organizaciones locales en Cali son alarmantes. La ‘Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas’ alertó que, desde el 28 de abril al 25 de junio, en Cali se han presentado 28 asesinatos, presuntamente cometidos por agentes de fuerza pública y civiles armados que han actuado con aquiescencia y tolerancia de la Policía Nacional. Además, la campaña reporta 1435 personas heridas en el marco de manifestaciones, de las cuales 145 han sido heridas por arma de fuego⁷¹. Por su parte, la ONG Temblores denunció que al menos 26 personas han sido asesinadas presuntamente por la fuerza pública en Cali desde el inicio del paro al 16 de junio⁷².

A pesar de las constantes alertas de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los llamados realizados por Amnistía Internacional, el gobierno colombiano ha centrado su intervención en la estigmatización de la protesta social, y con ello, ha legitimado y alentado el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la fuerza pública y la militarización de las ciudades.

Miembros del partido de gobierno, han hecho llamados públicos alentando el manejo militar de la protesta:

“El Ejército en las calles es urgente y mejor que estar registrando la noticia de asesinato y destrucción vandálica”

Álvaro Uribe Vélez⁷³

Asimismo, el presidente de la república señaló:

“No vamos a permitir que las vías de hecho, la destrucción de bienes públicos y privados o el mensaje de odio tenga cabida en nuestro país [...] como comandante supremo de las fuerzas armadas, la figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población”

Iván Duque⁷⁴

Amnistía Internacional publicó una denuncia el 4 de mayo⁷⁵, con evidencia audiovisual verificada por su Cuerpo de Verificación Digital, y confirmó que la Policía Nacional ha usado armamento letal contra manifestantes pacíficos en varios incidentes a nivel nacional, así como armas menos letales de manera indiscriminada, como gases lacrimógenos y cañones de agua. En un incidente en Cali, se pudo confirmar el uso del rifle Galil Tavor el 30 de abril. De acuerdo con información Pública, esta es un arma de apoyo de largo alcance “con mayor poder de fuego especial para combate urbano y rural”⁷⁶. El uso de este tipo de armamento

⁶⁹ Policía Nacional de Colombia, Pronunciamiento de la CIDH sobre el grave abuso de la patrullera en Cali, 23 de mayo de 2021, disponible en: <https://www.policia.gov.co/noticia/pronunciamiento-cidh-sobre-grave-abuso-patrullera-cali>, (último acceso el 5 de julio de 2021).

⁷⁰ Comité de Derechos Humanos. Observación general núm. 37 (2020), relativa al derecho de reunión pacífica (artículo 21), CCPR/C/GC/37, 17 de septiembre de 2020, para. 38.

⁷¹ Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas, informe enviado a Amnistía Internacional el 25 de junio de 2021.

⁷² Temblores ONG, reporte sobre Cali enviado a Amnistía Internacional el 19 de junio de 2021.

⁷³ Álvaro Uribe Vélez, 29 de abril de 2021, disponible en: <https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1387724558111842307?s=20> (último acceso el 2 de julio de 2021).

⁷⁴ Presidencia de la República de Colombia, alocución de Iván Duque, 1 de mayo de 2021, disponible en: <https://twitter.com/Infopresidencia/status/1388692317922631680?s=20> (último acceso el 2 de julio de 2021).

⁷⁵ Amnistía Internacional, Colombia: Amnistía Internacional denuncia la respuesta militarizada y represión policial de manifestaciones, 4 de mayo de 2021, disponible en: <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/05/colombia-amnistia-denuncia-respuesta-militarizada-represion-policial/>

⁷⁶ Policía Nacional de Colombia, Medios Técnicos de las unidades de protección a dignatarios e instalaciones de la Policía Nacional, disponible en: <https://www.policia.gov.co/especializados/proteccion/medios-tecnicos> (último acceso el 2 de julio de 2021).

para la dispersión de protestas constituye una violación de los estándares internacionales sobre empleo de armas de fuego⁷⁷.

A pesar de las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional, el presidente Duque ha evadido rechazar el uso excesivo de la fuerza por agentes del Estado y no ha hecho un llamado enfático a garantizar la investigación y la sanción de los agentes responsables de estos crímenes. Por el contrario, ha centrado su preocupación en ataques a estaciones de la Policía, peajes, supermercados y destrucción de bienes públicos y privados y ha justificado la militarización como respuesta.

“La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía, distraer las acciones de la fuerza pública. El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulado por mafias del narcotráfico como lo denunció el Fiscal General de la Nación”

Iván Duque⁷⁸

Por su parte, el fiscal general de la Nación, en reiteradas ocasiones, ha centrado sus declaraciones en asegurar que las manifestaciones son “violentas” y están infiltradas por grupos armados. Estas afirmaciones deben sustentarse en investigaciones sólidas y públicas que permitan dar cuenta de los riesgos inminentes para la vida e integridad de las personas manifestantes.

“[La protesta pública] se encuentra protegida constitucionalmente, teniendo como límite la comisión de delitos. Por tanto, lo visto en el suroccidente colombiano, como fue en Cali, Tuluá, Buga, Bugalagrande y Popayán, tiene relación con dos tiempos. Uno, que se da por las mañanas cuando la gente sale a marchar o protestar tranquilamente, y otro, en horas de la tarde, cuando entran algunas personas a generar violencia, destrucción y terrorismo [...] tenemos evidencia en la ciudad de Cali sobre la participación de la “segunda Marquetalia”, además de mencionar estructuras armadas ilegales como Dagoberto Ramos, disidencias de las antiguas FARC y el ELN”

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación⁷⁹

En un país que ha vivido más de 60 años un conflicto armado interno, la dialéctica del enemigo interno para calificar las manifestaciones sociales masivas, pone en grave riesgo a personas que protestan legítimamente. En su comunicado, la CIDH recomendó al Estado colombiano separar la Policía y su cuerpo de ESMAD del Ministerio de Defensa “a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares”⁸⁰.

El 28 de mayo, el gobierno publicó el Decreto 575 de 2021 “por el cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público”. Este decreto ordenó a los gobernadores de los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, así como a los alcaldes de Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva que coordinen la asistencia militar para afrontar hechos que alteren la seguridad y levantar los bloqueos en las vías”⁸¹. Este decreto ha sido ampliamente rechazado por organizaciones de la sociedad civil⁸², para quienes la figura de “asistencia militar” no puede usarse para enfrentar manifestaciones. Además, dicho decreto no contempla límite de tiempo para esta figura de militarización, lo que puede significar su prolongación indefinida y, con ello, se acentúan los riesgos de

⁷⁷ Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

⁷⁸ Presidencia de la República de Colombia, alocución de Iván Duque, 5 de mayo del 2021, disponible en: <https://twitter.com/infopresidencia/status/1389982704138170371?s=20> (último acceso el 2 de julio de 2021).

⁷⁹ Fiscalía General de la Nación, comunicado del 31 de mayo de 2021, “En el marco de las manifestaciones violentas registradas en el país, 308 personas han sido localizadas y se mantiene activo el mecanismo de búsqueda urgente en 111 casos”, disponible en: <https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/161367/cifras-y-datos-en-cali-y-el-valle-entre-gobierno-el-fiscal-general-de-la-nacion-a-la-cidh/> (último acceso el 2 de julio de 2021).

⁸⁰ CIDH. Observaciones y Recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021, recomendación 14, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf.

⁸¹ Ministerio del Interior, Decreto 575 de 2021, 28 de mayo de 2021, disponible en: <https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20575%20DEL%2028%20DE%20MAYO%20DE%202021.pdf> (último acceso el 2 de julio de 2021).

⁸² Uprimny Rodrigo, Dejusticia, “Protesta, proporcionalidad, bloqueos. A propósito del decreto 575”, 31 de mayo de 2021, disponible en <https://www.dejusticia.org/column/protesta-proporcionalidad-y-bloqueos-a-proposito-del-decreto-575/> (último acceso el 2 de julio de 2021).

violaciones a derechos humanos. El 23 de julio de 2021 el Consejo de Estado suspendió transitoriamente el Decreto 575 de 2021 por considerar que amenaza el derecho a la protesta social⁸³.

Asimismo, el ministro del Interior anunció una modificación al Decreto 003 de 2021, para establecer que “no constituye manifestación pacífica, aquella que promueva el empleo de medios para obstaculizar temporal o permanentemente vías o infraestructura”⁸⁴. Estas maniobras legales, alertan sobre la intención de limitar el derecho a la protesta social y justificar la actuación de la fuerza pública contra manifestantes, aun cuando el uso del espacio público para reuniones pacíficas es un uso legítimo e implica por su naturaleza cierta obstaculización de vías públicas.

Al respecto, el Informe conjunto del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca de la gestión adecuada de las manifestaciones señala que

Las reuniones son un uso tan legítimo del espacio público como las actividades comerciales o el tránsito de vehículos y peatones. Todo uso del espacio público requiere cierta medida de coordinación para proteger intereses distintos, pero hay muchas formas legítimas en que los ciudadanos pueden utilizar los espacios públicos. Debe tolerarse cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana a causa de las concentraciones, como la perturbación del tráfico y las molestias o incluso los perjuicios para las actividades comerciales, a fin de que no se prive al derecho de su esencia (pies de página omitidos)⁸⁵.

Adicionalmente, de acuerdo con información pública el secretario de Seguridad Civil de Cali fue sustituido por un coronel retirado del Ejército Nacional⁸⁶.

Amnistía Internacional ha recibido cientos de denuncias de la presencia del Ejército Nacional en distintos puntos de la ciudad de Cali, situación que genera temor y desestimula a quienes desean protestar pacíficamente. La presencia militar se justificó en la necesidad de proteger a la población, sin embargo, en esta ciudad se presentan las más graves denuncias de uso excesivo de la fuerza, represión a la manifestación pacífica, heridos y lesionados, entre otros graves hechos que serán analizados en el Capítulo 4.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como Colombia, deben “limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”⁸⁷.

En su sentencia en el caso *Alvarado Espinoza y otros Vs. México*, la Corte determinó que “el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles”⁸⁸ y que la participación excepcional de las fuerzas armadas en estas tareas debe ser:

- a) Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso;
- b) Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial;

⁸³ Consejo de Estado suspende provisionalmente decreto de asistencia militar para conjurar problemas de orden público durante protestas, 23 de julio de 2021. Disponible en: <https://www.consejodeestado.gov.co/news/consejo-de-estado-suspende-provisionalmente-decreto-de-asistencia-militar-para-conjurar-problemas-de-orden-publico-durante-protestas/> (último acceso el 23 de julio de 2021).

⁸⁴ Ministro del Interior, Daniel Palacios, declaración pública, disponible en: <https://twitter.com/DanielPalam/status/1405895059556474884?s=20> (último acceso el 2 de julio de 2021).

⁸⁵ Consejo de Derechos Humanos. Informe conjunto del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca de la gestión adecuada de las manifestaciones, A/HRC/31/66, 4 de febrero de 2016. Para. 32.

⁸⁶ Alcaldía de Cali, Carlos Javier Soler Parra nuevo Secretario de Seguridad y Justicia, 30 de mayo de 2021, disponible en: <https://www.cali.gov.co/seguridad/publicaciones/161140/carlos-javier-soler-parra-nuevo-secretario-de-seguridad-y-justicia/> (último acceso el 5 de julio de 2021).

⁸⁷ Corte IDH. *Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, Párr. 78; *Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166. Párr. 51; *Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 88.

⁸⁸ Corte IDH. *Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, párr. 182.

c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y

d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.

Al no haber cumplido con estas condiciones, Amnistía Internacional condena el despliegue militar por las autoridades colombianas con el único objetivo de reprimir manifestaciones, así como los intentos por limitar el derecho a la protesta social, por ser contrario a los estándares internacionales de derechos humanos y puede propiciar la comisión graves crímenes de derecho internacional.

La organización recuerda además que en términos de responsabilidad penal individual no solo el personal de las fuerzas de seguridad que pudiera cometer materialmente violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional debe rendir cuentas, sino que también pueden ser hallados responsables todos los superiores que dicten órdenes ilícitas, las supervisen o consientan.

4. CALI: EPICENTRO DE LA VIOLENCIA CONTRA MANIFESTANTES POR PARTE DE LA FUERZA PÚBLICA Y DE GRUPOS DE CIVILES ARMADOS

Cali es una ciudad conectada al Pacífico colombiano, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado interno. En la actualidad la ciudad tiene reportes de proliferación de actores armados ilegales que continúan dejando miles de personas desplazadas y asesinadas⁸⁹. Cali es reconocida por acoger poblaciones afrodescendientes desplazadas forzosamente desde los departamentos del Chocó, Cauca, Nariño y ciudades como Buenaventura⁹⁰. Actualmente, como consecuencia de la pandemia, las cifras sobre violencia, desigualdad y desempleo están en alza, según informes de las entidades nacionales como el DANE⁹¹, que reportó entre diciembre de 2020 y febrero del 2021 una tasa de desempleo juvenil del 27.6% en la ciudad. Cali es la segunda ciudad con mayor población negra/afrodescendiente en Latinoamérica⁹² y se caracteriza por la histórica desigualdad, la exclusión y el racismo estructural⁹³.

En los hechos de violencia registrados durante el Paro Nacional, las organizaciones denuncian que:

En el contexto de las protestas y el uso de fuerza excesiva, el perfilamiento racial basado en los estereotipos negativos y racistas de los jóvenes afrodescendientes no solo sustenta las

⁸⁹ Defensoría del Pueblo de Colombia, 28.509 personas fueron desplazadas y confinadas en 2020 por hechos violentos, 7 de enero de 2021, disponible en <https://www.defensoria.gov.co/es/nube/destacados/9802/28509-personas-fueron-desplazadas-y-confinadas-en-2020-por-hechos-violentos.htm> (último acceso el 5 de julio de 2021).

⁹⁰ Gobernación de Valle del Cauca, Desplazamiento Forzado en las Comunas de Santiago de Cali: Análisis Espacial de Efecto de Vecindad, 15 de noviembre de 2021, <https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?Servicio=Tools2&ITipo=viewpdf&id=28753> (último acceso 5 de julio de 2021).

⁹¹ El País, No se recupera mercado laboral en Cali: hay más de 279 mil desempleados, 31 de marzo de 2021, disponible en: <https://www.elpais.com.co/cali/no-se-recupera-mercado-laboral-en-hay-mas-de-279-mil-desempleados.html> (último acceso el 3 de julio de 2021).

⁹² Alcaldía de Santiago de Cali (2013). Cali, segunda ciudad con mayor población afrodescendiente en el país. Disponible en: https://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/51642/cali_segunda_ciudad_con_mayor_poblacion_afrodescendiente_en_el_pais/ (último acceso el 3 de julio de 2021).

⁹³ Entrevista a Erendy Cuero Bravo, Afrodes, 15 de junio de 2021.

acciones de violencia por parte de los agentes del Estado, sino que también es fundamental en la tendencia institucional de negación de la responsabilidad estatal y la impunidad. Ya empiezan a surgir argumentos, basados en prejuicios sociales, y discursos peligrosos en los medios de comunicación acerca de la violencia entre pandillas y de otro tipo de conflictos urbanos preexistentes, para cuestionar la participación de muchos de los jóvenes en las protestas a fin de presentarlos socialmente como delincuentes y criminales asesinados en el contexto de la violencia cotidiana de sus comunidades en lugar de manifestantes ejerciendo su derecho a la protesta social⁹⁴.

Amnistía Internacional tuvo acceso a testimonios de jóvenes manifestantes de “primera línea”⁹⁵ en Cali, quienes aseguraron que “los que ponen el pecho [...] no tienen nada que perder. No tienen miedo. Si no te mata el Estado, te van a matar aquí en las comunas a punto de hambre o en el conflicto interno entre las pandillas”⁹⁶. Los barrios donde se instalaron “puntos de resistencia”⁹⁷, coinciden con los barrios más empobrecidos y violentos de la ciudad y fueron aquellos más golpeados por la represión policial dejando un saldo aterrador de jóvenes asesinados. La defensora de derechos humanos Erlendy Cuero afirmó a Amnistía Internacional que los niveles de pobreza y desempleo en estos barrios es alarmante⁹⁸.

En Cali también se han forjado varios de los movimientos y organizaciones de derechos humanos históricos en Colombia, así como movimientos sindicales, estudiantiles y feministas con gran capacidad de organización y denuncia. La capacidad organizativa de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas es destacable y por tal motivo, la Minga Indígena⁹⁹ ha podido desarrollarse varias veces en esta ciudad¹⁰⁰.

A través de una rigurosa investigación y verificación de material audiovisual, Amnistía Internacional documentó ataques de civiles armados, quienes, acompañando a agentes de la Policía Nacional, y con su aquiescencia y tolerancia, atacaron a manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos, constituyendo así expresiones de paramilitarismo urbano.

Por su parte, el Movimiento de Crímenes de Estado (MOVICE) ha denunciado la grave situación de riesgo y amenazas dirigidas contra personas defensoras de los derechos humanos como la Asociación para la Investigación y Acción Social Nomadesc, Movice Capítulo Valle y organizaciones indígenas como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (ACIN). Las denuncias alertan sobre ataques armados y temor ante “operaciones armadas de tipo paramilitar, unas que se realizan por civiles armados y otra de policías vestidos de civil para asegurar impunidad en una criminalidad de Estado que de ninguna manera asegura respuesta a demandas de vivienda, de alimentación, de salud, de educación y empleo a los excluidos y discriminados de Cali”¹⁰¹.

El 4 de mayo, Amnistía Internacional recibió una denuncia sobre una agresión de agentes de la Policía Nacional a una misión de verificación de derechos humanos conformada por varias organizaciones de la sociedad civil, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, mientras verificaban la situación de personas detenidas. En estos hechos, se denunció la agresión física y amenazas de muerte contra los defensores James Larrea, Darnelly Rodríguez y Ana María Burgos¹⁰².

⁹⁴ Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, Análisis étnico-racial del uso excesivo de fuerza por parte de los agentes del Estado en Cali, 21 de mayo de 2021, disponible en: <https://codhes.files.wordpress.com/2021/05/codhes-wp-analisis-ecc81tnicoracial-del-paro-en-cali-df.pdf> (último acceso el 3 de julio de 2021).

⁹⁵ La “Primera Línea” hace referencia al grupo de manifestantes que se ubican frente al Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, con escudos y cascos, con el ánimo de defender al grupo de un posible ataque con gases lacrimógenos o bombas aturdivoras. Estos grupos también se formaron durante las protestas en Chile y Hong Kong.

⁹⁶ Connectas, El desafío de una generación que grita ¡Futuro!, mayo de 2021, disponible en <https://www.connectas.org/protestas-y-represion-en-colombia/> (último acceso el 3 de julio de 2021).

⁹⁷ Puntos en los cuales se concentran manifestantes pacíficos para realizar actividades culturales y comidas colectivas. En algunos de estos puntos, se realizaron bloqueos temporales de vías.

⁹⁸ Entrevista a Erlendy Cuero Bravo, Afrodes, 15 de junio de 2021.

⁹⁹ La Minga es una reunión de diversos actores, organizaciones, movimientos sociales, con el objetivo de dialogar y generar soluciones a problemas sociales y políticos. La Minga Indígena es una manifestación pacífica de Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes y movimientos sociales que se reúne en apoyo a protestas sociales.

¹⁰⁰ El País, Paro nacional: ¿por qué Cali fue el epicentro del estallido social?, 8 de mayo de 2021, disponible en: <https://www.elpais.com.co/cali/paro-nacional-por-que-cali-fue-el-epicentro-del-estallido-social.html> (último acceso el 3 de julio de 2021).

¹⁰¹ Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Informe Cali, ataques armados a manifestantes y Defensores de Derechos Humanos, 2 de junio de 2021, disponible en: <https://www.justiciaypazcolombia.com/informe-cali-ataques-armados-a-manifestantes-y-defensores-de-derechos-humanos/> (último acceso el 3 de julio de 2021).

¹⁰² Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas, Defensores y defensoras de derechos humanos objetivo directo de la represión estatal, 4 de mayo de 2021, disponible en: <https://defenderlalibertad.com/defensores-y-defensoras-de-derechos-humanos-objetivo-directo-de-la-represion-estatal-en-colombia/> (último acceso el 3 de julio de 2021).

Asimismo, Amnistía Internacional recibió denuncias de ataques a misiones médicas¹⁰³ así como ataques a periodistas que acompañaban las manifestaciones, por parte de agentes de Policía y en particular del ESMAD. En Cali la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró ataques a la prensa por parte de agentes de la fuerza pública y algunos también por parte de manifestantes, en particular se denuncian ataques contra los medios alternativos¹⁰⁴.

De acuerdo a cifras de la ‘Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas’, en Cali se reportaron 28 asesinatos en el contexto de manifestaciones, desde el 28 de abril al 25 de junio. La Consultoría para los derechos humanos CODHES, denunció que, al 6 de junio, más de 100 homicidios han ocurrido en Cali en el marco de manifestaciones, afectando en su gran mayoría a jóvenes afrodescendientes¹⁰⁵.

La mesa interinstitucional de información en el marco de la protesta social, “con el propósito de informar de manera oportuna y transparente sobre los casos de homicidios y presuntos desaparecidos que se han presentado durante las manifestaciones”¹⁰⁶ instalada por la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación en su informe ante la CIDH informó de 79 casos activos en Cali en el Mecanismo de Búsqueda Urgente de personas, así como cinco denuncias de posibles desapariciones forzadas en el marco de las manifestaciones. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca en su informe a la CIDH, allegado como anexo a la respuesta a la solicitud de información realizada por Amnistía Internacional señaló que de 236 presuntos desaparecidos aparecieron vivos 101, cuatro aparecieron muertos y 131 están pendientes por buscar¹⁰⁷.

En cuanto al reporte sobre homicidios, el informe indica que habrían tenido lugar 45 muertes violentas en el Valle del Cauca y que la Fiscalía “tiene pruebas suficientes de que 20 de estos presuntos homicidios se dieron en el marco de manifestaciones públicas”¹⁰⁸. Amnistía Internacional considera que estas cifras son alarmantes y exigen que toda la capacidad del Estado esté a disposición de investigar con debida diligencia lo que ha ocurrido en los más de dos meses de paro nacional en Cali. Si bien la instalación de la Mesa Interinstitucional puede ofrecer resultados en materia de información y trazabilidad, es importante destacar que la Defensoría del Pueblo debe mantener un papel autónomo de seguimiento de las entidades encargadas de investigar graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas la Fiscalía General de la Nación.

Por su parte, en su balance público al 18 de mayo, el Ministerio de Defensa reportó siete civiles fallecidos¹⁰⁹. Con independencia de las diferencias en las cifras de organizaciones sociales y autoridades nacionales¹¹⁰, Amnistía Internacional recoge con preocupación los testimonios de las víctimas y comunidades en Cali, que denuncian asesinatos de jóvenes que han aparecido decapitados, incinerados o desmembrados y hallados en los ríos cercanos a la ciudad, sin que a la fecha se hayan iniciado investigaciones para determinar a los responsables de los hechos y garantizar justicia.

Por otra parte, la Campaña Defender la Libertad reporta que en Cali se suman 1435 casos de personas heridas, de las cuales 145 han sido heridas por arma de fuego y 247 denuncias de detenciones arbitrarias. Además, la Campaña reportó diez casos de agresiones a personas defensoras de los derechos humanos que

¹⁰³ Pacifista, Policías y “civiles” estarían emboscando y persiguiendo a los voluntarios médicos de Cali, 21 de junio de 2021, disponible en: <https://pacifista.tv/notas/policias-y-civiles-estarian-emboscando-y-persiguiendo-a-los-voluntarios-medicos-de-cali/> (último acceso el 3 de julio de 2021).

¹⁰⁴ Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, Informe sobre Cali enviado a Amnistía Internacional el 1 de julio de 2021.

¹⁰⁵ Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, Análisis étnico-racial del uso excesivo de fuerza por parte de los agentes del Estado en Cali, 21 de mayo de 2021, disponible en: <https://codhes.files.wordpress.com/2021/05/codhes-wp-analisis-ecc81tnicoracial-del-paro-en-cali-df.pdf> (último acceso el 3 de julio de 2021).

¹⁰⁶ Fiscalía General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y Defensoría del Pueblo instalan Mesa Interinstitucional de información en el marco de la protesta social, comunicado del 5 de mayo de 2021, disponible en: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/fiscal-general-de-la-nacion/fiscalia-general-de-la-nacion-y-defensoria-del-pueblo-instalan-mesa-interinstitucional-de-informacion-en-el-marco-de-la-protesta-social/> (último acceso el 2 de julio de 2021).

¹⁰⁷ La comunicación de repuesta de la Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca de 6 de julio de 2021 señala “En atención a su solicitud de la referencia me permito remitir adjunto informe presentado a la Comisión Interamericana de derechos humanos donde reposa gran parte de la participación de la Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca, en las distintas actividades que se desarrollaron en el marco del paro nacional, acompañamientos, mediación y actuaciones humanitarias con base en lo establecido en la ley 24 de 1992 y el decreto 025 de 2014”.

¹⁰⁸ Defensoría del Pueblo, “Defensoría del Pueblo entrega a la CIDH balance sobre la situación de derechos humanos en el marco de la protesta”, junio 8 de 2021, comunicado disponible en: <https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10172/Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-entrega-a-la-CIDH-balance-sobre-la-situaci%C3%B3n-de-derechos-humanos-en-el-marco-de-la-protesta-CIDH-Defensor%C3%ADa.htm> (último acceso el 2 de julio de 2021).

¹⁰⁹ Ministerio de Defensa, Balance Cali paro nacional 2021, 28 de abril al 18 de mayo, disponible en: <https://twitter.com/mindefensa/status/1395205375322886151/photo/1> (último acceso el 3 de julio de 2021).

¹¹⁰ La Silla Vacía, En el paro mataron a 47 personas y la Fiscalía solo cuenta 24, junio 22 de 2021, disponible en: <https://lasillavacia.com/historias/silla-nacional/en-el-paro-fueron-asesinadas-47-personas-y-la-fiscal%C3%ADa-solo-cuenta-24/> (último acceso el 3 de julio de 2021).

han acompañado las protestas¹¹¹. Por su parte Temblores ONG denuncia que al menos siete manifestantes han sufrido graves lesiones oculares, como consecuencia de uso excesivo de la fuerza y no cumplimiento de los protocolos de utilización de armas menos letales, como lanzamiento de bombas lacrimógenas directamente a la cabeza y a corta distancia¹¹². Amnistía Internacional pudo verificar cientos de videos de Cali, en los que se puede evidenciar que los agentes del ESMAD no cumplen con los protocolos de utilización de armas menos letales y, por el contrario, causan lesiones o incluso la muerte a personas que ejercen su derecho a la manifestación pacífica¹¹³.

Preocupan a la organización las altas cifras de personas dadas por desaparecidas, reportadas por la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, quienes, al 26 de mayo, informaban sobre 66 personas desaparecidas en Cali y más de 200 en el departamento del Valle del Cauca.

En cuanto a las denuncias de violencias basadas en género, Amnistía Internacional tuvo conocimiento de la ocurrencia de al menos 15 casos ocurridos contra mujeres afrodescendientes en el marco de protestas en Cali¹¹⁴. Amnistía Internacional ha recibido denuncias de otros tres casos de mujeres sobrevivientes de violencia sexual en el marco de manifestaciones en Cali, quienes denuncian haber sido agredidas por agentes de la Policía Nacional, algunas cuando se encontraban bajo custodia en lugares transitorios de detención. Asimismo, la organización ha recibido denuncias de amenazas de violación y acoso sexual contra manifestantes y mujeres defensoras de los derechos humanos en Cali. De acuerdo al informe presentado ante la CIDH por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres “el Estado colombiano no cuenta con protocolos que incorporen un trato diferencial con enfoque de género que permita prevenir, atender, hacer seguimiento y sancionar las [violencias basadas en género] contra mujeres por parte de agentes de la fuerza pública en contextos de protestas públicas, entre otras, durante los procedimientos de capturas”¹¹⁵.

El 28 de mayo, el presidente Iván Duque decretó la militarización de Cali, aludiendo desmanes de orden público y bloqueos que afectaban la productividad y el abastecimiento de la ciudad. Esta decisión sembró terror en los manifestantes al dar tratamiento de guerra a la protesta social. Y esto, en un país con una historia de conflicto armado, no es menor. Según enfatizaron personas defensoras de los derechos humanos a Amnistía Internacional, la experiencia de militarización de territorios rurales en el marco del conflicto armado no ha garantizado la protección de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinas y personas defensoras de los derechos humanos, sino que, por el contrario, ha acentuado riesgos de ser víctimas de violencia armada. Soldados preparados para el conflicto armado “no están preparados para enfrentarse a ciudadanos angustiados y desesperados en las calles de grandes ciudades”¹¹⁶. Como lo ha reiterado Amnistía Internacional, esto puede agravar la situación de derechos humanos y acentuar el riesgo de la comisión de crímenes de derecho internacional.

El 1º de julio de 2021 la Alcaldía de Cali emitió el decreto N. 4112010200304, con el cual se buscaba lograr acuerdos al instalar una mesa de diálogo¹¹⁷. Este decreto fue suspendido por una orden judicial del 15 de junio¹¹⁸, limitando la posibilidad de entablar diálogos con las organizaciones y personas que se han manifestado en la ciudad.

¹¹¹ Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas, informe enviado a Amnistía Internacional el 25 de junio de 2021.

¹¹² Temblores ONG, reporte sobre Cali, enviado a Amnistía Internacional el 19 de junio de 2021.

¹¹³ Especialmente, nunca se deberían lanzar bombas lacrimógenas directamente contra personas, véase: Amnistía Internacional Países bajos: Sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley <https://www.amnesty.nl/content/uploads/2021/07/Amnistia-posicion-sustancias-quimicas-irritantes.pdf>, p. 12/13; y regla 9 en: 30 reglas para el uso de sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley <https://www.amnesty.nl/content/uploads/2021/07/Amnistia-posicion-sustancias-quimicas-irritantes.pdf>.

¹¹⁴ Proceso de Comunidades Negras, Informe afectaciones a pueblo negro afrodescendiente en Colombia en el marco del Paro Nacional, junio 9 de 2021.

¹¹⁵ Casa de la Mujer, Comunitar - Corporación de Mujeres Ecofeministas, Corporación Humanas, Corporación Jurídica Libertad, Defender la Libertad Asunto de Todas, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Proceso Social de Garantías para la Labor de los Líderes y Lideresas Sociales Comunes, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Antioquia, Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Ruta Pacífica de Mujeres, Sisma Mujer, Vamos Mujer, Women's Link Worldwide, Resumen ejecutivo del informe presentado a la CIDH durante su visita a Colombia entre el 8 y el 10 de junio de 2021, Violencias sexuales y otras violencias contra mujeres en el contexto del Paro Nacional de Colombia 2021, disponible en: <https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2021/06/Final-Resumen-Informe-CIDH-Orgs.-Mujeres.pdf> (último acceso el 3 de julio de 2021).

¹¹⁶ Wola, La violencia en Colombia requiere una respuesta contundente del gobierno de Biden, 1 de junio de 2021, disponible en: <https://www.wola.org/es/2021/06/violencia-colombia-requiere-respuesta-contundente-gobierno-biden/> (último acceso el 3 de julio de 2021).

¹¹⁷ Alcaldía de Cali, Alcaldía de Cali es pionera en firmar decreto para la construcción de acuerdos y mesa de diálogo con manifestantes, 1 de junio de 2021, disponible en: <https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/161158/alcaldia-de-cali-es-pionera-en-firmar-decreto-para-la-construccion-de-acuerdos-y-mesa-de-dialogo-con-manifestantes/> (último acceso el 3 de julio de 2021).

¹¹⁸ Radio Nacional de Colombia, Juez en Cali suspende decreto que respalda mesa de diálogos con manifestantes, 15 de junio de 2021, disponible en: <https://www.radionacional.co/actualidad/politica/juez-en-cali-suspende-decreto-que-respalda-mesa-de-dialogos-con-manifestantes> (último acceso el 5 de julio de 2021).

Cabe recordar que los estándares internacionales de derechos humanos establecen que el uso de la fuerza por parte de la fuerza pública debe ser un último recurso y deben guiarse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. El uso de armas letales o armas potencialmente letales contra manifestantes, en situaciones que no supongan una amenaza concreta a la vida o a la integridad de terceros, es considerado uso desproporcionado de la fuerza. En aquellos casos que representan una amenaza, las autoridades deben tomar las medidas necesarias para identificar a las personas que han cometido actos de violencia y deben proteger el derecho a la reunión pacífica. Al respecto, la CIDH ha indicado que “el accionar de las fuerzas de seguridad no debe desincentivar el derecho de reunión sino protegerlo, por ello la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas”¹¹⁹.

A tres meses del inicio del Paro Nacional, Amnistía Internacional ha recibido decenas de denuncias sobre homicidios, desapariciones forzadas, violencia sexual, agresiones contra periodistas y misiones médicas, así como violencia contra personas defensoras de los derechos humanos, cientos de personas lesionadas, algunas con lesiones oculares graves, expresiones de paramilitarismo urbano, entre otros hechos, que exigen la mayor eficiencia y diligencia de las autoridades para juzgar a los responsables y garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas. A continuación, se presentan tres casos emblemáticos de lo que ha ocurrido en Cali, como una muestra del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional a saber, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles e inhumanos y expresiones de paramilitarismo urbano.

4.1 LA “OPERACIÓN SILOÉ”: 3 DE MAYO DE 2021

Siloé es un barrio que hace parte de la comuna 20 de Cali y ha sido uno de los lugares donde más reportes de violaciones a los derechos humanos denuncian organizaciones, víctimas y comunidades, en el marco del paro nacional. Siloé es un barrio popular, que, según personas entrevistadas por Amnistía Internacional, se destaca por tener expresiones culturales y artísticas, así como iniciativas juveniles de organización social. El barrio también ha estado marcado por la violencia por parte de actores armados¹²⁰ y el microtráfico de drogas, que han acentuado los riesgos de niños y jóvenes que lo habitan.

Amnistía Internacional realizó entrevistas a familiares de víctimas, testigos de los hechos del 3 de mayo en la noche, así como personas de la comunidad. A partir de sus testimonios y de la verificación de material audiovisual, Amnistía Internacional documentó este episodio considerado emblemático, por los niveles de violencia registrados que dejaron al menos tres personas muertas y decenas de personas heridas.

De acuerdo, con la evidencia recabada por Amnistía Internacional, la noche del 3 de mayo, confluyeron en Siloé agentes de la Policía Nacional, entre ellos, agentes del ESMAD y del Grupo de Operaciones Especiales (GOES). La comunidad también denunció presencia de soldados del Ejército Nacional (para esa fecha el presidente Iván Duque ya había ordenado la asistencia militar a la ciudad¹²¹).

De acuerdo a los testimonios recibidos por Amnistía Internacional, esa noche hacia las 8:40 PM, un grupo de manifestantes realizaban una “velatón”¹²² en la glorieta del barrio, en homenaje al joven Nicolás Guerrero,¹²³ que según la organización Indepaz fuera asesinado el día anterior en Cali como consecuencia de heridas de arma de fuego accionadas presuntamente por agentes del ESMAD, mientras hacía parte de una marcha pacífica.

Según los testimonios recibidos por la organización, la manifestación se desarrollaba de forma pacífica. La glorieta de Siloé queda a corta distancia de la Estación de Policía el Lido. En el momento de los hechos, las entradas a la Glorieta estaban bloqueadas por manifestantes y jóvenes de la “primera línea”. Según relatos de los testigos, agentes del ESMAD irrumpieron violentamente, lanzando bombas lacrimógenas contra los manifestantes, sin que haya habido ningún evento violento por parte de los manifestantes. Según aseguran

¹¹⁹ CIDH. Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, OEA/Ser.LV/II.124, 7 marzo de 2006 párr. 63.

¹²⁰ France 24, Siloé: el barrio colombiano que resiste, entre la pobreza y la muerte, 25 de mayo de 2021, disponible en: <https://www.france24.com/es/programas/en-foco/20210524-protestas-colombia-siloe-cali-pobreza-violencia> (último acceso el 3 de julio de 2021).

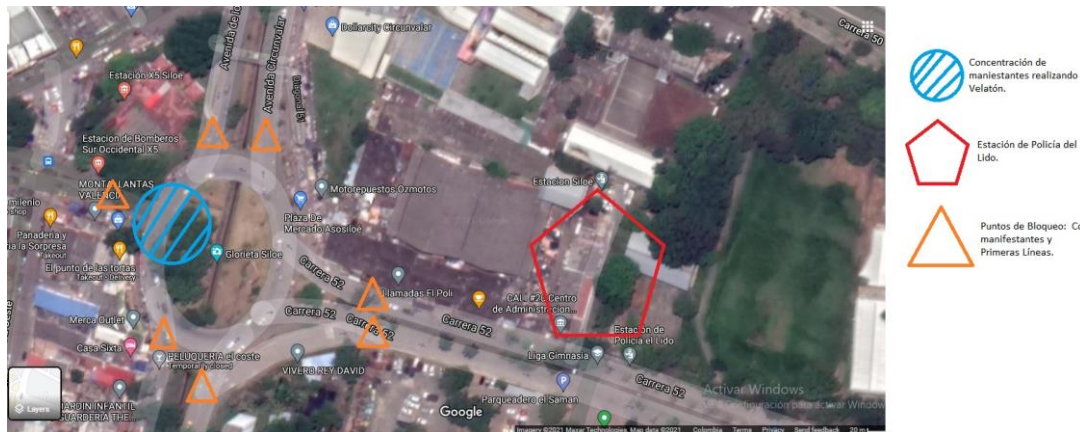
¹²¹ Liga Internacional de Mujeres por La Paz y La Libertad, Limpal Colombia, Por una vida en dignidad: más vida, menos armas, disponible en: <https://www.limpalcolombia.org/es/informate/noticias/agenda-de-paz-feminista-y-antimilitarista/57-por-una-vida-en-dignidad-mas-vida-menos-armas> (último acceso el 19 de julio de 2021).

¹²² Manifestación pacífica realizada en homenaje a los jóvenes heridos y asesinados, en este evento se prenden velas para recordarles.

¹²³ Indepaz, Registro de personas asesinadas presuntamente por la fuerza pública, 3 de mayo de 2021, disponible en: <https://twitter.com/Indepaz/status/1389315829137879048?s=20> (último acceso el 3 de julio de 2021).

testigos, hacia las 8:00 PM las personas ya estaban iniciando el retorno a sus hogares y “los chicos estaban tranquilos, dispersos”¹²⁴.

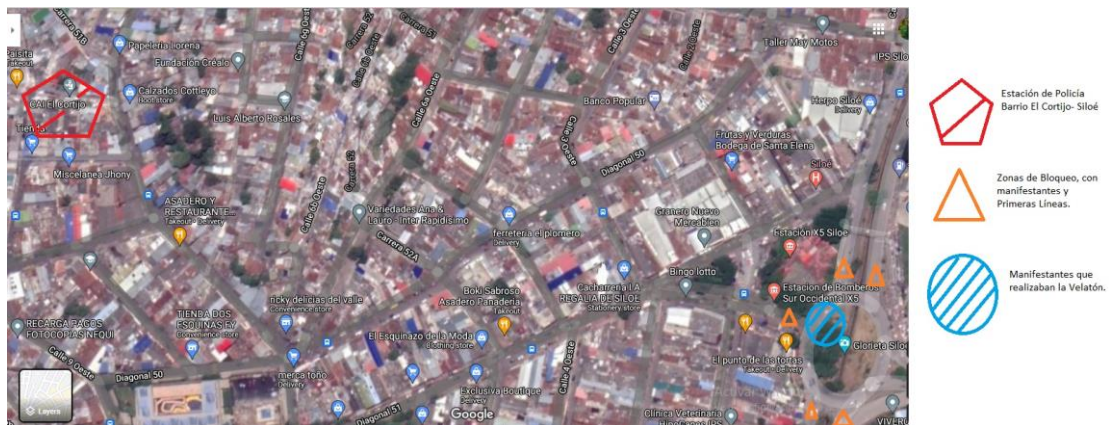
MAPA DE LA GLORIETA DE SILOÉ AL MOMENTO DE LA VELATÓN – 8:40 PM



☺↑ *Mapa elaborado por un habitante de Siloé testigo de los hechos del 3 de mayo quién solicitó reserva de su identidad por cuestiones de seguridad.*

Según relataron personas de la comunidad a Amnistía Internacional, en el barrio hay una segunda estación de Policía denominada El Cortijo a cinco cuadradas de la glorieta, donde se encontraban agentes del grupo especial GOES, hacia las 8:40 PM.

MAPA DE LA GLORIETA DE SILOÉ CON RELACIÓN A LA ESTACIÓN DE POLICÍA EL CORTIJO



☺↑ *Mapa elaborado por un habitante de Siloé testigo de los hechos del 3 de mayo quién solicitó reserva de su identidad por cuestiones de seguridad.*

A las 8:50 PM los testigos registraron la entrada violenta de una tanqueta Venom, con alrededor de 15 agentes, entre Policías y miembros del ESMAD, quienes dispersaron el primer bloqueo establecido por los jóvenes manifestantes, para acceder al punto donde se llevaba a cabo la “velatón”.

En este punto de concentración se encontraban niños, niñas, adolescentes, personas mayores, según relatan los testigos. Justo a esta hora, la comunidad manifiesta que hubo un corte de energía eléctrica en el sector¹²⁵.

El dispositivo Venom es un sistema de lanzamiento de proyectiles que “es utilizado para la dispersión de disturbios violentos a una distancia de rango de efectividad de 160 mts según el ángulo de inclinación que va de 10°, 20° y 30°, que tiene las siguientes características: calibre 38 MM carga útil, peso es de 19 Kg, cartuchos son desechables, 10 por cada casete, las elevaciones de lanzamiento son de 10° - 20° - 30°, altura es de 47 ctm, profundidad es de 47 ctm, profundidad es de 33.1. ctm, (sic) encendido eléctrico con baterías

¹²⁴ Entrevistas realizadas por Amnistía Internacional a testigos, familiares y personas de la comunidad. Por seguridad, se reserva la identidad de las personas que rindieron su testimonio ante la organización. La palabra “dispersos”, hace referencia a que los jóvenes ya no estaban en conjunto, sino que se habían separado para regresar a sus hogares.

¹²⁵ Entrevistas realizadas por Amnistía Internacional a testigos, familiares y personas de la comunidad. Por seguridad, se reserva la identidad de las personas que rindieron su testimonio ante la organización.

o pilas de 12 voltios [...] los cartuchos con carga lacrimógena, fumígena o de aturdimiento no deben ser dirigidos directamente contra las personas, porque puede generar hematomas, quemaduras o lesiones internas”¹²⁶.

La Resolución No. 02903 de 2017 de la Policía Nacional reglamentó “el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales por parte de la Policía Nacional” y en su artículo 18 clasificó las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales que pueden ser usados por la Policía Nacional incluyendo en el numeral 4.a) la utilización de “lanzadores múltiples eléctricos” por lo cual el dispositivo VENOM es considerado un arma menos letal.

El dispositivo Venom, en ocasiones, como en Siloé, es colocado encima de las tanquetas del ESMAD.

MAPA DEL INGRESO DE LA TANQUETA VENOM Y DERRIBO DE BLOQUEOS 8:50 PM



Mapa elaborado por un habitante de Siloé testigo de los hechos del 3 de mayo quién solicitó reserva de su identidad por cuestiones de seguridad.

A pesar de ser una manifestación pacífica, el ESMAD irrumpió lanzando gases lacrimógenos y granadas aturdivoras utilizando el sistema Venom, lo que generó caos y produjo la salida de los manifestantes hacia el interior del barrio Belisario Caicedo y la avenida circunvalar.

Amnistía Internacional considera que el uso del sistema Venom, en contra de manifestantes pacíficos, es una muestra de represión violenta de la protesta social que presenta una grave violación del derecho a la reunión pacífica y un riesgo para la vida e integridad de las personas.

Cabe señalar que en junio de 2021 Juzgado de Popayán ordenó a la Policía Metropolitana y al ESMAD suspender el uso del dispositivo Venom hasta tanto no se elabore un protocolo para su uso y se capacite a todos los miembros del ESMAD sobre el correcto uso del dispositivo¹²⁷.

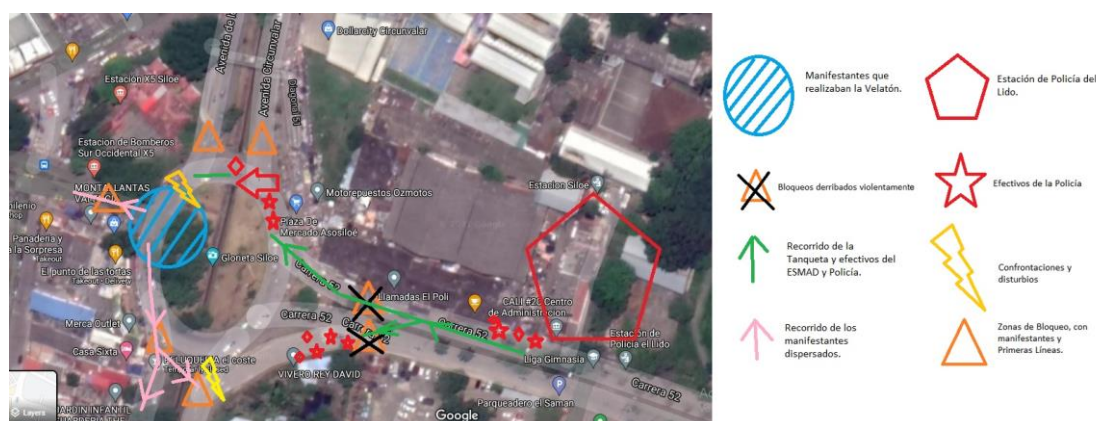
Sin embargo, el problema del sistema Venom no se puede resolver simplemente con la elaboración de un protocolo y la capacitación del personal encargado de su uso. Es un arma que por su concepción implica un uso excesivo e incontrolable de la fuerza, con cantidades excesivas de gases lacrimógenos y otros dispositivos que violan los principios de necesidad y de proporcionalidad, así como el deber de las autoridades de minimizar los daños. Por ello, Amnistía Internacional llama a la prohibición de este tipo de armas en las operaciones de orden público¹²⁸.

¹²⁶ Juzgado Décimo Administrativo Mixto de Oralidad Circuito de Popayán, Sentencia No. 065 de 2021, radicado 19001-33-33-010-2021-00085-00 ACUMULADO AL PROCESO 1900133-33-010-2021-000089-00, 2 de junio de 2021, pág. 30.

¹²⁷ Juzgado Décimo Administrativo Mixto de Oralidad Circuito de Popayán, Sentencia No. 065 de 2021, radicado 19001-33-33-010-2021-00085-00 ACUMULADO AL PROCESO 1900133-33-010-2021-000089-00, 2 de junio de 2021, pág. 35 y 36.

¹²⁸ Amnistía Internacional Países bajos: Sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley <https://www.amnesty.nl/content/uploads/2021/07/Amnistia-posicion-sustancias-quimicas-irritantes.pdf>, p. 14; y regla 28 en: 30 reglas para el uso de sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley <https://www.amnesty.nl/content/uploads/2021/07/Amnistia-posicion-sustancias-quimicas-irritantes.pdf>.

TRAYECTORIA DEL ATAQUE DIRECTO A LA VELATÓN 9:10 PM



☺ ↑ *Mapa elaborado por un habitante de Siloé testigo de los hechos del 3 de mayo quién solicitó reserva de su identidad por cuestiones de seguridad.*

Hacia las 9:30 PM testigos y múltiples registros audiovisuales confirman que varios agentes del grupo GOES motorizados se dirigen desde la Estación de Policía El Cortijo hacia la glorieta de Siloé, donde se encontraba el ESMAD. Un joven manifestante, que dio su testimonio a Amnistía Internacional denunció que los agentes del ESMAD y del GOES “emboscaron” a los manifestantes por los dos lados y relataron que “no tenía[n] ningún tipo de protección y no pod[ían] retroceder ante los disparos y los gases lacrimógenos accionados desde distintos puntos”¹²⁹.

El Comité de Derechos Humanos ha señalado que solo en casos excepcionales se puede dispersar una reunión, como, por ejemplo, si la reunión como tal ya no es pacífica o si hay indicios claros de una amenaza inminente de violencia grave que no se pueda abordar razonablemente con medidas más proporcionadas¹³⁰ y que, en todos los casos, las normas de aplicación de la ley sobre el uso de la fuerza se deben cumplir estrictamente.

Además, el uso de gases lacrimógenos solamente se puede hacer con el fin de dispersar a una multitud y por ello nunca debería hacerse en situaciones en las que las personas no se puedan dispersar¹³¹.

De acuerdo con los testimonios y la evidencia audiovisual a la que ha tenido acceso Amnistía Internacional, no hay pruebas de ninguna amenaza inminente de violencia grave que no se pueda abordar razonablemente con medidas más proporcionadas que justificara el uso de la fuerza que hicieron el ESMAD y el GOES en Siloé ese 3 de mayo.

¹²⁹ Entrevistas realizadas por Amnistía Internacional a testigos, familiares y personas de la comunidad. Por seguridad, se reserva la identidad de las personas que rindieron su testimonio ante la organización.

¹³⁰ Comité de Derechos Humanos. Observación general núm. 37 (2020), relativa al derecho de reunión pacífica (artículo 21), CCPR/C/GC/37, 17 de septiembre de 2020, para. 85.

¹³¹ Amnistía Internacional Países bajos: Sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley <https://www.amnesty.nl/content/uploads/2021/07/Amnistia-posicion-sustancias-quimicas-irritantes.pdf>, p. 16; y regla 15 en: 30 reglas para el uso de sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley <https://www.amnesty.nl/content/uploads/2021/07/Amnistia-posicion-sustancias-quimicas-irritantes.pdf>.

Los **Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley**¹³² establecen los principios y reglas necesarias para controlar el uso de la fuerza y de las armas de fuego. Así, el uso de la fuerza se guía por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.

El **principio de legalidad** establece que la facultad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de hacer uso de la fuerza debe establecerse por ley, que describirá en qué circunstancias y con qué finalidad podrá considerarse el uso de la fuerza; esto incluirá también un proceso legalmente constituido para la aprobación y utilización del equipo y las armas que han de emplearse¹³³. Está sustentado en el Principio 1 de los Principios Básicos que establece que “Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”¹³⁴.

El **principio de necesidad** establece que sólo se usará la fuerza cuando no se disponga de ningún otro medio (de antemano o después de haber agotado todos los medios disponibles) para lograr el objetivo legítimo. Debe quedar claro asimismo que sólo se usará la fuerza mínima, es decir, que no se usará más fuerza de la necesaria para lograr el objetivo¹³⁵. Ello está sustentado en el Principio 4 de los Principios Básicos: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto”.

El **principio de proporcionalidad** establece que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no podrán intentar lograr sus objetivos a toda costa. La ley debe fijar un límite claro y exigir que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sopesen su objetivo legítimo con el posible daño que puedan causar al recurrir al uso de la fuerza¹³⁶. El principio está contenido en el Principio 5 de los Principios Básicos: “Cuando el empleo [lícito de la fuerza y] de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga [...]”¹³⁷.

Finalmente, el **principio de rendición de cuentas** establece que los organismos encargados de hacer cumplir la ley se responsabilicen del desempeño de sus funciones y de su respeto del marco jurídico y operativo, incluyendo no sólo a las funcionarias y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley actuando en una situación concreta, sino también a aquellas personas que tengan responsabilidad en la cadena de mando¹³⁸.

Aún más, de acuerdo con testimonios recibidos por Amnistía Internacional, en el punto de la panadería La Sorpresa, se registraron disparos y fue allí donde fueron muertos dos jóvenes, Kevin Agudelo de 22 años y

¹³² Naciones Unidas. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

¹³³ Amnistía Internacional Países Bajos. Uso de la fuerza: directrices para la aplicación de los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Amsterdam, 2015, disponible en: <https://www.amnesty.nl/actueel/use-offorce-guidelines-for-implementation-of-the-un-basic-principles-on-the-use-of-force-and-firearms-by-law-enforcement-officials>

¹³⁴ En el mismo sentido, la Corte Interamericana ha indicado “La legislación interna debe establecer pautas lo suficientemente claras para la utilización de fuerza letal y armas de fuego por parte de los agentes estatales” Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 86. Véase, CIDH, Informe No. 51/16, Gilberto Jiménez Hernández y otros (La Grandeza) México, OEA/Ser.L/V/II.159, Doc. 60, 30 noviembre 2016, párr. 113.

¹³⁵ Amnistía Internacional Países Bajos. Uso de la fuerza: directrices para la aplicación de los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Amsterdam, 2015, disponible en: <https://www.amnesty.nl/actueel/use-offorce-guidelines-for-implementation-of-the-un-basic-principles-on-the-use-of-force-and-firearms-by-law-enforcement-officials>

¹³⁶ La Corte Interamericana ha indicado que “Si bien los agentes estatales pueden recurrir al uso de la fuerza y en algunas circunstancias, se podría requerir incluso el uso de la fuerza letal, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de sus autores”. Corte IDH. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292, párr. 262.

¹³⁷ El texto original de los Principios Básicos se encuentra en inglés. Lamentablemente, la traducción oficial de los principios 5 y 9 tiene deficiencias que alteran su contenido normativo. Por lo tanto, Amnistía Internacional utiliza tales principios revisados a partir de la versión oficial inglesa, indicando entre corchetes las adecuaciones.

¹³⁸ Ver principios, 7, 22, 24 y 26.

Hárold Rodríguez de 20 años¹³⁹. En el momento de los hechos, personas de la brigada de salud tuvieron que huir y afirmaron a los manifestantes presentes “no podemos hacer nada, hay heridos de bala y de gravedad”¹⁴⁰, razón por la cual los jóvenes heridos tuvieron que ser subidos a motos y llevados al puesto de salud más cercano, donde se registró su muerte.

ATAQUE DIRECTO A LOS MANIFESTANTES



☺↑ Mapa elaborado por un habitante de Siloé testigo de los hechos del 3 de mayo quién solicitó reserva de su identidad por cuestiones de seguridad.

Varios testigos denunciaron ante Amnistía Internacional que hacia las 9:00 PM dos helicópteros presuntamente de la Policía Nacional, que sobrevolaron el área, dispararon desde el aire contra los manifestantes que buscaban refugio en las casas del sector. Además, se registraron dos eventos de casas incendiadas, presuntamente por objetos lanzados desde los helicópteros. Amnistía internacional verificó videos de esa noche, que dan cuenta que la presencia de helicópteros¹⁴¹. Sumado a esto, los testigos relatan que “desde el helicóptero lanzaban objetos más o menos del tamaño de una lata de aerosol o un extintor que cayeron sobre las casas y no estallaban, sino que resplandecían como el reflejo de las nubes cuando caen rayos”¹⁴².

MAPA DEL ATAQUE CONTRA MANIFESTANTES



☺↑ Mapa elaborado por un habitante de Siloé testigo de los hechos del 3 de mayo quién solicitó reserva de su identidad por cuestiones de seguridad.

¹³⁹ Infobae, Hárold Rodríguez y Kevin Agudelo, los futbolistas que habrían sido asesinados en Siloé, 5 de mayo de 2021, disponible en: <https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/05/harold-rodriguez-y-kevin-agudelo-los-futbolistas-que-habrian-sido-asesinados-en-silo/> (último acceso el 3 de julio de 2021).

¹⁴⁰ Entrevistas realizadas por Amnistía Internacional a testigos, familiares y personas de la comunidad. Por seguridad, se reserva la identidad de las personas que rindieron su testimonio ante la organización.

¹⁴¹ Material audiovisual entregado a Amnistía Internacional verificado por el equipo de verificación digital de la organización.

¹⁴² Entrevistas realizadas por Amnistía Internacional a testigos, familiares y personas de la comunidad. Por seguridad, se reserva la identidad de las personas que rindieron su testimonio ante la organización.

Amnistía Internacional recibió denuncias de al menos tres personas muertas como consecuencia de disparos de arma de fuego y de 24 registros de jóvenes detenidos esa noche. Videos verificados por la organización dan cuenta del uso de armas letales, como fusiles Tavor 5.56mm¹⁴³.

Los testigos aseguran, que

de un momento a otro vieron que sobrevolaba un helicóptero que los iluminaba y lanzaba gases. Por el lado donde estaba la manifestación hubo un corte de energía e inmediatamente inició el ataque [...] mezclados con el ESMAD venían policías uniformados disparando armas de fuego. Muchos lo que pudieron hacer fue correr, entre ellos, Kevin. Al frente de ellos, vieron policías disparando con fusiles. Kevin cayó por un disparo en el pecho y fue arrastrado, pero ya había perdido mucha sangre por el impacto. Varios lo pudieron alzar, pero los disparos continuaban¹⁴⁴.

Testigos de los hechos señalaron que el ataque a la manifestación “fue desmedido, nosotros no estábamos armados ni teníamos cómo responder a ese arsenal [...] fusiles se usan para la guerra”¹⁴⁵.

KEVIN ANTHONY AGUDELO JIMÉNEZ, 21 AÑOS



Foto enviada por el padre de Kevin Agudelo con autorización de uso en el presente documento.

Kevin Anthony era un joven jugador de fútbol aficionado del equipo Siloé F.C. y es una de las víctimas de violencia policial la noche del 3 de mayo. Es recordado en su comunidad y sus compañeros aún lloran su muerte.

Esa noche Kevin participaba en un evento cultural en la glorieta de Siloé y en pocos minutos perdió la vida como consecuencia de una herida de bala. Testigos de los hechos aseguran que cuando recogieron a Kevin para llevarlo al punto de atención en salud, ya había fallecido. Amnistía Internacional verificó los videos previos al ataque y pudo determinar que agentes de Policía se encontraban fuertemente armados en inmediaciones al lugar de la muerte de Kevin¹⁴⁶. El equipo de verificación digital de Amnistía Internacional confirmó que estos agentes de Policía disparaban fusiles Tavor 5,56 mm¹⁴⁷.

Además, se verificó la presencia de dos helicópteros que sobrevolaban el área. En varios videos, se verifica que Kevin yace herido de muerte mientras sigue un tiroteo y algunas personas logran sacarlo en una moto

¹⁴³ Material audiovisual entregado a Amnistía Internacional y verificado por el equipo de verificación digital y un experto en armas de la organización.

¹⁴⁴ Testimonios recogidos por la familia de Kevin Agudelo, comunicados a Amnistía Internacional, 11 de mayo de 2021.

¹⁴⁵ Cuestión Pública, “Cuando vuelva mami”...En memoria de Kevin, 19 de mayo de 2021, disponible en: <https://cuestionpublica.com/cuando-vuelva-mami-en-memoria-de-kevin/> (último acceso el 3 de julio de 2021).

¹⁴⁶ Material audiovisual entregado a Amnistía Internacional y verificado por el equipo de verificación digital y un experto en armas de la organización.

¹⁴⁷ Material audiovisual entregado a Amnistía Internacional y verificado por el equipo de verificación digital y un experto en armas de la organización.

inconsciente¹⁴⁸. No se aprecia presencia de personal médico de primeros auxilios, pues según los testigos, tuvieron que resguardarse de la balacera.

El 5 de mayo la familia de Kevin interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. En la denuncia, el padre de Kevin declaró que su hijo “estaba participando en una velación, yo sabía que él participaba en reunión que organizaron en la loma de la cruz, para organizar actos culturales de apoyo al paro [...] los testigos aseguran que ellos estaban allí y los del ESMAD comenzaron a hostigarlos y tirarles gas lacrimógeno, y metido entre el ESMAD había uniformados de la Policía Nacional disparando por encima de los hombros del personal del ESMAD”¹⁴⁹.

Amnistía Internacional tuvo acceso al dictamen de medicina legal en el cual se estableció “joven adulto masculino con heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego [...] de acuerdo a los hallazgos en el procedimiento de necropsia medicolegal muestra signos macroscópicos de heridas por proyectil de arma de fuego ocasionando laceración de aorta a nivel del cayado, ocasionando hemotórax masivo, mecanismo que desencadena su muerte [...] sin signos de atención médica”¹⁵⁰.

En este dictamen se establece como causa de su muerte “violenta/homicidio”. Además, la descripción de las lesiones “por arma de fuego (carga única), con orificio de entrada de forma circular, de bordes invertidos, perforación y anillo de contusión concéntrico de 2mm en el sentido de las manecillas del reloj, con un diámetro de 0,6 cm”.

La puesta en marcha de una operación armada de este nivel, como si se tratase de una confrontación con actores armados ilegales y no de un evento de protesta pacífica, da cuenta del tratamiento de guerra que se implementó en Cali como respuesta a las protestas en el contexto del paro nacional. En la incursión armada conjunta entre agentes de la Policía, el ESMAD, el GOES y militares fue posible verificar el uso de armas letales por parte de agentes de seguridad, lo que no solamente es excesivo e innecesario, sino que ha dejado como consecuencia varios jóvenes asesinados y, por lo tanto, debe dar lugar a una exhaustiva investigación por parte de las autoridades competentes. Además, el uso de gases lacrimógenos de noche y desde arriba es inaceptable porque anda al contrario del único objetivo legítimo para el uso de este tipo de arma que es la dispersión de una multitud violenta: por ser de noche y por venir del cielo, las personas afectadas no pueden saber en qué dirección dispersarse¹⁵¹. Esta forma de uso de gases lacrimógenos por las fuerzas de seguridad comprueba más bien la intención de facilitar un ataque de carácter militar que de algún intento legítimo de restablecimiento del orden público.

“[E]stamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali, en Colombia, la pasada noche cuando la Policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida [...] dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, hacemos un llamamiento a la calma. Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluidos el derecho a la vida y a la seguridad personal, y a facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”

Portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 4 de mayo de 2021¹⁵².

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, declaró frente a estos hechos que “hubo una desafortunada circunstancia, agresiva, premeditada contra la comunidad de Siloé [...] es un tema realmente doloroso que tiene que ser llevado hasta las últimas instancias de la justicia, quizás incluso a la justicia penal internacional

¹⁴⁸ <https://twitter.com/JheisonNz17/status/1389431223727034371>; <https://twitter.com/IvanTovar01/status/1389429147219505153>; <https://twitter.com/LeoLopezLenis/status/1389414764342820865> y <https://twitter.com/redlatiendo/status/1389415065049255936> (último acceso el 13 de julio de 2021), verificados por el equipo de verificación digital de Amnistía Internacional.

¹⁴⁹ Copia de la denuncia presentada por el padre de Kevin Agudelo ante la Fiscalía General de la Nación, 5 de mayo de 2021.

¹⁵⁰ Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, Informe pericial de necropsia, Kevin Anthony Agudelo Jimenez, Cali, Valle del Cauca, fecha necropsia 4 de mayo de 2021.

¹⁵¹ Por ello, Amnistía Internacional esta opuesto p.ej. al despliegue de gases lacrimógenos a través de drones, cf. Amnistía Internacional Países bajos: Sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley <https://www.amnesty.nl/content/uploads/2021/07/Amnistia-posicion-sustancias-quimicas-irritantes.pdf>, p. 15; y regla 16 en: 30 reglas para el uso de sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley <https://www.amnesty.nl/content/uploads/2021/07/Amnistia-posicion-sustancias-quimicas-irritantes.pdf>.

¹⁵² Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nota informativa para la prensa sobre Colombia, Portavoz para la Oficina Marta Hurtado, 4 de mayo de 2021, disponible en: <https://nacionesunidas.org.co/noticias/comunicados-de-prensa/nota-informativa-para-la-prensa-sobre-colombia-portavoz-del-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-marta-hurtado/> (último acceso 3 de julio de 2021).

[...] un tema que ha ocurrido sin duda alguna a espaldas de esta alcaldía, pues no permitiríamos el uso de armas de fuego contra una comunidad inermes”¹⁵³.

El Juez 158 de Instrucción Penal Militar informó a Amnistía Internacional que en dicha jurisdicción no se encuentran procesos de los hechos ocurridos el 3 de mayo en el que figure como víctima Kevin Agudelo¹⁵⁴.

4.2 ATAQUE ARMADO CONTRA LA MINGA INDÍGENA

Los niveles de violencia desproporcionada por parte de agentes de la fuerza pública, así como ataques armados contra manifestantes que involucran a personas vestidas de civil, han marcado los más de dos meses de movilizaciones por el paro nacional en Cali. A pesar de los constantes llamados de organizaciones defensoras de los derechos humanos sobre esta grave situación, alertando sobre asesinatos, desapariciones forzadas y violencia de tipo paramilitar, el 9 de mayo se registró un ataque contra la Minga Indígena¹⁵⁵ que dejó a varias personas gravemente heridas y que evidenció un contexto de discriminación, estigmatización y violencia contra Pueblos Indígenas.

La Minga Indígena hizo presencia en Cali desde los primeros días del Paro Nacional, con el objetivo de acompañar las manifestaciones sociales y en solidaridad con las decenas de víctimas que ya se registraban como consecuencia del actuar desproporcionado de la fuerza pública.

“Nosotros venimos a brindar seguridad. A mediar para que cese la violencia. Hacemos parte del paro, pero también somos gestores de paz, convivencia y derechos humanos”

Representantes de la Minga en comunicaciones previas al 9 de mayo¹⁵⁶

Más de cinco mil personas indígenas, provenientes en su mayoría del departamento del Cauca, llegaron a la ciudad y se instalaron en los puntos de manifestaciones como Meléndez, Sameco, Siloé y “Puerto Resistencia”. Según personas entrevistadas por Amnistía Internacional, a la Minga se le solicitó apoyo en Cali, con el ánimo de brindar acompañamiento humanitario, asegurar el diálogo y prevenir ataques armados de personas infiltradas.

Amnistía Internacional realizó entrevistas a víctimas del ataque armado del 9 de mayo, así como representantes de las organizaciones defensoras de los derechos humanos que las acompañan, líderes de la Guardia Indígena, voceros de la Asociación Indígena del Cauca y testigos. La organización tuvo también acceso a material audiovisual que verificó y recibió numerosos informes de organizaciones indígenas como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que dan cuenta del nivel de violencia y represión que han vivido durante las jornadas de manifestaciones¹⁵⁷.

En días previos al ataque contra la Minga, la organización indígena CRIC, denunció que ciertos mensajes estigmatizantes en la prensa, de personas de alto perfil como el expresidente Uribe, vinculándolos falsamente con grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), podía poner en riesgo a los manifestantes indígenas y sus líderes¹⁵⁸. Como hemos dicho ya en un país como Colombia, con más de cinco décadas de

¹⁵³ Radio Nacional de Colombia, “Sí dispararon contra la comunidad”: alcalde de Cali sobre hechos en Siloé, 13 de mayo de 2021, disponible en: <https://www.radionacional.co/actualidad/si-dispararon-contra-la-comunidad-alcalde-de-cali-sobre-hechos-en-siloe> (último acceso 3 de julio de 2021).

¹⁵⁴ Comunicación de referencia No. 832/MDN-DEJPMGDJ-J158IPM-1.10 del Juez 158 de Instrucción Penal Militar (E) de 23 de julio de 2021.

¹⁵⁵ La Minga indígena es la reunión de diversos actores sociales que se suman a procesos sociales de reivindicación y garantía de derechos fundamentales.

¹⁵⁶ El Espectador, Cali, radiografía de una ciudad que no aguantó más, nota publicada el 8 de mayo de 2021, disponible en: <https://www.elspectador.com/colombia/cali/cali-radiografia-de-una-ciudad-que-no-aguanto-mas-article/> (último acceso el 3 de julio de 2021).

¹⁵⁷ Organización Nacional Indígena, ONIC, Informe Ejecutivo sobre el contexto y las afectaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas dentro del Paro y Minga Nacional en Colombia, 10 de junio de 2021, disponible en: <https://www.onic.org.co/comunicados-onic/4304-informe-ejecutivo-sobre-el-contexto-y-las-afectaciones-a-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-dentro-del-paro-y-minga-nacional-en-colombia> (último acceso el 3 de julio de 2021).

¹⁵⁸ Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC rechaza nuevo falso positivo del expresidente Uribe, 5 de mayo de 2021, <https://www.cric-colombia.org/portal/cric-rechaza-nuevo-falso-positivo-del-expresidente-uribe/> (último acceso el 3 de julio de 2021).

conflicto armado interno, señalar a organizaciones como parte de una guerrilla como el ELN¹⁵⁹, implica prácticamente convertirla en blanco de ataques.

Sumado a esto, medios de comunicación señalan que en días previos al ataque el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, declaró que “en Cali no deben mandar los que no forman parte de Cali. No debe haber pretextos para que personas ajenas a nuestra ciudad cumplan las funciones que se cumplen en nuestra ciudad”¹⁶⁰ y “debemos actuar de otra manera, los criminales ganan fuerza y capacidad resolutive es limitada. Es necesario crear Brigadas y Redes de Seguridad ciudadana. Desde mañana a organizarnos a nivel de barrio, pero tenemos que cuidar la vida”¹⁶¹. Estos mensajes estigmatizantes y que criminalizan a manifestantes, así como los llamados realizados por autoridades de todos los niveles¹⁶² a crear grupos civiles de seguridad, fueron el contexto facilitador para que estos ataques armados se pudieran concretar.

El 9 de mayo, Amnistía Internacional expresó su preocupación frente a este ataque¹⁶³ y reiteró que históricamente los Pueblos Indígenas y afrodescendientes han sufrido desproporcionalmente las consecuencias de la violencia, el conflicto armado y la falta de protección de las autoridades estatales. Además, la organización denunció que, a pesar de los llamados urgentes a las autoridades para prevenir esta violencia armada, no se tomaron medidas dirigidas a evitarla, sino que, por el contrario, la respuesta fue replicar mensajes estigmatizantes sobre la Minga Indígena y los manifestantes, lo que pudo alentar que esto sucediera.

Con los mensajes estigmatizantes, las autoridades crearon objetivamente una situación de riesgo para sus habitantes y no adoptaron todas las medidas necesarias ni suficientes para evitar que civiles armados atacaran a la Minga.

De acuerdo a los testimonios recogidos por Amnistía Internacional, ese día se tenía prevista la llegada de varias chivas¹⁶⁴ de la Minga Indígena desde el Cauca a Cali, por la vía Cañasgordas. Antes de su llegada, habitantes del sector salieron a bloquear la vía de entrada y en estos hechos se registraron ataques armados. La organización de los sucesos y su cronología parece indicar que los bloqueos y el posterior ataque se dieron de manera coordinada y premeditada.

Según un testimonio brindado a Amnistía Internacional por un testigo que habita un barrio cercano a donde ocurrió el ataque, personas vestidas de civil bloquearon su paso y les gritaron que “no tenían nada que hacer allí”. Según el testigo, las personas de civil sostuvieron una reunión para coordinar el bloqueo del paso de la Minga, el día anterior al ataque. También se hicieron convocatorias por el sector de Comfandi Pance y por la iglesia La María, para coordinar la

defensa del barrio [...] en el taponamiento grande, cerca a la iglesia La María, se ubicaron las personas vestidas de blanco, algunas armadas, iniciaron los disparos y los indígenas se bajaron de las chivas para ubicar a quienes estaban disparando y ubicaron dos camionetas que fueron quemadas [...] los indígenas iban pasando, en ningún momento se estaban metiendo a las casas o a los condominios [...] se escuchaba de voz a voz por medio de guardas de vigilancia, que había una reunión para la cuestión que iba a suceder, todo el mundo armándose para cualquier cosa que vaya a suceder¹⁶⁵.

Uno de los primeros indicios de que se trató de un ataque premeditado es que hacia las 12:00 PM, las chivas donde venía la Minga, fueron interceptadas a pocos kilómetros de Cali, en Jamundí. Por esta razón, tuvieron

¹⁵⁹ El Ejército de Liberación Nacional es una guerrilla, con más de sesenta años de existencia. Aún sigue vigente, causando desplazamiento forzado, secuestros, asesinatos y ataques a infraestructura pública.

¹⁶⁰ CeroSetenta, Disparen a los indios: un diario del odio en Cali, 15 de mayo de 2021, disponible en: <https://cerosetenta.uniandes.edu.co/disparen-a-los-indios-un-diario-del-odio-en-cali/#:~:text=La%20mañana%20del%20domingo%20nueve,se%20cumplen%20en%20nuestra%20ciudad> (último acceso el 3 de julio de 2021).

¹⁶¹ Jorge Iván Ospina, Alcalde de Cali, 28 de abril de 2021, disponible en: <https://cerosetenta.uniandes.edu.co/disparen-a-los-indios-un-diario-del-odio-en-cali/#:~:text=La%20mañana%20del%20domingo%20nueve,se%20cumplen%20en%20nuestra%20ciudad> (último acceso el 3 de julio de 2021).

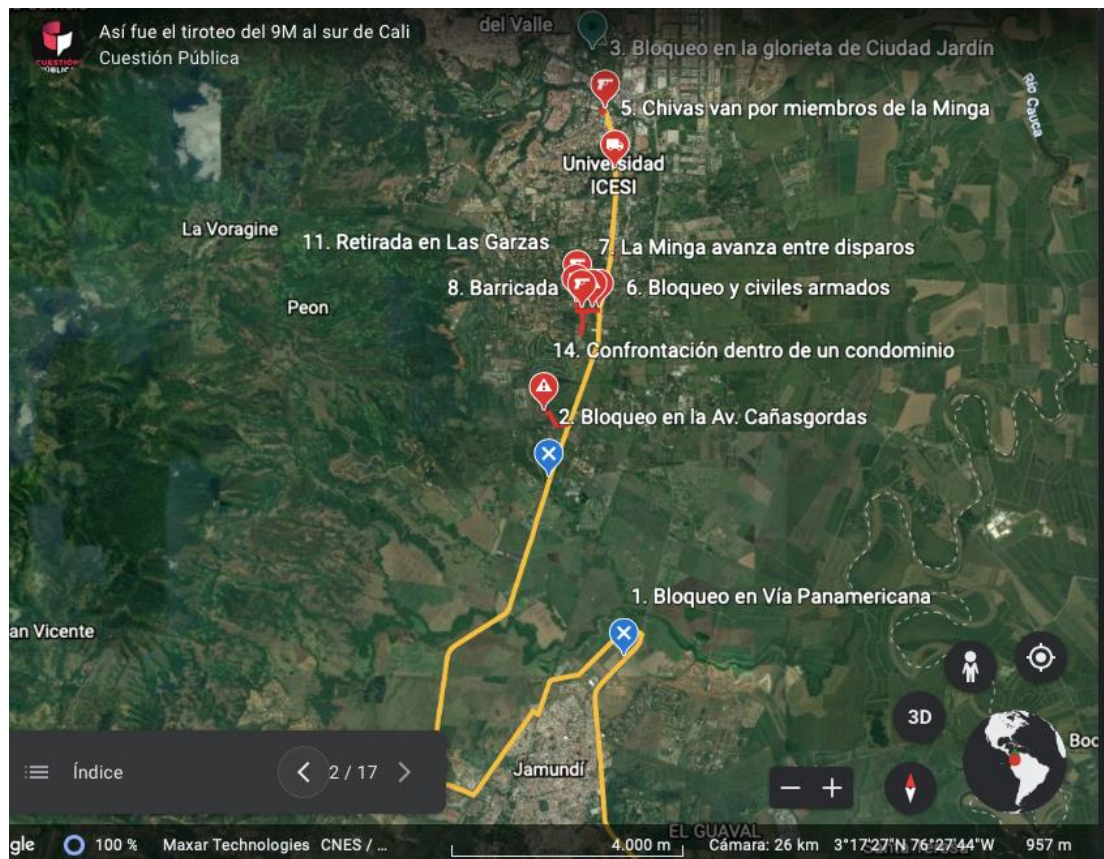
¹⁶² En días previos, otros representantes locales, como Carlos Maya, alcalde de Pereira señaló “vamos a convocar a los gremios de la ciudad y a los miembros de la seguridad privada para hacer un frente común junto a la Policía y el Ejército para recuperar el orden y la seguridad ciudadana”. Al día siguiente fue asesinado en Pereira Lucas Villa. Tomado de Kien y Ke, “El llamado del alcalde de Pereira previo al atentado a Lucas Villa, disponible en: <https://www.kienyke.com/regiones/llamado-alcalde-de-pereira-previo-atentado-lucas-villa>, (último acceso el 11 de julio de 2021).

¹⁶³ Amnistía Internacional, Colombia: Llamado urgente a cesar la violencia contra Pueblos Indígenas en el marco del Paro Nacional, 9 de mayo del 2021, disponible en: <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/05/colombia-llamado-urgente-cesar-violencia-contra-pueblos-indigenas/>

¹⁶⁴ La chiva es un medio de transporte colectivo usado en Colombia en zonas rurales, en particular por Pueblos Indígenas y comunidades campesinas.

¹⁶⁵ Testimonio allegado a Amnistía Internacional, el nombre de la persona se reserva por motivos de seguridad, Cali, 7 de julio de 2021.

que desviarse y tomar la avenida Cañasgordas, donde ocurrió uno de los tiroteos. Hacia las 2:00 PM hubo dos tiroteos más en zona cercana a la iglesia La María. También se registraron ataques contra la Minga, en el sur del barrio Pance y en el barrio Ciudad Jardín¹⁶⁶.



Mapa tomado de la reconstrucción realizada por el medio independiente Cuestión Pública, 27 de mayo del 2021¹⁶⁷.

De acuerdo al testimonio de testigos y víctimas del ataque, uno de los eventos que alertó a la Minga y a mingueros que estaban en la Universidad del Valle, fue la retención por parte de civiles, de uno de los consejeros de la ACIN, Harold Sescué. El consejero alertó sobre su retención y varias personas acudieron a auxiliarlo, así como algunas chivas que estaban en camino hacia Cali. Cuando llegaron, ocurrió un tiroteo. De acuerdo a testimonios recogidos por Amnistía Internacional, cuando las personas indígenas llegaron al lugar, se enfrentaron con un bloqueo de civiles, que les gritaban e insultaban acusándoles de “guerrilleros” y gritándoles que debían volver a sus resguardos pues en Cali no eran bienvenidos.

Amnistía Internacional también tuvo conocimiento de declaraciones públicas del congresista Christian Garcés, del partido de gobierno Centro Democrático, quien afirmó “se vienen indígenas con bastones de mando a secuestrar a los caleños”¹⁶⁸, no solo replicando un mensaje estigmatizante desde su posición política, sino justificando la violencia ejercida contra la Minga Indígena.

¹⁶⁶ France 24, Análisis de imágenes: hombres vestidos de civil dispararon a manifestantes indígenas en Cali, 18 de mayo de 2021, disponible en: <https://www.france24.com/es/programas/los-observadores/20210518-protestas-colombia-cali-disparos-indigenas-civiles> (último acceso el 3 de julio de 2021).

¹⁶⁷ Disponible en: <https://cuestionpublica.com/paso-a-paso-asi-fue-el-tiroteo-del-9-de-mayo-al-sur-de-cali/> (último acceso el 3 de julio de 2021).

¹⁶⁸ Entrevista Maria Jimena Duzán, ¿Quién está detrás del grupo de autodefensa que se armó contra los indígenas en Cali?, 16 de junio de 2021, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=QUozZqOCfZo> (último acceso el 3 de julio de 2021).

DANIELA SOTO



Foto compartida por Daniela Soto, con autorización para incluirla en el presente documento.

Foto tomada en la posesión del cabildo de estudiantes de educación superior de Popayán en la Universidad Autónoma Indígena e Intercultural UAIIN.

Daniela Soto, es una reconocida defensora de los derechos humanos indígena, del resguardo Sa'th Tama Kiwe y lideresa del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, quien resultó gravemente herida ese día.

Daniela recibió un impacto de bala que le perforó el intestino y afectó una vena principal en su pierna. Esta grave herida la dejó al borde de la muerte y debió ser reanimada en el lugar. Según el dictamen de medicina legal, Daniela fue atendida en la clínica Fundación Valle de Lili, el 9 de mayo a las “15:21 por herida por proyectil de arma de fuego, con trayecto transabdominal [...] se anota necesidad de transfusión masiva y laparotomía exploratoria emergente para control de daños”¹⁶⁹. Se le recomendó mantener incapacidad médica durante cuarenta y cinco días debido a la gravedad de las heridas.

El equipo de verificación digital de Amnistía Internacional pudo verificar material audiovisual del momento del ataque, en el que se ven a personas vestidas de civil disparando contra la Minga Indígena. En estos videos se verifica la presencia de Daniela, desarmada, intentando mediar en el bloqueo. Las personas armadas visten prendas blancas, algunas inician el tiroteo desde camionetas de alta gama. En estos videos se puede verificar la presencia de agentes de la Policía Nacional, quienes no parecen sorprendidos por el ataque, de hecho, se puede ver que no hay intervención alguna para contener el ataque armado, lo que constituye un indicio de su aquiescencia y complicidad¹⁷⁰.

Daniela relató a Amnistía Internacional que ella en ningún momento iba armada. Por el contrario, reitera que intentó dialogar con las personas que estaban realizando el bloqueo para convencerles de dejar pasar las chivas de la Minga. Sin embargo, reitera que recibieron insultos y calificativos como “guerrilleros” diciendo a los indígenas que no los iban a dejar pasar por “obstaculizar el desarrollo”, lo que provocó un alegato y empezaron a disparar. Señala que lo peor es que el Estado legitima la violencia para generar miedo y terror para que los manifestantes dejen el Paro”¹⁷¹.

Afirmó ante Amnistía Internacional que aún está recuperándose de las graves secuelas físicas y emocionales de este ataque. Menciona además que ella acompañaba procesos sociales con mujeres indígenas que debieron suspenderse y esto ha generado también un daño colectivo.

Amnistía Internacional verificó material audiovisual en los que se ven a personas vestidas de civil fuertemente armadas disparando hacia los manifestantes indígenas desarmados¹⁷². En dicho material, es posible

¹⁶⁹ Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Unidad Básica Cali, Informe pericial de clínica forense, Cali, 18 de mayo de 2021, documento entregado bajo reserva a Amnistía Internacional.

¹⁷⁰ Material audiovisual entregado a Amnistía Internacional y verificado por el equipo de verificación digital de la organización.

¹⁷¹ Entrevista realizada a Daniela Soto por Amnistía Internacional, 1 de junio de 2021.

¹⁷² Ver, entre otros, <https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/09/terror-en-jamundi-graban-a-varios-civiles-armados-amenazando-y-disparando-contra-la-guardia-indigena/>; <https://twitter.com/HKJM2019/status/1391548945474719744>; <https://twitter.com/valpoinformado/status/1391531213991682050>; <https://twitter.com/smilelalis/status/1391492438200659971>; <https://twitter.com/SenorCaicedo/status/1391505956274585608> (último acceso 13 de julio de 2021), verificados por el equipo de verificación digital de Amnistía Internacional.

determinar que había presencia de agentes de la Policía Nacional, que no solo permitieron este ataque, sino que también protegieron a las personas que lo realizaban¹⁷³. Lo anterior demuestra que no se trató de eventos fortuitos o de hechos llevados a cabo por particulares sin más, sino que agentes de Policía en connivencia con ellos omitieron su deber de proteger a los ciudadanos y fueron cómplices de los ataques armados contra manifestantes indígenas. Además, Amnistía Internacional tuvo acceso a conversaciones de WhatsApp, las cuáles, si bien no han sido aún objeto de verificación, coinciden con el accionar que, en la práctica, tuvieron las personas civiles armadas y pondrían en evidencia su plan criminal con el objetivo de “bloquear las tales chivas” y señalando a lideresas como Daniela Soto¹⁷⁴. En estas comunicaciones, se comparten fotos de Daniela señalando su liderazgo, momentos previos al ataque en el que ella resultó herida, lo que demostraría la premeditación en los hechos¹⁷⁵.

Luego de los ataques, el presidente Iván Duque, emitió un llamado para que las personas indígenas “retornen nuevamente a sus resguardos [...] no por limitar su movilidad, sino para que se entienda que este no es el momento de generar provocaciones con la sociedad. Quiero hacer un llamado claro a los miembros del CRIC, hemos visto que la ciudadanía en este momento ha sufrido mucho por los bloqueos adicionales o que se amenace su seguridad para evitar confrontaciones”¹⁷⁶. Estas declaraciones fueron rechazadas públicamente por líderes de la Minga como la defensora Aida Quilcué quien responsabilizó al gobierno local y al gobierno nacional por la fuerte represión contra manifestantes en Cali y por responder a la protesta social con la militarización.

Amnistía Internacional reitera que no solo rechaza que se mantenga un discurso estigmatizante de las personas indígenas que acompañaron las manifestaciones en Cali, sino que se les responsabilice de los ataques que sufrieron y no se emita ningún reproche por las conductas violentas ejercidas por civiles armados en coordinación con agentes de la Policía Nacional. Además, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades nacionales su deber de especial protección de los Pueblos Indígenas, garantizando sus derechos fundamentales y reconociendo su participación en espacios políticos y sociales. Las expresiones discriminatorias contra Pueblos indígenas contravienen las obligaciones de derecho internacional y promueven la violencia y la impunidad que aún prevalece.

El Movimiento de Crímenes de Estado MOVECE, envió una comunicación urgente el 9 de mayo, en la cual denunció que al recibir la noticia de los ataques contra la Minga se hicieron presentes en el lugar pero

al desplazarnos al lugar como garantes de derechos humanos, la Policía disparó contra los cuatro defensores de derechos humanos e integrantes de la Minga Indígena. Las personas integrantes del Movece pudieron identificar un vehículo que disparó contra otro vehículo que transportaba miembros de la guardia indígena. Simultáneamente otro carro particular disparaba contra los manifestantes. Todo lo anterior delante de personal de policía que se encontraba en el lugar y protegía a los civiles que atacaron a los manifestantes y la Misión de Verificación. Alertamos sobre la grave situación de vulnerabilidad y amenazas contra miembros de la Minga Indígena (CRIC, ACIN), Fundación Guagua, Nomadesc, CDR, Movece Capítulo Valle, población civil, entre otras, frente a las que día a día aumenta el riesgo contra la vida e integridad¹⁷⁷.

Amnistía Internacional reitera el deber de las autoridades nacionales de prevenir la violencia contra personas defensoras de los derechos humanos y de tomar las medidas tendientes a garantizar que hechos como los descritos no queden en la impunidad. Colombia es el país más peligroso del mundo para defender los derechos humanos y eso solo puede ocurrir si las autoridades estatales están ausentes, y no cumplen con su obligación de protección. En varias oportunidades Amnistía Internacional se ha pronunciado sobre la grave violencia cometida contra personas defensoras de los derechos humanos y líderes sociales en el país, y ha reiterado que esta violencia es generalizada y el Estado ha omitido su obligación de protegerles¹⁷⁸.

¹⁷³ Ver, entre otros, <https://mobile.twitter.com/sargentochala/status/1391522148271984640>; <https://twitter.com/marthaperaltae/status/1391564891576733699> (último acceso el 13 de julio de 2021), verificados por el equipo de verificación digital de Amnistía Internacional.

¹⁷⁴ Comunicado ONU Mujeres, la Embajada de Noruega y la Defensoría del Pueblo condenan ataque contra lideresas y defensoras de derechos humanos en Cali, 9 de mayo de 2021, disponible en: <https://twitter.com/ONUMujeresCol/status/1391560645582245892?s=20> (último acceso el 3 de julio de 2021).

¹⁷⁵ Capturas de pantalla de WhatsApp enviadas bajo reserva a Amnistía Internacional.

¹⁷⁶ Presidente Iván Duque, 9 de mayo de 2021, disponible en: <https://twitter.com/infopresidencia/status/1391510517185921029?s=20> (último acceso el 3 de julio de 2021).

¹⁷⁷ Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Solicitud de acción urgente- ataque armado a la Minga y graves violaciones a los derechos humanos, 9 de mayo de 2021.

¹⁷⁸ Amnistía Internacional, Colombia: ¿Por qué nos quieren matar?: la falta de un espacio seguro para defender los derechos humanos en Colombia, 8 de octubre de 2020, disponible en <https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/3009/2020/es/>

Amnistía Internacional ha denunciado históricamente las formas de cooperación armada entre civiles y la fuerza pública que han dejado miles de víctimas en Colombia. Por su parte, el ataque armado del 9 de mayo del 2021, coordinado entre agentes de la Policía y civiles armados, puede ser considerado una forma de paramilitarismo urbano. El hecho reviste la mayor gravedad, al atacar directamente a personas indígenas y al señalar y dirigir la violencia hacia las personas defensoras de los derechos humanos presentes. Amnistía Internacional se une al llamado de las víctimas indígenas, sus organizaciones y colectivos, sus líderes y lideresas, y reitera el llamado para que las autoridades se comprometan en investigar de manera exhaustiva, imparcial y diligente estos hechos, para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia y las víctimas sean reparadas integralmente¹⁷⁹.

4.3 ATAQUES ARMADOS DE CIVILES CON LA AQUIESCENCIA Y LA COMPLICIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL: GOLPIZAS, DETENCIONES ILEGALES, TORTURA Y AMENAZAS DE DESAPARICIÓN FORZADA CONTRA MANIFESTANTES

Desde el viernes 28 al 30 de mayo, la Organización de las Naciones Unidas denunció que “se reportó la muerte de al menos catorce personas, además de que cerca de un centenar han sido lesionadas en la ciudad de Cali, en el marco de las manifestaciones”¹⁸⁰. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, expresó que su Oficina había recibido reportes denunciando que “en algunos puntos de la ciudad, individuos privados también habrían disparado contra los manifestantes en presencia de agentes de la policía”¹⁸¹, además, se refirió a la detención de al menos 30 personas el 28 de mayo e hizo un llamado a aplicar las medidas idóneas para prevenir desapariciones forzadas.

Amnistía Internacional realizó entrevistas a testigos, víctimas de hechos violentos, organizaciones de derechos humanos y funcionarios de la Defensoría del Pueblo y realizó una exhaustiva verificación de materiales audiovisuales, en los que se evidencia que ese día, civiles armados, actuando en con aquiescencia y tolerancia de agentes de la Policía, atacaron a los manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos. Además, se documentaron casos de detenciones violentas realizadas por civiles armados, quienes luego entregaron a las personas a la Policía. Las víctimas denuncian detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles e inhumanos.

Los hechos denunciados ocurrieron en el barrio Ciudad Jardín, cerca de la Universidad del Valle, lugar donde los manifestantes se reunían. El 28 de mayo, los manifestantes decidieron salir a las calles para conmemorar un mes del paro nacional, así como para exigir justicia por las víctimas de la represión policial. Según declaraciones de autoridades y reportes del Ministerio de Defensa, en ese mes se habían producido múltiples escenas de violencia presuntamente por parte de manifestantes, así como bloqueos que estaban perjudicando la productividad económica y el abastecimiento de la ciudad de Cali.

De acuerdo a los videos verificados por Amnistía Internacional¹⁸², hacia las tres de la tarde se reportaron los primeros disparos en el área. Estos hechos fueron transmitidos por el periodista Alberto Tejada del canal 2 de Cali, en vivo y en directo. Medios de comunicación también registraron estos hechos y publicaron decenas de fotos que dan cuenta de la veracidad de las denuncias¹⁸³. El paso de manifestantes fue bloqueado por un

¹⁷⁹ El Juez 158 de Instrucción Penal Militar informó a Amnistía Internacional que en dicha jurisdicción no tienen investigaciones de los hechos ocurridos el 9 de mayo en las que figure como víctima una defensora de derechos humanos indígena. Comunicación de referencia No. 832/MDN-DEJPMGDJ-J158IPM-1.10 del Juez 158 de Instrucción Penal Militar (E) de 23 de julio de 2021.

¹⁸⁰ Organización de las Naciones Unidas, Comunicado sobre Colombia, 30 de mayo de 2021, disponible en: <https://news.un.org/es/story/2021/05/1492672> (último acceso el 3 de julio de 2021).

¹⁸¹ ACNUDH, Colombia: Bachelet llama al diálogo y al respeto de los derechos humanos tras nuevas informaciones sobre muertos y heridos en Cali, 30 de mayo de 2021, disponible en: <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27128&LangID=S> (último acceso el 3 de julio de 2021).

¹⁸² <https://twitter.com/BLUPacifico/status/1398384954292191235?s=20> (último acceso el 13 de julio de 2021), verificados por el equipo de verificación digital de Amnistía Internacional.

¹⁸³ Cuestión Pública, Cuando la Policía se alió con hombres armados vestidos de civil, 16 de junio de 2021, disponible en: <https://cuestionpublica.com/cuando-la-policia-se-alio-con-hombres-armados-vestidos-de-civil/> (último acceso el 3 de julio de 2021); Infobae, Se conocen nuevos videos de civiles disparando armas largas y cortas en Cali, 30 de mayo de 2021, disponible en: <https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/30/se-conocen-nuevos-videos-de-civiles-disparando-armas-largas-y-cortas-en-cali/>

grupo de civiles armados y agentes de la Policía Nacional. Amnistía Internacional pudo verificar videos en los que civiles armados disparan a los manifestantes, con aquiescencia y tolerancia de agentes de la Policía Nacional, quienes no tomaron ninguna medida para proteger la vida e integridad de quienes protestaban, de periodistas que cubrían la escena y de personas defensoras de los derechos humanos presentes en el lugar¹⁸⁴.

Ese día, Amnistía Internacional recibió la denuncia de al menos once personas detenidas arbitrariamente, entre ellos Sebastián Mejía, Álvaro Herrera y Noé Muñoz.

SEBASTIÁN MEJÍA BELALCAZAR



Foto compartida por Sebastián Mejía Belalcazar, con autorización para incluirla en el presente documento.

Amnistía Internacional documentó el caso de Sebastián Mejía quien denunció que fue golpeado y detenido de manera ilegal mientras grababa los hechos violentos que ocurrían en el lugar. Sebastián denunció que:

“a las 4:09 PM el policía que me había amenazado me enciella, los civiles me cogen de los brazos, me roban el celular y el policía me amenaza [...] en el trayecto hacia la estación de policía soy golpeado en la cara, por personas de civil, escoltados por los policías. Durante todo el recorrido para ser llevado a la estación de Policía de La María, siguen los golpes por parte del civil de rojo y siguen las alusiones sobre desaparecernos, como tortura psicológica. En la estación de La María nos entran a los dos, nos sientan en un pasillo y soy golpeado, con puños y patadas, otra vez, en el rostro, la cabeza, el pecho y fui presionado mediante la violencia y tortura para ser grabado en un video incriminándome por cosas que no había cometido, primero para autodenominarme vándalo, después que los vándalos me pagaban y que los mismos vándalos me golpeaban [...] Debido que mi captura no se había legalizado y había sucedido bajo condiciones ilegales, irregulares e ilícitas es retirado el Habeas Corpus para dar rapidez a mi salida de la URI y la Fiscalía decide no imputar cargos por las irregularidades e ilegalidades que presentaba mi detención”¹⁸⁵.

Amnistía Internacional también tuvo acceso a las denuncias del joven músico **Álvaro Herrera**, quien relató que ese día se encontraba realizando un concierto en la Universidad del Valle. Saliendo del lugar, notó que civiles armados estaban atacando a los manifestantes y decidió registrar los hechos en su celular. Por esta razón, fue golpeado y retenido por un grupo de civiles que participaban en los hechos violentos, y tiempo después, entregado a la Policía Nacional.

(último acceso el 3 de julio de 2021) y Cerosetenta, El peligroso escuadrón del sur de Cali, 22 de junio de 2021, disponible en: <https://cerosetenta.uniandes.edu.co/escuadron-cali-violencia-policial/> (último acceso el 3 de julio de 2021).

¹⁸⁴ <https://twitter.com/Alberti03940691/status/1398501259238416386> (último acceso 13 de julio de 2021), verificados por el equipo de verificación digital de Amnistía Internacional.

¹⁸⁵ Relato de Sebastián Mejía ante Amnistía Internacional, recibido el 18 de junio de 2021.

“¿Por qué no lo desaparecemos?”

Testimonio de Álvaro Herrera quien refiere haber escuchado esta frase de la Policía Nacional mientras era conducido a la estación de Policía.

En la estación de Policía fue golpeado y torturado, a tal punto que no vio otra opción que grabar un video de confesión de su supuesta participación en “hechos vandálicos”:

debido a los golpes físicos y al maltrato verbal, yo sabía que mi situación era difícil. Al principio, cuando el policía me preguntó, con la cámara encendida, qué estaba haciendo en la protesta, yo dije la verdad: que estaba en un Cacerolazo Sinfónico. “Esa no es la respuesta”, me dijo el otro, después de que suspendieran la grabación. Me volvieron a golpear y repetían que esa no era la respuesta. Imaginé lo que querían escuchar y respondí cuando el policía volvió a activar la cámara. Fue cuando contesté lo que aparece en el video que ellos mismos publicaron: que estaba con los vándalos. [...] ¹⁸⁶.

ÁLVARO HERRERA



Cartel de Auxilio por detención de Álvaro Herrera en redes sociales

Hacia las 7:00 PM del 28 de mayo, Amnistía Internacional recibió la denuncia de la detención de Álvaro Herrera.

Esa noche la organización también tuvo acceso a un video en el que aparece el joven músico herido, sentado en el piso, con sangre en la cabeza, y expresión de miedo, “confesando” que era un “vándalo”. El video fue verificado por Amnistía Internacional. Según el testimonio de Álvaro, este video fue grabado por agentes de Policía y compartido en redes sociales.

Amnistía Internacional también documentó el caso de **Noé Muñoz** joven perteneciente a la “primera línea” y quien estuvo en el lugar de los hechos. Noé denunció que fue víctima de violencia por parte de civiles armados y de agentes de la Policía. Recibió un impacto de arma traumática en el abdomen¹⁸⁷ generando una herida visible, según consta en el dictamen médico realizado el 29 de mayo en la madrugada en el Hospital San Juan de Dios. Por temas de seguridad, Noé tuvo que dejar la ciudad de Cali.

¹⁸⁶ El Espectador, “Esa no es la respuesta, me dijo un uniformado”: joven músico detenido por la Policía, 12 de junio de 2021, disponible en: <https://www.elespectador.com/colombia/esa-no-es-la-respuesta-me-dijo-un-uniformado-joven-musico-detenido-por-la-policia/> (último acceso el 3 de julio de 2021) y Noticias Uno, Músico que fue obligado a afirmar que era “vándalo”, contó lo que vivió, 14 de junio de 2021, disponible en: <https://www.noticiasuno.com/nacional/musico-que-fue-obligado-a-afirmar-que-era-vandalo-conto-lo-que-vivio/> (último acceso el 3 de julio de 2021).

¹⁸⁷ Dictamen médico Hospital San Juan de Dios, 29 de mayo de 2021 a las 00.30 am.

NOÉ MUÑOZ



Foto compartida por Noé Muñoz, con autorización para incluirla en el presente documento.

El 28 de mayo salí a marchar pacíficamente. Estamos reunidos en la Universidad del Valle y vemos que empieza a salir humo a unos 800 metros de donde estamos. Me dirijo hacia allá, era un poco antes de las 3pm [...] Llegamos al CAI de Ciudad Jardín y en el momento que llegamos veo civiles armados y Policías. De un momento a otro empiezan a disparar indiscriminadamente a cualquier persona encapuchada o manifestante o grabando [...] Unos policías me corretean y me disparan mientras voy corriendo. Me disparan en el lado izquierdo de mi tórax y de ahí me detienen [...] En el camino a la estación, me intimidan, me dicen que me van a desaparecer, me pegan [...] en la Estación La María, me escupen, me patean, me pegan, me dan durísimo varios policías y nos golpean esposados [...] no dejan que me revisen las heridas y no nos dejan comunicarnos con nadie [...] nos dijeron que llevábamos explosivos y que éramos vándalos¹⁸⁸.

Amnistía Internacional entrevistó al abogado defensor de Álvaro Herrera, Sebastián Mejía y Noé Muñoz¹⁸⁹, quien manifestó tener elementos probatorios relevantes que nutren las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la Nación¹⁹⁰. La denuncia expone que los jóvenes fueron víctimas de detención ilegal, tortura y tratos crueles e inhumanos y de tentativa de desaparición forzada, al recibir reiteradas amenazas por parte de agentes de la Policía Nacional con desaparecerlos si no se auto incriminaban. En su análisis de los hechos, el 28 de mayo se presentó un ataque armado premeditado entre agentes de Policía Nacional, personas civiles habitantes del barrio donde sucedieron los hechos y el congresista del partido de gobierno Christian Garcés, en la cual se discutió la coordinación para atacar a los manifestantes bajo el discurso de autodefensa. El abogado defensor manifestó que teme por la seguridad de los jóvenes y por su seguridad, pues asegura que estos hechos vinculan a agentes de alto rango de Policía Nacional y a personas reconocidas por su labor política en la coordinación del ataque armado.

El Comité de Derechos Humanos en la Observación General 35¹⁹¹ sobre el derecho a la libertad y seguridad personal, reiteró que los principios de transparencia y publicidad deben guiar las acciones del Estado en

¹⁸⁸ Testimonio de Noé Muñoz a Amnistía Internacional, recibido el 6 de julio de 2021.

¹⁸⁹ Entrevista con el abogado defensor Sebastián Caballero, 6 de julio de 2021.

¹⁹⁰ Denuncia interpuesta por el abogado Sebastián Caballero el 14 de julio de 2021 ante la Fiscalía General de la Nación Seccional Cali por la presunta comisión de los delitos de secuestro agravado, tortura agravada, lesiones personales agravadas, fraude procesal, concierto para delinquir agravado, desaparición forzada en grado de tentativa y homicidio en grado de tentativa en perjuicio de Álvaro Herrera Melo, Sebastián Mejía Belalcázar y Noé Sebastián Muñoz Ríos.

¹⁹¹ Comité de Derechos Humanos. Observación general N° 35 Artículo 9 (Libertad y seguridad personales). CCPR/C/GC/35. 16 de diciembre de 2014.

cuanto a las privaciones de libertad. A su vez, la CIDH ha señalado que “las detenciones eventualmente realizadas por las fuerzas de seguridad en el marco de protestas sociales deben cumplir estrictamente con todos los requisitos impuestos por las leyes internas y los estándares internacionales”¹⁹².

Sumado a lo anterior, Amnistía Internacional enfatiza en que de acuerdo a las obligaciones establecidas en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en la que Colombia es un Estado parte, el Estado debe garantizar que las privaciones de libertad se realicen cumpliendo las garantías propias del derecho internacional, como el derecho a comunicarse sin demora con sus familiares o el derecho a ser mantenidas en lugares de privación oficialmente reconocidos y controlados por las autoridades¹⁹³.

Para Amnistía Internacional, estos casos dan cuenta de la connivencia entre civiles armados y agentes de la Policía Nacional, para atacar con armas letales a los manifestantes y ejercer sobre ellos tratos crueles, inhumanos y degradantes que podrían constituir tortura. Además, en ambos casos los jóvenes fueron golpeados violentamente por personas de civil armadas y luego entregados a agentes de Policía, quienes los detuvieron ilegal y arbitrariamente. Al respecto, la CIDH ha señalado que “una detención es arbitraria e ilegal cuando es practicada al margen de los motivos y formalidades que establece la ley, y cuando se ha incurrido en desviación de las facultades de detención, es decir cuando se practica para fines distintos a los previstos y requeridos por la ley”¹⁹⁴.

Los jóvenes presentaron denuncias creíbles, con soportes audiovisuales verificados por Amnistía Internacional.

La privación de la libertad durante el desarrollo de una manifestación tiene el efecto inmediato de impedir el ejercicio del derecho a la protesta de la persona detenida y genera un efecto inhibitorio respecto a la participación en manifestaciones públicas, todo lo cual afecta el goce y el ejercicio del derecho a la protesta social¹⁹⁵.

El Juez 158 de Instrucción Penal Militar informó a Amnistía Internacional sobre una investigación en etapa de instrucción por el delito de prevaricato por omisión contra agentes de la Policía Nacional¹⁹⁶ en virtud de los hechos ocurridos el 28 de mayo en los que se observó que “uniformados de la Policía Nacional al parecer permitieron que personas vestidas de civil presuntamente residentes del sector de Ciudad Jardín de la ciudad de Cali, realizaran disparos con arma de fuego y/o traumáticas en contra de un grupo de manifestantes, sin que aparentemente los uniformados de la Policía Nacional realizaran procedimiento de policía alguno en contra de [los] particulares”¹⁹⁷. Asimismo, el Juez informó que no tiene investigaciones en las que figure como víctimas Sebastián Mejía, Noé Muñoz y Álvaro Herrera, “los cuales al parecer fueron detenidos por miembros de la Fuerza Pública”¹⁹⁸.

Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades nacionales para que garanticen una investigación exhaustiva, independiente e imparcial, para determinar la responsabilidad de los agentes de Policía y los civiles armados que habrían torturado a los jóvenes manifestantes.

¹⁹² CIDH. Protesta y Derechos Humanos Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal, OEA/Ser.L/V/II, CIDH/RELE/INF.22/19, septiembre 2019, párr. 224.

¹⁹³ Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, cada Estado parte “Garantizará que toda persona privada de libertad sea autorizada a comunicarse con su familia, un abogado o cualquier otra persona de su elección y a recibir su visita, con la sola reserva de las condiciones establecidas por la ley, y en el caso de un extranjero, a comunicarse con sus autoridades consulares, de conformidad con el derecho internacional aplicable” (Artículo 17.2). Colombia ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas el 11 de julio de 2012, sin embargo, no reconoció la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para conocer de comunicaciones individuales o comunicaciones de otros Estados parte.

¹⁹⁴ CIDH, Informe N° 35/08, Caso 12.019, Admisibilidad y Fondo, Antonio Ferreira Braga, Brasil, 18 de julio de 2008, párr. 68 en CIDH. Protesta y Derechos Humanos Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal, OEA/Ser.L/V/II, CIDH/RELE/INF.22/19, septiembre 2019, párr. 226.

¹⁹⁵ CIDH. Protesta y Derechos Humanos Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal, OEA/Ser.L/V/II, CIDH/RELE/INF.22/19, septiembre 2019, párr. 228.

¹⁹⁶ Mayor José Fernando León Agudelo, Mayor Mauricio Gómez Velandia, Teniente Aurelio Guevara Macucha, Intendente Ariel Augusto Nossa Barrera, Patrullero Cuspián Rodríguez Jhony Andrés, Patrullero Sinuco Osorio Eder Javier, Patrullero José Ricardo Guzmán González, y Patrullero Cristian Eulises Chilito Muñoz. Comunicación de referencia No. 832/MDN-DEJPMGDJ-J158IPM-1.10 del Juez 158 de Instrucción Penal Militar (E) de 23 de julio de 2021.

¹⁹⁷ Comunicación de referencia No. 832/MDN-DEJPMGDJ-J158IPM-1.10 del Juez 158 de Instrucción Penal Militar (E) de 23 de julio de 2021.

¹⁹⁸ Comunicación de referencia No. 832/MDN-DEJPMGDJ-J158IPM-1.10 del Juez 158 de Instrucción Penal Militar (E) de 23 de julio de 2021.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La evidencia descrita en el presente informe permite concluir que agentes de la Policía Nacional de Colombia, en particular los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios violaron los derechos humanos de manifestantes pacíficos en Cali. El ESMAD hizo uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestaciones pacíficas, con el objetivo de desarticularlas. Bajo la justificación del restablecimiento del orden, cientos de personas sufrieron daños considerables a su integridad personal y decenas de jóvenes perdieron la vida en Cali.

En este informe se evidencia que agentes de la fuerza pública y civiles armados actuando con su aquiescencia y tolerancia, atacaron a los manifestantes, cometiendo en algunos casos actos de tortura. Amnistía Internacional denuncia que, en un país golpeado por décadas de violencia paramilitar, estos hechos revisten de la mayor gravedad y deben ser investigados de manera diligente, independiente e imparcial.

Las prácticas evidenciadas en Cali -que incluyen uso de armas letales contra manifestantes, uso excesivo e ilegítimo de armas menos letales como gases lacrimógenos, detenciones ilegales y torturas-, son un reflejo de cientos de denuncias recibidas por manifestantes, personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos y demuestran un modus operandi llevado a cabo a lo largo del país.

Dichas prácticas evidencian además la imperiosa necesidad de cumplir con las disposiciones de la Corte Suprema de Justicia de 2020 y proceder a reformar integralmente la Policía Nacional y sus protocolos en respuesta además a la demanda permanente de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos y las recomendaciones de la CIDH. Amnistía Internacional hará recomendaciones puntuales sobre los puntos específicos que requiere una reforma policial en Colombia que sea acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en un documento posterior.

Finalmente, Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por la fuerza pública no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón de accionar violento, a fin de suscitar miedo y desincentivar la protesta pacífica. Esto demanda de la comunidad internacional la más enérgica condena y de las autoridades colombianas acciones concretas para detener la represión, garantizar la protesta pacífica y hacer justicia por las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el país.

AMNISTÍA INTERNACIONAL REALIZA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:

AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LAS ALTAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO:

1. Dar una orden inequívoca de detener la represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad;
2. Atender de manera urgente las causas estructurales que afectan el ejercicio de derechos humanos y las demandas sociales que dan origen a las protestas pacíficas;
3. Reconocer el carácter mayoritariamente pacífico de las manifestaciones, y tomar todas las medidas para garantizar los derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica de todas las personas en el país, sin distinción;
4. Abstenerse de emitir pronunciamientos que estigmaticen y criminalicen la protesta y a sus participantes;

5. Prevenir y no promover actos de estigmatización, discriminación y racismo contra los pueblos Indígenas, las comunidades Afrodescendientes y otros grupos de población históricamente marginalizados;
6. Retirar a las fuerzas militares de las operaciones de orden público, incluyendo durante las protestas;
7. Asegurar que las fuerzas de seguridad encargadas de hacer cumplir la ley cumplen plenamente con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, lo que incluye que
 - recurran a la fuerza letal solamente en situaciones de peligro de lesiones graves o de muerte y nunca como medio de dispersión de multitudes,
 - cesen el uso del sistema Venom en las operaciones de orden público en general y en la gestión de manifestaciones en particular,
 - y que aseguren que los gases lacrimógenos solamente se usen con el fin de dispersar a una multitud en situaciones de violencia generalizada. Nunca deberán usarse en espacios donde las personas no se puedan dispersar o contra una reunión pacífica.

Al respecto Amnistía Internacional recomienda que se utilicen sus *Directrices para la aplicación de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley* y sus *30 reglas para el uso de sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley* como marco de referencia.

8. Reconocer el accionar represivo de la fuerza pública en el contexto del Paro Nacional y adoptar medidas para asegurar una investigación diligente, independiente e imparcial y abstenerse de impedir el juzgamiento y sanción de las personas que sean halladas responsables de las violaciones de derechos humanos y de crímenes de derecho internacional, según corresponda;
9. Cumplir con las resoluciones de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 22 de septiembre de 2020 de forma que se garantice y facilite el ejercicio de los derechos fundamentales a la expresión, reunión, protesta pacífica y libertad de prensa y se expida la normativa relativa al uso de la fuerza en manifestaciones pacíficas y las demás ordenadas por la referida Corte.
10. Establecer un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas de la represión y sus familias;
11. Reconocer públicamente la labor legítima de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en el contexto del Paro Nacional;
12. Fomentar un entorno en el que las personas defensoras de los derechos humanos puedan realizar libremente su legítima labor de defensa de los derechos humanos;
13. Adoptar medidas para garantizar el trabajo de los periodistas, comunicadores sociales en el contexto del Paro Nacional;
14. Cumplir sin demora con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
15. Cooperar con y no obstaculizar la labor del Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia de la CIDH;
16. Adoptar las medidas tendientes a reconocer prontamente la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas para recibir y considerar las denuncias presentadas por víctimas o sus representantes y aquellas que pudieren provenir de otros Estados parte en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (Artículos 31 y 32, respectivamente).

A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

17. Iniciar investigaciones de manera diligente, independiente e imparcial sobre las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto del Paro Nacional, concretamente en la ciudad de Cali y los casos presentados en este documento, y, de existir pruebas suficientes y admisibles contra las personas sospechosas de responsabilidad penal, someterlas a un proceso justo ante los tribunales civiles ordinarios;
18. La investigación debe incluir todas las responsabilidades dentro de la línea de mando de la fuerza pública, así como en la participación de civiles armados con su aquiescencia y tolerancia;

A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

19. Cumplir con su mandato constitucional de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos con independencia e imparcialidad y libre de injerencia e influencia de autoridades políticas;
20. Cumplir con las disposiciones de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia de 22 de septiembre de 2020, particularmente aquella relativa a “realizar un control estricto, fuerte e intenso de toda actuación de [I ESMAD] en el desarrollo de manifestaciones y de sus actividades en cada uno de sus procedimientos”;

A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

21. Adelantar investigaciones disciplinarias contra agentes de la fuerza pública denunciados por uso excesivo e innecesario de la fuerza, con ocasión de su intervención en las manifestaciones pacíficas; estas investigaciones no reemplazan a las de carácter penal que corresponda adelantar contra dichos agentes;
22. Realizar investigaciones disciplinarias contra funcionarios públicos del nivel nacional y local, por omisión en el cumplimiento de sus deberes de protección de la protesta social; estas investigaciones no reemplazan a las de carácter penal que corresponda adelantar contra dichos funcionarios.

**AMNISTIA INTERNACIONAL
ES UN MOVIMIENTO GLOBAL
DE DERECHOS HUMANOS.
LAS INJUSTICIAS QUE
AFECTAN A UNA SOLA
PERSONA NOS AFECTAN
A TODAS LAS DEMÁS.**

CONTÁCTANOS



info@amnesty.org



+44 (0)20 7413 5500

ÚNETE A LA CONVERSACIÓN



www.facebook.com/AmnistiaAmericas



@AmnistiaOnline

CALI: EN EL EPICENTRO DE LA REPRESIÓN

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE EL PARO NACIONAL 2021 EN CALI, COLOMBIA

Desde el 28 de abril de 2021, en la ciudad de Cali, Colombia se han presentado manifestaciones multitudinarias. Al mismo tiempo, en esta ciudad se concentran las más graves denuncias de violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Las denuncias dan cuenta de la represión violenta por parte de la fuerza pública y civiles armados sufrida por jóvenes manifestantes.

A través de una rigurosa investigación y verificación de material audiovisual, Amnistía Internacional analizó la “Operación Siloé” el 3 de mayo; el ataque contra la Minga Indígena el 9 de mayo y los ataques, detención arbitraria y tortura a manifestantes el 28 de mayo y documentó el uso excesivo e innecesario de la fuerza y la violencia desplegada contra las personas que ejercían su derecho a la protesta pacífica así como ataques de civiles armados, quienes, acompañando a agentes de la Policía Nacional, y con su aquiescencia y tolerancia, atacaron a manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos, constituyendo así expresiones de paramilitarismo urbano.

Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, como la tortura y la desaparición forzada de personas, cometidos por agentes de la fuerza pública no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón de accionar violento, destinado a infligir miedo y desincentivar la protesta pacífica.



El Paro Nacional 2021: **Lecciones aprendidas** para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en **Colombia**



NACIONES UNIDAS
DERECHOS HUMANOS
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

ÍNDICE

I.	Resumen ejecutivo	3
II.	Introducción y metodología	4
III.	Contexto general y desenlace del Paro Nacional.....	6
A.	Antecedentes y orígenes del paro	6
B.	Peticiones del Comité Nacional del Paro.....	7
C.	Movilización del Paro Nacional y respuesta del Estado	8
IV.	Buenas prácticas observadas durante el proceso del Paro Nacional	13
V.	Situación de derechos humanos observada durante el Paro Nacional	19
A.	Derecho de reunión pacífica y estándares relativos al uso de la fuerza	19
B.	Derecho a la vida	23
C.	Derecho a la integridad personal.....	31
D.	Violencia sexual y basada en género	33
E.	Actos de discriminación y/o racismo en el marco de la protesta	36
F.	Derecho a la libertad	37
G.	Derecho a la libertad de expresión.....	41
H.	Derechos de personas defensoras de derechos humanos	43
I.	Derecho a la salud y el impacto del uso de la fuerza y violencia sobre los trabajadores voluntarios de la salud.....	45
J.	Criminalización de la protesta	47
VI.	Actos de violencia contra la Fuerza Pública y destrucción de bienes públicos y privados.....	49
VII.	Bloqueos y cierres de vías en el contexto de la protesta	51
VIII.	Rendición de cuentas.....	54

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....57

I. Resumen ejecutivo

1. El presente documento aborda la situación de derechos humanos en el marco del Paro Nacional que tuvo lugar en Colombia desde el 28 de abril de 2021. A partir de su observación e información recopilada y contrastada, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en adelante, la Oficina) presenta un balance de cuanto observado y documentado con el objetivo de contribuir a un análisis de las lecciones aprendidas del Paro que sirva para reforzar la protección de los derechos humanos.
2. Del 28 de abril al 31 de julio 2021, la Oficina identificó un conjunto de situaciones, acciones y/u omisiones de agentes del Estado, en particular integrantes de la Fuerza Pública en el transcurso de la protesta, incompatibles con el derecho de reunión pacífica y otros derechos humanos. Asimismo, algunos casos documentados ilustran las acciones y/u omisiones del Estado frente a la actuación violenta de personas vestidas de civil contra manifestantes.
3. De la información recopilada y analizada por la Oficina, hay razones fundadas para sostener que se habrían cometido graves violaciones a los derechos humanos, tales como privaciones arbitrarias de la vida y violaciones a la integridad y seguridad personal, derivadas del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza; detenciones arbitrarias; violencia sexual y de género; y actos de discriminación y racismo. Dentro de la observación realizada por la Oficina se encontraron casos en los que las víctimas eran indígenas y afrodescendientes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
4. En particular, entre el 28 de abril y el 31 de julio, la Oficina recibió información sobre alegaciones de muertes de 63 personas en el contexto de las protestas. Del total de alegaciones, la Oficina verificó 46 casos, 4 casos se encuentran aún en proceso de verificación y en 13 casos la Oficina consideró que no había información concluyente para determinar si las muertes tuvieron lugar en el contexto de las protestas. De los casos verificados, 44 víctimas eran civiles y dos eran policías. De la información recopilada y analizada por la Oficina, existen motivos razonables para afirmar que, de los 46 casos verificados, en al menos 28 casos los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la Fuerza Pública, 10 habrían sido actores no estatales, mientras que en ocho casos la Oficina no obtuvo información suficiente para identificar al presunto perpetrador.
5. Adicionalmente, la Oficina recibió alegaciones de violencia sexual en contra de 60 personas, de las cuales 48 son mujeres y 12 hombres, en el marco de las manifestaciones del Paro Nacional, presuntamente cometidas por miembros de la Policía Nacional. De estos, la Oficina verificó los casos de 16 víctimas de violencia sexual que habrían sido cometida por miembros de la Policía Nacional.
6. La Oficina también documentó graves acciones de violencia contra la Fuerza Pública, incluso con consecuencias fatales y destrucción de bienes públicos y privados. La Oficina conoció algunas situaciones de bloqueos y cierres de vías que afectaron negativamente o impidieron el ejercicio y disfrute de derechos humanos.

7. La Oficina documentó las buenas prácticas observadas durante el Paro, notando que el diálogo entre las autoridades, los manifestantes y otros actores fue el instrumento más efectivo para darle seguimiento a los reclamos de los manifestantes, para proteger derechos y prevenir, evitar o neutralizar situaciones de violencia, incluyendo en respuesta a los bloqueos. En este sentido, las autoridades que favorecieron el diálogo ayudaron a reforzar el derecho de reunión pacífica y la protección de los derechos humanos en sus jurisdicciones. La Oficina también saludó el anuncio del Gobierno Nacional de cero-tolerancia frente a acciones por parte de la Fuerza Pública incompatibles con estándares de derechos humanos y las investigaciones impulsadas por la Fiscalía General de la Nación hasta la fecha en esos casos.
8. Dentro de las buenas prácticas, la Oficina también reconoce la importancia de la instalación de la mesa de evaluación de garantías de manifestaciones públicas conforme a lo establecido en el Decreto 003 de 2021, la anuencia a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el rol de las personas defensoras de derechos humanos durante el desarrollo del Paro Nacional.
9. La Oficina concluye que, a futuro, el Estado de Colombia deberá mostrar una moderación al recurrir a la dispersión y el uso de la fuerza, conforme a los estándares internacionales.
10. Entre sus recomendaciones principales, la Oficina insta a todas las instituciones del Estado, incluyendo las fuerzas de seguridad, a que apliquen efectivamente los estándares internacionales relacionados con el derecho de reunión pacífica, y adopten medidas para crear un entorno favorable para el ejercicio de este derecho, incluyendo: la prevención de ataques provenientes de terceros y el reforzamiento de los espacios de diálogo social para atender los reclamos de los manifestantes. Se deben impulsar y adoptar medidas de reparación para todas las víctimas de violaciones de derecho humanos que tuvieron lugar en el contexto del Paro Nacional, reforzar las investigaciones, sancionando adecuadamente a los responsables, y garantizar el carácter civilista de la policía.

II. Introducción y metodología

11. El presente documento toma como base la observación realizada e información recopilada por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia del 28 de abril hasta el 31 de julio¹ de 2021.
12. El objetivo de este documento es presentar un balance de cuanto observado y documentado durante el Paro Nacional, incluyendo los principales hallazgos de la Oficina y formulando una serie de recomendaciones. Con este documento, la Oficina busca contribuir a un análisis

¹ El período hace referencia a la información procesada por la Oficina. En casos relacionados con información de otras fuentes que también han documentado los hechos se alude a la información más actualizada disponible.

de las lecciones aprendidas del Paro para reforzar la protección de los derechos humanos, en particular el derecho de reunión pacífica, y prevenir situaciones de violaciones y otras afectaciones a los derechos humanos en esos contextos en el futuro. Las recomendaciones buscan contribuir con los esfuerzos de las autoridades y todos los sectores de la sociedad colombiana para proteger plenamente el ejercicio del derecho a la reunión pacífica, identificar las causas estructurales que originaron la protesta, e impulsar y ejecutar reformas estructurales orientadas a reforzar el Estado de derecho y el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos en el país.

13. La Oficina realizó 623 entrevistas a víctimas y testigos de presuntas violaciones de derechos humanos. La Oficina también sostuvo 505 reuniones con funcionarios gubernamentales nacionales y locales –incluyendo de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, Alcaldías y Gobernaciones-, y 373 reuniones con organizaciones de sociedad civil y personas que se encontraban protestando. La Oficina analizó documentos de fuentes gubernamentales y no gubernamentales, tales como videos, fotos e informes. La Oficina acompañó el diálogo nacional entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro, así como asesoró diversos procesos de diálogos territoriales para facilitar la interlocución entre manifestantes y autoridades. La Oficina condujo misiones de verificación y observó directamente el Paro en todas sus áreas de cobertura y en las principales zonas donde se registraron protestas. La Oficina solicitó a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación información sobre denuncias de violaciones a los derechos humanos.
14. La Oficina también desarrolló un análisis forense de videos. Abordó inicialmente 2.414 piezas de material audiovisual que fueron categorizadas según su credibilidad y relevancia para el análisis de ciertos hechos priorizados y posibilidad de ser verificados. Finalmente se seleccionaron 83 videos que fueron analizados, georreferenciados, así como contrastados con distintas fuentes e información recabada por la Oficina, y relacionados con eventos ocurridos en cuatro fechas e incidentes distintos en la ciudad de Cali.
15. La Oficina analizó la información recopilada a la luz del derecho internacional de los derechos humanos aplicable a Colombia y de la legislación nacional pertinente.
16. En consonancia con su metodología de monitoreo, la Oficina corroboró con diferentes fuentes la información recopilada y evaluó su credibilidad actuando con la debida diligencia. El análisis y la verificación de esta información aporta motivos suficientes para creer que los hechos ocurrieron tal como se describen en este documento y que constituyeron violaciones de derechos humanos o que afectaron los derechos humanos. La Oficina hace referencia a los nombres de las víctimas cuando éstas y/o sus familiares han manifestado su consentimiento para ello y con el objetivo de honrar su memoria.
17. Para fines de este documento, cuando la Oficina se refiere a casos o situaciones “en el contexto de la protesta”, se refiere a eventos que ocurrieron en el transcurso de la protesta o como consecuencia de las acciones u omisiones del Estado en respuesta a la protesta. Se incluyeron acciones tanto de agentes estatales; así como de actores no estatales que tuvieron impacto sobre el ejercicio y disfrute de derechos humanos.

III. Contexto general y desenlace del Paro Nacional

A. Antecedentes y orígenes del paro

18. El Paro Nacional iniciado el 28 de abril ocurrió en un contexto de creciente desigualdad social y económica en Colombia. La desigualdad en el disfrute de derechos económicos, sociales y culturales (DESC) ha sido un problema estructural en el país evidenciado, desde hace muchos años, por los mecanismos de protección de los derechos humanos. Por ejemplo, en 1996 y en 2017 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales identificó entre los factores que obstaculizan la aplicación del Pacto las graves desigualdades que existen en la sociedad, tales como las enormes diferencias en la distribución de la riqueza nacional, incluida la propiedad de las tierras².
19. La desigualdad por ingresos ha ido creciendo en los últimos años. El coeficiente de Gini pasó de 0,517 en 2018 a 0,526 en 2019³ y para el año 2020, fue 0,544⁴. Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Colombia es el segundo país con mayor nivel de desigualdad de la región⁵. Los datos reflejan también que la desigualdad afecta a ciertos grupos de la población, incluidos los de origen étnico. Por ejemplo, la pobreza multidimensional de la población afrocolombiana, raizal y palenquera se ubicó en 30,6%, 11% por encima de la pobreza nacional en 2018⁶.
20. Muchas de estas desigualdades se agudizaron por causa de la pandemia de COVID-19. Para el trimestre enero-marzo de 2021, la tasa de desempleo fue 15,8%, lo que representó un aumento de 3,2 puntos porcentuales comparado con el mismo trimestre del 2020 (12,6%)⁷. La tasa de desempleo de los hombres en el trimestre enero-marzo 2021 se ubicó en 12%, mientras para las mujeres fue de 21%. En el trimestre enero-marzo 2020 estas tasas se ubicaron en 9,8% y 16,4%, respectivamente⁸. La tasa de desempleo de la población joven⁹ en enero-marzo de 2021 se ubica en 23,9%, registrando un aumento de 3,4% frente al trimestre enero-marzo 2020¹⁰. Para marzo de 2021, la proporción de población ocupada informal fue del 48,8%, mientras que, para marzo de 2020, fue de 46,7%¹¹.

² E/C.12/1995/12, párr. 7 y E/C.12/COL/CO/6, Párr.49.

³ Véase www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2019/Boletin-pobrezamonetaria_2019.pdf

⁴ Ibídem.

⁵ Véase

https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/version_final_panorama_social_para_sala_prebisch-403-2021.pdf

⁶ Véase www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-grupos-etnicos-poblacion-NARP-2019.pdf

⁷ Véase www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo

⁸ Ibídem.

⁹ El DANE considera la población joven entre los 14 y los 28 años de edad.

¹⁰ Véase www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/juventud/Boletin_GEIH_juventud_ene21_mar21.pdf

¹¹ Véase www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/mercado-laboral-historicos

21. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) estimó que, en enero de 2021, casi la mitad de la población colombiana (48%) estaba en una situación de inseguridad alimentaria¹². De acuerdo con el PMA, esto es corroborado por los datos más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), *“que indican que en el trimestre noviembre 2020-enero 2021 sólo 68% de las personas reportaron comer tres o más veces al día, mientras que 90% lo hacía antes de la pandemia”*¹³.
22. En 2021, el Instituto Nacional de Salud registró 6.511 casos de niñas (46,3%) y niños (53,7%) menores de cinco años con desnutrición, lo que representó un aumento del 19,2% con respecto a 2020¹⁴. La prevalencia para 2021 fue de 0,11 por cada 100 menores de 5 años¹⁵. El 16% de las niñas y niños con desnutrición en 2021 pertenece a pueblos indígenas¹⁶.
23. Según una encuesta realizada por la Veeduría Distrital de Bogotá a personas entre 14 y 28 años residentes en esa ciudad, la educación y el empleo constituyeron los reclamos más registrados por los y las jóvenes en el marco de las protestas¹⁷. Al ser interrogado por la Oficina sobre las razones de su participación en las protestas, uno de los jóvenes de la denominada “primera línea” de Cali expresó: *“no queremos que nuestros hijos tengan nuestros mismos problemas, queremos que tengan educación, comida y salud”*. Otro de los jóvenes señaló: *“por estar en este proceso, por primera vez en la vida, siento que soy alguien, que pertenezco a algo y por primera vez puedo comer tres veces diario gracias a la generosidad de la gente”*. En Cali, los jóvenes reportaron que la discriminación racial fue también un factor importante para su participación en las protestas.

B. Peticiones del Comité Nacional del Paro

24. En el marco de la movilización que inició el 28 de abril, el Comité Nacional del Paro¹⁸, compuesto por sectores sindicales, sociales y de derechos humanos, presentó al Gobierno

¹² WFP, Food Security – Colombian and Venezuelan populations – primary and secondary data sources, 2 de junio de 2021.

¹³ *Ibídem*.

¹⁴ Véase www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/DESNUTRICI%C3%93N%20EN%20MENORES%205%20A%C3%91OS%20PE%20VI%202021.pdf

¹⁵ Véase www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/DESNUTRICI%C3%93N%20EN%20MENORES%205%20A%C3%91OS%20PE%20VI%202021.pdf

¹⁶ Véase <https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/DESNUTRICI%C3%93N%20EN%20MENORES%205%20A%C3%91OS%20PE%20VI%202021.pdf>

¹⁷ Véase <https://www.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones2021/Informe%20Que%20quieren%20los%20jovenes%20de%20Bogota.pdf>

¹⁸ Conformado por las centrales sindicales: Central Unitaria de Trabajadores, Confederación General del Trabajo, Confederación de Trabajadores de Colombia, Federación Colombiana de Educadores, Confederación de Pensionados de Colombia, Unión Sindical Obrera, Coordinadora Obrera Sindical, y movimientos sociales como: Cumbre Agraria, Dignidad Agropecuaria, Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, Unión Nacional de Estudiantes de

un pliego de demandas,¹⁹ reiterando las presentadas en el marco de las protestas llevadas a cabo en el 2019. Este pliego de demandas incluye, entre otras, tomar medidas que propendan por la formalización laboral y la seguridad social; garantizar el derecho a la salud y los derechos laborales del personal de salud; tramitar en el Congreso de la República los proyectos de ley anticorrupción; adoptar una política de reforma agraria integral; garantías de acceso a la tierra para las mujeres campesinas; y la ratificación e implementación del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

25. Así mismo, el pliego propuso: el pleno cumplimiento del Acuerdo de Paz, incluyendo las cláusulas de género y el capítulo étnico; la implementación de las normas en materia de garantías para la defensa de los derechos humanos; el cumplimiento de una serie de garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social, entre ellas que la protesta social no tenga un tratamiento militar, ni intimidatorio; y la celeridad y efectividad en las investigaciones y procesos judiciales por graves violaciones de derechos humanos.
26. El Comité Nacional del Paro también pidió el cumplimiento de una lista de acuerdos previos entre el Gobierno de entonces y movimientos sociales, incluyendo con estudiantes universitarios, y de los acuerdos derivados de los paros cívicos de Buenaventura (Valle del Cauca) en 2017, Chocó en 2017 y Tumaco en 2013 (Nariño).
27. Finalmente, frente a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia de COVID-19, el Comité Nacional del Paro también reclamó al Gobierno un “Pliego de Emergencia” inicialmente presentado el 19 de junio de 2020 que pide: la intervención del Estado en el sistema de salud para garantizar la atención en la pandemia; una renta básica de emergencia para personas en condición de pobreza; medidas para garantizar la educación superior; y medidas para enfrentar el incremento de la violencia basada en género.

C. Movilización del Paro Nacional y respuesta del Estado

28. El 15 de abril de 2021, el Ministro de Hacienda y Crédito Público presentó un proyecto de ley de reforma tributaria al Congreso²⁰.
29. La mayoría de los partidos políticos expresaron su desacuerdo con el proyecto de ley²¹. Por ejemplo, algunos partidos políticos, señalaron que no estaban de acuerdo con la propuesta del impuesto al valor agregado a los servicios públicos, a la renta de personas naturales y a

la Educación Superior, Organización Nacional Indígena de Colombia, Consejo Regional Indígena del Cauca, Proceso de Comunidades Negras, Afrodescendiente, Plataforma de DD.HH., Salud en Paro, con las Pensiones No, Arte y Cultura, Periodismo Alternativo, Movimiento de Mujeres, Confederación Nacional de Pescadores, Recicladores, Movimiento Ambientalista, Comité Defensas de Páramo, LGTBTIQ, Sector Transporte, Sector Minero, Fraking.

¹⁹ Véase https://fecode.edu.co/images/comunicados/2019/AGENDA_DEL_CNP_AL_GOBIERNO.pdf

²⁰ Véase

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2021/gaceta_289.pdf

²¹ Véase www.eltiempo.com/politica/congreso/partidos-muestran-sus-cartas-para-la-reforma-tributaria-583695

personas pensionadas²². Adicionalmente, algunos expertos señalaron, entre sus críticas a la reforma, la falta de búsqueda de concertación social²³ y el que la reforma afectaría a personas de medianos y bajos ingresos y no a quienes tienen mayores ingresos²⁴.

30. El 28 de abril, el Comité Nacional del Paro convocó a una movilización nacional de protesta. La convocatoria movilizó a miles de personas a nivel nacional, muchas de ellas para protestar contra la reforma tributaria. El Paro Nacional rápidamente se transformó en una movilización prolongada por varios meses, llevada a cabo por sectores populares históricamente excluidos y particularmente afectados por la pandemia que no necesariamente pertenecían o se reconocían en el Comité Nacional del Paro. Muchos de los reclamos de la protesta se enfocaron en la exclusión social, económica y política y en barreras para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. El Paro y las manifestaciones desarrollaron expresiones y reivindicaciones distintas en los diferentes territorios del país y fue liderada por personas colombianas jóvenes.
31. Según el Gobierno Nacional, del 28 de abril al 30 de junio, se realizaron 12.478 actividades de protesta social en 860 municipios de los 32 departamentos del país²⁵. El Gobierno Nacional calificó como pacíficas 11.060 manifestaciones –el 89% de ellas, y consideró que en 1.418 ocasiones (11%), se presentaron disturbios y acciones violentas en los que intervino el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD). Desde los primeros días de la movilización, la respuesta de la Fuerza Pública incluyó la intervención del ESMAD y se reportaron alegaciones de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza y graves violaciones a los derechos humanos. Según la información del Puesto de Mando Unificado (PMU), del total de actividades que se registraron en los tres primeros días del Paro, el ESMAD intervino el 28 de abril en el 65% de ellas, el 29 de abril en el 85%, y el 30 de abril en el 56%²⁶. Esta respuesta generó el rechazo de las personas manifestantes, quienes exigieron, con el Comité Nacional del Paro, garantías para la protesta pacífica. La reforma policial y la eliminación del ESMAD se transformaron en la demanda principal de los jóvenes manifestantes de las denominadas “primeras líneas”. En varios puntos del país, se instalaron bloqueos o puntos de concentración que impidieron el transporte de y acceso a bienes y el movimiento de personas (ver capítulo VII).
32. El Gobierno afirmó que la acción de la Fuerza Pública respondió a incidentes de vandalismo que se dieron desde los primeros días de las protestas y que provocaron la destrucción de bienes e instalaciones públicos y privados en varias ciudades.
33. Frente a la movilización masiva contra la iniciativa de reforma tributaria, el 2 de mayo el Gobierno retiró el proyecto de ley, indicando que tramitaría un nuevo proyecto “*fruto de los consensos*”²⁷.

²² <https://www.portafolio.co/economia/reacciones-de-los-partidos-politicos-sobre-la-reforma-tributaria-551012>

²³ Véase <https://ne-np.facebook.co/CanalCapitalOficial/videos/yo-creo-que-para-quienes-han-promovido-el-paro-y-quienes-apoyamos-sus-razones-ya/881630742386954/>

²⁴ Véase www.larepublica.co/economia/los-pros-y-los-contras-de-la-proxima-reforma-tributaria-del-gobierno-de-ivan-duque-3145238

²⁵ Observaciones del Gobierno Nacional al documento “Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia”, entregado a la Oficina el 9 de diciembre de 2021.

²⁶ PMU, Balance general jornada de protesta, 14 de julio de 2021.

²⁷ Véase <https://www.youtube.com/watch?v=f49dYyduHnU&t=46s>

34. El 4 de mayo, un comunicado de la portavoz de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó alarma y preocupación por el uso de la fuerza contra manifestantes. Declaró que “desde el 28 de abril, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha recibido denuncias de al menos 14 muertes en el contexto de las protestas en diferentes partes de Colombia, entre ellas la de al menos un agente de policía”²⁸. También resaltó que personas defensoras de derechos humanos informaron que habían sido acosadas y amenazadas en la ciudad de Cali.
35. El 7 de mayo, el sistema de Naciones Unidas en Colombia “observó de manera positiva la invitación del Gobierno Nacional en ese momento para la realización de diálogos con diferentes sectores” e hizo un llamado a que se garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta, y subrayó la necesidad de que toda acción de la Fuerza Pública observe plenamente la protección y el respeto por los derechos humanos. El sistema resaltó la importancia que las protestas se realicen de manera pacífica, condenando cualquier tipo de acción violenta, incluyendo violencia sexual, actos contra la infraestructura y todos aquellos que vulneren los derechos humanos. El comunicado llamó “a garantizar el libre acceso a insumos alimentarios básicos, la Misión Médica y misiones humanitarias para la población que requiere asistencia en medio de la pandemia”²⁹ y ofreció el apoyo del sistema de Naciones Unidas.
36. El 7 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) emitieron un comunicado en el que expresaron su preocupación por la gravedad y el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos producto del “uso excesivo de la fuerza” en el contexto de las protestas sociales en Colombia³⁰.
37. El 10 de mayo, se dio inicio a un proceso de diálogo nacional entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno Nacional. El diálogo se enfocó en negociar garantías para la protesta, previo a la negociación del pliego de peticiones y demandas presentados por el Comité del Paro al Gobierno. A solicitud de las partes, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, la Oficina y la Iglesia (Conferencia Episcopal de Colombia) acompañaron el proceso de diálogo.
38. El 14 de mayo, expertos independientes en derechos humanos de la ONU y OEA condenaron “la violenta represión de las protestas pacíficas en Colombia” y pidieron al Gobierno que “lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre muertes reportadas, violencia sexual, alegaciones de tortura, casos de presuntas detenciones arbitrarias y de desaparición forzada”³¹.

²⁸ Véase <https://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/comunicados-de-prensa/ano-2021/9598-declaraciones-de-la-portavoz-de-la-alta-comisionada-de-la-onu-para-los-derechos-humanos-sobre-situacion-de-colombia-durante-manifestaciones>

²⁹ Véase <https://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/comunicados-de-prensa/ano-2021/9599-comunicado-del-sistema-de-las-naciones-unidas-en-colombia>

³⁰ Véase <https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/118.asp>

³¹ Véase <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27093&LangID=S>

39. El 19 de mayo, el Gobierno decidió archivar un proyecto de ley presentado el 20 de julio de 2020 que buscaba reformar el sistema de salud³² y que también había sido objeto de críticas en el marco de las protestas.³³
40. El 20 de mayo, el Gobierno instaló la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías para la Protesta Social de acuerdo a lo establecido en el Decreto 003 de 2021³⁴.
41. El 21 de mayo, la Oficina publicó un documento sobre el alcance de las disposiciones de derecho internacional sobre el derecho a la reunión pacífica y su relación con otros derechos. El documento busca ayudar en la gestión de los bloqueos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos³⁵.
42. El 24 de mayo, en el marco del diálogo nacional, el Gobierno y el Comité Nacional del Paro lograron un “*preacuerdo*” centrado en las garantías para la protesta social. Entre los elementos discutidos en el marco del preacuerdo estaban: la necesidad de limitar la intervención militar en la gestión de la protesta; el respeto de las obligaciones internacionales sobre el uso de la fuerza; el papel del ESMAD durante el desarrollo y control de la protesta social³⁶; las expresiones públicas del Gobierno Nacional frente a la protesta y las personas manifestantes; el rechazo al uso de la violencia y la necesidad de levantar los bloqueos que impiden la realización de otros derechos³⁷.
43. El 24 de mayo, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado y la Oficina publicaron un comunicado señalando que el Estado colombiano había realizado importantes acciones para brindar respuesta a las alegaciones sobre desapariciones ocurridas en el marco de las protestas; y reiterando la importancia de implementar todas las medidas adecuadas y eficaces, estipuladas en estándares internacionales de derechos humanos, para prevenir la desaparición de personas, incluida la desaparición forzada³⁸.

³² “Por medio de la cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud dentro del sistema general de seguridad social, de conformidad con la ley 1751 de 2015, y la sostenibilidad del sistema de salud”, Proyecto de Ley 010 de 2020 Senado, 425 de 2020 Cámara.

³³ Véase <https://www.youtube.com/watch?v=YtyKhniSFI&t=273s> y <https://federacionmedicacolombiana.com/wp-content/uploads/2020/08/An%C3%A1lisis-Proyecto-de-Reforma-a-la-Salud-radicada-en-el-Congreso-de-la-Rep%C3%BAblica-Definitivo-1.pdf>

³⁴ Decreto 003 del 5 de enero de 2021, por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”. Para un análisis del Decreto a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, véase <https://www.hchr.org.co/phocadownload/publicaciones/otras/Comentarios-Decreto-003-version-final.pdf>

³⁵ Véase <https://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/documentos/9603-alcance-de-las-disposiciones-de-derecho-internacional-sobre-el-derecho-a-la-reunion-pacifica-y-su-relacion-con-otros-derechos-expresiones-del-derecho-de-reunion-pacifica-y-posibilidad-de-intervencion-de-conformidad-con-limites-establecidos-en-el-didh>

³⁶ El Comité Nacional del Paro pide la supresión del ESMAD.

³⁷ Comité Nacional del Paro, “Propuesta de preacuerdo de garantías a la movilización social en Colombia entregada por el Comité Nacional de Paro al Gobierno Nacional”, cuadro comparativo, recibido por la OACNUDH el 30 de mayo de 2021.

³⁸ Véase <https://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/comunicados-de-prensa/ano-2021/9604-estandares-internacionales-sobre-garantias-para-la-prevencion-y-proteccion-de-las-personas-frente-a-la-desaparicion>

44. El 28 de mayo, cuando se conmemoraba un mes del inicio del Paro, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 575 de 2021, mediante el cual ordena a los Gobernadores y Alcaldes “coordinar con las autoridades militares y de policía del departamento la asistencia militar ... de manera que el departamento, el distrito y los municipios, pongan en ejecución [el Decreto] para afrontar y superar los hechos que den lugar a la grave alteración de la seguridad y la convivencia”; así como “adoptar las medidas necesarias, en coordinación con la Fuerza Pública, para levantar los bloqueos internos que actualmente se presentan en las vías de sus jurisdicciones, así como también evitar la instalación de nuevos bloqueos”³⁹.
45. El Decreto 575 fue ampliamente criticado por los sectores movilizados que consideraron que el Gobierno militarizaba su respuesta a la protesta social. A pesar de la aprobación del Decreto, los bloqueos continuaron perturbando el tránsito de y acceso a bienes y el movimiento de personas, afectando, en algunos casos, el pleno ejercicio y disfrute de derechos humanos. Las tensiones entre manifestantes y grupos de personas que se oponían a las manifestaciones aumentaron, particularmente en la ciudad de Cali. A pesar de los diálogos, el uso de la fuerza por parte de la Fuerza Pública contra manifestantes continuó y, el 28 de mayo en Cali, se registraron varios casos de individuos vestidos de civil que atacaron, incluso con armas de fuego, a personas manifestantes, en algunos casos en presencia de la Fuerza Pública.
46. El 29 de mayo, el Representante Especial del Secretario General de la ONU en Colombia hizo un llamado a todos los actores a “prevenir y eliminar la violencia y hacer todo lo posible para disminuir las tensiones y evitar su escalamiento. En cualquier circunstancia, incluso en las más difíciles, tenemos que impulsar el diálogo”⁴⁰. El 30 de mayo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por los acontecimientos ocurridos en Cali desde el 28 de mayo, donde varias personas habrían perdido la vida o sido heridas y donde individuos armados habrían disparado en dirección a manifestantes, periodistas que cubrían las protestas y transeúntes. La Alta Comisionada pidió “que se ponga fin a todas las formas de violencia, incluyendo el vandalismo, y que todas las partes sigan hablando, para que se garantice el respeto por la vida y la dignidad de todas las personas”⁴¹.
47. El 4 de junio, la CIDH anuncia haber alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Colombia para realizar una visita de trabajo a Colombia del 8 al 10 de junio para observar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas iniciadas el 28 de abril. Las observaciones y recomendaciones de su visita se publicaron el 7 de julio⁴².

³⁹ Véase <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=163846>, artículo 1.1 y 1.2.

⁴⁰ Véase <https://colombia.unmissions.org/declaraci%C3%B3n-del-representante-especial-del-secretario-general-de-la-onu-en-colombia-carlos-ruiz-2>

⁴¹ Véase <https://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/comunicados-de-prensa/ano-2021/9612-colombia-bachelet-llama-al-dialogo-y-al-respeto-de-los-derechos-humanos-tras-nuevas-informaciones-sobre-muertos-y-heridos-en-cali>

⁴² Véase https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf

48. El 6 de junio, el Presidente de la República anunció una reforma a la Policía Nacional que contiene 10 puntos, incluyendo la creación de una Dirección de Derechos Humanos dentro de la Policía Nacional.⁴³
49. El 6 de junio, en ausencia de un acuerdo firme entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro sobre el “preacuerdo” alcanzado el 24 de mayo en relación con las garantías para la protesta, se suspendió el diálogo nacional.
50. El 15 de junio, el Comité Nacional del Paro anunció que suspendía temporalmente sus jornadas de movilización convocadas regularmente desde el 28 de abril. Sin embargo, las manifestaciones continuaron en distintos lugares del país.
51. El 19 de julio, el Presidente de la República anunció la creación de una Dirección de Derechos Humanos de la Policía Nacional como parte de las medidas para reformar a la Policía anunciadas el 6 de junio.
52. El 20 de julio, día de instalación de las sesiones en el Congreso, el Comité Nacional del Paro presentó 10 proyectos de ley, a través de los partidos de oposición, que abordaban las temáticas incluidas en su pliego de peticiones.
53. El 23 de julio, el Consejo de Estado suspendió temporalmente el Decreto 575 sobre asistencia militar mientras se decidía una acción de tutela, presentada por un grupo de personas en Cali. El alto tribunal consideró que “ese acto administrativo amenaza el derecho a la protesta social porque los hechos que se mencionan como perturbadores del orden público tienen que ver con disturbios internos, con seguridad ciudadana, con la protección y control de civiles, funciones que están a cargo de la Policía Nacional por mandato constitucional, más no de las Fuerzas Militares.”⁴⁴

IV. Buenas prácticas observadas durante el proceso del Paro Nacional

54. La Oficina reconoce la movilización ciudadana que se evidenció en diferentes partes del país de manera mayoritariamente pacífica y democrática. Las formas de manifestarse fueron enriquecidas con expresiones culturales y artísticas diversas, particularmente por parte de la juventud, las cuales favorecieron que la protesta adopte una forma pacífica y propositiva.
55. El despliegue de organizaciones de derechos humanos, de la Iglesia católica a través de la Pastoral Social, de gestores de paz y convivencia de algunas alcaldías y gobernaciones, de personerías y el seguimiento de medios de comunicación y de periodistas alternativos contribuyeron a la prevención de violaciones de derechos humanos y de la violencia en medio de las protestas. Así mismo, el despliegue de la Defensoría del Pueblo en varios lugares, contribuyó a la protección de los manifestantes.

⁴³ Véase <https://idm.presidencia.gov.co/prensa/presidente-duque-lanza-proceso-de-transformacion-integral-de-la-policia-210606>

⁴⁴ Véase <https://www.consejodeestado.gov.co/news/consejo-de-estado-suspende-provisionalmente-decreto-de-asistencia-militar-para-conjurar-problemas-de-orden-publico-durante-protestas/>

56. El fin del conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), producto del Acuerdo de Paz, parece haber fortalecido a la sociedad y las condiciones para una mayor participación y movilización social. Se observó cómo la protesta social tiene mayores canales de expresión, reduciendo los riesgos de que el descontento social sea canalizado por dinámicas asociadas con el conflicto armado y la violencia. El incremento de la movilización social y las protestas pacíficas del 2019, 2020 y la iniciada en abril de 2021 ilustran un mayor dinamismo social, el cual robustece la democracia y el Estado de Derecho.
57. La Oficina saluda que las más altas autoridades del Gobierno, incluyendo el Presidente de la República y la Vicepresidenta, expresaron públicamente en distintas ocasiones su compromiso de “cero-tolerancia con los abusos” de la Fuerza Pública e hicieron un llamado a las autoridades a “garantizar investigaciones rápidas, efectivas e independientes” en relación con todas las denuncias de violaciones y abusos cometidos desde el 28 de abril⁴⁵.

Diálogos territoriales

58. Durante el Paro Nacional, la Oficina observó que los distintos diálogos territoriales entre autoridades locales y manifestantes fueron un factor de prevención de la violencia que redujeron la polarización y desconfianza institucional y facilitaron la instalación de mesas de negociación y la apertura de canales de comunicación permanente entre manifestantes, autoridades civiles, organizaciones sociales, Iglesia y entidades internacionales articuladas como acompañantes de estos procesos. La Oficina conoció de buenas prácticas en la gestión de la protesta a través del diálogo social en Bogotá, Cali y Medellín y en departamentos como Caquetá, Huila, Nariño, Norte de Santander y Meta, entre otros. Algunas de estas iniciativas de diálogo contaron con la participación del Gobierno Nacional, lo cual fortaleció la coordinación, coherencia e impacto en la actuación estatal. La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos informó acerca de 17 diálogos regionales, y el Ministerio del Interior reportó haber liderado 78 mesas en 16 departamentos del país⁴⁶.
59. En Cali y en Bogotá, ciudades donde se presentaron la mayor cantidad de hechos de violencia y de violaciones de derechos humanos en el marco de las manifestaciones del Paro Nacional, las autoridades locales hicieron notables esfuerzos por revertir esta situación.
60. En conjunto, varios alcaldes y gobernadores privilegiaron fórmulas distintas a la asistencia militar en la gestión de la protesta⁴⁷.

⁴⁵ En Cable Noticias TV., <https://www.cablenoticias.tv/nuestros-uniformados-siempre-han-sido-entregados-y-de-respeto-a-los-ciudadanos-duque-sobre-abuso-policial/>

⁴⁶ Observaciones del Gobierno Nacional al documento “Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia”, entregado a la Oficina el 9 de diciembre de 2021.

⁴⁷ Los gobernadores: Clara Luz Roldán, del Valle del Cauca; Elías Larrahondo, del Cauca; Álvaro Granja, del Putumayo; Arnulfo Gasca del Caquetá; Víctor Tamayo, de Risaralda; Jhon Rojas, de Nariño; Luis Enrique Dussán del Huila; Carlos Caicedo, del Magdalena; y Silvano Serrano, de Norte de Santander. Los alcaldes: Gorky Muñoz, de Neiva; Jairo Yañez Rodríguez, de Cúcuta; Juan Carlos Cárdenas, de Bucaramanga; Jorge Iván Ospina, de Cali; Óscar Escobar, de Palmira; John Jairo Santamaría, de Yumbo; Julián Adolfo Rojas, de Buga; Víctor Hugo Vidal, de Buenaventura; Juan Carlos López, de Popayán; Germán Chamorro, de Pasto; Luis Fernando Villota, de Ipiales; Carlos

61. En Cali, la Alcaldía insistió en priorizar el diálogo social como respuesta a la persistencia de las protestas, aún en medio de las tensiones al interior del Estado sobre el manejo de la protesta. Esa Alcaldía desarrolló un amplio despliegue institucional en los puntos de concentración de los manifestantes, buscando escuchar las demandas de los mismos, reducir las tensiones, negociar el levantamiento de bloqueos de vías y promover un diálogo articulado, con especial atención a la juventud. El trabajo conjunto de la Alcaldía, con organizaciones internacionales acompañantes y la Iglesia, favoreció la transformación de los puntos de resistencia, para que dejaran de ser lugares de bloqueos y se convirtieran en espacios asamblearios. Se destaca, en este marco, la construcción participativa de mecanismos de protección. En igual sentido, fue muy útil la creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, organizaciones de derechos humanos y la Oficina, lo cual fue un factor de construcción de confianza.
62. La creación de una mesa de diálogo entre la Alcaldía y la “Unión de Resistencias Cali (URC)-Primera Línea somos todos y todas” con el acompañamiento de la Gobernación del Valle del Cauca, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Minga del Suroccidente, la Arquidiócesis de Cali, la MAPP-OEA, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y la Oficina, fue, como se describe a continuación, un logro y una buena práctica que merece ser resaltada. Esta mesa se estableció formalmente a través del Decreto 4112 010 20 0304 del 31 de mayo del 2021 a través del cual la Alcaldía de Cali reconoció como sujeto político a la URC, propiciando un escenario para la participación de los jóvenes de los puntos de resistencia de la ciudad en aras de buscar estrategias de inclusión social. Otra buena práctica, impulsada por la Arquidiócesis de Cali, fue el diálogo impulsado entre los sectores académicos (reagrupado en CIDESCO) y empresariales (en particular Propacífico y la iniciativa “Compromiso Valle”) y la URC. Este diálogo contribuyó a bajar los niveles de polarización, tender puentes y participar en la construcción de propuestas para avanzar en una mayor inclusión social, económica y política.

Otras medidas tomadas para gestionar la protesta

63. En Bogotá, es de destacar que la Alcaldía fue firme en impedir el uso de armas de fuego por parte de fuerzas policiales en la gestión de las manifestaciones, para evitar la repetición del uso de la fuerza letal contra manifestantes ocurrida los días 9 y 10 de septiembre de 2020. La Alcaldía creó una Comisión de Esclarecimiento sobre las afectaciones y violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2020 y durante el Paro Nacional. Entregó a la Oficina un informe sobre afectaciones y violaciones de derechos humanos sucedidas en las protestas que iniciaron el 28 de abril⁴⁸ y presentó disculpas públicas a las y los manifestantes por “no

Alberto Maya, de Pereira; Juan Carlos Cárdenas, de Bucaramanga; Andrés Tovar, de Madrid, y Guillermo Aldana, de Facatativa y Claudia López, de Bogotá.

⁴⁸ Informe sobre graves violaciones y afectaciones a los Derechos Humanos en el desarrollo del Paro Nacional contra manifestantes y contra miembros de la Fuerza Pública sucedidas entre el 28 de abril y el 23 de mayo.

haber comprendido desde el principio la magnitud de sus angustias y reclamos”. La Alcaldesa se comprometió “a reaccionar al paro como lo que es: un problema social y económico”⁴⁹ y condenó los abusos contra las y los manifestantes así como los actos de violencia contra la policía y la destrucción vandálica de bienes e instalaciones.

64. En Norte de Santander, las jornadas de manifestaciones se realizaron de manera pacífica, lideradas por organizaciones sociales, gremios productivos y sindicales, y juntas de acción comunal. La Gobernación de Norte de Santander, junto con las Alcaldías del departamento, realizaron un trabajo permanente y articulado de despliegue en el territorio, buscando alternativas de distensión y de escucha con los voceros del paro territorial y las organizaciones campesinas, permitiendo la apertura de corredores humanitarios para el abastecimiento de alimentos y otros elementos de primera necesidad en los municipios del Catatumbo y, posteriormente, el levantamiento de los cierres viales. Tanto autoridades civiles como manifestantes priorizaron el diálogo, en medio de una fuerte presencia militar en distintas zonas del departamento y pese a la presión sobre los funcionarios públicos que encabezaron los procesos de diálogo. Así mismo, en Arauca, el trabajo de diálogo liderado por la Gobernación, la Defensoría del Pueblo y la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, con el acompañamiento de organismos internacionales permitieron el abastecimiento del departamento.
65. También se observaron buenas prácticas en las acciones de la Alcaldía de Medellín, particularmente en sus esfuerzos por prevenir la estigmatización de la que pudo ser víctima la Minga Indígena⁵⁰ en su paso por la ciudad, resaltando como un logro el carácter pacífico de esta movilización y la complacencia de las partes por el logro de acuerdos producto del diálogo. En el mismo sentido, la Alcaldía creó la Mesa Técnica de Personas Presuntamente Desaparecidas en el marco de las protestas. Dicho espacio interinstitucional también contó con la participación de la sociedad civil, lo cual reforzó la confianza en la institucionalidad.
66. En casos como Villavicencio se desarrollaron mesas conjuntas, lideradas por la Alcaldía, entre manifestantes y sectores que pudiesen verse afectados por las protestas, con resultados importantes en términos de reducción de enfrentamientos en las calles y cero víctimas mortales. En este caso, la policía contribuyó activamente a bajar las tensiones en un momento crítico de la protesta, incluso limitando la intervención del ESMAD, lo que derivó en una dinámica posterior de autorregulación por parte de las y los manifestantes.
67. En Nariño, las negociaciones lideradas por la Gobernación y autoridades étnicas permitieron levantar bloqueos en más de 30 puntos, entre ellos en el Piedemonte Costero, Frontera y Panoya (vía Panamericana), uno de los bloqueos más extensos del Paro Nacional.
68. Frente a la estigmatización que sufrieron manifestantes, se destaca la actuación de la Gobernación del Cauca, quien pidió precisiones y rectificación luego de un comunicado del Ministerio de Defensa del 16 de mayo en el que se afirmó que “fueron identificados los cabecillas de los actos vandálicos en Popayán”. Con el fin de garantizar el debido proceso

⁴⁹ Véase <https://www.bluradio.com/blu360/bogota/perdon-a-la-ciudadania-por-los-abusos-cometidos-contra-su-legitima-movilizacion-claudia-lopez>

⁵⁰ La Minga es una organización colectiva y popular de las comunidades indígenas.

y prevenir la estigmatización, la Gobernación precisó que los mencionados en ese comunicado eran reconocidos líderes sociales de la región⁵¹.

69. Es positiva también la instalación, en mayo, por parte del Gobierno Nacional, de la Mesa Nacional para la Evaluación de las Garantías de Manifestaciones Públicas creada por el Decreto 003 del 5 de enero de 2021⁵², que tiene como objetivo hacer seguimiento y dar recomendaciones que garanticen la protesta pacífica en Colombia. En la segunda sesión de esta Mesa, dedicada a Bogotá, se acordó mantener el espacio de diálogo con los jóvenes en la Ciudad en cabeza del Gobierno Nacional y la Alcaldía. En casos como Huila, la implementación del Decreto 003 de 2021 ayudó a formalizar espacios de diálogo, brindando la oportunidad de escuchar a las organizaciones sociales en las Mesas de Coordinación. La concurrencia, coordinación y complementariedad del Gobierno Nacional frente a los entes territoriales es fundamental para gestionar las manifestaciones públicas y, a través de respuestas concretas, responder a las demandas sociales.
70. El Decreto 003 del 2021 no incluyó la participación de las organizaciones de derechos humanos en los puestos de mando unificado (PMU) que se instalan para la gestión de las manifestaciones, práctica que se había valorado positivamente en lugares como Barranquilla mediante la aplicación del protocolo distrital para la garantía de la movilización y de la protesta social (decreto 0223 de 2020). Sin embargo, una buena práctica que se implementó durante el Paro fue el funcionamiento de espacios mixtos conformados por el Ministerio Público y organizaciones de derechos humanos, promovidos en casos como Cali y Medellín por autoridades locales con el apoyo de organismos internacionales, buscando tener comunicación en tiempo real con los PMU respectivos.
71. Entre las otras iniciativas remarcables emprendidas por el Gobierno Nacional están la ampliación del ingreso solidario, la aplicación de una matrícula cero (costo) para establecimientos universitarios públicos y la creación de una Dirección de Derechos Humanos adscrita a la Dirección General de la Policía en agosto; esta última representa un avance en los mecanismos internos de la institución para velar por el respeto de estándares internacionales de derechos humanos.
72. Es importante resaltar que la rama judicial jugó un papel importante para la garantía del derecho a la protesta pacífica en el contexto del Paro. Ejemplo de ello es la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional el Decreto 575 de 2021 que autoriza la asistencia militar en la gestión de la protesta en varios departamentos y ciudades, hasta que se resuelvan las demandas en curso interpuestas en contra de ese decreto. Sin embargo, el 21 de octubre ante el recurso de impugnación presentada por Agencia Nacional de

⁵¹ Véase <https://www.radionacional.co/actualidad/popayan-gobernacion-afirma-que-jovenes-senalados-por-mindefensa-son-lideres-sociales>

⁵² Ministerio del Interior, Decreto número 003 de 2021, por el cual se expide el protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana, 5 de enero 2021, <https://vlex.com.co/vid/decreto-numero-003-2021-855553673#:~:text=Diario%20Oficial%20de%20Colombia%3B%205%20de%20Enero%20de,Protecci%C3%B3n%20del%20Derecho%20a%20la%20Protesta%20Pac%C3%ADfica%20Ciudadana>

Defensa Jurídica del Estado, la Presidencia de la República y los Ministerios del Interior y Defensa, el Consejo de Estado en segunda instancia consideró que la acción de tutela era improcedente al no determinar con precisión como la asistencia militar que habilita el Decreto 575 podría llegar a afectar sus derechos fundamentales. El Consejo de Estado además consideró que los accionantes contaban con otros mecanismos jurídicos para la defensa de sus derechos, como la acción de nulidad⁵³.

73. Si bien los estándares internacionales permiten que las fuerzas militares participen en labores de seguridad ciudadana, estos especifican con claridad que esta labor debe ser excepcional, temporal y debidamente justificada; debe realizarse siempre bajo la subordinación hacia las autoridades civiles y ser complementaria a las labores que estas realizan; también debe haber claridad sobre los mecanismos legales y los protocolos sobre el uso de la fuerza que deben corresponder con aquellos relacionados con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; y debe establecerse un mecanismo de fiscalización integrada por órganos civiles independientes, competentes y técnicamente imparciales⁵⁴. El Decreto 575 no establece la duración de la medida que faculta la intervención de las fuerzas armadas, no están del todo claros los mecanismos de subordinación de las fuerzas militares hacia las autoridades civiles ni los protocolos a observar sobre el uso de la fuerza y armas de fuego por parte de las fuerzas militares, y tampoco se establece cual será el mecanismo de fiscalización ni como estará éste conformado a fin de que se garantice su imparcialidad.
74. El 9 de septiembre de 2021, un grupo de congresistas presentó al Congreso un proyecto de ley de reforma de la Policía Nacional⁵⁵. Entre otros elementos, el proyecto busca fortalecer el carácter civil de la policía, incluyendo la adscripción de la Policía Nacional al Ministerio del Interior, integrar principios y reglas sobre el uso de la fuerza, incluyendo a los grupos antimotines, fortalecer los controles externos al actuar de la policía y establecer la competencia de la jurisdicción ordinaria para investigar, juzgar y sancionar a los autores de conductas que amenacen o vulneren los derechos humanos. Por su lado, desde 2020 el Gobierno Nacional radicó ante el Senado de la República el Proyecto de Ley 364. Algunos de sus principales elementos son: cambiar la denominación del Ministerio de Defensa Nacional por Ministerio de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana; modernizar la estructura orgánica de la Policía y fortalecer la política de Derechos Humanos y los estándares para la prestación del servicio; crear un Estatuto Disciplinario Policial, regular el uso y comercio de las armas menos letales y crear una Comisión para la Transformación Integral de la Policía Nacional, la cual evaluaría los aportes de la sociedad civil.
75. Finalmente, se resalta como buena práctica el beneplácito del Gobierno Nacional a la visita de trabajo de la CIDH para observar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas. Las recomendaciones de la CIDH ofrecen una oportunidad para examinar la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos en el contexto de las protestas, incluyendo mediante un mecanismo autónomo e independiente de la CIDH para el seguimiento de la implementación de estas recomendaciones.

⁵³ Véase: <https://www.consejodeestado.gov.co/wp-content/uploads/2021/11/AsisMilitar-1.pdf>.

⁵⁴ Comité de Derechos Humanos, Observación General núm. 37, párr. 80.

⁵⁵ Proyecto de Ley 316/2021C. Véase <https://www.camara.gov.co/reforma-a-la-policia>

V. Situación de derechos humanos observada durante el Paro Nacional

76. Del 28 de abril al 31 de julio 2021, la Oficina identificó un conjunto de situaciones y casos atribuibles a agentes del Estado, en particular integrantes de la Fuerza Pública, que vulneraron el derecho a la reunión pacífica y otros derechos humanos. Asimismo, en base a algunos casos documentados por la Oficina, hay razones fundadas para sostener que las autoridades no habrían actuado con la debida diligencia para proteger a los manifestantes frente a la actuación violenta de actores no estatales.
77. Entre las violaciones documentadas por la Oficina se encuentran el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, que resultó en las privaciones arbitrarias de la vida, las violaciones a la integridad y seguridad personal, así como las detenciones arbitrarias, la violencia sexual.

A. Derecho de reunión pacífica y estándares relativos al uso de la fuerza

78. El derecho de reunión pacífica es fundamental para la participación en una sociedad plural y democrática en el marco de un estado de derecho. Este derecho, establecido en el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 37 de la Constitución Política de Colombia establece que “toda parte del pueblo, puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. En virtud del artículo 2 del mencionado Pacto, el Estado tiene el deber de respetar y garantizar este derecho, y de adecuar la normativa nacional para que esta propenda al cumplimiento de tales deberes, a fin de facilitar el pleno ejercicio de este derecho. Si bien se contemplan algunas restricciones al derecho de reunión pacífica, que de manera exhaustiva están contempladas en el artículo 21 del Pacto, la imposición de cualquier restricción prevista en ese artículo debería ser con el propósito de facilitar el derecho, y no de limitarlo innecesaria y desproporcionadamente⁵⁶.
79. La Oficina evidenció que contrario a los estándares internacionales y la normativa nacional varias de las manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar a partir del 28 de abril fueron disueltas con un uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza, vulnerando el derecho de reunión pacífica.⁵⁷ Esto ocurrió a pesar de que las normas y los estándares internacionales sobre los límites del uso de la fuerza para disuadir manifestaciones han sido

⁵⁶ Comité de derechos humanos, Observación general núm. 37, párr. 36.

⁵⁷ Artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre otros, ver: Comité de Derechos Humanos, Observación General núm. 37 (2020), relativa al derecho de reunión pacífica (artículo 21), CCPR/C/GC/37, Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, y las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.

incorporados por el Estado colombiano en los manuales y protocolos de las fuerzas de seguridad.⁵⁸

80. Inicialmente la movilización se caracterizó por la manifestación masiva de personas en las calles. Durante los primeros días del Paro, la Oficina observó que se realizaron operativos de control y de dispersión por parte de la Fuerza Pública, especialmente de integrantes del ESMAD, que se caracterizaron por el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza. Esta situación fue observada particularmente en Bogotá y Cali, en donde algunos puntos de protesta transitoria se tornaron permanentes para “resistir” a la intervención de la Fuerza Pública. Las manifestaciones en los puntos de concentración contaron con un apoyo social progresivo, con donaciones espontáneas de comida, agua, e incluso, en algunos puntos, con la instalación de puestos informales de salud y atención de personas heridas por personal sanitario voluntario.
81. Según el Comité de Derechos Humanos, en su Comentario General No. 37, “solo en casos excepcionales se puede dispersar una reunión. Se puede recurrir a la dispersión si la reunión como tal ya no es pacífica o si hay indicios claros de una amenaza inminente de violencia grave que no se pueda abordar razonablemente con medidas más proporcionadas, como las detenciones selectivas.”⁵⁹ En consecuencia, solo debe recurrirse a esta medida cuando sea estrictamente inevitable⁶⁰ y deben cumplirse de manera estricta los límites establecidos en el derechos internacional de los derechos humanos. Estos estrictos requisitos existen porque “el hecho de disolver una reunión conlleva el riesgo de violar los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como el derecho a la integridad física”⁶¹. Cuando se toma una decisión legalmente de dispersar una manifestación que ya no es pacífica, se deberán tomar todas las precauciones necesarias para evitar o al menos minimizar el riesgo de uso de la fuerza. Cuando eso no sea posible de acuerdo con las circunstancias, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben asegurarse de que el tipo y el nivel de fuerza que aplican sea necesaria y proporcional a la amenaza planteada.
82. El derecho de reunión pacífica, por definición, no se puede ejercer mediante la violencia. En el contexto del artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la “violencia” suele implicar el uso por los participantes de una fuerza física contra otros que pueda provocar lesiones, la muerte o daños graves a los bienes. Los empujones o la interrupción del tráfico de vehículos o peatones o de las actividades diarias no constituye “violencia”.⁶² Los actos de violencia aislados de algunos participantes no se deberían atribuir a otros, a los organizadores o a la reunión como tal. Por lo tanto, es deber de las autoridades individualizar a las personas presuntamente responsables de estos actos sin

⁵⁸ Entre otros, ver: Ministerio del Interior, Resolución 1190 de 2018: Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición ya la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica, Punto VIII, numeral 8. También las resoluciones 02903 del 23 de junio de 2017 y 03002 del 29 de junio de 2017, relativas al uso de la fuerza y de las armas, y el control de manifestaciones y disturbios.

⁵⁹ Comité de Derechos Humanos, Observación General núm. 37 (2020), relativa al derecho de reunión pacífica (artículo 21), CCPR/C/GC/37, párr. 85.

⁶⁰ A/HRC/31/66, párr. 61 y Comité de Derechos Humanos, Observación General núm.37, párr. 79.

⁶¹ A/HRC/31/66, párr. 61.

⁶² Comité de Derechos Humanos, Observación General núm.37, párr. 15. Véase también párr. 18.

afectar el ejercicio de la protesta de quienes lo hacen de forma pacífica⁶³. Asimismo, el Estado debe proteger y garantizar los derechos de las personas a las que se les atribuyan estos presuntos actos violentos en virtud de sus obligaciones bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Los hechos aislados de violencia o de vandalismo por parte de grupos minoritarios, no justificaron la utilización de la fuerza contra personas que se manifestaban de manera pacífica.

83. En varias partes del país, la Oficina también observó que se decidió utilizar la fuerza para dispersar manifestaciones pacíficas, en particular a través de la intervención del ESMAD, sin haber agotado vías alternativas para la dispersión y en particular el diálogo. Según las normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos, cuando se adopta la decisión de dispersar, se debería evitar el uso de la fuerza. Cuando ello no sea posible, solo se puede utilizar la fuerza mínima necesaria⁶⁴.
84. La decisión del Gobierno Nacional de dispersar varios bloqueos mediante el uso de la fuerza, cuando éstos no habían generado un daño grave y sostenido, y sin que se hayan impulsado o agotado previamente las vías del diálogo, también sería incompatible con el derecho de reunión pacífica (ver sección sobre los bloqueos).
85. En varias situaciones, la Oficina observó también que la fuerza se utilizó de manera excesiva e indiscriminada con el riesgo de causar lesiones graves. Según los estándares internacionales de derechos humanos, en la medida de lo posible, la fuerza que se utilice se debería dirigir contra una persona o grupo específico que participe en la violencia o amenace con hacerlo⁶⁵. Tampoco se puede utilizar una fuerza que probablemente provoque lesiones moderadas o graves —incluso si se ejerce con armas menos letales— con el único fin de exigir el cumplimiento de una orden a una persona que solo se resiste de forma pasiva⁶⁶.
86. Todos los agentes del orden encargados de la vigilancia de las reuniones deben estar debidamente equipados, en particular en caso necesario con las armas menos letales y el equipo de protección que sean apropiados y adecuados⁶⁷. Sin embargo, el uso de esas armas debe limitarse a los agentes del orden debidamente capacitados y estar estrictamente regulado de conformidad con las normas internacionales pertinentes. El uso de armas de fuego para dispersar una reunión siempre es ilegal, en las situaciones en las que se necesite

⁶³ *Ibíd.*

⁶⁴ Comité de Derechos Humanos, Observación General núm.37, párr.86.

⁶⁵ Comité de Derechos Humanos, Observación General 37, relativa al derecho de reunión pacífica, párrafo 86. CCPR/C/GC/37.

⁶⁶ ACNUDH, Orientaciones de las Naciones Unidas sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden, 2021, pág.7. Véase <https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2021/05/Orientaciones-de-las-Naciones-Unidas-en-materia-de-derechos-humanos-sobre-el-empleo-de-armas-menos-letales.pdf>

⁶⁷ Comité de Derechos Humanos, Observación General núm. 37, párr. 81. Véase también ACNUDH, Orientaciones de las Naciones Unidas sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden, 2021. En: <https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2021/05/Orientaciones-de-las-Naciones-Unidas-en-materia-de-derechos-humanos-sobre-el-empleo-de-armas-menos-letales.pdf>.

cierto grado de fuerza, solo se podrán usar armas menos letales⁶⁸. Al respecto el Decreto 003 de 2021 dispone en su artículo 35 que el personal uniformado de la Policía Nacional no podrá hacer uso de armas de fuego al intervenir en manifestaciones públicas.

87. Las armas menos letales deben emplearse únicamente con arreglo a estrictos criterios de necesidad y proporcionalidad y en situaciones donde otras medidas menos nocivas hayan demostrado ser ineficaces o lo sean manifiestamente para contrarrestar la amenaza. Los Estados no deben recurrir a armas menos letales en situaciones donde se pueda mantener el orden público con medios menos lesivos, especialmente en el contexto del ejercicio del derecho de reunión pacífica⁶⁹. Las armas menos letales con efectos de gran alcance, como los gases lacrimógenos y los cañones de agua, tienden a tener efectos indiscriminados. Cuando se utilicen esas armas, se deberían hacer todos los esfuerzos razonables para limitar riesgos tales como causar una estampida o herir a los transeúntes. Esas armas solo se deben utilizar como último recurso, tras una advertencia verbal y dando a los participantes en la reunión la oportunidad de dispersarse. Los gases lacrimógenos no se deben utilizar en espacios cerrados⁷⁰.
88. En Pasto, la Policía Nacional empleó gases lacrimógenos para dispersar distintas concentraciones pacíficas en la Plaza Nariño. En algunos casos resultaron menores de edad afectados por los gases. El 30 de abril, en la Universidad de Nariño, estudiantes manifestándose pacíficamente fueron dispersados del sector de la VIPRI con gases lacrimógenos y chorros de agua desde las tanquetas de la policía. El 28 de junio, cerca de 30 niños y niñas, menores de 5 años que se encontraba en un jardín infantil, fueron afectados por los gases lacrimógenos lanzados por agentes del ESMAD en el marco de las protestas en esta misma ciudad. A inicios de mayo, en Neiva, se observaron algunas movilizaciones pacíficas en vías, incluyendo vías nacionales, que fueron dispersadas mediante gases lacrimógenos en medio de barrios residenciales. En Barranquilla, los días 1 y 3 de mayo, la Oficina fue informada que se dispersaron las manifestaciones con gases lacrimógenos para responder a hechos de violencia perpetrados por grupos minoritarios en contra de locales comerciales, afectando a manifestantes pacíficos y adultos y niños de los barrios residenciales aledaños.
89. La Oficina documentó casos de uso de armas letales por parte de la policía contra manifestantes pacíficos y transeúntes que no estaban participando de las protestas. El análisis de videos realizado por la Oficina confirmó, por ejemplo, que el 3 de mayo policías patrullaron en Siloé (Cali) armados con fusiles y habrían apuntado a manifestantes. Otros casos se detallan en la sección de Derecho a la Vida.

⁶⁸ Véase también ACNUDH, Orientaciones de las Naciones Unidas sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden, 2021. En: <https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2021/05/Orientaciones-de-las-Naciones-Unidas-en-materia-de-derechos-humanos-sobre-el-empleo-de-armas-menos-letales.pdf> 6.3.3 y 6.3.4

⁶⁹ Comité de Derechos Humanos, Observación General núm. 36, párr. 14.

⁷⁰ Comité de Derechos Humanos, Observación General núm. 37, párr. 87.

90. Asimismo, la Oficina pudo documentar el uso inadecuado de armas menos letales por parte de la policía, sin tener en cuenta estándares⁷¹ internacionales y procedimientos internos del Ministerio de Defensa⁷². La Oficina documentó varios casos en los que habría razones fundadas para considerar que el uso inadecuado e indiscriminado de lanzadores de agua, gases lacrimógenos, incluyendo la denominada arma “venom”⁷³, bombas aturdidoras y escopetas antidisturbios habrían causado la muerte y graves lesiones físicas de personas, tales como traumatismo craneoencefálico grave, pérdida de globos oculares y deformaciones faciales permanentes⁷⁴.
91. Además, la Oficina observó con preocupación que las autoridades competentes no tomaron medidas para prevenir ataques armados organizados por terceros y para proteger a los manifestantes. En Cali, Medellín y Pereira, ocurrieron ataques con arma de fuego contra manifestantes. Además, de acuerdo a la información recolectada, en Cali, los grupos criminales presentes en la ciudad quisieron aprovechar el movimiento del Paro para infiltrarse en algunos puntos de concentración y generar caos. En varias ocasiones intimidaron a manifestantes tratando de tomar el control de los puntos de concentración y/o se ofrecieron como protectores de los mismos, con el efecto de aumentar la violencia y las tensiones en la ciudad.

B. Derecho a la vida

92. Entre el 28 de abril y el 31 de julio, la Oficina recibió información sobre alegaciones de muertes de 63 personas en el contexto de las protestas (61 hombres y 2 mujeres). Del total de alegaciones, la Oficina verificó 46 casos, 4 casos se encuentran aún en proceso de verificación y en 13 casos la Oficina consideró que no había información concluyente para determinar si las muertes tuvieron lugar en el contexto de las protestas (ver Gráfica 1). De los casos verificados, 44 víctimas eran civiles y dos eran policías. Según información oficial del PMU, en el contexto de las manifestaciones murieron 30 personas de forma violenta, de las cuáles una era un funcionario del CTI y tres eran miembros de las fuerzas de seguridad. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación reportó 57 homicidios ocurridos, respecto a

⁷¹ ACNUDH, Orientaciones de las Naciones Unidas sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden, 2021. En: <https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2021/05/Orientaciones-de-las-Naciones-Unidas-en-materia-de-derechos-humanos-sobre-el-empleo-de-armas-menos-letales.pdf>

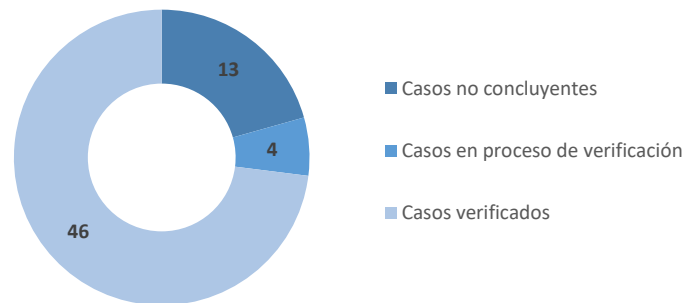
⁷² Ministerio de Defensa Nacional, Resolución 02903 de 2017: Reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de elementos, dispositivos, municiones y armas menos letales en la Policía Nacional, art. 7.

⁷³ Lanzador eléctrico de carga múltiple.

⁷⁴ Temblores ONG, INDEPAZ y PAIIS, Informe de Temblores ONG, Indepaz y Paiis a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021, p. 44. En: https://4ed5c6d6-a3c0-4a68-8191-92ab5d1ca365.filesusr.com/ugd/7bbd97_691330ba1e714daea53990b35ab351df.pdf

los cuales, a partir de un proceso de verificación con base en criterios definidos por esa entidad⁷⁵, se determinó que únicamente 29 se presentaron con ocasión de las manifestaciones violentas⁷⁶.

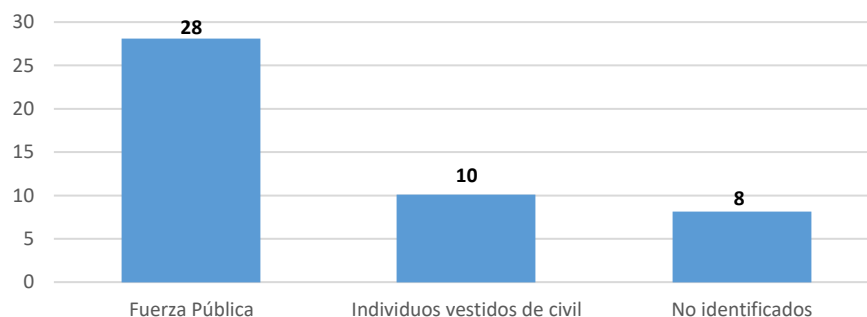
Alegaciones de muertes en el contexto del Paro Nacional



Gráfica 1. Alegaciones de muertes en el contexto del Paro Nacional. Elaboración propia.

93. De la información recopilada y analizada por la Oficina, existen motivos razonables para afirmar que, de los 46 casos verificados, en 28 casos los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la Fuerza Pública, y que, en al menos 10 de estos casos podrían estar vinculados miembros del ESMAD. En dos de los 28 casos, el presunto perpetrador habría sido un funcionario del CTI actuando por fuera de sus funciones. De los 17 casos restantes verificados, en 10 casos los presuntos perpetradores habrían sido actores no estatales, mientras que en ocho casos la Oficina no obtuvo información suficiente para identificar al presunto perpetrador (ver Gráfica 2).

Casos verificados de muertes por presunto perpetrador

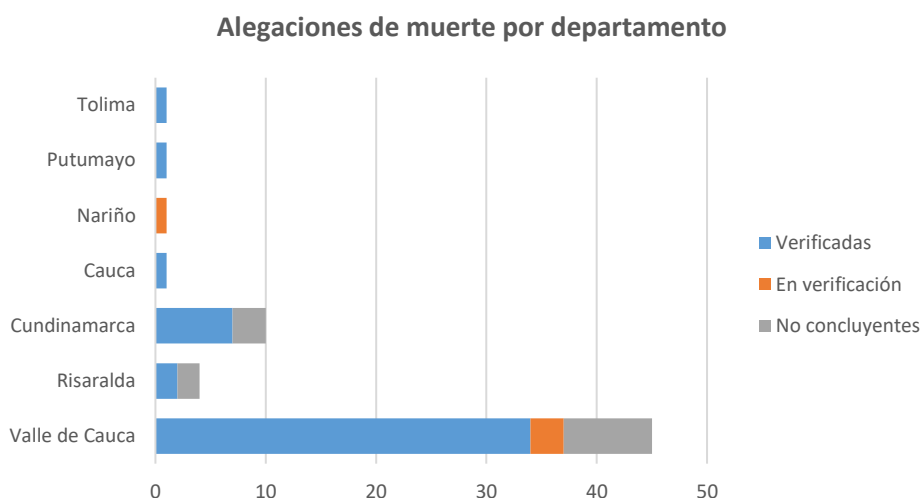


Gráfica 2. Casos verificados de muertes por presunto perpetrador. Elaboración propia.

⁷⁵ La Oficina ha solicitado al Gobierno Nacional información sobre los criterios utilizados por la Fiscalía General de la Nación.

⁷⁶ Observaciones del Gobierno Nacional al documento “Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia”, entregado a la Oficina el 9 de diciembre de 2021.

94. No obstante que las protestas se presentaron en prácticamente todos los departamentos del país, las alegaciones de muertes, recibidas por la Oficina se concentraron en los siguientes ocho departamentos: Cauca, Bogotá, Cundinamarca, Nariño, Putumayo, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. El 71% de los casos de muertes habrían sucedido en el departamento del Valle (ver Gráfica 3).



Gráfica 3. Alegaciones de muertes por departamento. Elaboración propia.

95. De los casos verificados de muertes de civiles, 31 eran personas que participaban en las protestas directamente como manifestantes y 12 fueron de transeúntes, quienes pese a no haber participado directamente en las protestas, habrían fallecido en puntos de concentración o en cercanías a ellos (ver Gráfica 4). La Oficina verificó dos de tres casos reportados, por las autoridades, de muertes de personas pertenecientes a la Fuerza Pública en el contexto de las protestas (ver apartado VI.).



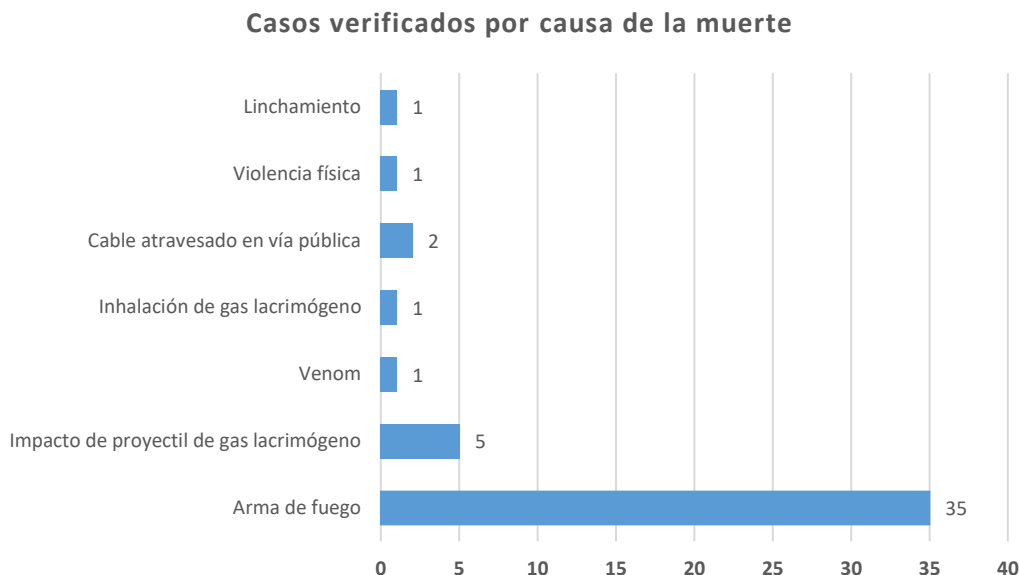
Gráfica 4. Casos verificados de muertes según la participación de las víctimas en las protestas. Elaboración propia.

96. La mayoría de las personas fallecidas en el contexto de las protestas eran jóvenes entre 17 y 26 años, que vivían en barrios pobres y periféricos, hijos/as de padres campesinos, indígenas y afrodescendientes, desplazados por la violencia, jóvenes dedicados al comercio informal, artistas, deportistas, estudiantes o desescolarizados/as. Durante las entrevistas realizadas por la Oficina, los familiares de las personas fallecidas expresaron que las y los jóvenes que participaban en las manifestaciones lo hacían porque querían generar cambios estructurales e institucionales para tener mejores oportunidades de estudio o trabajo y un futuro mejor para sus familias.

Dentro de los casos documentados por la Oficina se encuentran los casos de Yinson Andrés Rodríguez Angulo, joven afrodescendiente y trabajador de 23 años, cuya muerte ocurrió el 1 de mayo en el sector conocido como Paso de Aguante (Cali); Santiago Andrés Murillo Meneses, joven estudiante de 19 años, quien murió el 2 de mayo en Ibagué (Tolima); Brayan Fernando Niño, joven de 24 años, quien aspiraba a tener un cupo en la universidad para estudiar contabilidad y que murió el 1 de mayo en Madrid (Cundinamarca); Kevin Antony Agudelo Jiménez, deportista y líder juvenil de 20 años, quien murió el 3 de mayo en Siloé (Cali) mientras participaba en un velatón por las víctimas del Paro; Joan Nicolás Guerrero, joven artista urbano de 26 años, quien murió el 3 de mayo en el denominado Paso de Aguante (Cali) cuando participaba en una velatón por las personas fallecidas en el marco de las protestas; Elvis Vivas, joven trabajador de 24 años que aspiraba a estudiar actuación y quien murió el 8 de mayo en Madrid (Cundinamarca); Lucas Villa, activista muy visible en los círculos estudiantiles, quien recibió ocho disparos, y murió posteriormente el 10 de mayo (Pereira); Michael Vargas López, deportista de 23 años, quien murió el 17 de mayo en Yumbo cuando participaba de una actividad en el punto de concentración de la Estancia (Cali); Sebastián Jacanamijoy de 25 años, indígena del Pueblo Inga miembro del Cabildo Indígena Universitario, quien murió el 28 de mayo en el sector de Melendez (Cali); Maicol Andrés Aranda, joven que participó por única vez en la protesta en las marchas del 28 de mayo, y quien falleció ese día en Siloé (Cali); Jhordany Yesid Rosero Estrella, joven de 22 años fallecido el 31 de mayo por un arma de fuego accionada por un policía en Villagarzón (Putumayo); Cristian Javier Delgadillo, de 21 años, activista de ciclismo urbano y primera línea de la denominada Loma de la Dignidad fallecido el 4 de junio; y Segundo Jaimes Rojas, estudiante de Univalle y miembro de la primera línea de SAMECO, quien murió el 4 de junio en el denominado Paso del Aguante-Chiminangos (Cali).

97. Entre los casos documentados de personas que murieron y que no participaban en la protesta es ilustrativo el caso de Einer Alexander Lasso Chará, un policía en retiro de 60 años, quien falleció en Cali al salir a observar las protestas el 30 de abril en el punto de Puerto Madera por un tiro de arma de fuego presuntamente accionada por un miembro de la Fuerza Pública. También el caso de Harold Antonio Rodríguez Mellizo de 20 años, quien el 3 de mayo en Siloé se disponía a comprar comida cuando recibió un disparo de arma de fuego en el contexto de una intervención de la Fuerza Pública. Otro caso es el de Christian David Castillo, de 26 años, quien se encontraba observando las manifestaciones en Suba, Bogotá, el 22 de junio, cuando fue impactado en la cabeza por una munición de gas lacrimógeno disparada por un miembro del ESMAD. La Fiscalía General de la Nación inició investigaciones en contra de miembros de la Fuerza Pública en estos tres casos.

98. De los casos de muertes verificados por la Oficina, 35 habrían sido generados por arma de fuego (ver Gráfica 5). Entre las muertes por arma de fuego que la Oficina documentó, se encuentran las siguientes: el caso de Santiago Andrés Murillo Meneses, un joven de 19 años quien falleció en Ibagué (Tolima) por un disparo de arma de fuego en su tórax accionado por un policía motorizado; el caso de Jhordany Yesid Rosero Estrella, joven de 22 años fallecido el 31 de mayo por un arma de fuego accionada por un policía en Villagarzón (Putumayo); y el caso de Christian Delgadillo Sánchez, un joven que murió por impacto de bala en el cuello accionado por la Fuerza Pública en Cali el 4 de junio.



Gráfica 5. Casos verificados de muertes por causa de la muerte. Elaboración propia.

99. De acuerdo a las normas y estándares del derecho internacional de los derechos humanos, las armas de fuego no son un instrumento adecuado para vigilar reuniones y que nunca deben ser utilizadas simplemente para dispersar una reunión⁷⁷. El Comité de Derechos Humanos ha señalado que “el uso de armas de fuego por parte de los agentes del orden en el contexto de las reuniones se debe limitar a personas concretas en circunstancias en las que sea estrictamente necesario para hacer frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves”⁷⁸.
100. La Oficina identificó el uso de lanzadores de gases lacrimógenos y otras armas de letalidad reducida de manera horizontal y/o a corta distancia. También se observó su uso en lugares residenciales y que incluso se habrían direccionado hacia el interior de viviendas familiares.
101. La Oficina verificó siete casos de muerte presuntamente cometidas por el uso de armas menos letales por parte de la Fuerza Pública (ver Gráfica 5). El 1 de mayo en Madrid,

⁷⁷ Comité de Derechos Humanos, Observación General núm. 37, párr. 88. Véase también Comité de Derechos Humanos, Observación General núm. 36, párr. 12; y párrafo 86 *supra*.

⁷⁸ Comité de Derechos Humanos, Observación General núm. 37, párr. 88.

Cundinamarca, por ejemplo, Brayan Niño de 24 años habría muerto como resultado del impacto en el ojo derecho de una munición de gas lacrimógeno presuntamente disparada a corta distancia por miembros del ESMAD. En Bogotá el 21 de junio, Jaime Alonso Fandiño habría muerto por un impacto munición de gas lacrimógeno de granada en el pecho presuntamente accionada por el ESMAD. En la Virginia (Risaralda), una persona de 86 años habría muerto después de aspirar gases lacrimógenos lanzados masivamente por la Fuerza Pública en un procedimiento de retoma de la vía pública cercano a su lugar de residencia. El 14 de mayo en Popayán, un joven de 22 años habría muerto por el impacto en el cuello de una munición del arma denominada Venom presuntamente accionada por el ESMAD.

102. A pesar de que los manuales de uso interno y varias decisiones judiciales han reglamentado la forma en que las armas no letales deben ser usadas para causar el mínimo daño posible, así como su uso excepcional, en los casos documentados por la Oficina se evidenció que integrantes de la Fuerza Pública no habrían respetado los principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad y no discriminación que establecen los estándares internacionales para el uso de la fuerza.

Muertes violentas y otras muertes relacionadas con las protestas atribuidas a actores no estatales⁷⁹

103. La Oficina recibió información y documentó situaciones que dan cuenta de la participación de individuos vestidos de civil en actos de violencia contra personas que ejercían su derecho de reunión pacífica. En varios de los casos verificados estas personas habrían incurrido en atentados contra la vida e integridad física de los manifestantes mediante el uso de armas letales. En algunos de estos casos, se habrían movilizado en vehículos particulares desde donde dispararon. La información a disposición de la Oficina permitió ver cómo en algunos de los ataques estas personas vestidas de civil habrían actuado en presencia de integrantes de la policía.
104. De acuerdo al Comité de Derechos Humanos, como parte de las obligaciones bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “Cuando sea preciso, los Estados también deben proteger a los participantes contra posibles abusos por parte de agentes no estatales, como la injerencia o la violencia de otros ciudadanos, los contra manifestantes y los proveedores de seguridad privada”.⁸⁰ Los Estados deben garantizar el derecho a la vida y ejercer la diligencia debida para proteger la vida de las personas frente a privaciones causadas por personas o entidades cuya conducta no sea imputable al Estado. La obligación de los Estados de respetar y garantizar el derecho a la vida resulta extensible a los supuestos razonablemente previsibles de amenazas y situaciones de peligro para la vida que puedan ocasionar muertes.⁸¹

⁷⁹ Personas armadas vestidas de civil.

⁸⁰ Comité de Derechos Humanos, en su Observación general núm. 37, párr. 24.

⁸¹ Comité de Derechos Humanos, en su Observación general núm. 36, párr. 7. Véase también párr. 21.

105. A este respecto, en una declaración conjunta sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y la gobernanza democrática en diciembre de 2020, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, la CIDH y su Relator Especial sobre libertad de expresión, el Relator Especial sobre defensores de derechos humanos de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, señalaron que “los Estados tienen la obligación positiva de proporcionar un entorno propicio, incluso en tiempos de crisis, para la libertad de reunión, lo que incluye adoptar medidas para garantizar que las reuniones pacíficas puedan tener lugar libremente y sin restricciones indebidas, y asegurando que se protegen las reuniones frente a ataques, incluidos contra manifestantes”⁸².
106. Del total de 46 casos verificados de muertes, la Oficina verificó diez casos de muertes de hombres en los que los presuntos perpetradores fueron actores no estatales. Dichas muertes habrían ocurrido en Bogotá, Caicedonia, Cali y Pereira. En Cali, el 7 de mayo en la noche, en los puntos de concentración de manifestantes de la Luna y el Paso del Comercio, tres hombres habrían sido víctimas de disparos realizados desde vehículos particulares. Uno de ellos habría sido herido en la cabeza. Según los testimonios recogidos por la Oficina, primero habrían sido atacados por dos personas en una motocicleta, y luego, desde varios automóviles. Al día siguiente se habrían presentado hechos similares en el punto conocido como Portada al Mar sin que se reportaran personas heridas.
107. Estos casos guardan similitud con un ataque con armas de fuego perpetrado en la noche del 5 de mayo en el Viaducto de Pereira (Risaralda) en contra de jóvenes estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira por personas vestidas de civil que se movilizaban en motocicleta. Dos estudiantes resultaron heridos y uno muerto; Lucas Villa, activista muy visible en los círculos estudiantiles, quien recibió ocho disparos, y murió posteriormente el 10 de mayo.
108. En Cali, el 9 de mayo, a la altura del Puente La Viga sobre la avenida Cañas gordas, el paso de la Minga Indígena fue obstruido por personas vestidas de civil que habrían disparado en contra de los integrantes de la Minga. El mismo día también fue atacada una autoridad tradicional de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). La víctima fue retenida por actores no estatales, quienes dispararon a bordo de vehículos particulares contra su carro. Cuando una comitiva indígena fue a rescatarle, también fue atacada en similares circunstancias. Con base en la información analizada y verificada a través de material audiovisual, la Oficina pudo constatar que varios de estos ataques ocurrieron en presencia cercana de integrantes de la Fuerza Pública, quienes no habrían tomado ninguna acción o medida para responder a estos ataques y proteger a los manifestantes y transeúntes. Ese día habrían sido heridos de bala 12 indígenas. La jurisdicción penal militar abrió

⁸² Véase <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/FAssociation/joint-declaration-democratic-governance/declaration-sp.pdf>

indagación preliminar contra estos servidores públicos por el presunto delito de prevaricato por omisión⁸³.

109. Lo ocurrido el 28 de mayo en el sector de Ciudad Jardín en Cali es otro ejemplo particularmente preocupante de acciones de actores no estatales. En la tarde de ese día, en presencia de miembros de la Fuerza Pública, personas vestidas de civil dispararon contra manifestantes durante varias horas hiriendo a algunos de ellos. Los integrantes de la Fuerza Pública no ofrecieron apoyo, seguridad o asistencia a estas personas. Además, el material audiovisual analizado indica que, en varias ocasiones durante el día, agentes de la Policía Nacional accionaron armas letales y armas menos letales contra personas que parecían ser manifestantes. En algunas ocasiones, todas estas acciones tuvieron lugar de forma simultánea. El material audiovisual también incluye situaciones en las que agentes de la policía no actúan para detener a civiles armados e incluso parecerían interactúan con ellos cuando estos civiles armados disparan contra presuntos manifestantes.
110. La manera en que se desarrollaron los ataques simultáneos de actores no estatales en contra de manifestantes el 7 de mayo en los puntos de concentración de la Luna y el Paso del Comercio, el 9 de mayo en Ciudad Jardín, y el 28 de mayo en Ciudad Jardín y Univalle (todos ellos en Cali, Valle del Cauca) parecería indicar que habrían sido planificados. Por ejemplo, la presencia el 9 de mayo de personas armadas en varios puntos de Cali, bloqueos en distintos puntos al paso de la Minga indígena, el uso de varios vehículos en los cuales unos conducían mientras otros disparaban, y la manera en que arribaron a las zonas de concentración.
111. En Norte de Santander también se registraron hechos de violencia por parte de actores no estatales. El 24 de mayo, un grupo de 25 estudiantes, quienes habían iniciado un plantón el día anterior en la Universidad de Pamplona, fueron atacados por personas vestidas de civil haciendo uso de armas con perdigones. Lo anterior provocó que la mayoría de estudiantes y líderes se fueran a sus casas y abandonaran la manifestación por miedo y riesgo hacia su vida. Dos semanas antes, jóvenes y líderes estudiantiles recibieron amenazas de muerte de parte de hombres encapuchados que, en ocasiones, les siguieron hasta sus casas intimidándolos para que no continuaran en la protesta, este hecho fue denunciado ante las autoridades. Un número aproximado de 10 estudiantes y líderes comunales fueron amenazados por estos hombres, y presionados a dejar el Paro Nacional.
112. El 12 de junio, en el punto de Agulasal (Norte de Santander), un grupo armado no estatal habría atacado a campesinos pertenecientes al Comité Unidad del Catatumbo que se encontraban manifestando, resultado heridos con armas de fuego dos campesinos que se encontraban en el punto en un cierre de vía parcial. Además, los integrantes del grupo armado intimidaron a los campesinos obligándoles a tirarse al suelo, golpeándolos, disparando al piso y amenazándoles con matarlos, además de llamarlos “guerrilleros”. Los agresores se llevaron documentos de identidad y otros objetos de los manifestantes.

⁸³ Este delito establece que el servidor público que omita retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses. Código Penal Colombiano. Artículo 414.

113. El día 28 de mayo un investigador del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, que se encontraba fuera de servicio, hizo uso de su arma de fuego contra personas que se encontraban concentradas en el punto denominado La Luna en Cali. Producto de esto un manifestante y un transeúnte perdieron la vida. Videos analizados por la Oficina indicarían que posteriormente el agresor habría muerto como resultado del linchamiento por parte de un grupo de personas. Una situación similar se produjo en Caicedonia (Valle del Cauca) el 5 de mayo cuando un civil que se desplazaba en su moto y cuyo paso fue obstruido por manifestantes, en un punto de resistencia, disparó contra los mismos causando la muerte a uno de ellos. Posteriormente, el motociclista perdió la vida, linchado por personas que estaban concentradas en el lugar.
114. En Cali, la Oficina recibió alegaciones relativas a la infiltración en algunos puntos de las protestas de las denominadas “oficinas” o bandas criminales dedicadas a diversas actividades ilícitas. En este contexto, se recibieron alegaciones relativas a muertes violentas ocasionada por acciones de estas bandas, como la desaparición y muerte del patrullero de la policía Carlos Andrés Rincón, ocurrida el 3 de junio en Paso del Comercio, y la muerte de un manifestante el 31 de mayo en el punto denominado “Puerto Resistencia”. Esta situación, constituye un abuso contra el derecho de reunión pacífica y, además, evidencia la capacidad de acción criminal de estos actores en la ciudad y los vacíos de protección existentes.
115. En la ciudad de Bogotá un joven motociclista de 27 años perdió la vida en la noche del 25 de junio, al golpearse el cuello con una cuerda que, aparentemente, manifestantes habían ubicado para bloquear una avenida cerca al Portal de las Américas.

C. Derecho a la integridad personal

116. La Oficina recibió información de diversas fuentes que muestra un alto número de personas lesionadas, muchas de ellas gravemente, en el contexto de las protestas. Según información del PMU, del 28 de abril al 31 de julio se presentaron 1.140 personas civiles lesionadas y 1.712 personas uniformadas lesionadas con ocasión y/o en desarrollo de las protestas. Por otra parte, la ONG Temblores registró más de 1.661 casos de víctimas de violencia física por parte de la policía⁸⁴ y la Campaña Defender la Libertad identificó 1.905 personas heridas por el accionar de la Policía Nacional, incluyendo el ESMAD, y de civiles armados no identificados⁸⁵. Llama la atención que más del 10% de los casos reportados por las organizaciones sociales (115 personas) fueron heridas con arma de fuego.
117. En los múltiples testimonios recibidos por la Oficina, se identifica la existencia de un importante sub-registro de casos de personas heridas debido principalmente al temor de las víctimas de ser judicializadas al momento de acudir a los centros de salud para ser atendidas.

⁸⁴ Véase <https://twitter.com/TembloresOng/status/1420752929393287178/photo/1>

⁸⁵ Véase <https://twitter.com/DefenderLiberta/status/1418339009856786436/photo/1>

Ante este temor, muchas personas heridas habrían sido atendidas por las “líneas de brigadas de primeros auxilios”.

118. Resulta de particular preocupación el alto número de casos de lesiones oculares de particulares. La plataforma Grita de la ONG Temblores reportó 103 casos de estas lesiones al 20 de julio y la Campaña Defendamos la Libertad 88 casos al 21 de julio. De acuerdo a la ONG Temblores en el 79% de los casos las lesiones habrían sido resultado de la acción de miembros de la Fuerza Pública (de los cuales el 74% habría sido el ESMAD)⁸⁶. En el 34% de los casos, las lesiones habrían resultado en la pérdida del ojo o en la pérdida total o parcial de la vista. La Fiscalía General de la Nación consolidó un registro de 79 víctimas de lesiones oculares respecto a las cuales estableció que siete no tienen relación con los hechos de violencia ocurridos en el marco de las protestas. Según la entidad, de los 72 casos de lesiones, 62 tienen relación con las protestas y 10 se encuentran en proceso de verificación. 65 corresponden a víctimas civiles, y siete a integrantes de la Policía Nacional⁸⁷.
119. La Oficina recibió 24 alegaciones de casos de lesión ocular de particulares, de las cuales el 25% implicó la pérdida de visión incluyendo en algunos casos la pérdida del globo ocular. Según testimonios recibidos por la Oficina, algunas de estas lesiones se habrían dado como resultado del accionar de armas menos letales directamente dirigidas hacia el rostro. Un caso ilustrativo documentado por la Oficina es el de un joven de 19 años que narró que, el 19 de mayo en la ciudad de Bucaramanga (Santander), habría estado siendo perseguido por presuntos miembros del ESMAD, y en el momento en que miró hacia atrás, fue herido en la cara por un proyectil de gas lacrimógeno. De acuerdo a estas alegaciones, el proyectil habría sido accionado a pocos metros, lo que produjo quemaduras en la órbita ocular, así como fracturas de la órbita, los huesos nasales y el arco cigomático izquierdo. La Oficina también documentó el caso de un joven de 23 años en Barrancabermeja (Santander), que fue herido en el ojo izquierdo por un cartucho de gas lacrimógeno que habría sido disparado a menos de dos metros de distancia por un funcionario del ESMAD durante la protesta.
120. La Oficina también documentó alegaciones sobre casos en que miembros de la Fuerza Pública golpearon a manifestantes con puños, cascots y bastones (bolillos), aún cuando éstos no presentaban resistencia. Asimismo, a través del análisis de videos, la Oficina verificó incidentes el 3 de mayo en Siloé y el 4 de junio en Chiminagos, en Cali, en los que policías golpearon a personas que no se resistían. La Oficina también recibió información sobre el caso de un joven de 25 años que formaba parte de una brigada de derechos humanos en Girón (Santander) y que, al estar grabando el accionar de la Fuerza Pública con su celular, habría sido golpeado por un grupo de policías en la cara y la cabeza con una granada de gas y con un equipo de comunicación mientras estaba arrinconado en una pared. De acuerdo a información recibida por la Oficina, en Medellín, un joven de 18 años con Síndrome de Down habría sido sometido con fuerza física por un policía lesionándole la clavícula y un disco de la columna al tratar de ayudar a su madre cuando estaba siendo agredida por

⁸⁶ Temblores, Amnistía Internacional, Universidad de los Andes y Programa de Acción por la Igualdad y la Integración Social, *Tiros a la Vista; Traumas oculares en el marco del Paro Nacional*, 2021. Véase: <https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/11/AMR2350052021SPANISH.pdf>

⁸⁷ Observaciones del Gobierno Nacional al documento “Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia”, entregado a la Oficina el 9 de diciembre de 2021.

elementos de la Fuerza Pública. El joven y la madre habrían salido de su casa a observar una protesta que estaba sucediendo cerca de su domicilio.

D. Violencia sexual y basada en género

121. La Oficina recibió alegaciones sobre 60 personas víctimas de violencia sexual en el marco de las manifestaciones, presuntamente cometidas por miembros de la Policía: seis en Medellín (Antioquia), una en Bello (Antioquia), una en Itagüí (Antioquia), tres en Barranquilla (Atlántico), tres en Soledad (Atlántico), 16 en Bogotá, una en Tunja (Boyacá), una en Facatativá (Cundinamarca), una en Acacías (Meta), cinco en Cali (Valle del Cauca), once en Palmira (Valle del Cauca), una en Yumbo (Valle del Cauca), cinco en Popayán (Cauca), cuatro en Pasto (Nariño), una en Bucaramanga (Santander)⁸⁸.
122. De los 60 casos sobre los que la Oficina recibió alegaciones, en el 80% las víctimas son mujeres (48) y 20% son hombres (12). En 27 de los 60 casos, la Oficina conoció la edad de la víctima, en el 81,4% de ellos (22 víctimas) eran personas adultas, y el 18,5% (cinco víctimas) eran menores de 18 años.
123. Hasta el 10 de diciembre, la Oficina verificó los casos de 16 víctimas de violencia sexual que habría sido cometida por miembros de la policía, contra cinco mujeres y una niña de 15 años en Medellín (Antioquia); contra una mujer en Bello (Antioquia); contra dos mujeres en Barranquilla (Atlántico); contra tres hombres en Soledad (Atlántico), uno de ellos es un hombre gay; contra un niño indígena de 17 años y contra una mujer en Popayán (Cauca); contra una mujer en Cali (Valle del Cauca); y contra una mujer en Palmira (Valle del Cauca).⁸⁹
124. Entre los actos constitutivos de violencia sexual sobre los cuales la Oficina recibió alegaciones están: violaciones sexuales; tocamientos de los genitales sin penetración; desnudez forzada; amenazas de violación sexual; y agresiones verbales de carácter sexual y de discriminación de género.
125. Dos de los casos verificados por la Oficina en Medellín (Antioquia), sucedieron el 1 de mayo y consistieron en golpes, malos tratos y agresiones verbales con connotaciones de discriminación de género, en contra de funcionarias de la Personería que estaban en ejercicio de su labor de defensa de los derechos humanos. Al día siguiente, mientras se

⁸⁸ Todos los casos fueron analizados a la luz de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y en particular, CEDAW, Recomendación general núm. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y en particular, Comité contra la Tortura, Observación general No. 2, CAT/C/GC/2; e Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, A/HRC/31/57.

⁸⁹ En este caso, la mujer estaba acompañada de su hija de 14 años. En el caso de la niña, la Oficina verificó hechos de tortura pero el análisis en relación con presunta violencia sexual fue no concluyente.

encontraba ejerciendo sus funciones, en la vía pública, una de las víctimas recibió amenazas, presuntamente por integrantes de la policía.

126. Uno de los casos verificados sucedió el 21 de mayo, cuando tres hombres jóvenes (uno de 23 años y dos de 19 años), uno de ellos gay, se encontraban bajo custodia policial en una estación de policía en Soledad (Atlántico). De acuerdo a la información recopilada y analizada por la Oficina, hay razones fundadas para sostener que el trato al que se habría sometido a estos tres jóvenes constituyó tortura y otras formas de malos tratos, incluyendo actos de violencia física y violencia sexual, que, de acuerdo a las alegaciones, habrían sido realizados por otros presos a incitación de la policía. Uno de ellos fue víctima de violación sexual por motivo de su orientación sexual.
127. En los dos casos verificados por la Oficina en Popayán (Cauca), las víctimas son una mujer de 18 años y un niño indígena de 17 años. La mujer de 18 años fue detenida arbitrariamente el 12 de mayo por parte de la policía y, de acuerdo a las alegaciones, fue víctima de agresiones verbales sexistas y de amenazas de violencia sexual por parte de la policía. Ese mismo día, mientras se encontraba detenido arbitrariamente, un niño indígena habría sido agredido física y verbalmente, incluyendo actos de violencia sexual (tocamientos) y amenazas de muerte, por integrantes de la policía. La víctima recibió además insultos racistas y homófobos.
128. En Cali (Valle del Cauca), la Oficina pudo verificar alegaciones sobre una detención arbitraria de una mujer de 20 años ocurrida el 29 de abril, en la que integrantes de la policía habrían sometido a la mujer a malos tratos y violencia sexual (tocamientos). Con posterioridad a los hechos y tras haber interpuesto una denuncia penal por los mismos, la mujer fue víctima de amenazas por parte de personas no identificadas y tuvo que desplazarse forzosamente.
129. La Oficina realizó un análisis de todos los casos de documentados de alegaciones de violencia sexual por parte de la policía, a la luz de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el PIDCP y otros instrumentos de derechos humanos⁹⁰. A partir de dicho análisis, se determinó que, en cinco casos documentados la violencia sexual constituiría tortura y en otros ocho casos tratos, crueles, inhumanos o degradantes. De acuerdo a la información recopilada y contrastada por la Oficina, existen razones fundadas para sostener que en estos casos integrantes de la policía usaron la violencia sexual para castigar a las personas por su participación en las manifestaciones y para humillarlas por su condición de mujeres (por no cumplir con los roles de género asignados tradicionalmente a las mujeres o involucrarse en asuntos públicos), de personas LGBTI, o por su pertenencia étnica. Muchas de las violaciones registradas se cometieron en el marco de detenciones arbitrarias.

⁹⁰ Comité contra la Tortura, Observación general No. 2, CAT/C/GC/2; CEDAW, Recomendación general núm. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19; Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, A/HRC/31/57.

130. La Oficina también verificó un caso de violencia sexual en contra de una mujer patrullera de la policía, cometido por personas violentas en un ataque contra el Comando de Atención Inmediata (CAI) de Cali (Valle del Cauca), el 29 de abril⁹¹.
131. Por su parte, la Defensoría del Pueblo identificó un total de 113 hechos de violencia por razón del género en contra de mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas durante las manifestaciones sociales entre el 28 de abril y el 4 de junio de 2021⁹². De esos hechos, *"112 corresponden a violencias por parte de funcionarios de la Policía y/o el ESMAD en contra de manifestantes"*⁹³. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los hechos de violencia basada en género se presentaron en 19 departamentos del país y los que reportan mayor ocurrencia son Valle del Cauca, Antioquia y Nariño⁹⁴. Dentro de los hechos de violencia basada en género, la Defensoría del Pueblo identificó 27 de violencia sexual. Cinco de ellos de *"acceso carnal violento"* y 22 constituyeron *"otros actos de violencia sexual, los cuales incluyen tocamientos sexuales, amenazas de violencia sexual y/o cualquier otro acto que involucre la libertad y la integridad sexual"*⁹⁵.
132. Asimismo, la Comisión Colombiana de Juristas, indicó que hasta el 22 de junio se habían reportado al menos 59 casos de violencia basada en género en el contexto de las protestas, presuntamente cometida por la policía. *"Estos incluyen 17 casos de violación, tocamientos indebidos y desnudez forzada, 21 agresiones físicas y 18 casos de violencia psicológica que incluyen acoso sexual, amenaza de violación y hostigamiento"*⁹⁶. Por su parte, la organización Temblores reportó que, entre el 28 de abril y el 26 de junio, identificó 28 víctimas de violencia sexual y nueve víctimas de violencia basada en género, presuntamente atribuibles a la Fuerza Pública⁹⁷.
133. Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación, por medio de la Delegada para la Seguridad Ciudadana reportó inicialmente 36 víctimas de violencia basada en género. Tras una labor de verificación habría establecido que 17 casos, con 19 víctimas, corresponderían a hechos de violencia de género relacionados con las manifestaciones⁹⁸. El Gobierno Nacional reportó que entre el 28 de abril y el 30 de julio, el canal de orientación de la línea 155, no

⁹¹ Véase https://www.policia.gov.co/sites/default/files/informe_sector_defensa_-_garantias_a_la_manifestacion_pacifica_y_control_de_acciones_violentas_-_28_de_abril_a_4_de_junio_de_2021_20210609_vf.pdf; <https://www.youtube.com/watch?v=ZFKtXISp83Q>; <https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-nacional-el-desgarrador-relato-de-una-patrullera-que-fue-abusada-sexualmente-en-un-cai-de-cali/202138/>; <https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/testimonio-de-patrullera-victima-de-abuso-sexual-y-tortura-en-cali-589977>; <https://www.cali.gov.co/pazycultura/publicaciones/160943/alcaldia-habilitara-espacio-para-escuchar-a-familiares-de-desaparecidos-en-el-marco-del-paro-nacional/>

⁹² Defensoría del Pueblo, Boletín Número 3, Violencias Basadas en Género en el marco de la protesta social.

⁹³ Ibídem.

⁹⁴ Ibídem. Los demás departamentos que registraron hechos son: Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Cauca, Caquetá, Cesar, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Sucre.

⁹⁵ Ibídem.

⁹⁶ Véase <https://twitter.com/Coljuristas/status/1410365278030991367>. La CCJ informó a la Oficina que los datos presentados son los registrados por la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas.

⁹⁷ Véase https://www.instagram.com/p/CQrydmYpHm1/?utm_medium=share_sheet

⁹⁸ Observaciones del Gobierno Nacional al documento "Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia", entregado a la Oficina el 9 de diciembre de 2021.

recibió ninguna llamada relacionada con los escenarios de manifestaciones, protestas sociales o Paro Nacional⁹⁹.

E. Actos de discriminación y/o racismo en el marco de la protesta

134. Organizaciones de la sociedad civil han llamado la atención sobre factores de discriminación racial manifiestos en la gestión de la protesta. Además, subrayaron que el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza ocurrió en las ciudades y zonas del país donde la protesta contó con mayor presencia de personas afrodescendientes e indígenas¹⁰⁰.
135. La protesta se concentró en muchas de estas ciudades por las profundas desigualdades sociales evidenciadas, además del impacto de la pandemia sobre la población afrodescendiente e indígena. Entre otros motivos, esta población reclamaba el cumplimiento de acuerdos firmados con el Gobierno, como el del Paro Cívico de Buenaventura y el Acuerdo de Paz; así como no haber sido suficientemente incluidos – temática y físicamente – en los espacios de diálogos abiertos por el Gobierno. Las vocerías juveniles afrodescendientes, organizaciones de la sociedad civil señalaron que *“su labor como defensores de derechos es invisibilizada dentro de las redes de protección de diálogo oficial pero visible en los espacios de resistencia, acentuando su situación de mayor desprotección.”*¹⁰¹
136. La Oficina documentó situaciones ocurridas en Cali, en las que una vocera de la URC fue agredida físicamente en dos oportunidades y víctima de insultos raciales (“la líder esa Negra HP”) por parte de un agente de la policía y un agente del ESMAD. Según el análisis de la Oficina, la agresión y los insultos verbales se debieron a su condición étnica, de género y de lideresa. El Proceso de Comunidades Negras (PCN) denunció un caso en el que dos mujeres jóvenes afrodescendientes habrían sido *“brutalmente golpeadas, torturadas y humilladas, dentro de un camión de la policía nacional”*, fueron “manoseadas” y tratadas de “negras, perras”¹⁰².
137. Las agresiones ocurridas contra la Minga indígena en Cali, y en particular los hechos ocurridos el 9 de mayo, incluyeron insultos racistas contra indígenas que integran el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Videos analizados por la Oficina registran varias personas ese día gritando “váyanse indios”. Por su parte, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) documentó la polarización entre los ciudadanos, especialmente de estratos altos contra los manifestantes indígenas y afrodescendientes, anotando que estos

⁹⁹ Ibídem.

¹⁰⁰ CODHES; “Análisis étnico-racial del uso excesivo de fuerza por parte de los agentes del Estado en Cali”, Cali, mayo 21 de 2021.

¹⁰¹ PCN-AFRODES y otras organizaciones; ibíd.

¹⁰² PCN, “Denuncia de abuso policial y maltrato a dos jóvenes afros”, Soacha, mayo 4 de 2021.

se autodefinieron como la “*gente de bien*” en contraposición a los “*malnacidos*” refiriéndose a los manifestantes de los pueblos étnicos¹⁰³.

F. Derecho a la libertad

138. La Oficina recibió información sobre presuntas restricciones a la libertad personal de manifestantes que ejercían su derecho de reunión pacífica mediante la privación de la libertad en circunstancias que no están definidas en la ley o mediante el abuso y desnaturalización de la medida administrativa de “traslado por protección”¹⁰⁴. La información recopilada por la Oficina y desarrollada a continuación indica la ocurrencia de privaciones de la libertad que podrían ser consideradas arbitrarias a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.
139. Según información del PMU, del 18 de abril hasta el 16 de septiembre las autoridades realizaron 1.970 capturas en el contexto de las protestas. De ellas, 1.685 fueron bajo la figura de flagrancia y 285 bajo orden judicial. En el caso de las capturas por flagrancia, la Oficina recibió información sobre manifestantes que habrían sido privados de su libertad en circunstancias que no están definidas en la ley bajo la figura de la flagrancia, y recluidas sin que su detención constara en un registro oficial. Según lo ilustran los casos documentados por la Oficina, algunas de las detenciones se habrían dado sin el respeto de las salvaguardas esenciales para la protección de la libertad, como la falta de notificación de las razones de la detención, la falta de acceso a un abogado, la incomunicación con familiares y la falta de presencia del Ministerio Público durante los procedimientos. La Oficina también recibió información sobre casos de personas que fueron llevadas a sitios destinados para la detención de quienes presuntamente cometieron delitos, así como a estaciones de la policía. En estos lugares no se habría asegurado la separación de personas bajo los criterios de su sexo y edad como lo establecen los estándares de derecho internacional de los derechos humanos¹⁰⁵.
140. La información oficial del PMU también indica que, del 28 de abril hasta el 16 de septiembre, se realizaron 18.501 traslados por protección, de los cuales 531 habrían sido concomitantes a las protestas. La Oficina reitera la preocupación manifestada en su informe anual de 2019 sobre el uso frecuente de la medida administrativa denominada “traslado por protección”, para la privación de la libertad de las personas que ejercen su derecho de reunión pacífica¹⁰⁶. La Oficina recibió información sobre la aplicación de esta medida en contra de manifestantes a los que no se les podría aplicar ninguna de las causales que prevé

¹⁰³ CONPA, equipo de comunicaciones, Barra Darwin; Archivos redes sociales sobre Paro Nacional.

¹⁰⁴ De acuerdo con el artículo 155 de la ley 1801 de 2016 por la cual se expidió el Código Nacional de Policía y Convivencia, una persona podrá ser trasladada por protección cuando éste sea el único medio disponible para prevenir que la vida e integridad de una persona o terceros esté en riesgo o peligro.

¹⁰⁵ Regla 11 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) Véase <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/treatmentofprisoners.aspx> ;Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok). Véase: <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/bangkokrules.aspx>.

¹⁰⁶ A/HRC/43/3/Add.3, párr.89.

la ley para este procedimiento. Preocupa a la Oficina la información recibida, según la cual el uso de la figura administrativa de traslado por protección no se haya empleado en un número importante de casos con el fin de proteger la vida e integridad de las personas privadas de libertad o de terceras personas, como la norma lo indica, sino con el objetivo de impedir que la persona siga manifestando sin que una autoridad judicial pudiera controlar la legalidad de la detención. El alto nivel de discrecionalidad del agente policial para determinar la aplicación del “traslado por protección” incrementa el riesgo de que sea aplicada arbitrariamente y de manera que disuade y restringe la participación en actividades protegidas bajo el derecho a la reunión pacífica.

141. Adicionalmente, la Oficina obtuvo información de que, en las ciudades de Bogotá, Medellín, Neiva, Pasto y en el departamento de Valle del Cauca habrían sido usados lugares que no son oficialmente reconocidos y controlados para la privación de libertad, como estaciones de transporte público, instalaciones colectivas (coliseo cubierto), cultivos de caña de azúcar, instalaciones de peajes viales y camiones. Las personas no habrían sido trasladadas posteriormente a sitios oficiales de detención y en algunos casos fueron liberadas sin registro. El uso indebido de estos lugares fue reconocido por algunas autoridades civiles¹⁰⁷. Un caso ilustrativo fue el traslado por protección realizado el 30 de abril por la Fuerza Pública de un grupo de manifestantes al coliseo del barrio obrero de Pasto, incluyendo traslados de mujeres y menores de edad, a pesar de que el lugar no estaba adecuado.
142. Las privaciones de libertad que carecen de fundamento legal y en las que no se cumplen los procedimientos previstos por la ley incrementan el riesgo de que se cometan violaciones a los derechos humanos¹⁰⁸, ya que sustraen a las personas detenidas de la protección de la ley y del control judicial de la detención¹⁰⁹. La Oficina recibió información de casos en que las personas privadas de la libertad habrían sido objeto de agresiones físicas, amenazas de muerte e incluso de violencia de género, incluida violación sexual (ver capítulo sobre violencia sexual y basada en género). Un caso de especial gravedad es el de un joven manifestante de 24 años, quien después de haber sido retenido el 7 de mayo por la policía en Madrid, Cundinamarca, habría sido golpeado por policías en una estación de policía sin que su ingreso y salida fueran registrados. Esa misma noche fue abandonado en la calle y, posteriormente, ingresado a un hospital, donde habría muerto el 8 de mayo por trauma craneoencefálico a los ocho días de haber sido atendido.

¹⁰⁷ El uso de estaciones de Transmilenio para la privación de la libertad de manifestantes fue denunciado por la Alcaldesa Claudia López en la entrega de su informe sobre violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco del paro nacional a la Oficina el 26 de mayo de 2021. La Alcaldesa sostuvo que “*en el Portal de las Américas tenemos dentro de los casos que le estamos entregando, además documentado que se detuvo arbitrariamente a jóvenes que ni siquiera estaban interviniendo en la protesta. Un joven estaba simplemente grabando lo que estaba ocurriendo desde un puente peatonal (...). Un policía va indebidamente, lo retiene, lo traslada al Portal, el Portal no es un sitio de detención temporal ni definitivo de nadie, es un portal de transporte público*”. Más información a partir de minuto 37:04. https://www.youtube.com/watch?v=LodI2_dZTEg&t=9s.

¹⁰⁸ Comité de Derechos Humanos, en su Observación general núm. 35, párr. 56.

¹⁰⁹ Comité de derechos humanos, Observación general núm. 37, párr. 82; Comité de derechos humanos, Observación general núm. 35 relativo al derecho a la libertad y seguridad personales (artículo 9),

143. También se recibió información sobre casos en los que la Fiscalía General de la Nación se habría abstenido de continuar con el proceso de legalización de captura de manifestantes ante la evidencia de lesiones físicas ocasionadas al momento de su detención, por ejemplo, en el caso de 16 hombres jóvenes detenidos en Bogotá el 28 de agosto de 2021. La Oficina también obtuvo testimonios de personas que alegan haber sido objeto de presiones indebidas por parte de integrantes de la Policía Nacional, para la entrega de retribuciones a cambio de su libertad.
144. La Oficina también recibió información de capturas colectivas que fueron posteriormente declaradas ilegales por autoridades judiciales. Un ejemplo fue el de la detención de once hombres jóvenes realizada el 29 de mayo en Cúcuta y Soacha. Los jóvenes fueron liberados por orden judicial y se compulsaron copias para que los oficiales de policía encargados del procedimiento fueran investigados.
145. En Cali, la Oficina documentó casos en que las personas manifestantes habrían sido retenidas por personas vestidas de civil sin identificación, y obligadas a auto incriminarse después de recibir golpes y amenazas de muerte y de desaparición. Así fue el caso de Álvaro Herrera Melo, un joven de 25 años que, al estar grabando con su celular como un grupo de civiles disparaban en contra de unos manifestantes, fue retenido y golpeado por éstos para después ser entregado a dos policías. El joven habría sido golpeado, insultado y amenazado dentro de la estación de policía y obligado a grabar un video presentándose como un “vándalo”. La Fiscalía General de la Nación determinó que su captura había sido ilegal y el Instituto de Medicina Legal le otorgó 15 días de incapacidad por la gravedad de las lesiones.
146. La Oficina también conoció el caso de 11 hombres jóvenes capturados supuestamente en flagrancia el 28 de mayo en Cúcuta, quienes habrían sido trasladados por personas vestidas de civil y en vehículos particulares a los centros de detención. Los jóvenes fueron liberados en una instancia judicial, porque no se logró determinar si realmente los agentes captores eran policías y debido a que las capturas habrían ocurrido posteriormente y en un lugar distinto al que se presentaron actos vandálicos.
147. El derecho internacional dispone que las privaciones de la libertad en el marco del ejercicio del derecho de reunión pacífica solo se puede practicar en los casos más excepcionales, por un período no superior al absolutamente necesario y observándose plenamente las garantías previstas en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, solo si las autoridades tienen pruebas creíbles de la intención de las personas involucradas de participar en actos de violencia o incitar a ellos durante una reunión y cuando otras medidas para impedir que se produzcan actos de violencia sean claramente inadecuadas.¹¹⁰ Por ello el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estima que “toda detención masiva indiscriminada que ocurre antes, durante o después del ejercicio del derecho a la reunión pacífica es arbitraria y, por consiguiente, es ilegal”.¹¹¹

¹¹⁰ Comité de derechos humanos, Observación general núm. 37, párr. 19.

¹¹¹ Comité de derechos humanos, Observación general núm. 37, párr. 82; Comité de derechos humanos, Observación general núm. 35 relativo al derecho a la libertad y seguridad personales (artículo 9), CCPR/C/GC/35, párr. 15; y Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, Folleto Informativo 26, numeral IV inciso B.

148. La Oficina recibió información sobre registros de organizaciones de la sociedad civil relativas a personas que habrían sido reportadas como desaparecidas en el contexto de las protestas en varias partes del país. Estos registros oscilarían entre 400 a 700 personas presuntamente desaparecidas desde el 28 de abril. La Oficina obtuvo información de que un alto número de personas presuntamente desaparecidas apareció con vida. Dentro de este grupo, habría personas cuya privación de libertad no fue registrada oficialmente. En otros casos, las organizaciones afirmaron que ocurrieron desapariciones forzadas por un breve periodo de tiempo que culminaron cuando las autoridades dieron información sobre la suerte y paradero de las personas. Por otra parte, las organizaciones reportaron que cinco personas presuntamente desaparecidas en el marco de la protesta habían aparecido sin vida: dos personas en La Virginia (Risaralda), dos hombres en Bogotá (localidad de Kennedy y Usme) y uno en Santander de Quilichao (Cauca).
149. La Oficina pudo verificar que algunas privaciones de la libertad durante las protestas se habrían llevado a cabo sin un adecuado reporte en tiempo real¹¹² y con escasa publicidad de los registros de las personas. Al respecto, cabe recordar que el Comité contra la Desaparición Forzada señaló, con ocasión de los informes del Estado colombiano, en 2016¹¹³ y en 2021¹¹⁴, que las irregularidades en el registro y vigilancia de las privaciones de libertad constituyen factores de riesgo para la comisión de desapariciones forzadas. A pesar de la existencia de protocolos internos que buscan garantizar la verificación de privaciones de libertad durante las protestas¹¹⁵, las autoridades judiciales habrían constatado su falta de aplicación en el contexto del Paro Nacional. En Popayán (Cauca), una juez ordenó a las autoridades civiles y de policía la salvaguarda de los derechos de las personas manifestantes mediante la verificación de las condiciones de detención y la entrega de información exhaustiva sobre las personas privadas de la libertad.
150. La Procuraduría General de la Nación, ante los requerimientos de autoridades judiciales, la solicitud de las organizaciones de la sociedad civil y en cumplimiento de la orden de la

¹¹² Para el traslado por protección a los Centros de Traslado por Protección deberá permitirse al Ministerio Público el acceso a los informes de que trata el artículo 155 de la Ley 1801 de 2016, el cual queda registrado en el formato de orden de comparendo. Para este evento, se deberá registrar información dentro de los treinta (30) minutos siguientes al traslado. Protocolo por la cual se da cumplimiento a una orden judicial y se expide el protocolo de verificación en casos de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de cualquier mitin, reunión o acto de protestas, adoptado por la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional. Bogotá, D.C., 23 de octubre de 2020.

¹¹³ CED/C/COL/CO/1, párrs. 31 y 32.

¹¹⁴ CED/C/COL/OAI/1, párrs. 8 y 9.

¹¹⁵ Instrumento formulado por la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de la orden de la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. STC7641-2020 Radicación n.º 11001-22-03-000-2019-02527-02. Magistrado ponente: Luis Armando Tolosa Villabona. 22 de septiembre 2020. En la providencia la CSJ analizó denuncias de uso excesivo de la fuerza desde 2005 hasta 2019, retomó apartados del Informe Anual 2019, entre otras fuentes, para concluir que: *“es claro el constante irrespeto a las garantías superlativas de las personas a ejercer el derecho a la protesta pacífica, no violenta, en todo el territorio y la falta de respuesta estatal a esa situación. A pesar de las reglamentaciones y el alto contenido discursivo de la jurisprudencia en torno a las garantías a protestar pacíficamente, muy poca efectividad se ha obtenido frente al actuar de la fuerza pública a cargo del orden público interno.”* Pág. 124.

Corte Suprema de Justicia mediante sentencia¹¹⁶, activó un canal de comunicación para verificar las privaciones de la libertad acaecidas durante la protesta desde el mes de junio.¹¹⁷

151. En respuesta a las alegaciones de desapariciones forzadas de personas en el contexto de la protesta, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo conformaron la “Mesa permanente de búsqueda de personas no localizadas”. La Mesa recibió 572¹¹⁸ reportes de ONG acerca de personas presuntamente desaparecidas durante las protestas. La depuración y contrastación de la información¹¹⁹ derivó en la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente para prevenir la comisión de desapariciones forzadas de 192 personas¹²⁰ (ver sección de Rendición de Cuentas).

G. Derecho a la libertad de expresión

152. Durante las manifestaciones del Paro Nacional, se vio ampliado el cubrimiento periodístico por parte de medios de comunicación alternativos y ciudadanos periodistas que, a través de transmisiones en vivo, por diferentes redes sociales, difundieron información sobre las protestas, y de esta manera ampliaron el espacio cívico y ejercieron su derecho a la libertad de expresión. En relación a estas funciones, la Oficina recibió información sobre los ataques que tanto medios de comunicación alternativos como ciudadanos periodistas y medios de comunicación masivos recibieron durante las protestas.
153. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), desde el 28 de abril al 21 de octubre, documentó 384 agresiones de periodistas durante el cubrimiento de las protestas sociales, dentro de las que se encuentran agresiones físicas, amenazas, detenciones ilegales, obstrucciones al trabajo periodístico, hostigamientos, eliminación de material periodístico y restricciones al acceso a la información pública. En 198 de estos casos los periodistas han señalado como presunto responsable de las agresiones a miembros de la Fuerza Pública.
154. La Oficina documentó casos de periodistas que sufrieron heridas por golpes o disparos de gases lacrimógenos o balas de goma y daños de sus cámaras por parte de miembros de la Fuerza Pública. Periodistas de medios alternativos y ciudadanos periodistas que transmitían en vivo por redes sociales recibieron amenazas de muerte o fueron atacados por personas

¹¹⁶ STC7641-2020.

¹¹⁷ Véase www.procuraduria.gov.co/actuaciones-policiales/home y <https://www.procuraduria.gov.co/portal/-Procuraduria-activa-link-para-verificacion-en-casos-de-capturas-y-traslados-de-personas-durante-las-protestas-.news> y Boletín 464. Procuraduría General de la Nación. Consulta de actuaciones judiciales en el marco de la protesta social. Julio 15 de 2021. <https://www.procuraduria.gov.co/actuaciones-policiales/home> <https://www.procuraduria.gov.co/portal/-Procuraduria-activa-link-para-verificacion-en-casos-de-capturas-y-traslados-de-personas-durante-las-protestas-.news>

¹¹⁸ 548 de la Mesa de Trabajo sobre desapariciones forzadas de la CCEEUU y 24 presentados por la Consejería para la Juventud de la Presidencia de la República.

¹¹⁹ Informe del sector Defensa. Garantías a la manifestación pacífica y control de acciones violentas. Periodo 28 de abril al 4 de junio 2021, págs. 51 y 52.

¹²⁰ En 168 reportes presentados por la CCEEUU y 24 por la Consejería para la Juventud de la Presidencia de la República.

vestidas de civil que accionaron armas indiscriminadamente contra ellos. Por ejemplo, en Cali, la Oficina documentó dos casos de agresiones a medios de comunicación: un canal de televisión alternativo y un reportero gráfico, que difundían diariamente por sus redes sociales la información en tiempo real, fueron agredidos verbalmente por parte de miembros del ESMAD. Asimismo, el 4 de junio en Chiminangos (Cali), un video muestra a un policía tomando el teléfono celular de una mujer que estaba grabando un altercado entre Fuerza Pública y civiles. En Sibaté (Cundinamarca), miembros del ESMAD, agredieron verbalmente y accionaron gases lacrimógenos contra miembros de un equipo periodístico de un medio de comunicación alternativo mientras llevaba a cabo el cubrimiento periodístico de una protesta. En Neiva (Huila), a su vez la Oficina documentó el caso de una periodista ciudadana que recibió agresiones verbales, referencias sexistas a su físico y acusaciones de pertenecer a grupos armados no estatales por parte de personas vestidas de civil, quienes, de acuerdo a las alegaciones recibidas, serían miembros de la policía.

155. Otros periodistas de medios masivos de comunicación informaron a la Oficina que no pudieron salir a hacer cubrimientos con chalecos o identificación de su medio por temor a ser atacados. RCN sufrió un ataque a sus instalaciones el 23 de junio por parte de algunas personas que participaban en las manifestaciones, sufriendo daños en los vidrios de cuatro de sus emisoras. La Oficina también documentó dos casos de periodistas hombres de medios masivos de comunicación que fueron golpeados por miembros del ESMAD en el cubrimiento de las protestas en Bogotá y Cundinamarca.
156. La Oficina además documentó casos en los cuales, luego de la publicación de investigaciones o información con relación a las protestas del Paro Nacional, miembros de medios de comunicación alternativos y personas defensoras de derechos humanos fueron estigmatizados en redes sociales por parte de personas que los llamaron “sicarios morales”. En Bogotá y Cali, la Oficina documentó por lo menos dos casos en los cuales los periodistas de un medio de comunicación alternativo y los defensores de derechos humanos de una organización no gubernamental recibieron señalamientos, amenazas y fueron estigmatizados tras publicar informes sobre la protesta o luego de reunirse con organizaciones internacionales para entregar información.
157. En Medellín, dos periodistas de un medio alternativo denunciaron haber sido amenazados por redes sociales luego de cubrir las manifestaciones. Además, ambos periodistas alegaron haber recibido malos tratos por parte de miembros de la Fuerza Pública. A partir del mes de julio recibieron amenazas anónimas telefónicamente y en redes sociales recibieron mensajes de amenazas y fotografías personales. En Putumayo, se conoció un caso de una periodista que documentó las manifestaciones y luego de hacer transmisiones por redes sociales fue acosada y presionada hasta el punto que tuvo que desplazarse forzosamente para buscar protección. La Oficina recibió alegaciones con relación a interrupciones en el servicio de internet durante las manifestaciones y en la transmisión de los “live” a través de redes sociales, en particular en ciudades como Cali y Bogotá, con relación a esto el 5 de mayo, la plataforma NetBlocks registró caída del internet en la ciudad de Cali¹²¹.

¹²¹ Véase <https://netblocks.org/reports/internet-disrupted-in-colombia-amid-anti-government-protests-YAEvMvB3>

158. La función de periodistas y de ciudadanos periodistas en las manifestaciones para buscar y recibir información y difundirla es de especial importancia para el pleno disfrute de los derechos a la libertad de expresión, así como para garantizar el derecho a la reunión pacífica. La Oficina recuerda que los Estados deben velar por el pleno respeto de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y deberían “velar también porque las actividades de los proveedores y los intermediarios de servicios de Internet no restrinjan indebidamente las reuniones o la intimidad de los participantes en las protestas”¹²².

H. Derechos de personas defensoras de derechos humanos

159. Según la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores/as de derechos humanos se considera que las personas que, mediante una movilización o cualquier otro acto de protesta pacífica, exigen el goce efectivo de derechos humanos, los promueven o los protegen, se constituyen en defensoras y defensores de derechos humanos y, por lo tanto, entran bajo la protección especial que brinda la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos. En este sentido, del total de casos verificados y en proceso de verificación de muertes en el contexto de las protestas, en al menos 30 casos las víctimas serían defensores y defensoras¹²³. Según la información recibida por la Oficina, al momento de fallecer estas personas habrían estado ejerciendo su derecho a la reunión pacífica para defender tanto sus derechos como los de otras personas.
160. Además de las muertes de personas defensoras de derechos humanos en este contexto, la Oficina recibió información de agresiones y amenazas por parte de miembros de la Fuerza Pública en contra de personas que durante las manifestaciones ejercían una labor de promoción y garantía de los derechos humanos de quienes participaban en las mismas. En la mayoría de los casos estas personas se identificaban con chalecos u otras prendas distintivas con las palabras “DERECHOS HUMANOS”. La Campaña Defender la Libertad indicó que al 27 de julio registró 171 casos de personas defensoras de derechos humanos que habrían recibido agresiones, por personas no identificadas, cuando desarrollaban su labor de defensa en el marco del acompañamiento a actividades vinculadas con la protesta pacífica. Estas agresiones habrían incluido presuntas amenazas en contra de su vida e integridad, o la de sus familiares, presuntas amenazas de judicialización y lesiones personales¹²⁴. La Oficina pudo verificar 16 casos de agresiones cometidas por miembros de la Fuerza Pública en contra de personas defensoras de derechos humanos.
161. El 3 de mayo cuando, la Oficina acompañó a una delegación que incluía a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Campaña Defender

¹²² Comité de Derechos Humanos, Observación general núm. 37, numeral 3, párr. 34.

¹²³ Sobre quienes se consideran defensores de derechos humanos, véase <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/CommentarytoDeclarationondefendersJuly2011.pdf> e Informe de la Relatora Especial sobre defensores de derechos humanos sobre el derecho a la protesta en el contexto de la libertad de asamblea (2007), A/62/225.

¹²⁴ Véase <https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-bogota-paronacional-27-de-julio-de-2021/>

la Libertad Asunto de todas, la Central Unitaria de Trabajadores y MOVICE capítulo Valle del Cauca y el observatorio de realidades sociales de la Arquidiócesis de Cali, a verificar una situación en la ciudad de Cali. La delegación hizo presencia en una estación de policía donde fue atacada por agentes de la policía quienes les amenazaron de muerte y agredieron. Un policía apuntó su arma de fuego en la cabeza de un miembro de la delegación, otros fueron golpeados y funcionarios de la policía lanzaron una granada aturdidora, además de hacer disparos al aire. La delegación fue obligada a evacuar la estación de policía para protegerse. El caso está siendo investigado por la Fiscalía.

162. La Oficina también verificó casos de detenciones arbitrarias en contra de personas defensoras de derechos humanos, como la ocurrida el 12 de mayo, en la ciudad de Popayán contra una comisión de derechos humanos de una universidad. De acuerdo a estas alegaciones, las cuatro mujeres y un hombre que componían esta comisión, pese a estar plenamente identificados con distintivos y credenciales institucionales, y a que no presentaron ninguna resistencia al llamado de la autoridad, fueron detenidos arbitrariamente, y sujetos a violencia psicológica, señalamientos y amenazas por parte de miembros de la Fuerza Pública.
163. Asimismo, la Oficina documentó amenazas de muerte contra personas defensoras de derechos humanos y autoridades que facilitaron diálogos durante el Paro, por parte de grupos armados no estatales.
164. La Oficina también documentó la publicación en redes sociales de mensajes que pudieron ser estigmatizantes en contra de por lo menos tres grupos de personas: quienes organizaban la protesta o participaban de ésta; miembros de pueblos étnicos que se manifestaban; y sectores promotores del diálogo, incluidos defensores de derechos humanos, que participaban en mesas de negociación durante las movilizaciones y buscaban evitar violencia.
165. Varios de los mensajes observados como estigmatizantes, publicados durante las protestas en redes sociales, incluían acusaciones por delitos graves, por ejemplo, las acusaciones de terrorismo. Los actos de vandalismo y los graves daños causados a bienes privados y públicos en paralelo a las manifestaciones pacíficas contribuyeron a un proceso de estigmatización sobre los ejercicios de manifestación pública asociados al Paro Nacional. La Oficina observó con preocupación que autoridades nacionales sostuvieron públicamente que los ejercicios de protesta social en Cali serían en realidad “*vandalismo organizado*”¹²⁵ o estarían vinculados y financiados por grupos terroristas, a pesar de su carácter mayoritariamente pacífico.

¹²⁵ Daniel Palacios (@DanielPalam). (29 de abril de 2021). “*Lo que el país tiene que conocer, es que lo que ha sucedido en Cali, no son manifestaciones, sino vandalismo organizado que pretende afectar ciudadanía*”. Véase https://twitter.com/DanielPalam/status/1387924307909791744?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1387924307909791744%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elpais.com.co%2Fultimo-minuto%2Fmindefensa-envia-700-policias-mas-a-cali-por-continuidad-de-disturbios-y-vandalismo.html

166. La Oficina encontró al menos 13 hashtag en Twitter en los cuales se califica la protesta como terrorista, vandálica, criminal y asesina. Estos calificativos de redes sociales pudieron crear un clima poco propicio para el ejercicio del derecho a la reunión pacífica y pudieron haber generado un efecto negativo tanto sobre los derechos a expresarse como sobre los derechos a asociarse, a participar y a defender derechos humanos. En este sentido, la CIDH ha señalado que “la estigmatización, la violencia y la persistencia de lógicas bélicas dificultan todo esfuerzo de diálogo como mecanismo para alcanzar soluciones a la conflictividad social”¹²⁶.

I. Derecho a la salud y el impacto del uso de la fuerza y violencia sobre los trabajadores y voluntarios de la salud

167. En el contexto del Paro Nacional, el disfrute del derecho a la salud de las personas manifestantes y la población en general se vio afectado, entre otras causas, por: i) el uso indebido de la fuerza presuntamente por integrantes de la policía en contra de personal de la misión médica; ii) el temor generado entre las personas heridas, incluso en precarias condiciones de salud, de acudir a un centro sanitario y ser judicializadas y trasladadas por la policía a lugares de detención; iii) ataques a la misión médica por parte de personas violentas entre los manifestantes; y iv) la obstrucción al paso de ambulancias, medicamentos e insumos de salud, y su impacto negativo en la ejecución del plan de vacunación contra el COVID-19 y a la atención de pacientes.
168. El Ministerio de Defensa Nacional informó que, a 9 de junio, personas participantes en disturbios habían generado 315 hechos de afectación directa e indirecta a misiones médicas¹²⁷. Entre las afectaciones reseñadas por el Ministerio están: daños y retenciones de ambulancias (en varios casos transportaban pacientes); afectaciones al personal de salud; daños a infraestructura de centros médicos; obstrucciones de vehículos con insumos médicos; hurtos de insumos médicos; demora en la remisión de pacientes; y suspensión de servicios de salud.¹²⁸
169. De acuerdo con los datos del Ministerio de Defensa, las afectaciones a misiones médicas se presentaron en los departamentos de: Antioquia, Boyacá, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Guainía, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima, y Valle del Cauca. El departamento más afectado ha sido el Valle del Cauca.
170. El Ministerio de Salud también expresó preocupación porque las manifestaciones obstaculizaron, en algunas partes del país, la distribución de las vacunas contra el COVID-19, así como la entrega de oxígeno y medicamentos, y pidió que se respetara la misión

¹²⁶ Véase https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf, párr. 8.

¹²⁷ Véase https://www.policia.gov.co/sites/default/files/informe_sector_defensa_-_garantias_a_la_manifestacion_pacifica_y_control_de_acciones_violentas_-_28_de_abril_a_4_de_junio_de_2021_20210609_vf.pdf. De conformidad con el Ministerio de Defensa, se trata de personas y bienes destinados al servicio público de la salud.

¹²⁸ Véase https://www.policia.gov.co/sites/default/files/informe_sector_defensa_-_garantias_a_la_manifestacion_pacifica_y_control_de_acciones_violentas_-_28_de_abril_a_4_de_junio_de_2021_20210609_vf.pdf

médica¹²⁹. También la Organización Panamericana de la Salud y el Comité Internacional de la Cruz Roja llamaron al respeto por la misión médica¹³⁰.

171. La Oficina recibió información de casos de supuesto uso de la fuerza por integrantes de la policía en contra de la misión médica o que habría afectado a la misma. Por ejemplo, en el departamento del Atlántico, el 13 de mayo, fueron heridos dos auxiliares de enfermería que integraban la misión médica, quienes brindaban primeros auxilios en las manifestaciones.
172. La Oficina también documentó casos de amenazas de muerte en contra de personas que formaban parte de las misiones médicas que atendían a las personas heridas durante las protestas. La Oficina recibió información sobre dos casos de líderes de la misión médica de Medellín que fueron amenazados por su labor sanitaria en la protesta y hasta la fecha de redacción de documento contaban con esquemas de protección de Gobernación. La Oficina documentó una serie de casos en Cali, dentro de ellos el caso de Fernando Marín, jefe enfermero que, como resultado de su reconocida labor de asistencia médica a las personas heridas en las protestas, empezó a recibir una serie de amenazas de muerte para que parara su actividad. Debido a esas amenazas, tuvo que esconderse y abandonar su labor.
173. Asimismo, la Oficina recibió información sobre el supuesto uso desproporcionado de la fuerza, por integrantes de la policía en Cali el 10 de mayo, afectando tanto al personal de salud, como a personas que estaban recibiendo asistencia médica. Ese mismo día en el marco del operativo, se reportó que integrantes de la policía lanzaron gases lacrimógenos al interior de las viviendas del sector, afectando a personas que se encontraban en condiciones precarias de salud, entre ellas: un adulto mayor que requiere bomba de oxígeno para respirar; una adulta mayor con problemas cardíacos; una persona enferma de COVID-19 y una niña con parálisis cerebral y displasia de cadera.
174. La Oficina también recibió información de personas manifestantes heridas y en malas condiciones de salud que recibieron presiones, presuntamente por parte de integrantes de la policía, para ser puestas a su disposición, detenidas y judicializadas, pretendiendo incluso sustraerlas de centros hospitalarios.
175. La Oficina también recibió información de casos en los que personas manifestantes impidieron el paso de ambulancias. El Gobierno sostuvo que como consecuencias de estas acciones de los manifestantes, se registró la muerte de cuatro pacientes (uno en Cundinamarca y tres en el Valle del Cauca)¹³¹. La Oficina verificó uno de dichos casos, ocurrido el 4 de mayo, en Tocancipá (Cundinamarca), en donde se reportó que manifestantes obstruyeron el paso y causaron daños a una ambulancia que transportaba una mujer gestante. La mujer había sido remitida desde Tocancipá a Bogotá para ser atendida

¹²⁹ Véase <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/El-respeto-a-la-Mision-Medica-es-fundamental-en-este-momento.aspx>; y <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-hace-un-llamado-a-garantizar-vacunacion-en-medio-de-la-movilizacion-social-.aspx>

¹³⁰ Véase <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-presento-informe-de-ataques-a-la-Mision-Medica-a-cooperantes-internacionales.aspx>

¹³¹ Véase https://www.policia.gov.co/sites/default/files/informe_sector_defensa_-_garantias_a_la_manifestacion_pacifica_y_control_de_acciones_violentas_-_28_de_abril_a_4_de_junio_de_2021_20210609_vf.pdf

por una infección urinaria. Los ataques a la ambulancia generaron angustia en la mujer gestante y, en el momento en que manifestantes amenazaron con prender fuego al vehículo, la mujer sufrió un aborto espontáneo. La mujer expresó públicamente: "Ojalá mi experiencia sirva para que protesten sin violencia"¹³². El caso está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación.

176. La Secretaría de Salud del Valle del Cauca indicó que las consultas a la línea 106 de atención a la salud mental en el departamento aumentaron en un 50% en el mes de mayo de 2021. La Secretaría reseñó también factores previos de afectación a la salud mental, como el encierro causado por la pandemia, el incremento de la violencia intrafamiliar e incluso los sentimientos de angustia causada por la situación económica y social¹³³.

J. Criminalización de la protesta

177. A efectos de este informe, se entiende como criminalización de la protesta al uso de la justicia penal o contravencional para disuadir, castigar o impedir el derecho de reunión pacífica o la participación social y política. "Sus efectos habituales son la sujeción a procesos, de faltas o penales, arbitrarios y prolongados, la aplicación de multas y/o detenciones arbitrarias con o sin condena."¹³⁴ La aplicación del derecho penal frente a conductas de los participantes en una manifestación constituye "una restricción grave y con serias consecuencias para la libertad de expresión, y los derechos de reunión, asociación y participación política, que (...) solo pueden utilizarse de modo muy excepcional y está sujeto a un mayor nivel de escrutinio".¹³⁵
178. De acuerdo al Comité de Derechos Humanos, el reconocimiento del derecho de reunión pacífica impone a los Estados la obligación correspondiente de respetar y garantizar su ejercicio sin discriminación. Ello requiere que los Estados permitan que esas reuniones se celebren sin injerencias injustificadas y faciliten el ejercicio del derecho y protejan a los participantes.¹³⁶ Además, los Estados deben promover un entorno propicio para el ejercicio del derecho de reunión pacífica sin discriminación y establecer un marco jurídico e institucional en el que se pueda hacer efectivo.¹³⁷ Cuando se impongan sanciones penales o administrativas a los organizadores de una reunión pacífica o a los participantes en ella por su conducta ilícita, esas sanciones deben ser proporcionadas y no discriminatorias y no se deben basar en delitos ambiguos o definidos de manera excesivamente amplia ni reprimir conductas protegidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.¹³⁸

¹³² Véase <https://www.semana.com/nacion/articulo/no-el-bebe-no-habria-muerto-igual-la-triste-historia-de-salvador-y-los-bloqueos/202150/>

¹³³ Véase <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/la-salud-mental-en-el-valle-tristeza-y-miedo-a-perder-la-vida-594549>

¹³⁴ Relatora Especial de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos, *Global trends in risks and threats facing human rights defenders*, A/70/217, 2015, párr. 49.

¹³⁵ Ibid., para. 185.

¹³⁶ Comité de derechos humanos, Observación general núm. 37, párr. 8.

¹³⁷ Ibid, párr. 24.

¹³⁸ Ibid, párr. 67.

179. Manifestantes y algunas autoridades manifestaron su preocupación a la Oficina de ser involucrados en procesos judiciales por su rol en la protesta. En el caso de los manifestantes, esta preocupación se debe al vínculo mediático que varios actores hicieron entre la protesta y los casos de vandalismo y de destrucción o de presuntos actos terroristas. Se debe también a las declaraciones reiteradas por parte de autoridades del Estado en relación a la criminalización de los bloqueos. A esto se sumaron operativos en ciudades como Barranquilla, Cali, Medellín y Pasto, antes y después de las protestas, incluyendo allanamientos (algunos presuntamente irregulares), y detenciones, muchas de las cuales no culminaron en una judicialización. En este sentido, la Oficina recuerda que “las potestades de “identificación y registro” o “identificación y cacheo”, aplicadas a quienes participen en reuniones pacíficas o estén a punto de hacerlo, se deben ejercer sobre la base de una sospecha razonable de la comisión o la amenaza de la comisión de un delito grave y no se deben utilizar de manera discriminatoria¹³⁹. El simple hecho de que las autoridades relacionen a una persona con una reunión pacífica no constituye un motivo razonable para detenerla y cachearla.”¹⁴⁰
180. La mayor parte de las detenciones realizadas en el contexto de las protestas no culminaron en una judicialización de las personas detenidas. Según información del PMU, de las 1.970 detenciones realizadas en el contexto de las protestas, se “aperturaron noticias criminales” en 744 casos. La Oficina obtuvo información de casos de detenciones de manifestantes en Arauca, Cali, Cauca, Cauca, Cúcuta, Barranquilla, Bogotá, Medellín, Neiva, Risaralda y Villavicencio seguidas de judicializaciones bajo los delitos de violencia contra servidor público, daño a bien ajeno, obstrucción contra vía pública, uso de explosivos o armas de fuego, concierto para delinquir e, incluso terrorismo. La Oficina también tuvo conocimiento de casos que fueron desestimados al ser presentados ante el organismo judicial por falta de prueba o por vicios al debido proceso. Adicionalmente, delitos más graves se han ido desestimando o han sido sustituidos por delitos que no ameritan la privación de libertad. En el caso de Risaralda, por ejemplo, se informó que, de las 131 personas detenidas Entre el 28 de abril y el 16 de julio, la Fiscalía General imputó sólo a 23 personas y que, de éstas, el poder judicial sólo decretó medidas de privación de libertad en tres casos por los delitos de porte de armas y manipulación de sustancias peligrosas.
181. Adicionalmente, la Oficina recibió información sobre la detención y judicialización de personas, miembros y líderes de las denominadas "primeras líneas" de julio a noviembre de 2021 vinculadas a los hechos de violencia en contra de funcionarios y bienes públicos. Las detenciones se realizaron principalmente en las ciudades de Cali, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Medellín, Pereira y Sincelejo. Los procesos penales se han iniciado por los delitos de conspiración para delinquir, secuestro, agresiones y tortura en contra de funcionarios públicos, homicidio en grado de tentativa y terrorismo. Hasta el cierre de este informe, la Oficina registró 64 judicializaciones de personas que habrían participado en las protestas. En 25 de estos casos se decretó medidas provisionales de privación de libertad en centros de detención, mientras que en 12 casos se decretó arresto domiciliario.

¹³⁹ HRC/31/66.

¹⁴⁰ Comité de derechos humanos, Observación general núm. 37, párr. 83.

182. Es de particular preocupación las acciones judiciales por delitos graves contra personas manifestantes. A este respecto, la Oficina recuerda que según el Comité de Derechos Humanos “si bien los actos de terrorismo se deben penalizar de conformidad con el derecho internacional, la definición de esos delitos no debe ser excesivamente amplia ni discriminatoria y no se debe aplicar de manera que restrinja o desaliente el ejercicio del derecho de reunión pacífica.”¹⁴¹. La Oficina toma nota de la Directiva 008 del 2016 de la Fiscalía General de la Nación en el cual se establecen los lineamientos generales sobre los delitos en los que se puede incurrir en el curso de la “protesta social” y que fija los límites al poder punitivo del Estado cuando ocurren hechos violentos en el curso de las manifestaciones públicas¹⁴².
183. En el caso de autoridades municipales y/o departamentales, la preocupación de ser judicializadas surgió sobre todo por la posible aplicación del Decreto 575 del 28 de mayo de 2021, que, entre otros, ordenó a varios gobernadores y alcaldes, adoptar “todas las medidas necesarias, en coordinación con la Fuerza Pública, para levantar los bloqueos internos que actualmente se presentan en las vías de sus jurisdicciones, así como también evitar la instalación de nuevos bloqueos”¹⁴³, advirtiendo que los gobernadores y alcaldes que no cumplieran las disposiciones del Decreto serían objeto de las sanciones correspondientes según el Artículo 2 del Decreto.¹⁴⁴

VI. Actos de violencia contra la Fuerza Pública y destrucción de bienes públicos y privados

184. El Gobierno Nacional informó que miembros de la Fuerza Pública fueron víctimas de violencia durante las movilizaciones¹⁴⁵. Según dicha información, tres miembros de la Policía Nacional (hombres) habían muerto al 31 de julio de 2021, la Oficina ha incluido estos casos dentro de los casos documentados en la sección correspondiente a derecho a la vida. Los casos son los del patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez, quien desapareció el 3 de junio en Cali y que fue encontrado muerto el 7 de junio en el río Cauca; el del policía Juan Sebastián Briñez Hernández, quien murió el 22 de mayo en Cali presuntamente por arma de fuego; y el caso del Capitán Jesús Alberto Solano, quien murió el 28 de abril en Soacha por arma blanca al intentar frenar un saqueo. Adicionalmente, la Oficina recibió información del caso de la muerte del investigador del CTI, Fredy Bermúdez Ortiz, quien,

¹⁴¹ Ibid, párr. 68. Nótese también que en el caso del delito de terrorismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al analizar un caso relacionado con protestas, reiteró “la importancia de que en la investigación, juzgamiento y sanción de conductas penalmente ilícitas no se utilice la tipificación penal especial sobre terrorismo cuando el ilícito podría ser investigado y juzgado bajo el tipo penal ordinario por tratarse de una conducta de menor reprochabilidad”. En ese mismo caso, la Corte advirtió sobre la posibilidad de un “efecto intimidante en el ejercicio de la libertad de expresión que puede causar el temor a verse sometido a una sanción penal o civil innecesaria o desproporcionada en una sociedad democrática, que puede llevar a la autocensura tanto a quien le es impuesta la sanción como a otros miembros de la sociedad”.

Véase https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_279_esp.pdf Para 180

¹⁴² <https://defenderlalibertad.com/wp-content/uploads/2019/05/FGN-Directiva-008-protesta-social.pdf>

¹⁴³ Decreto 575 de 2021.

¹⁴⁴ Ibid.

¹⁴⁵ Consejería Presidencial de Derechos humanos.

<http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2021/Paginas/140521-infografia-DDHH-Paro-Nacional-2021.aspx>

el 28 de mayo, fue linchado en Cali por un grupo de manifestantes en un bloqueo que lo acusó de ser un infiltrado en las manifestaciones.

185. Como se menciona anteriormente, el PMU informó que 1.712 personas uniformadas resultaron lesionadas durante las manifestaciones. De éstas, 1,481 habrían sido el resultado de impactos por elementos contundentes. En 35 casos, las heridas fueron por arma de fuego, 65 por atentado con explosivo o elemento incendiario, 7 por agentes químicos, 109 por arma cortopunzante y 12 por arma traumática. Cerca del 40% de estas agresiones sucedieron en Bogotá y 15.8% en Cali. Al 16 de septiembre, un funcionario público seguía hospitalizado por heridas graves. En discusiones con la Alcaldesa de Bogotá, el 26 de mayo, la Oficina recibió información sobre el ataque sufrido por al menos 10 policías, que el 5 de mayo, fueron atacados y encerrados en el Comando de Atención Inmediata (CAI), ubicado en el Barrio la Aurora, de la Localidad de Usme, por sujetos violentos que luego intentaron quemar la instalación con los policiales al interior.
186. Dentro de las agresiones graves de las que fueron víctimas miembros de la Fuerza Pública, la Oficina registró el caso de la agresión sexual de la que fue víctima una mujer uniformada en la ciudad de Cali, el 29 de abril. Así mismo, fuentes oficiales informaron que 11 uniformados de la Policía Nacional denunciaron haber sido víctimas de secuestro simple, en la ciudad de Bogotá el 4 de mayo, indicando que los posibles victimarios hacían parte de los manifestantes, la Oficina dio seguimiento al caso.
187. Según información de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, del 28 de abril al 10 de septiembre, se reportaron 2.049 bienes privados destruidos (491 establecimientos comerciales, 463 oficinas bancarias, 4445 cajeros automáticos, 318 ambulancias, entre otros), 2.492 bienes públicos destruidos (1.416 de transporte, 277 estaciones de transporte, 179 infraestructuras gubernamentales, 30 bienes culturales, entre otros), 787 bienes policiales destruidos¹⁴⁶.
188. Una de las ciudades más afectadas por ataques a bienes fue Popayán (Cauca). La Fiscalía General de la Nación calcula que los daños causados en Popayán tienen un costo estimado de 20.000 millones de pesos colombianos (5,3 millones de dólares)¹⁴⁷. Entre los ataques en esta ciudad, el 14 de mayo la Fiscalía General de la Nación registró *“el asalto e incineración de la Unidad de Reacción Inmediata y de las instalaciones del Instituto de Medicina Legal, la destrucción de los laboratorios forenses, las oficinas de Atención Integral a las Víctimas de la Violencia Intrafamiliar, así como el saqueo de elementos probatorios y la pérdida de evidencias”*¹⁴⁸. Ante estos hechos de violencia, la Oficina se desplazó a Popayán y apoyó el traslado de funcionarios de Medicina Legal desde Bogotá hasta esta ciudad en coordinación con la Policía Nacional¹⁴⁹. Los hechos acontecieron en un contexto de crecientes tensiones en Popayán, luego de la muerte de un manifestante, de actos de violencia sexual contra una

¹⁴⁶ Observaciones del Gobierno Nacional al documento “Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia”, entregado a la Oficina el 9 de diciembre de 2021.

¹⁴⁷ Véase <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/publicaciones-2/acciones-de-la-fiscalia-en-la-judicializacion-de-delitos-en-el-marco-de-la-protesta-social/>

¹⁴⁸ Ibídem.

¹⁴⁹ Véase <https://twitter.com/onuhumanrights/status/1393384771372396545>

mujer de 18 años y un niño de 17 años, presuntamente por integrantes de la policía, y del suicidio de una niña de 17 años que había denunciado públicamente haber sido víctima de violencia sexual por parte de policías.

189. La Oficina recuerda que los Estados deben garantizar el derecho a la vida y ejercer la diligencia debida para proteger la vida de las personas frente a privaciones causadas por personas o entidades cuya conducta no sea imputable al Estado. Un elemento importante de la protección del derecho a la vida es la obligación de los Estados, cuando tengan conocimiento o deberían haberlo tenido de privaciones de la vida potencialmente ilícitas, de investigar y, según proceda, enjuiciar a los responsables de esos incidentes. Las investigaciones y los enjuiciamientos de casos relativos a privaciones de la vida que pudieran ser ilícitas deberían llevarse a cabo de conformidad con las normas internacionales pertinentes, entre ellas el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas.¹⁵⁰

VII. Bloqueos y cierres de vías en el contexto de la protesta

190. Según la Defensoría del Pueblo, entre el 28 de abril y el 4 de junio 2021, se presentaron 1.937 puntos de bloqueos. De estos, 1.776 tuvieron una duración de 1 a 3 días, 46 duraron de 4 a 6 días, 115 se extendieron por más de 7 días y 9 se mantuvieron por 30 días adicionales, particularmente en el departamento del Valle del Cauca¹⁵¹.
191. En algunos puntos del país, los bloqueos y cierres de vías generaron desabastecimiento y pérdida de alimentos afectando en algunos casos el disfrute del derecho a la alimentación y poniendo en riesgo el suministro de agua potable en algunos lugares¹⁵². En algunos puntos, también impidieron o dificultaron la libre circulación de personas y la circulación de trabajadores a sus empleos, así como el abastecimiento y desplazamiento médico o humanitario (ver punto V.I supra sobre derecho a la salud). La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales informó también que se estaban presentando afectaciones al Plan de Alimentación Escolar¹⁵³.
192. El 8 de junio, el Ministerio de Agricultura presentó un informe sobre las graves afectaciones ocasionadas al sector rural por los bloqueos de carreteras, identificando problemas de abastecimiento de alimentos, obstaculización de la actividad económica de muchos agricultores, y el aumento de precios de agro-insumos¹⁵⁴. El informe señala que, en este período, se registró la menor cantidad de alimentos que ingresaron a las centrales de abasto

¹⁵⁰ Comité de derechos humanos, Observación general núm. 36, párr. 27.

¹⁵¹ <https://www.defensoria.gov.co/public/minisite/protestasocial/assets/informe-visita-cidh.pdf> ; pág. 23.

¹⁵² www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2021/Documents/180521-ESP-Infografia-DDHH-Paro-Nacional-2021.pdf. La Oficina tuvo contactos con representantes de Asoleche; Fenavi, PorkColombia y otros empresarios sobre esta situación.

¹⁵³ Idem.

¹⁵⁴ [https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Bloqueos-dejan-1,8-millones-de-empleos-rurales-en-riesgo-y-p%C3%A9rdidas-cercanas-a-los-\\$3,6-billones-en-el-agro.aspx](https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Bloqueos-dejan-1,8-millones-de-empleos-rurales-en-riesgo-y-p%C3%A9rdidas-cercanas-a-los-$3,6-billones-en-el-agro.aspx)

en los últimos tres años¹⁵⁵. Según el Ministerio, “*ni siquiera en el 2020 se registró esta disminución, a pesar de los aislamientos preventivos por la pandemia*”¹⁵⁶.

193. El represamiento de cerca de 378.375 toneladas de maíz, trigo, torta de soya y granos en general, en el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca), incidió en un aumento del precio de los alimentos balanceados, indicó el Ministro de Agricultura¹⁵⁷. También identificó problemas por el represamiento de arroz en la región del Casanare y el Ariari y dificultades para que el café llegara al puerto de Buenaventura. En relación con los productos lácteos, indicó que se dejaron de acopiar cerca de 47 millones de litros de leche, siendo los departamentos más afectados: Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Nariño y Valle del Cauca. En el departamento de Arauca se ha represado el cacao (cerca de 1.200 toneladas); en el Huila se afectó el transporte de frutas y hortalizas¹⁵⁸. Según el Gobierno Nacional, el impacto económico consolidado desde el 28 de abril al 4 de junio habría ascendido a COP 11,9 billones (USD 3,3 miles de millones)¹⁵⁹.
194. El 7 de mayo, el Sistema de las Naciones Unidas en Colombia llamó a garantizar el libre acceso a insumos alimentarios básicos, la misión médica y misiones humanitarias para la población que requiere asistencia en medio de la pandemia y expresó su voluntad de continuar apoyando los esfuerzos en esta dirección¹⁶⁰.
195. El 11 de mayo, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado expresando preocupación por la pérdida de alimentos que se observó en la central de la Corporación de Abastos de Bogotá¹⁶¹ e hizo un llamado para que se garantizara el flujo de alimentos por las vías del país¹⁶². La Defensoría del Pueblo facilitó la instalación de corredores humanitarios en 17 departamentos, con el fin de permitir el paso de las comunidades, misión médica, así como el transporte de oxígeno, alimentos, medicinas y combustibles¹⁶³.
196. De acuerdo al Comité de Derechos Humanos, las restricciones impuestas al derecho de reunión pacífica para proteger “los derechos y libertades de los demás” pueden estar relacionadas con la protección de los derechos amparados por el Pacto Internacional de

¹⁵⁵ Con 447.478 toneladas.

¹⁵⁶ [https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Bloqueos-dejan-1,8-millones-de-empleos-rurales-en-riesgo-y-p%C3%A9rdidas-cercanas-a-los-\\$3,6-billones-en-el-agro.aspx](https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Bloqueos-dejan-1,8-millones-de-empleos-rurales-en-riesgo-y-p%C3%A9rdidas-cercanas-a-los-$3,6-billones-en-el-agro.aspx)

¹⁵⁷ [https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Bloqueos-dejan-1,8-millones-de-empleos-rurales-en-riesgo-y-p%C3%A9rdidas-cercanas-a-los-\\$3,6-billones-en-el-agro.aspx](https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Bloqueos-dejan-1,8-millones-de-empleos-rurales-en-riesgo-y-p%C3%A9rdidas-cercanas-a-los-$3,6-billones-en-el-agro.aspx)

¹⁵⁸ [https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Bloqueos-dejan-1,8-millones-de-empleos-rurales-en-riesgo-y-p%C3%A9rdidas-cercanas-a-los-\\$3,6-billones-en-el-agro.aspx](https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Bloqueos-dejan-1,8-millones-de-empleos-rurales-en-riesgo-y-p%C3%A9rdidas-cercanas-a-los-$3,6-billones-en-el-agro.aspx)

¹⁵⁹ Observaciones del Gobierno Nacional al documento “Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia”, entregado a la Oficina el 9 de diciembre de 2021.

¹⁶⁰ <https://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/comunicados-de-prensa/473-ano-2021/9599-comunicado-del-sistema-de-las-naciones-unidas-en-colombia>

¹⁶¹ <https://www.corabastos.gov.co/es/node/151>

¹⁶² <https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10111/“La-protesta-pacífica-es-un-derecho-los-bloqueos-no-pueden-ser-la-vía”-Corabastos-Defensoría-Defensor-Camargo-bloqueos-corredores-humanitarios-seguridad-alimentaria.htm>

¹⁶³ <https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10097/Con-mediación-de-la-Defensoría-Archivos-se-habilitan-60-corredores-humanitarios-para-alimentos-medicinas-y-combustibles-paro-nacional-Defensoría-Archivos-derechos-humanos-protestas-corredores-humanitarios.htm>

Derechos Civiles y Políticos o de otros derechos humanos de personas que no participen en la reunión. Al mismo tiempo, las reuniones entrañan un uso legítimo de los espacios públicos y de otros lugares, y dado que pueden causar, por su propia naturaleza, cierto grado de perturbación de la normalidad, se deben permitir esos trastornos, a menos que impongan una carga desproporcionada, en cuyo caso las autoridades deben poder justificar detalladamente las restricciones.¹⁶⁴ Una reunión que, aunque sea pacífica, cause una gran perturbación, como el bloqueo prolongado del tráfico, se puede dispersar, por regla general, solo si la perturbación es “grave y sostenida”.¹⁶⁵ Cuando se adopte la decisión de dispersar de conformidad con el derecho interno e internacional, se debería evitar el uso de la fuerza. Cuando ello no sea posible, solo se puede utilizar la fuerza mínima necesaria. En la medida de lo posible, la fuerza que se utilice se debería dirigir contra una persona o grupo específico que participe en la violencia o amenace con hacerlo. La fuerza que es probable que cause una lesión más que insignificante no se debería utilizar contra personas o grupos que se resistan pasivamente.¹⁶⁶ La posibilidad de intervenir dichos bloqueos, supone realizar una evaluación exhaustiva, objetiva y razonablemente sustentada de cada caso en particular, que permitan identificar si la perturbación es grave y sostenida.¹⁶⁷

197. Durante el Paro, la Oficina documentó el uso de la fuerza para levantar bloqueos sin que se hayan agotado las vías del diálogo o sin que éstos hayan causado perturbaciones graves y sostenidas. También documentó el uso desproporcionado y/o innecesario de la fuerza contra personas que realizaban bloqueos. Por ejemplo, en el sector de la Portada del Mar en Cali, el 28 y 29 de abril, se usó la fuerza para desbloquear un sector tomado por los manifestantes, sin establecer un diálogo con los mismos y sin que la movilización haya causado graves perturbaciones. En este mismo punto, el 10 de mayo se usó la fuerza de manera innecesaria o desproporcionada contra manifestantes y contra terceros en los lugares residenciales aledaños. La Oficina documentó incidentes similares de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza el 3 de mayo en el sector de La Luna en Cali y el 4 de junio en Chiminango.
198. La Oficina recomendó el uso del diálogo para atender las demandas sociales de la protesta de manera general para reforzar las garantías para la reunión pacífica y la gestión de bloqueos (ver sección de buenas Prácticas). La Oficina observó el resultado positivo de los diálogos en todo el país. En Cali, el diálogo entre la Alcaldía y la URC, acompañado por la Iglesia, la Misión de Verificación, la MAPP-OEA y la Oficina, permitió fomentar un

¹⁶⁴ Comité de derechos humanos, Observación general núm. 37, párr. 47.

¹⁶⁵ Comité de derechos humanos, Observación general núm. 37, párr. 85. Véase también OACNUDH en Colombia, Sobre alcance de las disposiciones de derecho internacional sobre el derecho a la reunión pacífica y su relación con otros derechos. Expresiones del derecho de reunión pacífica y posibilidad de intervención de conformidad con límites establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos, <https://www.hchr.org.co/files/documento-reunion-pacifica-mayo-2021.pdf>. Al respecto, en el marco jurídico nacional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido lo siguiente: “7.18. El respeto, la protección y garantía del derecho de toda persona a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, en muchas ocasiones puede traer aparejadas incomodidades a quienes no participan de las movilizaciones o de las manifestaciones que se efectúan en ejercicio del mismo.” Corte Constitucional. Sentencia C-742 del 26 de septiembre de 2012.M.P. María Victoria Calle Correa. Numeral 7.18. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/c-742-12.htm#_ftnref84

¹⁶⁶ Comité de Derechos Humanos, Observación general núm. 37, párr. 86.

¹⁶⁷ Véase también párrafo 86 supra.

espacio de interlocución, que contribuyó a desescalar la confrontación y la violencia; abordar las demandas de los jóvenes y solucionar la situación en 25 puntos de bloqueo. La Oficina brindó asistencia técnica en una diversidad de espacios en los que se promovieron diálogos que ayudaron a levantar puntos de bloqueos y avanzar en negociaciones sobre las demandas de personas manifestantes, en Arauca, Caquetá, Huila, Nariño, Norte de Santander, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca, entre otros.

199. La Oficina destaca la labor de la Defensoría del Pueblo que, al 1 de junio, comunicó que había logrado negociar el levantamiento de 31 bloqueos en 10 departamentos. Dicha entidad expresó que *“en cada una de las mediaciones se intenta establecer un canal con autoridades locales, departamentales y con el gobierno nacional, para que puedan escuchar el pliego de peticiones de los manifestantes, avanzar en los desbloques y en soluciones de fondo”*. La Defensoría también destacó la vía del diálogo como la más adecuada para superar las dificultades¹⁶⁸.

VIII. Rendición de cuentas

200. La Oficina saluda la resolución del Fiscal General de la Nación, de fecha 31 de mayo de 2021, que establece que la justicia ordinaria es la competente para investigar los posibles excesos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en el marco de las jornadas de Paro Nacional y solicita a la Justicia Penal Militar remitir todas las diligencias y actuaciones realizadas a la Fiscalía General de la Nación. Con ello, el Fiscal General confirmó una tendencia, aún incipiente y observada en octubre de 2020¹⁶⁹, que tiende a revertir una práctica generalizada desde hace algunos años según la cual la Justicia Penal Militar asumía la investigación de casos de presuntas privaciones arbitrarias de la vida cometidas por miembros de la policía o el ejército¹⁷⁰.
201. La Oficina también considera positiva la decisión adoptada el 25 de agosto por la Sala Plena de la Corte Constitucional sobre la controversia de competencias entre la jurisdicción militar y la ordinaria en relación con la muerte del manifestante Santiago Murillo el 1° de mayo en Ibagué. La Corte Constitucional decidió que la competencia del caso debe asignarse a la jurisdicción ordinaria debido a que el sargento, presuntamente responsable de la muerte de Santiago Murillo, no habría utilizado su arma de fuego para proteger la vida y la integridad

¹⁶⁸ <https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10165/Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-ha-mediado-en-el-levantamiento-de-31-bloqueos-en-el-pa%C3%ADs-bloqueos-Defensor%C3%ADa-Mesa-Nacional-del-Paro-V%C3%ADa-Panamericana.htm>

¹⁶⁹ En el caso de Javier Ordoñez, en octubre de 2020 el Consejo Superior de la Judicatura falló en el sentido que la jurisdicción competente para investigar ese caso era la Fiscalía General de la Nación.

¹⁷⁰ Véase A/HRC/43/3/Add.3 El Consejo Superior de la Judicatura, en agosto de 2020, ratificó que la jurisdicción competente en el caso de Dilan Cruz era la justicia penal militar.

- de las personas o de él mismo y, por lo tanto, su acción no habría sido conforme a los estándares internacionales de derechos humanos sobre uso de armas de fuego¹⁷¹.
202. La Fiscalía General de la Nación informó que designó más de 35 equipos especiales en todo el territorio nacional, compuestos por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la policía judicial (Seccional de Investigación Criminal - SIJIN) y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para realizar las investigaciones en contexto, privilegiando aquellas situaciones de mayor afectación a la población civil.
203. La Fiscalía General de la Nación informó que, de un total de 57 muertes conocidas por este órgano investigador, 29 tienen relación con las manifestaciones. La entidad informó que de estos 29 casos, 17 cuentan con un avance en el esclarecimiento de los hechos, y que ha identificado 19 presuntos victimarios¹⁷². Del mismo modo, la Fiscalía General de la Nación ha priorizado la investigación de 278 casos de personas que figuran como víctimas por abuso de autoridad y lesiones personales.
204. El 1 de diciembre se realizó una audiencia en la que el juez decimoquinto Municipal de Cali imputó al Comandante Operativo de Policía Nacional Metropolitana de Cali, al Comandante del Grupo de Acciones Especiales y a un Patrullero por los delitos de homicidio agravado en contra de seis personas¹⁷³ y lesiones personales en contra cuatro personas durante las protestas ocurridas del 28 de abril al 3 de mayo en la ciudad de Cali. Por otra parte, se citó para imputación de cargos a 17 civiles y policías que habrían disparados sus armas de fuego en contra manifestantes y miembros de la Minga Indígena en el sector Ciudad Jardín en Cali.
205. La Oficina recibió información que indica que, como resultado de los actos violentos cometidos en el contexto de las protestas por parte de personas vestidas de civil, se adelantaron 744 noticias criminales, se han producido 160 imputaciones y se libraron 49 medidas de aseguramiento. La Oficina también recibió información sobre la detención de sospechosos en cuatro casos de homicidios en los que las víctimas resultaron ser servidores públicos.
206. Por hechos vinculados con la desaparición de personas con ocasión y/o en desarrollo de las protestas, la Fiscalía General de la Nación informó que de los 627 casos denunciados, se había localizado a 276 personas, 136 casos eran registros duplicados y 192 corresponden a

¹⁷¹ Corte de Constitucionalidad, Auto 576 del 25 de agosto del 2021. La regla de resolución de la Corte de Constitucionalidad fue: "Corresponde a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de las investigaciones penales seguidas contra miembros de la Fuerza Pública por el uso de armas de fuego contra la humanidad de los ciudadanos, cuando no se advierta que pretendieron proteger la vida e integridad física de las personas o de ellos mismos, puesto que ese tipo de actuaciones no se pueden considerar como un acto propio de servicio y, por tanto, se desvirtúa el elemento funcional del fuero penal militar instituido en el art. 221 superior."

¹⁷² Observaciones del Gobierno Nacional al documento "Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia", entregado a la Oficina el 9 de diciembre de 2021.

¹⁷³ Los nombres de las personas que perdieron la vida son: Harold Antonio Rodríguez Mellizo, Kevin Antoni Agudelo Jiménez, Einer Alexander Lasso Chala, Jose Emilson Ambuila, Miguel Angel Pinto y Edwin Villa Escobar.

registros inadmitidos. El mecanismo de búsqueda urgente se encuentra activo para 27 casos.¹⁷⁴

207. El Gobierno Nacional informó que se iniciaron 231 investigaciones internas por presuntas faltas disciplinarias cometidas por la policía, incluidas 16 por homicidio, 108 por abuso de autoridad, 45 por agresiones físicas, 26 por lesiones personales, 12 por incumplimiento de órdenes y 24 por otras conductas. De las 231 investigaciones abiertas, 193 fueron cerradas y 38 se encuentran vigentes¹⁷⁵.
208. Según el Gobierno Nacional, la Justicia Penal Militar inició 34 investigaciones, algunas de ellas por casos de presuntos homicidios, al considerar que estos hechos serían actos vinculados con el servicio y no posibles violaciones a los derechos humanos. Seis de estas investigaciones fueron trasladadas a la jurisdicción ordinaria¹⁷⁶.
209. Por su parte, por hechos vinculados con las manifestaciones, la Procuraduría General de la Nación ha abierto¹⁷⁷ 12 investigaciones disciplinarias y 189 indagaciones preliminares en relación al incumplimiento de funciones públicas, para un total de 201 procedimientos. Del total, 172 expedientes (cuatro investigaciones disciplinarias y 168 indagaciones preliminares) corresponden a miembros de la Fuerza Pública y, en 22 de los casos, las acciones fueron iniciadas haciendo uso del poder preferente.
210. También se llevan a cabo investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación contra otros funcionarios: 21 contra funcionarios de elección popular (3 congresistas, 1 gobernador, 9 alcaldes y 6 concejales) y ocho expedientes más contra otros funcionarios públicos. Una de las congresistas investigadas pidió medidas cautelares ante la CIDH. Existe preocupación de que algunos de estos funcionarios podrían estar siendo investigados por haber favorecido el diálogo con manifestantes o la protección de sus derechos en el marco de las protestas.

¹⁷⁴ Observaciones del Gobierno Nacional al documento “Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia”, entregado a la Oficina el 9 de diciembre de 2021.

¹⁷⁵ *Ibidem*.

¹⁷⁶ *Ibidem*.

¹⁷⁷ Con corte al 19 de junio de 2021.

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 211. Colombia goza de un marco legal robusto para la protección del derecho de reunión pacífica. Se beneficia también de importantes sentencias judiciales que guían al Estado en la debida aplicación de este derecho. Por otra parte, el Gobierno Nacional se ha comprometido a implementar una política de cero-tolerancia frente a las violaciones, iniciando varias investigaciones por violaciones y abusos a los derechos humanos cometidos en el contexto de la protesta.**
- 212. De la información recopilada y analizada por la Oficina, hay razones fundadas para sostener que en el contexto del Paro Nacional, se habrían cometido violaciones a los derechos humanos, tales como el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza que resultaron en privaciones arbitrarias de la vida y las violaciones a la integridad y seguridad personal, así como las detenciones arbitrarias, la violencia sexual y de género, y actos de discriminación y racismo. En algunos de estos casos, las víctimas eran indígenas y afrodescendientes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.**
- 213. La represión de la protesta y el uso de la fuerza innecesario y/o desproporcionado por las autoridades contra manifestantes pacíficos en el marco del Paro Nacional, habrían resultado en graves violaciones a los derechos humanos. En algunos casos las víctimas no participaban en las protestas. En la práctica, es necesario reforzar los métodos de gestión democrática de la protesta en el país, para asegurar de forma efectiva el pleno ejercicio y goce del derecho de reunión pacífica. Este derecho debe ser protegido de manera proactiva por el Estado, incluso con relación a acciones cometidas por terceros.**
- 214. El Estado colombiano debe tomar todas las medidas y acciones necesarias para asegurar que las autoridades encargadas de la gestión de las manifestaciones, en particular la Fuerza Pública, solo recurran a la dispersión de las manifestaciones en estricta observancia de los normas y estándares del derecho internacional de los derechos humanos. El diálogo debe convertirse en la base de la gestión de las manifestaciones y se debe evitar la estigmatización de la protesta. Esto requiere un cambio profundo de la cultura institucional de gestión de las manifestaciones en Colombia. Como ha recomendado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas “los agentes del orden deberían tratar de reducir la tensión de las situaciones que podrían dar lugar a violencia. Tienen la obligación de agotar los medios no violentos y advertir previamente si es absolutamente necesario utilizar la fuerza”¹⁷⁸.**
- 215. La Oficina destaca como buena práctica, que durante el Paro Nacional, el diálogo fue el instrumento más efectivo para examinar los reclamos de los manifestantes, para proteger derechos y des-escalar situaciones de violencia, incluyendo en respuesta a los bloqueos. En este sentido, las autoridades que favorecieron el dialogo, ayudaron a**

¹⁷⁸ Comité de Derechos Humanos, Observación General 37, relativa al derecho de reunión pacífica, párrafo 78. CCPR/C/GC/37.

reforzar el derecho de reunión pacífica y la protección de los derechos humanos en sus jurisdicciones y no deben ser sancionadas. Entre las lecciones aprendidas, los diálogos de Bogotá, Cali y Medellín, y otros que la Oficina acompañó, demostraron que las garantías de seguridad son un requisito para la participación efectiva de los manifestantes en los procesos de diálogo. Se observó que, para generar espacios de diálogo genuinos, se requiere construir confianza entre los interlocutores y desarrollar metodologías participativas, porque, de lo contrario, se agudizan las tensiones.

216. Dentro de las buenas prácticas, la Oficina también reconoce la importancia de la instalación de la Mesa de Evaluación de Garantías de Manifestaciones Públicas conforme a lo establecido en el Decreto 003 de 2021, la anuencia a la visita de la CIDH, las medidas de gestión de las manifestaciones por parte de autoridades locales que permitieron la prevención de la violencia y la protección de derechos, y el rol de las personas defensoras de derechos humanos durante el desarrollo del Paro Nacional.
217. Es importante reconocer que el Paro Nacional fue una movilización mayoritariamente pacífica y ciudadana que contó con una participación sin precedentes de la juventud que buscó incidir en la situación de desigualdad que afecta el país a través de la expresión democrática.
218. Con base en el análisis presentado en este documento, y con el objetivo de contribuir a prevenir situaciones de violencia y de abuso a futuro, la Oficina recomienda:

Prevención y diálogo

- Implementar las recomendaciones formuladas al Estado de Colombia por parte del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales en 2017, entre ellas: incrementar sus esfuerzos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad¹⁷⁹; intensificar sus esfuerzos para asignar recursos suficientes al sector de salud y redoblar sus esfuerzos para asegurar la accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad y calidad de la atención de salud¹⁸⁰; y adelantar una reforma tributaria garantizando que *“sea redistributiva y socialmente justa con el objeto de combatir los altos índices de desigualdad y aumentar la disponibilidad de recursos destinados a la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales”*¹⁸¹.
- Reforzar los espacios de diálogo social que garanticen la participación efectiva de los movimientos sociales, jóvenes, mujeres, líderes afrodescendientes e indígenas para identificar medidas para superar la pobreza, la desigualdad y la discriminación y darle prioridad al cumplimiento de acuerdos logrados a través de movilizaciones populares, como el del paro cívico de Buenaventura.

¹⁷⁹ E/C.12/COL/6, párr.48.

¹⁸⁰ E/C.12/COL/6, párr. 62.

¹⁸¹ E/C.12/COL/6, párr. 20.

- Realizar un diagnóstico sobre el estado de implementación de los acuerdos regionales y nacionales que fueron adoptados, incluidos aquellos que fueron formalizados a través de decretos nacionales o regionales en los cuales se establecieron espacios de diálogo.
- Establecer mecanismos de seguimiento y planes para fomentar el cumplimiento de los acuerdos regionales y nacionales que incluyan espacios de consulta, verificación intermedia y de rendición pública sobre los avances.
- Reforzar los espacios de diálogo regionales impulsados durante el Paro Nacional y respaldar su funcionamiento y la implementación de los acuerdos logrados en los mismos, desde el nivel nacional.
- Adoptar medidas eficaces para prevenir e investigar cualquier acto de estigmatización individual o colectiva en contra de los manifestantes.

Protección del derecho de reunión pacífica

- Responder a las manifestaciones pacíficas de conformidad con las normas y estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
- Reforzar las medidas de prevención, investigación y sanción adecuada frente a casos de presunto uso innecesario o desproporcionado de la fuerza.
- Integrar en los procedimientos y práctica de las instituciones del Estado, incluyendo las fuerzas de seguridad, los estándares internacionales relacionados con la protección del derecho de reunión pacífica, incluyendo medidas para crear un entorno favorable para este derecho.
- Prevenir y perseguir penalmente los abusos cometidos por terceros contra manifestantes para garantizar el derecho de reunión pacífica de manera integral.
- Impulsar el diálogo y la coordinación como principales instrumentos de gestión de la protesta.
- Formar a los cuerpos encargados de la Fuerza Pública en la gestión democrática de las manifestaciones.
- Revisar los protocolos y procedimientos de uso de la fuerza de las fuerzas de seguridad para asegurar su plena adecuación con las normas y estándares del derecho internacional de los derechos humanos, para evitar instancias de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, y en línea con la histórica decisión de la Corte Suprema del 22 de septiembre de 2020.

- Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en casos de violaciones, entre otros medios sancionando adecuadamente a los responsables de las vulneraciones de derechos humanos cometidas durante las protestas del 9 y 10 de septiembre 2020 en Bogotá y las del Paro Nacional de 2021.
- Revisar protocolos y procedimientos de dispersión en el marco de los denominados bloqueos para asegurar su plena adecuación con las normas y estándares del derecho internacional de los derechos humanos, y a fin de que se individualice el impacto de los mismos y la necesidad de dispersar y se asegure el uso del diálogo en su gestión.
- Reforzar las medidas de articulación y coordinación interinstitucional entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público y las autoridades regionales y nacionales para la gestión de manifestaciones, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos sobre el derecho de la reunión pacífica.
- Consolidar un registro unificado de las privaciones de la libertad con información en tiempo real, incluyendo sobre los traslados por protección, para prevenir y mejorar la búsqueda de personas desaparecidas y limitar el uso generalizado de los traslados por protección para garantizar un estricto apego con las obligaciones internacionales de derechos humanos.
- Aplicar la Directiva 008 del 2016 de la Fiscalía General de la Nación en la cual se establecen los lineamientos generales sobre los delitos en los que se puede incurrir en el curso de la “protesta social” y que fija los límites al poder punitivo del Estado cuando ocurren hechos violentos en el curso de las manifestaciones públicas.
- Reforzar las campañas para promover la no violencia en las manifestaciones.

Uso de las armas letales y menos letales

- Garantizar que el uso de armas de fuego cumpla estrictamente con los parámetros contenidos en las normas y los estándares internacionales de derechos humanos.
- Establecer una comisión técnica de expertos independientes, incluyendo actores de la sociedad civil, para revisar toda la información disponible sobre el uso de armas menos letales por parte de la Fuerza Pública, a fin de recomendar acciones urgentes para evitar muertes y lesiones graves en la gestión de futuras manifestaciones.
- Adoptar una transformación profunda del ESMAD, incluyendo una revisión de sus protocolos sobre el uso de la fuerza y de las armas y municiones menos letales para que cumplan con las normas y estándares internacionales de derechos humanos y la sentencia de la Corte Suprema de septiembre 2020.

Investigación

- **Conducir investigaciones –penales y disciplinarias- independientes, imparciales, exhaustivas, efectivas y transparentes en relación a todas las denuncias de abusos de la Fuerza Pública ocurridos desde el 28 de abril, en el marco de las protestas, incluyendo casos de violencia sexual y de género y reforzando el acceso a la justicia para mujeres, niñas y personas LGBTI que sufrieron abusos durante la movilización.**
- **Reforzar la investigación de los crímenes cometidos por terceros contra manifestantes, incluyendo actos de racismo y las investigaciones de los casos en que los manifestantes resultaron heridos o perdieron la vida por motivo de la acción policial en la protesta.**
- **Avanzar en las investigaciones y sanciones de los actos cometidos por personas violentas que afectaron la vida de integrantes de la Fuerza Pública y bienes públicos y privados, que constituyen delitos o crímenes.**
- **Impulsar investigaciones exhaustivas en los casos de estigmatización y/o ataques en contra de manifestantes, de personas impulsoras de procesos de diálogo, de periodistas, ciudadanos periodistas y defensores de derechos humanos.**

Reforma policial

- **Impulsar un debate amplio en la sociedad sobre la reforma a la Policía Nacional, incluyendo los mecanismos de control y de rendición de cuentas, así como valorar la pertinencia de transferir la policía del Ministerio de Defensa a un Ministerio de autoridad civil, para reforzar el carácter civilista de la institución y el enfoque sobre la seguridad ciudadana.**

Intervención militar

- **Garantizar que el mantenimiento de la seguridad ciudadana, incluyendo la gestión de las manifestaciones, esté reservado a los cuerpos policiales civiles y que toda asistencia militar sea excepcional y conforme con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, recordando que su participación debe ser temporal y limitada, subordinada a la autoridad civil, y regulada y fiscalizada por órganos civiles competentes.**

Reparación y memoria

- **Impulsar medidas de reparación adecuada para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos y otros actos de violencia y abusos ocurridos en el marco de las protestas pacíficas del Paro Nacional, así como medidas colectivas de reconocimiento y memoria para las víctimas que contribuyan a la no-repetición.**

- **Asegurar el acceso a atención y cuidados de salud física y mental para las personas que resultaron víctimas en el marco del Paro.**

Protección de la libertad de expresión y de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos

- **Adoptar medidas adecuadas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y garantizar que su labor pueda ser realizada sin obstáculos. Impulsar una mejor coordinación entre las autoridades y las personas defensoras de derechos humanos para mejorar la protección de derechos en el marco de la gestión democrática de la reunión pacífica.**
- **Tomar medidas adecuadas para respetar, proteger y garantizar los derechos a la libertad de opinión y expresión, de todas las personas, incluyendo periodistas de todos los, medios de comunicación y defensores de derechos humanos.**

Discriminación, racismo y enfoque de género

- **Realizar un diagnóstico público por parte de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior con relación a la discriminación, el racismo y el enfoque de género aplicados por las autoridades en la gestión de la protesta del Paro Nacional, con el fin de revisar los estándares internacionales en la materia y asegurar de que éstos sean aplicados en próximas reuniones o manifestaciones.**

Seguimiento a las recomendaciones de la CIDH

- **Implementar las recomendaciones de la CIDH formuladas a raíz de su visita a Colombia en junio de 2021.**



Informe de Temblores ONG, Indepaz y Paiis a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021.



Tabla de contenidos

INTRODUCCIÓN.....	3
1. Los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al derecho a la protesta y las obligaciones estatales frente al uso arbitrario de la fuerza pública.	4
2. Incumplimiento del Estado colombiano de las normas y pronunciamientos del sistema IDH en el marco de las protestas realizadas entre el 29 de abril y el 31 de mayo del 2021	9
2.1 Observaciones sobre el incumplimiento del Estado colombiano de los estándares de la Corte IDH en materia de protesta social.	9
2.2 La sistematicidad en la violencia por parte de la fuerza pública en el contexto del Paro Nacional Colombiano del año 2021.	15
I. El uso indiscriminado, desmedido y desproporcionado de armas de fuego en contra de las personas manifestantes por parte de la Fuerza Pública.	16
II. El uso de armamentos de letalidad reducida en contra de los cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas pacíficas.	20
III. Los disparos horizontales con arma venom de largo alcance en lugares residenciales y en contra de manifestantes.	23
IV. El lanzamiento de gases lacrimógenos y aturdidoras al interior de viviendas y de barrios residenciales.	28
V. Vulneración del principio de publicidad de los procedimientos policiales.	31
VI. La imposición de requisitos y medidas paralegales a las personas detenidas arbitrariamente por parte de la Policía Nacional a cambio de su libertad.	37
VII. Violencia sexual y basada en género hacia manifestantes	40
VIII. Generación de traumas oculares en contra de manifestantes	44
IX. Desaparición forzada de manifestantes.	59
3. Conclusiones.....	59
4. Recomendaciones	61



INTRODUCCIÓN

Desde el 28 de abril de 2021 hasta la fecha de envío de este informe se han presentado expresiones masivas de protesta en todo el territorio nacional colombiano. En este informe se reportan a la CIDH hechos de violencia por parte de miembros de la fuerza pública contrarios a la convención Americana de Derechos Humanos y se analizan las acciones y omisiones estatales que, en su conjunto y sistematicidad, generan un entorno propicio para la vulneración del derecho a la protesta y, de forma conexa, la violación de un sinnúmero de derechos.

Desde la plataforma GRITA de Temblores ONG, el observatorio de DDHH de Indepaz y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (en adelante Paiis) hemos recibido, triangulado, verificado, sistematizado y registrado un gran volumen de denuncias de violencia policial que llegan a nuestros distintos canales de comunicación. Al recibir una denuncia, nuestros investigadores e investigadoras proceden a: (i) establecer contacto con la víctima o el testigo, (ii) verificar el contexto de la denuncia con una revisión de las bases de datos preexistentes construidas en años pasados por GRITA e Indepaz, (iii) triangular las denuncias recibidas mediante un proceso de contraste de fuentes y, por último, (iv) registrar la denuncia en la base de datos de GRITA e Indepaz.

El presente informe está dividido en 4 capítulos. En el primer capítulo presentamos un breve resumen de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al derecho a la protesta social y las obligaciones de los Estados ratificantes de la Convención frente a los usos arbitrarios de la fuerza pública. El segundo capítulo está compuesto por dos partes: en la primera presenta unas observaciones generales sobre el incumplimiento del Estado colombiano de los estándares de la Corte IDH en materia de



protección de los derechos de las personas manifestantes y, en la segunda, nos concentramos en demostrar cómo el incumplimiento de dichos estándares se ha materializado en prácticas sistemáticas de violencia por parte de la fuerza pública en contra de las personas manifestantes. En el tercer capítulo presentamos unas conclusiones generales, así como un resumen ejecutivo de las cifras de violencia por parte de la fuerza pública recopiladas por la Plataforma GRITA e Indepaz desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo de 2021. En el cuarto capítulo, por último, desarrollamos una serie de recomendaciones a la Comisión para reducir los hechos de violencia por parte de la fuerza pública y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de estos crímenes.

1. Los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al derecho a la protesta y las obligaciones estatales frente al uso arbitrario de la fuerza pública.

Dentro del contexto internacional, el derecho a la protesta se ha enmarcado dentro del artículo 20 de la Declaración de Derechos Humanos de 1948; del artículo 21 de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre de 1948; el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de 1965; del artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; del artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y del artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1968.

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos —Corte IDH— la estigmatización de la protesta y el uso desproporcionado de la fuerza generan entornos de miedo y zozobra que desestimulan a las sociedades a ejercer de manera libre su derecho



fundamental a la reunión y protesta.¹ Por ello, ha desarrollado en sus decisiones jurisprudenciales diversos pronunciamientos sobre el derecho a la reunión y la protesta social y ha definido los alcances de estos derechos, así como las obligaciones de los Estados con respecto a su ejercicio, con el fin de contrastar las omisiones y actuaciones estatales. La Corte IDH indica que deben priorizarse las medidas preventivas por encima de las represivas, entre las cuales se incluyen una normatividad robusta, así como acciones concretas de capacitación y formación de los agentes de la fuerza pública en derechos fundamentales y mecanismos de prevención de la violencia en el ejercicio del derecho a la protesta y reunión.

En lo que sigue se sintetizan algunos desarrollos jurisprudenciales de esta Corte sobre el alcance de este derecho, sobre los límites al uso de la fuerza pública en este contexto y sobre las obligaciones del Estado que se derivan del uso arbitrario de tal fuerza.

La Corte IDH ha establecido sobre el derecho a la protesta, entre otros, que:

1. El derecho de reunión establecido en el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos es un derecho fundamental y protege el derecho a protestar o manifestar inconformidad en contra de acciones o decisiones del Estado. Estas acciones también están amparadas en el derecho a la libertad de expresión.
2. El Estado tiene la obligación de crear entornos propicios para el ejercicio del derecho de reunión. Violar o restringir de manera inadecuada este derecho, entre otras por medio de la fuerza pública, tiene un efecto inhibitorio sobre futuras

¹ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 21 : Derecho a la vida / Corte Interamericana de Derechos Humanos. -- San José, C.R. : Corte IDH, 2018



expresiones de esta naturaleza, lo cual es una limitación del ejercicio libre de este derecho.²

3. Las restricciones al derecho a reunión deben cumplir con las siguientes condiciones: a. las injerencias no pueden ser abusivas ni arbitrarias; b. deben estar previstas en la ley; c. deben perseguir uno de los siguientes fines legítimos: la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, proteger la salud o la moral pública o los derechos o libertades de los demás; d. deben ser necesarias y proporcionales.³
4. El derecho a reunión le asiste a cada persona que participe en la misma. En consecuencia, actos violentos de algunas personas no pueden ser atribuidos a otras. Esto supone la responsabilidad del Estado de distinguir entre las personas que se manifiestan de manera pacífica y las que no (y recordar que estas últimas siguen conservando sus demás derechos como a la vida y debido proceso).
5. Se reconoce la “protesta social” como derecho fundamental autónomo. En la sentencia del Caso Caracazo vs. Venezuela. Sentencia 29 de agosto de 2002. Reparaciones y Costas. Serie C No. 95. se condena al Estado venezolano por las faltas graves cometidas contra el ordenamiento internacional al utilizar desproporcionadamente la fuerza y por las violaciones de derechos humanos a los ciudadanos de Caracas por parte de militares y policías.

Con respecto al uso de la fuerza por parte del Estado, la Corte IDH ha realizado las siguientes precisiones:

² Ibídem

³ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 26 : Restricción y suspensión de derechos humanos / Corte Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana (GIZ). -- San José, C.R. Corte IDH, 2020.



1. Los agentes de la fuerza pública sólo pueden ejercer la fuerza contra personas que representen una amenaza inminente de muerte o lesión grave y, en esa medida, deben aplicar los *Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley*: “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas, salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En todo caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea absolutamente inevitable para proteger una vida”. (Disposiciones especiales, punto 9)
2. Como regla general, los Estados deben prohibir el uso de fuerza letal y armas de fuego por parte de agentes de la fuerza pública contra personas. Este uso debe estar enmarcado en tres principios: **legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad**. “Cuando se usa fuerza excesiva toda privación de la vida resultante es arbitraria”, concluye la Corte.⁴

De acuerdo con la Corte IDH, el Estado tiene, entre otras, las siguientes obligaciones frente al uso arbitrario de la fuerza pública:

1. Priorizar todos sus esfuerzos en establecer medidas preventivas sobre las represivas

⁴ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 26 : Restricción y suspensión de derechos humanos / Corte Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana (GIZ). -- San José, C.R. : Corte IDH, 2020.



2. Contar con una normatividad robusta sobre el uso de la fuerza pública con claridad y especificidad sobre las circunstancias y alcances de su uso en general; con respecto a las armas de fuego, la normatividad debe ser clara respecto a su almacenamiento y distribución, así como el control y seguimiento del uso por parte de la fuerza pública. Esta normatividad debe estar acompañada de la capacitación de los integrantes de los cuerpos armados y de seguridad en derechos humanos y en los límites al uso de la fuerza.
3. Disponer de la capacidad de vigilar los cuerpos de seguridad y contar además con un sistema de justicia efectivo para investigar, castigar y reparar a las víctimas por privaciones de la vida o lesiones a la integridad personal por parte de la fuerza pública. Los órganos jurisdiccionales deben seguir el debido proceso.⁵
4. Adelantar acciones posteriores al uso desproporcionado de la fuerza que haya generado la muerte o lesiones a personas. Estos procedimientos de verificación de la legalidad deben ser de oficio, inmediatos, serios, imparciales, independientes y efectivos. Los órganos investigadores deben ser independientes tanto jerárquica como institucionalmente y de facto. Estas investigaciones deben estar disponibles para el escrutinio público. Para la Corte “esta obligación constituye un elemento fundamental y condicionante para la protección del derecho a la vida que se ve anulado en estas situaciones”, y que la no investigación con seriedad de las investigaciones “compromete la responsabilidad internacional del Estado”⁶.

⁵ Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) artículo 8.

⁶ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 25 : Orden público y uso de la fuerza / Corte Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana (GIZ). -- San José, C.R. : Corte IDH, 2020.



2. Incumplimiento del Estado colombiano de las normas y pronunciamientos del sistema IDH en el marco de las protestas realizadas entre el 29 de abril y el 31 de mayo del 2021

Como demostraremos a continuación, el Estado colombiano ha incumplido sistemáticamente sus obligaciones de protección de los derechos humanos en el marco del ejercicio del derecho a la protesta pacífica, así como los estándares de la Corte IDH sobre (i) regulación, (ii) control y (iii) seguimiento del uso de la fuerza pública en contextos de protesta social.

Este aparte está dividido en dos secciones. En la primera, presentaremos algunas observaciones sobre el incumplimiento del Estado colombiano de los estándares mismos de la Corte IDH en materia de protección de los derechos de las personas manifestantes. En la segunda sección demostramos cómo el incumplimiento de dichos estándares se ha materializado en prácticas sistemáticas de violencia por parte de la fuerza pública en contra de las personas manifestantes.

2.1 Observaciones sobre el incumplimiento del Estado colombiano de los estándares de la Corte IDH en materia de protesta social.

En cumplimiento de una decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia del 22 de septiembre de 2020, el gobierno expidió en enero de este año el “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza protesta pacífica ciudadana” por medio del Decreto 003 de 2021.⁷ Esta nueva norma contiene una serie de principios,

⁷ Decreto 003 de 2021. Artículo 35. [Presidencia de la República de Colombia]. Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "Estatuto De Reacción, Uso Y



definiciones, espacios de coordinación y algunos deberes de la fuerza pública para dar cumplimiento a la orden judicial de generar protocolos para acciones preventivas, concomitantes y posteriores a la protesta. Así, establece medidas previas como espacios de formación y capacitación en derechos humanos, instancias de articulación entre actores institucionales y la sociedad civil y facultades de verificación a los organismos de la Defensoría del Pueblo.

Este Decreto busca reestructurar las directrices sobre el uso de la fuerza para que respete, entre otras, la jurisprudencia de la Corte IDH y las recomendaciones de la ONU; en este sentido, evidenciamos que el gobierno es consciente de la necesidad de llevar a cabo este tipo de medidas. No obstante, a Temblores, Indepaz y Paiis nos preocupa la imprecisión sobre las responsabilidades específicas de la fuerza pública en el cumplimiento de dichas medidas.

Así, por ejemplo, si bien el artículo 6 del Decreto establece que la Policía debe continuar con la formación, capacitación y entrenamiento en DDHH y principios básicos del uso de la fuerza, no establece la renovación de estos programas de capacitación, ni el deber (sólo la facultad) de articularse con otras entidades o espacios de formación que tengan gran experticia en la materia. Por su parte, dicho decreto reconoce que el control a la protesta debe contar con una adecuada planeación, tal como lo señala la Corte IDH, pero no establece criterios y parámetros para que se generen las condiciones necesarias para garantizar los derechos humanos de quienes se manifiestan. Además, si bien los espacios de coordinación y articulación entre autoridades civiles y militares, organismos de control y algunas de la sociedad civil están descritas en las normas, a través de la creación de puestos de mando unificado y se generaron responsabilidades específicas, se siguen

Verificación De La Fuerza Legítima Del Estado Y Protección Del Derecho A La Protesta Pacífica Ciudadana". Enero 5 de 2021.



presentando violaciones sistemáticas a derechos humanos y fundamentales. La Corte IDH también señaló que el control a la protesta debe contar con una adecuada planeación para garantizar los derechos humanos. El Decreto 003 reconoce esta obligación, pero no establece criterios y parámetros para que se generen las condiciones necesarias para garantizar los derechos humanos de las personas manifestantes.

Por tanto, estamos frente a dos posibles escenarios: o existe una desconexión entre los puestos de mando y los agentes de policía, ESMAD y ejército que se encuentran en el momento de la protesta o desde estos puestos de mando unificado se están dando órdenes que van en contra de la protección de los derechos humanos de los marchantes. Dicho esto, en estos espacios no hay trazabilidad y transparencia que permitan, en caso de uso desproporcionado de la fuerza, identificar las causas y las responsabilidades en las mismas.

En particular, nos preocupa la ambigüedad en la formulación sobre las órdenes de las autoridades. El artículo 3.a. del mencionado decreto establece que:

El gobernador y el alcalde son las primeras autoridades de policía en el departamento y el municipio respectivamente, la Policía cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que estas le impartan por conducto del respectivo comandante o quien haga sus veces, sin perjuicio del mando operativo que recae en los Comandantes de Metropolitana, Departamento y Estación de Policía, así como la obligación de intervenir frente a los casos de Policía. (Resaltado es nuestro)

Según el artículo, las autoridades civiles del departamento o del municipio son las primeras autoridades de Policía. Sin embargo, la expresión “sin perjuicio” desdibuja la



obediencia que la policía les debe a estas autoridades civiles. En la práctica se observa una gran confusión en este respecto pues no hay claridad sobre quién o quiénes son las personas que están impartiendo las órdenes a los policías y agentes del ESMAD que se encuentran acompañando las protestas y que son, a su vez, los principales actores que transgreden los derechos humanos.

La Corte IDH también ha señalado obligaciones concomitantes a las protestas. Muchas de ellas se relacionan con el control del uso de la fuerza para que este sea el último recurso y en todo caso cumpla con los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. El Decreto 003 reconoce estos principios y los menciona en varios apartes de la norma. No obstante, a Temblores ONG le preocupa la definición de “necesidad” que se establece en el artículo 3.f., en tanto no establece una clara relación con la fuerza como medio necesario:

Necesidad. Las autoridades de policía en manifestaciones públicas aplicarán los medios consagrados en la ley indispensables e idóneos para la efectiva protección y garantía de los derechos fundamentales, el restablecimiento del orden público y el mantenimiento de la convivencia con el fin de prevenir el escalamiento de los conflictos sociales, de quienes se encuentran en riesgo determinable y solo cuando la aplicación de otros medios existentes resulten ineficaces e inoportunos para la debida garantía del ejercicio de los derechos, en el marco de la manifestación pública.

Esta definición no establece, en la manera en que lo hace lo hace la Corte IDH, que la fuerza deba ser absolutamente necesaria, lo que quiere decir que es el último recurso, tras



el agotamiento de todos los demás. Por el contrario, es una redacción ambigua y poco limitante que da paso al uso de la fuerza desmedida y a discreción del policía.

No obstante, el Decreto en el protocolo de medidas concomitantes sí reitera los principios para el uso de la violencia de la siguiente manera (artículo 32):

Es el medio material, necesario, proporcional y racional, empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional, como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas, incluida la de ellos mismos, sin mandamiento previo y escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública. El integrante de la Policía Nacional, deberá evitar al máximo el uso de la fuerza y de no ser esto posible, limitarla al mínimo necesario, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 numeral 11, y 166 de la Ley 1801 de 2016. El personal de la Policía Nacional, solo podrá hacer uso de las armas, dispositivos y elementos menos letales, entregados como dotación por parte de la Institución.

Parágrafo 1. La aplicación del uso de la fuerza será diferencial, siendo dirigida a la identificación y neutralización de la fuente de daños graves, ciertos y verificables que alteren el orden público y la convivencia poniendo en riesgo la vida, la integridad de las personas y los bienes.

Parágrafo 2. El uso de la fuerza estará enmarcado bajo los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y diferenciación,

Parágrafo 3. El uso de la fuerza, deberá estar precedido de una orden del comandante del dispositivo policial, excepto en aquellos casos de inminente



infracción penal o policiva donde el policía debe actuar con base en el mandato constitucional, legal o reglamentario

Esta definición se acerca mucho más a los estándares de la Corte IDH, en los que se señala que los agentes de la fuerza pública sólo pueden utilizar la fuerza contra personas cuando estas representan una amenaza inminente para la vida e integridad de las demás. Sin embargo, es importante notar que en el artículo anteriormente citado se incluye la integridad de los bienes como una razón para aplicar el uso de la fuerza, mientras que para la Corte IDH este motivo, por sí solo, no es suficiente para justificarlo.

En el artículo 35 del Decreto se prohíbe totalmente y de manera explícita el uso de armas de fuego. Sin embargo, esta norma es constantemente desobedecida, como se puede comprobar al ver las cifras de heridos y muertos por armas de fuego, lo cual contradice el principio de legalidad y su necesidad y proporcionalidad y, en la mayoría de los casos, es altamente discutible.

Dentro de las acciones posteriores a la protesta, la Corte IDH indica la necesidad de investigar de manera efectiva, célere e independiente de los hechos. No obstante, en Colombia, los hechos ocurridos en protestas anteriores no han desembocado en investigaciones de esta naturaleza. El Decreto 003 falla completamente a la hora de brindar herramientas y mecanismos claros que faciliten las investigaciones posteriores a los hechos de violencia, así como las sanciones a los responsables. El Decreto se limita a señalar que las autoridades administrativas y de policía realizarán un análisis conjunto. Adicionalmente, que los comandantes realizarán informes para sus superiores inmediatos, quienes decidirán si los envían o no a autoridades de investigación judiciales o policivas. Es altamente preocupante que esta información no tenga seguimiento



automático por parte de órganos de control y que la misma policía tenga la discrecionalidad para decidir si sale o no de la institución.

2.2 La sistematicidad en la violencia por parte de la fuerza pública en el contexto del Paro Nacional Colombiano del año 2021.

A partir del trabajo conjunto entre Temblores ONG, Paiis e Indepaz, hemos podido reconocer la sistematicidad de nueve prácticas de violencia por parte de la fuerza pública que han tenido lugar en el contexto del Paro Nacional colombiano del año 2021. Estas prácticas ponen en evidencia que existe una intención de violentar y castigar a las personas que, en el legítimo ejercicio de su derecho a la protesta pacífica, han salido a las calles a manifestarse. Adicionalmente, estas demuestran que las actuaciones de los miembros de la fuerza pública violan sistemáticamente los protocolos internos de uso de la fuerza, así como los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

A continuación presentaremos las principales prácticas con las que el Estado, a través de su fuerza pública, ha reprimido las protestas a lo largo y ancho del país y ha puesto en riesgo la vida y la integridad de toda la ciudadanía. Estas son: (i) **el uso indiscriminado, desmedido y desproporcionado de armas de fuego en contra de las personas manifestantes por parte de la Fuerza Pública**, (ii) **el uso de armamentos de letalidad reducida en contra de los cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas pacíficas**, (iii) **los disparos horizontales con arma venom de largo alcance en lugares residenciales y en contra de manifestantes**, (iv) **el lanzamiento de gases lacrimógenos y aturdidoras al interior de viviendas y de barrios residenciales**, (v) **la vulneración del principio de publicidad de los procedimientos policiales**, (vi) **la imposición de requisitos y medidas paralegales a las personas detenidas**



arbitrariamente por parte de la Policía Nacional a cambio de su libertad, (vii) la violencia sexual y basada en género contra manifestantes, (viii) la generación de traumas oculares a manifestantes y (ix) la desaparición forzada de manifestantes.

Así, en adelante, presentamos un subacápite por cada una de las nueve prácticas en el que se desarrollan (a) una caracterización detallada de la práctica y (b) el número de hechos victimizantes que ha dejado dicha práctica, incluyendo una descripción cualitativa de algunos casos documentados por nuestras organizaciones, en los cuales se ilustra la manera en la que han sido ejercidas dichas violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública.

I. El uso indiscriminado, desmedido y desproporcionado de armas de fuego en contra de las personas manifestantes por parte de la Fuerza Pública.

a. Caracterización:

Cuando la policía acciona armas de fuego en contextos de protesta, no solo está poniendo en riesgo la integridad física de las personas manifestantes ante una posible vulneración del derecho a la vida, también está vulnerando el principio de la proporcionalidad de la fuerza. Este uso de la fuerza para dispersar protestas —que se encuentra por fuera del marco normativo local e internacional, como se ha demostrado en los apartes anteriores— ha tenido consecuencias letales y trágicas en Colombia. Uno de los antecedentes más relevantes de dicha situación ocurrió en el mes de septiembre del año 2020 cuando, a partir de las manifestaciones en rechazo al asesinato de Javier Ordoñez por parte de la Policía, agentes de esta institución dispersaron las manifestaciones en los CAI haciendo uso de armas de fuego. Esta situación dejó un saldo de al menos 13 personas muertas en las ciudades de Bogotá y Soacha en las noches del 9 y 10 de septiembre.



Durante el Paro Nacional de este año también se han registrado y sistematizado denuncias de contextos en los que agentes de policía han accionado armas de fuego en contra de personas que se encontraban en alguna movilización. En estos casos no se han aplicado los criterios de legalidad, proporcionalidad ni necesidad para el uso de la fuerza. Por ejemplo, hemos podido registrar varios casos en los que, ante la violencia que empiezan a ejercer algunos grupos de manifestantes, como lanzar piedras, la respuesta de la Policía ha sido accionar armas de fuego contra estos ciudadanos.

b. Número de hechos victimizantes y descripción cualitativa de algunos casos documentados por nuestras organizaciones

i. Violencia física:

Desde el día 28 de abril hasta el 31 de mayo, en el marco del Paro Nacional, hemos registrado que al menos ha habido 184 situaciones en las que la Policía ha accionado armas de fuego en contextos de las protestas. En estos 184 hechos, 70 personas han recibido un impacto de arma de fuego y han quedado heridas, es decir, por lo menos el 37.7% de los disparos activados han sido direccionados directamente a los cuerpos de las personas manifestantes. Además, documentamos 16 casos de disparo de arma de fuego en medio de zonas residenciales que pusieron en grave peligro a niños, adultos mayores y familias en general.

- **Andrés Felipe Meléndez - 22 de mayo de 2021.** El 22 de mayo, en Cali, Valle del Cauca, se realizaron varias manifestaciones en el contexto del Paro Nacional. En horas de la noche, en el sector de Calipso, específicamente en Puerto Madero, ocurrió una intervención violenta por parte de la Policía y el ESMAD en la que, en



medio de los enfrentamientos entre fuerza pública y manifestantes, Andrés Felipe Meléndez fue impactado en su rostro y su cuello por disparos de arma de fuego activados por la Policía. Actualmente Andrés Felipe se encuentra en estado grave de salud.⁸

- **No identificado - 30 de abril de 2021.** Alrededor de las 4:30 de la tarde, en el sector de El Diamante en Cali, transcurría un enfrentamiento entre manifestantes y miembros de la Policía, transmitido en vivo vía Facebook.⁹ A lo largo de la grabación se ve a los policías agrupados a un lado de la calle y a las personas manifestantes al otro. Algunos policías estaban armados con fusiles.¹⁰ Aproximadamente en el minuto 12 de transmisión se oye una primera ráfaga de disparos provenientes del lugar donde estaban los policías y se ve que las personas manifestantes corren a refugiarse. La Policía también lanza gases lacrimógenos hacia ellos. La confrontación sigue; las personas manifestantes lanzan piedras y los policías avanzan hacia ellos. En el minuto 21:40 de transmisión se oye una segunda ráfaga de disparos que dispersa a las personas manifestantes. Cuando se detienen, quien graba muestra a dos personas impactadas por las balas y tendidas en el suelo, sobre la carrera 29 con calle 40.

Primero, se ve a Edwin Villa, quien fue asesinado en esos hechos. Segundo, se ve a una persona vestida de negro herida en la pierna.¹¹ Luego de ese suceso, las

⁸ Plataforma GRITA, Temblores ONG. Recuperado de: <https://www.facebook.com/812564582118065/posts/5644716248902850?sfns=mo>
https://www.instagram.com/tv/CPMyEQJw7-/?utm_medium=copy

⁹ Plataforma GRITA, Temblores ONG. Recuperado de: <https://www.facebook.com/brayan.torres.73997/videos/4237735099625398>.

¹⁰ Plataforma GRITA, Temblores ONG. Recuperado de: <https://www.facebook.com/watch/?v=810768489646083>.

¹¹ Video verificado por Amnistía Internacional. 30 de abril de 2021. Recuperado de: <https://www.facebook.com/100007283171671/videos/2784912235094855/>.



personas manifestantes le gritan a la policía: “¡Lo mataron!, ¡lo mataron!”. Retiran a Edwin y al joven herido y el enfrentamiento continúa, pero la transmisión se acaba unos minutos después. Hasta el momento no hemos podido identificar al joven que resultó herido por los disparos de la Policía. Sin embargo, este caso muestra el uso desmedido, desproporcionado e indiscriminado de armas de fuego por parte de la Fuerza Pública contra civiles.

ii. **Violencia homicida:**

Del 28 de abril al 31 de mayo se ha registrado que al menos 20 personas han muerto por impactos de armas de fuego activadas presuntamente por la Policía Nacional en el contexto del Paro Nacional.

- **Santiago Andres Murillo - 1 de mayo de 2021.** El 1 de mayo de 2021, en Ibagué, Tolima, se desarrollaban las protestas por el día del trabajador cuando, en horas de la noche, una persona lanzó una piedra hacia una tanqueta del EMAD. Ante esto, un agente de la policía, pasando por encima del principio de la proporcionalidad del uso de la fuerza, activó un arma de fuego contra las personas manifestantes. Los disparos impactaron en el pecho Santiago Murillo, un joven de 19 años, y le causaron la muerte.¹² El 10 de mayo se conoció que un juez de instrucción penal militar dictó la orden de captura contra un mayor y un teniente por el asesinato de Santiago, pese a que se trata de un caso de violación a los derechos humanos y, por lo tanto, debió ser asumido por la jurisdicción civil

¹² Plataforma GRITA, Temblores ONG. Recuperado de: 1. Denuncia en medios: <https://twitter.com/JoseGuarnizoA/status/1388814173187059713> 2. Anexo, testimonio directo de la pareja.



ordinaria¹³. El día 3 de junio se tuvo conocimiento de que un Juez de la Justicia Penal Militar ordenó la libertad de los policías implicados.¹⁴

II. El uso de armamentos de letalidad reducida en contra de los cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas pacíficas.

a. Caracterización:

Según los protocolos establecidos para el uso de los armamentos denominados de letalidad reducida, los disparos deben realizarse de forma parabólica y no horizontalmente hacia el cuerpo de las personas manifestantes. Sin embargo, hemos evidenciado que la Fuerza Pública viola sistemáticamente estos protocolos y que, además, este uso de las armas de letalidad reducida aumentan las posibilidades de causar heridas permanentes y de causar heridas letales. Esta práctica no ha ocurrido sólo durante el Paro Nacional del 2021, contamos con múltiples registros previos. Por ejemplo, el asesinato de Dilan Cruz en el 2019 fue producto de un proyectil disparado de manera directa e intencionada con una escopeta calibre 12 por parte de un uniformado del ESMAD; el proyectil impactó al joven de 18 años en la parte posterior de la cabeza, lo cual le ocasionó la muerte días después.

¹³ Washington Post, “Killed by Police in Colombia”. 20 de mayo de 2021. Recuperado de: <https://www.washingtonpost.com/interactive/investigations/2021/colombia-protests-deaths-police/>
El Espectador, “Paro Nacional: capturan a dos policías por la muerte de Santiago Murillo en Ibagué”. El Espectador, 10 de mayo de 2021. Recuperado de: <https://www.elespectador.com/judicial/paro-nacional-capturan-a-dos-policias-por-la-muerte-de-santiago-murillo-en-ibague-article/>

¹⁴ El Espectador, Paro: Quedan en libertad los policías investigados por la muerte de Santiago Murillo, 03 de junio de 2021. Recuperado de: <https://www.elespectador.com/judicial/paro-quedan-en-libertad-los-policias-investigados-por-la-muerte-de-santiago-murillo/>



Respecto a la violación de los protocolos, desde el 28 de abril hemos evidenciado la manera en la que los uniformados apuntan y disparan a los cuerpos no sólo de las personas manifestantes, sino de personas que transitan por el lugar y que no hacen parte de la protesta. Se puede observar que, en algunas ocasiones, los disparos se han realizado desde distancias que no superan los 5 metros; en otras, hemos observado cómo se dispara directamente a personas que se encuentran desarmadas y con los brazos en alto, pidiendo que no haya agresión. Hemos documentado que entre los artefactos que se activan directamente contra el cuerpo de las personas manifestantes se cuentan: gases lacrimógenos, aturdidoras, balas de goma, perdigones, granadas de letalidad reducida y canicas. La repetición de estos hechos deja en evidencia que no se trata de accidentes, hay una intencionalidad de causar un daño permanente mediante el uso de las armas de letalidad reducida. Lo anterior ha puesto en grave riesgo la vida de las personas que han resultado afectadas por esta práctica, en tanto se generan heridas en partes del cuerpo como: cabeza, nariz, boca, ojo, pecho, pierna y espalda, y en algunos casos se han presentado desfiguraciones.

b. Número de hechos victimizantes y descripción cualitativa de casos documentados

- i. Violencia física:** Desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo se han registrado 193 casos de uso de armamentos en contra de los cuerpos de las personas manifestantes. En estos hechos, 167 personas han resultado heridas, esto quiere decir que en un 86% de los casos ha habido una afectación directa, lo cual pone en evidencia que no se trata de hechos fortuitos. Entre los casos de disparo directo registrados encontramos que 62 personas han sufrido heridas oculares y 61 personas han sufrido heridas en otras partes de su rostro. Esto corresponde respectivamente al 37,5% y 36,9% de las personas



heridas. Lo anterior muestra que no solo hay una intención de disparar a los cuerpos con las armas de letalidad reducida sino que también se apunta directamente al rostro en repetidas ocasiones, lo cual aumenta las posibilidades de causar heridas permanentes.

- **Daniel Alejandro Jaimes Serna - 1 de mayo de 2021.** El día sábado 1 de Mayo del 2021, entre las 7:30 pm y las 8:00 pm, Daniel se encontraba participando de las manifestaciones cerca al puente peatonal “Puente de la Dignidad” sobre la Avenida Caracas (Carrera 14) con calle 76B Sur, en el barrio Marichuela de la localidad de Usme, en Bogotá. En ese momento, el ESMAD hizo presencia y acorraló a los y las jóvenes manifestantes en la calle principal del barrio Marichuela, disparando directamente hacia sus cuerpos. Allí, el joven de 20 años fue impactado en su rostro por un gas lacrimógeno disparado por un miembro del ESMAD. Esto le ocasionó una lesión ocular irreparable en el ojo derecho, destrucción de la nariz y fractura del maxilar superior, entre otras fracturas faciales. Daniel estuvo 24 días hospitalizado y fue dado de alta para su recuperación y posterior cirugía en su nariz.¹⁵
- ii. **Violencia homicida:** desde el día 28 de abril al día 31 de mayo, se han registrado 3 homicidios producto de esta práctica.
- **Brayan Fernando Niño Araque - 1 de mayo de 2021.** El 1 de mayo del 2021, en el municipio de Madrid, Cundinamarca, se desarrollaron manifestaciones en el marco del día del trabajador. La hermana de Brayan cuenta que la manifestación

¹⁵ Plataforma GRITA, Temblores ONG. Testimonio directo, 5 de mayo, 3:54 pm y tío de Daniel Alejandro Jaimes Serna, comunicación personal, 3 de junio de 2021. Recuperado de: <https://drive.google.com/drive/folders/1pijrUr1du5wvs933i-C75Q51DI4KaNtr?usp=sharing>



durante todo el día estuvo llena de muestras artísticas, ya que así suelen ser las jornadas de protesta en el municipio. Sin embargo, cerca de las 9:00 pm, el alcalde Andrés Tovar anunció la intervención del ESMAD en el sector del Sosiego.¹⁶ Inmediatamente el ESMAD empezó a reprimir las protestas en el lugar en donde se encontraba Brayan. Dispararon gases lacrimógenos desde una tanqueta y uno de esos disparos fue directo al rostro del joven de 24 años.¹⁷ Brayan cayó inmediatamente a la altura de la calle 7 con carrera 21. Las personas de alrededor intentaron auxiliarlo y cuando notaron que aún respiraba, lo subieron a una moto. Sin embargo, un gas lacrimógeno impactó a quien iba conduciendo y tuvieron que detenerse. En una segunda moto lograron dirigirse hasta el hospital San Matilde, pero Brayan llegó sin signos vitales. El mayor Carlos Javier Arenas Niño fue capturado por este hecho; sin embargo, está siendo investigado por la justicia penal militar.¹⁸

III. Los disparos horizontales con arma venom de largo alcance en lugares residenciales y en contra de manifestantes.

a. Caracterización

¹⁶ Plataforma GRITA, Temblores ONG. Recuperado de denuncia en medios: <https://www.eltiempo.com/bogota/denuncian-que-brayan-nino-murio-por-proyectil-lanzado-por-el-esmad-585573>

¹⁷ Plataforma GRITA, Temblores ONG. Recuperado de denuncia en redes sociales: <https://www.facebook.com/AsoamStereo1064Fm/posts/3798683640230382>

¹⁸ El Espectador, “A Brayan Niño se quedó esperándolo su hijo en Madrid (Cundinamarca)”, 6 de mayo de 2021, recuperado de: <https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/a-brayan-nino-se-quedo-esperandolo-su-hijo-en-madrid-cundinamarca/>



El arma conocida como “Venom” empezó a ser utilizada por el ESMAD en el Paro Nacional de 2021. Antes de esta coyuntura no se había visto en acción este dispositivo que consiste en un lanzador múltiple de proyectiles con capacidad para 30 cartuchos. Se ubican en la parte superior de las tanquetas y pueden lanzar gran cantidad de proyectiles con mayor rapidez. Fue tal el impacto de la utilización de esta arma que José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, se pronunció manifestando que no se conocían antecedentes del uso de este dispositivo en otros países de América Latina y que se trataba de un arma con efectos indiscriminados y, por lo tanto, inapropiada para usarla en medio de manifestaciones.¹⁹ Según la respuesta a un derecho de petición presentado en el 2019 por la Comisión sexta del Senado, el arma Venom le costó al país aproximadamente 445 millones de pesos.²⁰ Por otro lado, a partir de una investigación realizada por Cuestión Pública, se logró determinar que la Dirección General de la Policía Nacional realizó un contrato en el 2017 por 745 millones de pesos para la adquisición de “cartuchos eléctricos de aturdimiento 37mm para Venom y cartuchos eléctricos de gas CS 37mm para Venom”.²¹ Cada proyectil tiene un costo de 270 mil pesos, eso quiere decir que cada vez que esta arma se activa, se gastan unos 8 millones de pesos.

Es importante mencionar que, en tanto se trata de un arma nueva, podemos tener un subregistro en el conteo de su utilización. Esto, principalmente, debido a la falta de

¹⁹ El País, “Venom, la cuestionada arma de los antidisturbios en Colombia”, 20 de mayo de 2021, recuperado de: <https://elpais.com/internacional/2021-05-21/venom-la-cuestionada-arma-de-los-antidisturbios-en-colombia.html#:~:text=%E2%80%9CSe%20trata%20de%20un%20arma,manifestaciones%20pac%C3%ADficas%20o%20mayoritariamente%20pac%C3%ADficas.&text=Aunque%20son%20consideradas%20armas%20%E2%80%9Cmenos,graves%20e%20incluso%20muertes%2C%20alerta.>

²⁰ Contagio Radio, “Venom: una de las costosas armas del ESMAD”, Contagio Radio, 9 de mayo de 2021, recuperado de: <https://www.contagioradio.com/venom-una-de-las-costosas-armas-del-esmad/>

²¹ Cuestión Pública, “Los millonarios contratos de armas “no letales” para la Policía y el Esmad”, 2 de junio de 2021, recuperado de: <https://cuestionpublica.com/los-millonarios-contratos-de-armas-no-letales-para-la-policia-y-el-esmad/>



conocimiento inicial sobre su funcionamiento, por lo que al realizar las denuncias se hablaba de tanquetas lanzando múltiples proyectiles, pero no se nombraba directamente a la Venom. No obstante, a partir de la revisión de vídeos y del seguimiento de los casos en donde se ha reprimido a las personas manifestantes con tanquetas, hemos podido registrar 28 casos en los que esta arma ha sido activada en contra de las personas manifestantes.

b. Número de hechos victimizantes y descripción cualitativa de casos documentados

i. Disparos con arma Venom en zonas residenciales:

Desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo se han registrado en nuestra plataforma GRITA 8 casos de disparos con arma Venom en zonas residenciales. En las denuncias realizadas, que en su mayoría han correspondido a hechos acontecidos en horas de la noche, se registra el horror por el que han atravesado las personas que habitan en las zonas en donde se ha activado la Venom: proyectiles explotan en repetidas ocasiones muy cerca a sus ventanas y a sus techos, no sólo exponiendo a los miembros de las familias a ser víctimas de lesiones físicas, sino también generando graves afectaciones psicológicas debido a los estruendos y a la cercanía de los proyectiles disparados.

- **Inmediaciones del Portal Américas.** En Bogotá, en la zona del Portal Américas²² y sus alrededores, las personas manifestantes y habitantes de los barrios aledaños han vivido una fuerte represión por parte del ESMAD desde que inició el Paro Nacional. Aunque esta se ha apaciguado desde el 30 de mayo, en esta zona nuestra

²² Renombrado por las personas manifestantes como “Portal Resistencia”.